

E R E C H O

CONSTITUCIONAL

TIP. Y ENC. "LA BUENOS AIRES"

BOLIVAR 260



BIBLIOTECA DE CORTE S	
Nº DE	3844
UBIC	<i>145</i>
FICHA MATERIA	

NOCIONES



DERECHO CONSTITUCIONAL

NOTAS TOMADAS DE LAS CONFERENCIAS DEL

DR. A. DEL VALLE

POR

Maximo Castro y Alcides V. Calandrelli



INTRODUCCIÓN

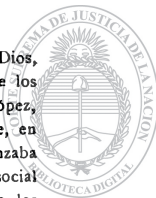


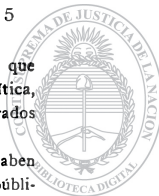
Señores:

Estrada y López han explicado y comentado la Constitución Argentina desde este mismo sitio, y me doy cuenta de la responsabilidad que asumo al sentarme en una cátedra que ha sido ocupada sucesivamente por dos profesores que han representado bien la más alta cultura de la inteligencia nacional; pero esta responsabilidad no me arredra, porque si tal circunstancia diera lugar a comparaciones personales, que seguramente me serían desfavorables, en cambio, viniendo después de ellos, encuentro trazado y más fácil el camino, y podré aprovechar la masa de sus observaciones personales y el caudal de ciencia con que uno y otro enriquecieron sus lecciones.

En general, creo que he de coincidir con ellos en la explicación é interpretación del derecho positivo, del derecho escrito, de la constitución misma; pero es probable que no estemos de acuerdo en algunos puntos fundamentales, históricos ó de doctrina, como no coincidían ellos mismos entre sí. Emerson, que era un profundo pensador, ha dicho que nos parecemos más á nuestros contemporáneos que á nuestros padres; pero dentro de las líneas generales que marcan los contornos de una generación aparecen y se acentúan los rasgos que particularizan á los individuos y que caracterizan su propia personalidad en el orden físico, intelectual y moral. Estrada, con la inspiración de su fe, ponía el orden social,

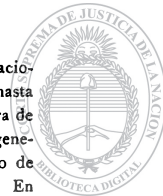
las libertades, los derechos individuales, al amparo de Dios, como padre de toda vida y fuente de la ley universal de los seres, según su conceptuosa expresión; mientras que López, apartándose de los altos problemas de la metafísica, que, en realidad, son inaccesibles para la razón humana, comenzaba su enseñanza afirmando, con Alden, que el gobierno social tiene por objeto asegurar y afianzar la justicia entre los hombres. Partían ambos de puntos, uno absolutamente cierto, y el otro relativamente exacto; pero no hay que sorprenderse si en el desarrollo de sus ideas llegaban á separarse más de lo que se apartaban en el principio. Así Estrada, que se inclinaba ante el precepto de la constitución que declara la libertad de cultos, no reconocía que esa libertad tuviera como fundamento de doctrina la libertad de conciencia, porque para su espíritu ortodoxo la libertad de conciencia no era sino el derecho que tienen los católicos de resistir las imposiciones del poder civil contrarias á su fe y á las reglas que de ella se derivan; y López, cuando se ocupaba del patronato, no obstante sus ideas liberales, interpretaba los textos legales y aplicaba sus principios con un criterio esencialmente gubernamental, y no sólo sostenía el patronato como precepto y regla constitucional, sino que le defendía hasta los últimos extremos de la doctrina regalista. El no ignoraba, seguramente, que el ejercicio del patronato hiere y lastima la libertad religiosa, las creencias de la mayoría del pueblo argentino, cuando el gobierno interviene en el nombramiento de las altas dignidades de la Iglesia, cuando detiene su enseñanza y su doctrina, reteniendo las bulas pontificias, cuando interviene en sus aranceles; y sin embargo, liberal como era, llevaba su enseñanza á los últimos extremos de la regalía, porque su criterio gubernamental prevalecía sobre el liberalismo de sus principios, y sinceramente entendía que el patronato, vinculado á la vida pública argentina, estaba incorporado á nuestras costumbres políticas, y pensaba que podía ser medio de gobierno útil y, talvez, indispensable en las evoluciones futuras de nuestra nacionalidad. Bajo esta luz se ve





cómo hombres que pertenecen á la misma generación, que profesan principios igualmente liberales en materia política, pueden, sin embargo, encontrarse profundamente separados en cuestiones fundamentales.

Acerquémonos al objeto de nuestros estudios. Vds. saben que el Derecho Constitucional es la parte del derecho público que se ocupa de la organización del gobierno y de las relaciones de este con los individuos sometidos á su autoridad. La primera fuente del Derecho Constitucional es la ley, la Constitución misma, que será el asunto principal de nuestros estudios; pero las constituciones políticas no las promulga la palabra divina en las cumbres sagradas. La constitución política es la forma lapidaria del sentimiento y de la idea de un pueblo sobre la organización de su gobierno en un momento dado; tras de esa fórmula está la vida misma de la nación, y no es posible darse cuenta acabada de las instituciones de un pueblo, si se prescinde de su historia, de sus antecedentes. De aquí, pues, que sea necesario estudiar, al mismo tiempo que la letra y el texto de la constitución, su raíz, su punto de partida, su origen, aún cuando muchas veces tengamos que ir lejos para encontrarlo. La historia nacional está incorporada á nuestra Constitución. Sería imposible explicar algunos de sus preceptos, la distribución del poder, alguna de las declaraciones enunciadas en el capítulo de los derechos y garantías, sin la información de los antecedentes históricos, sin el conocimiento de los sucesos que han precedido su sanción y que indujeron á los constituyentes á consignarlos de una manera permanente y estable en la ley fundamental. Pero tendremos que ir más lejos: la Constitución contiene principios que no han surgido en la vida argentina, ni de su evolución, que no viene del coloniaje, ni de los días revolucionarios, sino de los primeros tiempos de la sociedad civil en los países que nos han precedido en civilización, principios por los cuales ha trabajado y sufrido el hombre desde los comienzos del gobierno orgánicamente constituido. Por consiguiente, alguna vez, quizá,



tendremos que llevar á épocas remotas nuestras investigaciones, tocando la historia propia y la historia extraña, hasta donde las exigencias de la enseñanza lo reclamen. Fuera de esto hay también que considerar que existen principios generales de derecho que los filósofos políticos han deducido de la experiencia humana y que forman la ciencia política. En ellos también tendremos que buscar luz para interpretar con acierto y con exactitud las leyes que nos rijen.

Ha dicho Spencer que la idea viene siempre acompañada de la emoción: la idea tranquila, serena, clara; la emoción vibrante, apasionada. De su reunión puede resultar el error, porque la serenidad de la idea es alterada por los movimientos de la emoción, y el peligro crece cuando se trata de asuntos que se refieren á los intereses de los hombres; más si se refiere á la historia nacional é infinitamente más si se refiere á la historia contemporánea, que nos toca de cerca por nuestros inmediatos antecesores ó directamente á los que, por haber llegado á cierta edad, hemos figurado en la escena pública. Las tradiciones de familia, las afecciones personales, los intereses colectivos, razones históricas y motivos actuales podrían inducirnos á apreciar los sucesos con criterio equivocado ó estrecho; pero hemos de procurar corregir los extravíos de la emoción y precavernos contra todo linaje de preocupaciones, recordando que el mismo Spencer ha dicho que no hay institución humana, por mala que sea, á la cual no se le deba un beneficio, ni tan buena, que no haya producido males sobre la tierra.

Recordaremos que los pueblos son organismos sujetos como los demás á las leyes fijas, y entre otras, á la de la herencia, á las condiciones físicas del suelo y á la acción del tiempo. Desde luego, del punto de vista de la herencia, los argentinos somos, hasta cierto punto, españoles. Los españoles poblaron la América, terminada la guerra de los moros. No puedo afirmarlo, pero es probable que entre los descubridores ó los que tras de ellos llegaron, viniera algunos de los soldados que asistiera a la rendición de Granada. Entre nuestros adelanta-

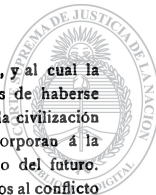


dos hubo uno que había guerreado con Carlos V y asistido al saqueo de las ciudades italianas.

Deben ustedes tener presente que la civilización española, después de la expulsión de los árabes, había sufrido un verdadero eclipse. Los hombres de estudio y de ciencia eran árabes. Los españoles de buena sangre eran soldados, teólogos y juristas. Con tales elementos la España emprendió la colonización del nuevo mundo. No voy á recordar los detalles de su desenvolvimiento, porque son hechos conocidos; pero les pido que no olviden, al escucharme, que la civilización española, retardada como estaba, marca el más alto grado de cultura intelectual y moral de los factores humanos que han concurrido á la formación de la raza argentina.

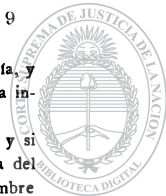
Se levantó un censo en Buenos Aires en 1778. La población alcanzaba entonces en la ciudad y en la campaña, excepto Luján, á 37.130 habitantes; veinte y cinco mil eran españoles y descendientes de españoles; los doce mil restantes eran negros, mulatos, indios y mestizos: esto pasaba en la gran Capital del Sud.

En Córdoba y San Luis los naturales pertenecían á la familia de los *comechingones*, y con ellos se mezclaron los españoles; en Santiago se unieron con los *quichuas*; en Corrientes con los *guarantes*. En la Rioja se hizo un censo provincial en 1814, y dio el siguiente resultado: 14.092 habitantes, de los cuales 3178 eran indios y 6093 negros y mulatos. De manera que los españoles é hijos de españoles no alcanzaban á 5000. Con estos elementos étnicos se ha formado nuestro pueblo y se va organizando nuestra nacionalidad. No tenemos, pues, el derecho de reclamar análogo desenvolvimiento al que otros pueblos alcanzaron en el mismo período, bajo condiciones más favorables. La base primitiva de la población nacional se modifica todos los días. Se nos han incorporado italianos por centenares de miles; han llegado franceses por millares, ingleses, alemanes, y ya comienza á verse en nuestras calles hombres del Oriente. Mañana, tal vez, aparecerán los hijos de aquel imperio, viejo como el mundo,



que ha vivido encerrado dentro de sus murallas, y al cual la dura experiencia va á mostrarle las consecuencias de haberse aislado y permanecido extraño al movimiento de la civilización universal. Son elementos nuevos que se incorporan á la población nacional para formar el tipo argentino del futuro. El porvenir está cubierto, porque todavía asistimos al conflicto de las razas de que nos hablaba Sarmiento; pero, tales como somos hoy día, no debemos perder la esperanza de llegar á ser una gran nación. Recuerden Vdes. que la Inglaterra se ha formado con la fusión de sangre de bretones, anglos, celtas, daneses y normandos y con todas las hordas del norte que han dejado su simiente en la isla feliz. Ninguno de ellos, ni todos reunidos, tenían, originariamente, las fuertes y nobles cualidades que hoy distinguen esa hermosa agrupación humana. Lo mismo ocurrió en las Galias: allí estuvieron los romanos con Julio César, también los daneses, los celtas y las masas sin número de los Germanos que cayeron sobre el Imperio y á los que la soberbia impotente de una civilización en decadencia confundió bajo el nombre común de bárbaros; francos, godos, hunos, helvéticos, se encontraron sobre la tierra gállica; algunos se quedaron por siempre, otros no se detuvieron sino un día, el día del combate y la noche del reposo, y de la raza corrompida y decadente y de los hombres nuevos y fuertes proviene la Francia de nuestros días, la bella Francia, tan amable y tan amada por todos los hombres civilizados del orbe. ¿Porqué, pues, desesperaríamos de análogos destinos en lo futuro?

No hemos progresado como los Estados Unidos, porque nuestro punto de partida ha sido diferente, y las condiciones más desfavorables; pero tenemos por delante el tiempo sin término. Hay entre los Estados Unidos y nosotros diferencias de origen fundamentales, que explican por qué, en el mismo tiempo, aquellos se presentan ante el mundo como ejemplo de gobierno regular y libre, mientras que la Argentina se ensaya todavía en las prácticas más elementales del sistema representativo, gimiendo unas veces bajo los abusos del poder,



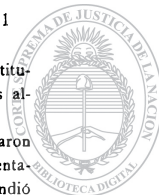
entregándose otras veces á todos los excesos de la anarquía, y probando, casi siempre, que le falta la educación política indispensable para el gobierno propio.

Ya sabemos cómo fué poblada la América Española, y si echamos una ojeada sobre la colonización de la América del Norte, encontraremos á los puritanos que han dado su nombre á la virtud ó, más bien dicho, que han dado nombre á sus virtudes.; puritanismo es una palabra que se ha incorporado en el lenguaje de todos los hombres y que da idea clara del escrupuloso cumplimiento de los deberes que impone la vida social. El puritano vino con su familia á las tierras desiertas de América y constituyó su hogar, protegido por defensas morales más altas y resistentes que la empalizada que le resguardaba contra los asaltos del enemigo; trajo consigo las leyes de su patria y las costumbres morales de su pueblo vigorizadas por el sentimiento religioso más austero; ese es el norteamericano de nuestros días, y no es extraño que conserve el amor á la libertad y al orden que ha heredado de sus antepasados, desde los tiempos de Juan Sin Tierra. Se ha modificado su tipo bajo cielo y clima diferentes, quizá ha perdido alguno de los interesantes rasgos que caracterizaban á sus progenitores; pero, en cambio, ha ganado otros, y en resumen, conserva la base fundamental del carácter y de las costumbres. El norteamericano es sajón como el inglés y representa idéntica civilización.

No hay para qué esforzarse en poner de manifiesto el contraste del puritano inglés con el tipo de los soldados españoles que se habían formado en la guerra contra los moros y posteriormente en las campañas militares de Flandes ó de Italia. Aquel era un hombre libre, pacífico y religioso; éste era el representante de una raza especial de hombres fuertes y audaces, guerreros sin miedo y fanáticos sin piedad. No es extraño, entonces, que éstos se señalen, desde su llegada, por el desorden en las costumbres y el abuso de la fuerza. Ellos también levantan defensas que los guarden contra las tribus salvajes; pero no tienen valladar que oponer á las



propias pasiones, y muchas veces llegan á los últimos excesos de la soldadezca más desenfrenada. Mientras el puritano vivía encerrado en su hogar, el conquistador español se vinculaba con la mujer india en unión irregular, y un venerable cronista de la conquista del Paraguay nos ha contado que las tribus vencidas por Oyolas le entregaron, después de la derrota, dos mujeres para cada soldado y seis para el mismo Oyolas, por ser el capitán. La vida de las colonias españolas comienza en toda la América del Sud con ese vicio originario; por eso encontramos tantos indios y mestizos en el censo de 1778 de la gran capital del Virreynato; por eso se nota en la fisonomía de los que estamos en este recinto que la sangre de nuestras venas no es la pura sangre castellana. Nos acordamos de los árabes, nos olvidamos de los indios. A los defectos de la sangre y de la herencia agreguemos los del medio, la extensión dilatada de la pampa, la dispersión de las poblaciones, y el aislamiento de las nacientes ciudades. Los descubridores del Río de la Plata fundaban las ciudades del litoral, mientras que los colonizadores del Perú llegaban al Tucumán y fundaban á Córdoba y Santiago del Estero, dejando un puñado de hombres en cada fundación, con jurisdicción territorial sobre vastas zonas despobladas. El aislamiento de las ciudades formó núcleos de población con rasgos diferenciales é intereses exclusivos, fomentó el sentimiento local y enjendró después caudillos, tanto más prestigiosos, cuanto más bárbaros, porque eran entonces representación más genuina y más enérgica de la idea estrecha de las masas incultas que formaron los primeros centros de población nacional. Los caudillos han desgarrado la república muchas veces; pero no olviden Vds. que sus tendencias, como la fuerza de que disponían, era el resultado fatal de las leyes que rigen el desenvolvimiento humano; recuérdelo, para no interpretar las instituciones y los sucesos históricos del pasado con el criterio formado bajo influencias más propicias. Aproximémonos todavía al objeto de nuestros estudios. Después de lo que me han oído, creo que convendrán conmigo



en que necesitamos tomar como punto de partida las instituciones coloniales, aún cuando tengamos que demorarnos algunos días.

El descubrimiento y la conquista de América estimularon la energía de todas las naciones con poder naval y fomentaron celos y rivalidades contra España. El Portugal pretendió mejores derechos sobre una parte de las tierras descubiertas, y Vds. saben que Alejandro VI creyó que dirimía el conflicto trazando una línea absurda sobre un planisferio equivocado. El pleito quedó pendiente y acaba de resolverlo el Presidente de una República fundada en las tierras de América que no se habían descubierto cuando Alejandro VI expidió su bula. Las otras naciones colonizadoras, estimuladas por la rivalidad, utilizaron las informaciones que les llegaban por diversos conductos, para propagar la idea de que la conquista española no era obra de civilización, sino de barbarie, y pusieron en discusión los títulos que pretendía tener sobre las Indias. La opinión del mundo civilizado no era ni podía ser indiferente para la gran nación que dilataba sus dominios sobre gran parte del continente europeo y que había descubierto un nuevo mundo; necesitaba defenderse, y se defendió. Para eso tenía sus profundos teólogos y sus célebres juristas. Estos plantearon la cuestión en su terreno, es decir, en el de sus principios, y sostuvieron que el dominio de la corona española sobre las Indias se apoyaba en cuatro títulos de fuerza incontestable: la palabra divina, el descubrimiento, la conquista fundada en una guerra justa y la bula de Alejandro VI, de 1493. Sorprende que se encontrara título de dominio en las Sagradas Escrituras sobre las tierras descubiertas en el siglo XV de nuestra era; pero los teólogos de la época eran capaces de eso y de mucho más. Buscaron y hallaron, entre otros textos, uno de Isaías que vivió 700 años antes de Jesu-Cristo, y que literalmente dice; «¿Quiénes son esos que vuelan como nubes y como palomas que van á sus palomares? Porque las islas á mi me esperan y las naves del mar desde el principio, para



que traiga tus hijos de lejos: su plata y su oro con ellos.» (1) Y de este versículo, citado por Solórzano con alguna variante, dedujeron que la tierra americana había sido prometida por Dios á la corona de España. «En los cuales lugares, dice el sesudo comentador de la legislación de Indias, hace particular reparo Tomás Bozio, del símil de las *palomas* en que parece que aludió al nombre de Cristóbal Colon ó *Columbus*, que fue, como se ha dicho, el primero que intentó esas navegaciones: las cuales alusiones, como el mismo autor prueba, son muy ordinarias en los Hebreos.»

Además de la palabra divina, invocaban el derecho de descubrimiento, aceptado como fuente originaria de dominio por todas las naciones colonizadoras. Story observa que este principio era bueno para las naciones que lo habían aceptado como regla de gobierno y que podía aplicarse á las tierras deshabitadas; pero pone en duda su legitimidad frente á los pueblos ó tribus de América que existían en la misma tierra, desde tiempo remoto, y ejercían sobre ella actos de posesión y dominio en relación con el estado de civilización desde aquellos que habían poblado ciudades hasta los nómades que vivían de la caza y de la pesca. Del punto de vista del derecho absoluto, hay que reconocer, con el célebre comentador de la Constitución Americana, que el dominio de los naturales sobre las vastas extensiones del nuevo mundo no era menos digno de consideración que el que alegaron después las naciones civilizadas.

Alta como había sido la inspiración del descubrimiento, la conquista despertó apetitos voraces de riqueza y se llevó á término por el fierro y por el fuego, bajo la dirección y el impulso de la ambición y de la codicia más desenfrenada. Los conquistadores buscaban tesoros y riquezas acumuladas; preferían, por lo mismo, las tierras pobladas, y habían asentado su poder en Méjico y en el Perú, donde se mantenían de pie los restos de antiquísima civilización; no podían alegar con

(1)—El texto que publicamos en el extracto es el de Solórzano.



relación á esos territorios el derecho de primer ocupante, ni considerarlos *res nullius*; pero les aplicaron las reglas derivadas de principios que aun cuando no fueran bárbaros, serían absurdos. Aristóteles había dicho que hay siervos y esclavos por naturaleza, y su comentador, Celio Calcagnino, agregaba que si los que nacieron para obedecer lo rehusan y persisten en continuar en su barbarie, se les puede cazar como á fieras. Y partiendo de ahí, el padre José de Acosta, que según Solórzano miró estas materias de las Indias con más atención que otros, llegaba á dividir sus pobladores en tres categorías en la primera incluía á los Chinos, Japoneses y Orientales, que tienen su forma de república, con leyes y letras, y se les debe dejar su gobierno; en la segunda mencionaba á los Peruanos, Mejicanos y Chilenos, á quienes se les podía quitar el gobierno para que perdiesen sus malas costumbres; y la tercera estaba constituida por los silvestres, que vivían desnudos en las selvas y en las pampas. Estos eran nuestros antecesores y en ellos se podía verificar con todo rigor la servidumbre de los ignorantes de que habla Aristóteles, y la caza de los silvestres de su comentador Calcagnino, «porque todo se endereza á mayor bien y utilidad de ellos mismos», según lo aseguraban graves autores. Oiremos los últimos ecos de esta enseñanza en el cabildo abierto del 22 de Mayo de 1810, donde el obispo Lúe sostuvo que hasta el último pueblo de la península tenía derecho absoluto de gobierno sobre América y que si la península desapareciera, su derecho soberano pasaría al último español que residiera en América. Era el derecho de gobierno sobre los esclavos y siervos por naturaleza, sobre los silvestres de la tierra descubierta. Con esos antecedentes se establecía la justicia de la guerra de conquista y los derechos de dominio que de ella saca el vencedor. Porque la guerra es también, según Solórzano, «otra introducción común de todas las gentes y obra que lo que en ella se quita ó gana á los desvalidos ó vencidos, se adquiere en pleno, justo y perfecto dominio á los vencedores.» La guerra justa era, pues, el tercer título del dominio de España.

Por fin, invocaban la bula de Alejandro VI, de 1493, en que el soberbio Papa entregó el señorío de las tierras descubiertas a la corona de España. Esta bula dio origen a discusiones que hoy día han perdido todo interés. Los papistas pretendían que en virtud de ella los Reyes de España habían quedado en vasallaje y como feudatarios de la Iglesia; pero los realistas contestaban que en la concesión no se mencionaba el feudo y que éste no puede inducirse; que los Reyes dieron al Papa noticia del descubrimiento y le pidieron su licencia y bendición para llevarla adelante, como acto de deferencia piadosa; pero que pudieron prescindir de ello, y que ese paso no perjudicó el derecho que como Reyes ya tenían.

Nuestra hora ha concluido. Continuaremos en la próxima conferencia.



CAPITULO I

EL GOBIERNO COLONIAL EN LA AMÉRICA DEL SUR



SUMARIO—I. Títulos invocados por España para justificar su dominio en América.—II. Instituciones Coloniales. Los adelantados: su nombramiento y sus facultades.—III. Los Cabildos.—IV. Regidores: su número, nombramiento, duración y salario.—Calidades y condiciones para ser regidor. Presidencia de los Cabildos.—V. Funciones de los Cabildos: electorales, deliberantes, administrativas, contenciosas.—VI. Cabildo abierto.—VII. Situación práctica de los Cabildos.—VIII. Alcaldes: su elección, condiciones y duración. Funciones de los Alcaldes: judiciales, deliberantes y administrativas.—IX. Gobernadores ó Corregidores: su nombramiento, duración y salario. Funciones de los Corregidores.—X. Intendentes: sus atribuciones.—XI. Audiencias Reales: su composición, presidente y oidores. Funciones de las Audiencias. Actos prohibidos á los oidores.—XII Virreyes: su nombramiento, duración y facultades.—XIII. Consejo de Indias; su composición. Sus facultades legislativas, administrativas y judiciales.

I—La conquista y colonización de América, iniciadas por los reyes de España inmediatamente después de terminada la expulsión de los moros, despertaron celos en otros países.

Portugal comenzó por disputarles sus nuevos dominios, produciéndose el conflicto que dirimió el Papa Alejandro VI sobre un planisferio equivocado; al poco tiempo otras naciones publicaban relaciones de



viajeros y traficantes para demostrar que la ruidosa conquista española no era obra de civilización, sino de barbarie.

España no podía ser indiferente á la opinión de las demás naciones, y comprendió que debía defenderse para conservar el honor de sus conquistas y la integridad de sus derechos. Contaba para ello con teólogos y legistas que llevaron la cuestión al terreno jurídico y establecieron que el derecho de España al dominio de América provenía de cuatro fuentes originarias: la palabra divina, el descubrimiento, una guerra justa y la bula de Alejandro VI.

A primera vista sorprende que se buscara en las Sagradas Escrituras, un título que justificase el dominio sobre tierras descubiertas en el siglo XV; sin embargo, tal es la verdad.

Uno de los textos más curiosos invocado por los teólogos pertenece al profeta Isaías, que vivió 700 años antes de Jesucristo, y vaticinó la venida del Mesías y la predicación de la palabra de Dios. El versículo de Isaías, citado por Solórzano, es el siguiente: «Palomas con tan arrebatado vuelo como cuando van á sus palomares. Los ya salvados arrojarán las saetas de su predicación á Italia, á Grecia y á las islas más apartadas y le traerán en retorno su oro y plata juntamente con ellos.»

Cualquiera creería que el texto daba lugar á la interpretación de los teólogos en la segunda parte, cuando habla de «las islas más apartadas y *del oro y plata* que traerán en retorno los ya salvados.»

No era ahí, sin embargo, donde los teólogos apoyaban el derecho de España al dominio de las tierras americanas, pues comprendían, sin duda, que esa par-



te del texto podía ser invocada tanto por la corona de Castilla como por la de otras naciones descubridoras. Se fundaban en la primera parte, que habla de las «palomas con tan arrebatado vuelo como cuando van á sus palomares», sosteniendo que el profeta había vislumbrado la conquista y conversión de una raza por una de esas palomas, por cuenta del rey de España. Esa paloma era Colón, que en apresurado vuelo había venido en busca de la tierra Americana, pues Colón, en latin *Columbus*, significa paloma.

Así interpretaba y comentaba el texto Bozio, que es citado con respeto por Solórzano.

El segundo título que invocaba la corona de España para justificar su dominio en América era el descubrimiento, título que reconocían como fuente originaria del dominio todas las naciones europeas. Las tierras descubiertas no pertenecían á nadie, eran *res nullius*. Story observa, sin embargo, que las tierras de América, antes de la conquista, pertenecían á las tribus que las ocupaban en toda su extensión, ejerciendo los actos de dominio y posesión propios de su estado de civilización y de su época, como la caza y la pesca, y que, en su concepto, ese derecho era tan respetable como el de cualquiera nación civilizada de la tierra.

El tercer título invocado por la corona de España era la guerra justa, emprendida con el objeto de reducir á los salvajes y enseñarles la religión cristiana.

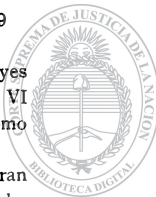
Aristóteles, en su política, había dicho que hay hombres esclavos por naturaleza. Uno de sus comentaristas, Calcagnino, á quien citan los tratadistas españoles, agregaba que «si los que nacieron para obedecer lo rehusan, se pueden cazar como fieras.» El



padre José de Acosta, más humanitario que Calcagnino, dividía en tres categorías á los habitantes de las Indias. La primera comprendía á los chinos, japoneses y otros habitantes de Asia, á quienes debía respetarse, porque el grado de civilización que habían alcanzado los ponía en condiciones de darse gobierno propio. La segunda comprendía á los mejicanos, peruanos y chilenos, á quienes podía quitárseles su gobierno, porque no eran bastante civilizados. La tercera la formaban los hombres desnudos que habitaban las selvas y las dilatadas pampas de América: éstos podían ser tratados como lo aconsejaba Calcagnino. «Se puede dar caza á los silvestres, decía, porque todo se endereza á su mayor bien »

En el Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810 el obispo Lúe recordaba, tal vez, esa doctrina, cuando sostuvo que, aún perdida la corona de España, mientras quedara un pueblo, una aldea, un español libre, éste tendría el derecho de gobernar no sólo á los silvestres y á sus hijos, sino también á los hijos de los primeros colonizadores, como si, por haber nacido bajo el cielo de América, hubieran dejado de ser los herederos directos de los descubridores; y que si no quedaba hombre vivo en la madre patria, á los españoles residentes en América les correspondía el derecho de gobernarla.

El cuarto y último título que invocaba España era la bula del Papa Alejandro VI, título que levantó vivas controversias entre los escritores romanistas ó papistas y los juristas reales. Afirmaban los primeros que si España invocaba la bula de Alejandro VI para justificar su dominio en América, reconocía implícitamente que debía vasallaje al Sumo Pontífice. Por su



parte, los juristas españoles sostenían que los Reyes católicos habían solicitado la bula de Alejandro VI como acto de deferencia, y que la recordaban como título secundario para reforzar los otros tres.

Este último título, juntamente con el primero, eran rechazados por las otras naciones, excepción hecha de Portugal.

II.—Después de exponer los títulos invocados por España para justificar su dominio en América, corresponde averiguar cómo la gobernaba, pareciéndonos preferible hacer el estudio de las instituciones según el orden en que se implantaron en América, aunque este sea inverso al de su verdadera importancia política y administrativa. Así, pues, comenzaremos por una ligera noticia de lo que era el poder de los adelantados y la naturaleza é importancia de sus funciones, para tratar en seguida de los cabildos, de los gobernadores, de las audiencias, de los virreyes y del consejo de Indias.

Los adelantados, dice Bobadilla, eran gobernadores de muchos pueblos, y en las leyes 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17 y 18, título 3.º, libro 4.º, de la Recopilación de Indias se encuentran las disposiciones que determinan la naturaleza y extensión de sus poderes. Estaban encargados de fundar y poblar ciudades, de nombrar sus autoridades, de dividir los límites de las provincias, de dictar todas las ordenanzas que reclamara aquella primitiva colonización.

Pero esta institución de los adelantados fue transitoria y no tiene una importancia real para el estudio que vamos hacer.



III.—No sucede lo mismo con los Cabildos, y es precisamente este un punto en que disiento fundamentalmente de la enseñanza que se ha dado hasta el presente.

Ha sido idea recibida y propagada que los cabildos coloniales fueron la cuna de las libertades y aún de la revolución argentinas, porque en los cabildos se practicaba, aunque en escala modesta, el gobierno democrático representativo, habiéndose llegado á equipararlos con las comunas de Inglaterra y de la Confederación Helvética.

Nada más inexacto. He buscado el origen de este error y creo que en los primeros tiempos, á causa de que no se habían publicado las actas capitulares, faltaban elementos para el estudio verdaderamente científico de la institución, y así se explica que Alberdi, en sus Elementos del derecho público provincial argentino, diga lo siguiente: «Antes de la proclamación de la República, la soberanía del pueblo existía en Sud-América como hecho y como principio en el sistema municipal que nos había dado la España. El pueblo intervenía entonces más que hoy en la administración pública de los negocios civiles y económicos. El pueblo elegía los jueces de lo criminal y civil en primera instancia; elegía los funcionarios que tenían á su cargo la policía de seguridad, el orden público, la instrucción primaria, los establecimientos de beneficencia y de caridad, el fomento de la industria y del comercio. El pueblo tenía bienes y rentas propios para pagar esos funcionarios, en que nada tenía que hacer el gobierno político. De este modo la política y la administración estaban separadas: la política



«pertenecía al gobierno, la *administración* al pueblo «inmediatamente. Los cabildos ó municipalidades, *«representación elegida por el pueblo, era la autoridad que administraba en su nombre, sin ingerencia «del poder»*.⁽¹⁾

Si esto fuera cierto, las comunas de Inglaterra y de la Confederación Helvética no habrían estado más adelantadas que las de la América Española. Pero esa afirmación, bien intencionada, sin duda, porque Alberdi se propone deducir de ella la necesidad de que el país se constituya bajo la base del gobierno libre, dista mucho de ser exacta.

Parece que el señor Florencio Varela tenía de los cabildos el mismo concepto que el señor Alberdi, pues más de una vez manifestó el doctor Vicente Fidel López su propósito de comenzar la historia de la revolución argentina por el estudio de los cabildos, y este concepto ha corrido en nuestra enseñanza y en nuestras letras, con la única excepción de la historia de la Revolución Argentina del Dr. Vicente Fidel López. El doctor López había estudiado las instituciones coloniales y recogido informaciones precisas de los labios de su señor padre y del doctor Agüero y se había penetrado de que tras el gobierno colonial no había ni podía haber libertades de ninguna naturaleza. Ni el pueblo elegía, que es la base del gobierno democrático representativo, ni los cabildos tenían la extensión de atribuciones que el señor Alberdi les atribuye.

El error proviene, acaso, de los fueros excepcionales de que gozaban ciertos cabildos en España; pero,

(1) ALBERDI. Elementos del Derecho Público Provincial, pág. 261 y 262.



si se hubiera ocurrido al texto de las leyes, los historiadores constitucionalistas argentinos se hubieran dado cuenta de que las libertades de ciertas ciudades no eran extensivas á todo el reino.

Así, por ejemplo, la ley 5, título 2, libro 7, de la Recopilación Castellana, publicada en Madrid en 1419 y repetida en Valladolid en 1442, determina la condición de las ciudades en los siguientes términos: «Mandamos que las ciudades, villas y lugares que tienen por privilegio ó por costumbre antigua, que el «derecho iguala á privilegio, de dar y de proveer los «oficios de consejo de cada una ciudad, villa ó lugar «así como *Regimientos*, escribanías, etc., que los pueden libre y desembarazadamente dar y proveer, y «persona alguna no se entremeta en ello y si algunas «contra ello mandáramos dar, aunque tengan cualquier «cláusula derogatoria que no valan..... y en las ciudades, villas y lugares donde *no tuvieron* el dicho privilegio, uso y costumbre y la manera susodicha, quede «en nos libertad para que podamos proveer de los tales oficios que vacaren por muerte ó renunciación, «ó por otra cualquiera manera, á quién nuestra merced fuere, tanto que las personas á quienes proveeremos sean vecinos y moradores de las ciudades, «villas y lugares donde fueron proveídos de tales «oficios y naturales dellas, ó que hayan sido vecinos «dellas diez años antes que por nos haya sido proveído «de tal oficio.»

De modo, pues, que las ciudades privilegiadas por razón de fuero ó por razón de prescripción elegían sus magistrados; pero donde el privilegio no había sido acordado ni adquirido por prescripción, el derecho de nombrar las autoridades municipales residía en



la Corona. Claro está que si á las ciudades americanas no se les había acordado tal privilegio, no habiendo tenido tiempo hábil para adquirirlo por prescripción ¿de dónde lo iban á deducir? Aún en el supuesto de que no hubiera textos legales que fijaran á quien correspondía el nombramiento de los oficios públicos, la índole de las instituciones españolas á fines del siglo XV bastaba para que se presumiera que el derecho de nombrar los oficios del gobierno comunal correspondía á la Corona. Y así sucedía, en efecto.

IV.—El número de regidores de una ciudad era, según lo establece la ley 2, título 10, libro 4, de la Recopilación de Indias, de seis para las ciudades de menor importancia y de doce para las primera categoría. Hay en esto cierta latitud; en algunos casos se facultaba á los gobernadores para fijar el número de regidores entre estas dos cifras.

Los adelantados, como lo dijimos cuando de ellos nos ocupamos, tenían la facultad de fundar y poblar ciudades y de nombrar sus funcionarios. La ley 3, título 10, libro 4, de la Recopilación de Indias determinaba que cuando en la capitulación no se hubiese otorgado á los adelantados el derecho de proveer los oficios municipales, podían nombrarlos los moradores. Pero esta ley de los principios de la conquista fue tan poco conocida en América, que hasta Solórzano la ignora, y cuando se habla como de un caso posible que un municipio no tenga cabildo ni gobierno, dice que pueden nombrarlo los moradores, pero nó en virtud de la ley, sino del derecho natural.

Los adelantados ó los gobernadores, al fundar una



ciudad, tenían entonces el derecho de nombrar los primeros cabildantes por delegación regia, y para que no quede ni la sombra de la duda, he aquí el acta de la fundación de una ciudad.

La presente es el

ACTA DE LA FUNDACION DE SANTA FÉ (1573)

«Yo, Juan de Garay, Capitán y Justicia en la con-
«quista y población del Paraná y Río de la Plata, digo:
«que en el nombre de la Santísima Trinidad y de la
«Virgen María y de la Universidad de todos los San-
«tos y en nombre de la Real Magestad del Rey don
«Felipe Nuestro Señor y del muy ilustre señor don
«Juan Ortiz de Zárate, Gobernador y Capitán General
«y alguacil mayor de todas las provincias de dicho
«Río de la Plata, y en virtud de los poderes que
«para ello tengo de don Martín Suarez de Toledo,
«Teniente de Gobierno, que al presente reside en la
«ciudad de Santa Fé, en esta provincia de Calchines
«y Mocoretá, es por parecerme que en ella hay las
«partes y cosas que conviene para la perpetuidad de la
«dicha ciudad de agua, leña, pastos, pesquería, casas
«tierras y estancias para los vecinos y moradores de
«ella y repartirlos como S. M. lo manda y asiéntola
«y puéblola con aditamento que todas las veces que
«pareciere ó se hallare otro asiento más conveniente y
«provechosa para la perpetuidad, lo pueda hacer con
«acuerdo y parecer del Cabildo y Justicia que en esta
«ciudad hubiere, como pareciese que al servicio de
«Dios y de S. M. más convenga y porque S. M. manda
«á los Gobernadores y Capitanes que así poblaren y



«fundaren nuevos pueblos ó ciudades, les da poder y comisión para que puedan nombrar en su real nombre *alcaldes y regidores* y para que tengan en justicia y buen Gobierno y policía las tales ciudades ó pueblos.

«Así yo, en nombre de S. M. y del dicho señor Gobernador, nombro y señalo por *alcaldes* á don Juan de Espinosa y Orduño al Cabildo y por *Regidores* á Benito de Morales y á Bernardo de Salas y á Matheu Gil y á Diego Ramirez y á Lázaro de Ramallo y á Justo Santa Cruz, y así, en nombre de S. M. y del dicho señor Gobernador, les doy poder y facultad para que usen y ejerzan los dichos oficios de *Alcaldes y Regidores* á aquellas causas y cosas convenientes y á ellos tocantes, conforme á las ordenanzas que S. M. tiene hechas para las ciudades y pueblos de las Indias para que usen así de *Alcaldes Ordinarios* como de la Hermandad, en todos los negocios á ellos tocantes. Y no obstante que S. M. por sus reales prohibiciones manda que sean cada años y así cumpliendo yo sus reales mandamientos por tales los nombro y señalo, pero pareciéndome que la elección se ha de acostumbrar hacer sea en día señalado como es uso y costumbre en todas las ciudades y reinos de S. M., digo que les doy poder y facultad, en nombre de S. M., para que ejerzan y usen los dichos oficios y cargos desde el día de la fecha de esta hasta el día del año que vendrá de 1575, y así mando que por ordenanza que aquel día antes de misa todos los años tengan costumbre juntarse en su Cabildo los *Alcaldes y Regidores* con el Exmo. de Cabildo y hacer su nombramiento y elección como Dios mejor les diera á entender á la ma-



«nera y forma que se acostumbra en todos los Reinos
«del Perú.»

He ahí la cuna del sistema municipal español. El adelantado, el gobernador que fundaba una ciudad, nombraba las personas que debían formar el primer capítulo y las facultaba para que en los años sucesivos se reunieran en día señalado y eligieran á las que las habían de suceder. De modo que el municipio, tomado como conjunto de habitantes, no tenía intervención en la elección de los regidores en ningún momento, ni cuando el adelantado hacía la designación, ni cuando el cabildo los nombraba; mucho menos cuando el cargo de regidor se convirtió en oficio venal.

En las actas capitulares de la ciudad de Buenos Aires, publicadas ya desde 1589 hasta 1643, se puede seguir la marcha de la institución municipal. En la primera época, es decir, nueve años después de la segunda fundación de Buenos Aires, el Cabildo se reunía el primero de Enero de cada año, bajo la presidencia de su gobernador y designaba los cabildantes que habían de entrar el año subsiguiente. A medida que el tiempo pasa, se ve que el número de regidores elegidos por el cabildo disminuye y llega un momento, en 1600 y tantos, en que el cabildo ya no elige sino los alcaldes ordinarios y los de hermandad.

¿Por qué se ha operado esta trasformación? ¿Por qué el cabildo no ejercita ya los derechos que le confirió el fundador de la ciudad? Es porque se han trasformado las instituciones, y esta transformación fundamental se ha operado, nó en favor ni beneficio de la representación popular, sino en favor y beneficio de la codicia del tesoro de la corona de España. Es que los oficios municipales han sido incorporados á los oficios venales



de la Corona, y entonces, no sólo los regidores no son elegidos por los municipios, sino que no son elegidos por nadie: son puestos que se sacan á remate y se venden al mejor postor. Esta es la institución que se compara con las comunas de Inglaterra y Suiza!

En las actas capitulares de la ciudad de Buenos Aires hay constancia de la venta de los oficios municipales. Desde luego, aparece la falta de elección, sin que nada indique por qué no se practica, ni por qué los regidores se perpetúan contra lo establecido en el acta originaria de la fundación de la ciudad, hasta que, por último, se encuentra en las actas posteriores la indicación de títulos vendidos en España, que se presentaban al cabildo para su reconocimiento, y éste, previa constancia de que se había *pagado* el impuesto del asiento, recibía en su seno al cabildante y le daba voz y voto. Solórzano, además, refiérela de una manera perentoria, y no sabemos cómo es que ha podido escapar á la penetración de nuestros historiadores. «Y siguiendo «este ejemplo, dice, se mandó que en las Indias se fuesen «vendiendo lo mismos oficios de escribanos públicos y «del número y ayuntamiento de las ciudades y los de «la Cámara de las Audiencias y de otros Ministerios y «Tribunales, y los de regidores, receptores de penas «de Cámara, procuradores, alguaciles mayores, alfé- «ces reales, depositarios, tesoreros. que sería «cosa larga querer referir todos, y ahora últimamente «los de alcaldes ó provinciales de la Hermandad y «de otros juzgados, como lo dice más á la larga don «Francisco de Alfaro, tratando de si estos oficios se «pueden obligar é hipotecar, y fray Juan de Torquemada «que trata de los que hasta su tiempo se habían vendido «en Méjico y lo que habían valido, y el doctor Cristóbal



«de Figueroa que trata de los que introdujo y vendió
«en el Perú el Marqués de Cañete don García Hur-
«tado de Mendoza y mejor que todos el licenciado
«Antonio de León, tratando cómo se ha de venir á pedir
«confirmación en el Consejo de las ventas que de ellos
«se hiciesen y contestando todos *que es un gran inte-
«rés y tesoro el que el rey saca de las Indias por esta
«Regalía*». (1)

Realmente, sacaba gran interés y tesoro la corona de España por esta regalía. En las actas capitulares de Buenos Aires del siglo XVII se menciona la venta de un oficio de alguacil mayor en once mil y tantos pesos fuertes, y para apreciar bien lo que significa esta cifra, bastará recordar que en la misma época uno de los mejores arbitrios ó rentas del cabildo era el impuesto de la romana, que producía de 27 á 30 pesos fuertes. En una época en que la renta estaba reducida á estos extremos, un puesto de aguacil se vendía en más de once mil pesos fuertes!

Al principio los oficios municipales se vendían por una vida, es decir, por la vida del comprador; pero pronto los interesados empezaron á gestionar el derecho de disponer de los oficios como de toda otra propiedad, así como Francisco Alfaro discutía si se podían hipotecar. La corona de España pensó que esta nueva prerogativa dada al primer adquirente podía ser fuente de mayor renta, y por Real Cédula de 1581 dispuso que los oficios se venderían por una vida y otra vida más, percibiendo la Corona la tercera parte del precio en que la segunda persona compraba el oficio. Esta forma de traspaso se llamaba *renuncia*. Posteriormente, por cédula de 1606,

(1) ORLAZÁN. Política, tomo 2.º, pág. 484, n.º. 7.



se autorizó al adquirente de un oficio á transferirlo de persona á persona sin limitación alguna, y de ahí vinieron los títulos de regidores perpétuos. Por la primera renuncia se pagaba la mitad al tesoro real y por las sucesivas la tercera parte.

Había, sin embargo, una excepción; había un puesto que no era venal y era el de alcalde. Primero no lo fueron ni los ordinarios, ni los de Hermandad; después lo fueron los segundos y sólo quedaron exentos de la venta los oficios de alcaldes ordinarios ¿porqué? Porque, aunque no tenían facultades municipales y ocupaban el primer puesto en el cabildo, eran por su esencia funcionarios judiciales, y los reyes de España entendían, siguiendo la máxima de Alejandro Severo, que estos oficios no se debían vender, porque si el juez compraba su puesto, era natural que después vendiera su justicia. Pero esta era la única excepción.

No puede decirse que una institución semejante sea cuna de la libertad, enseñanza de la democracia y, mucho menos, el punto de partida de la independencia argentina. El pueblo no ha elegido nunca las autoridades municipales que lo gobernaban, y todavía hemos de ver cómo el manejo de las rentas le fue también arrebatado en 1782. Además de esto, hay otro error en el concepto que se tiene del gobierno municipal durante la colonia. El puesto de municipal en todos los países que han tenido el carácter popular ha sido un puesto gratuito.

Los regidores duraban un año en su puesto, según lo establecía el acta de su institución; pero, después que el oficio se hizo venal, duraban toda la vida ó lo enajenaban cuando el titular había obtenido de él



todo lo que podía esperar, ó cuando no podía continuar desempeñando sus funciones.

Si los oficios municipales eran venales, necesariamente debían gozar de un salario que compensara el desembolso que se había hecho para adquirir el título, y la afirmación no es mera consecuencia deducida del nuevo carácter que se dió á la institución municipal, sino que está fundada en la ley 4, título 10, libro 4, de la Recopilación de Indias, publicada en 1591, y que, refiriéndose á los alféreces reales, dice lo siguiente: «El alférez de cada ciudad, villa ó lugar «entre en el Regimiento y tenga voto activo y pasivo y «todas las otras preeminencias que tengan ó tuvieren «los regidores y tenga en el Regimiento asiento en el «mejor y más prominente lugar delante de los regidores, aunque sean más antiguos que él, y lleve de «salario en cada un año lo mismo que llevaren los «otros regidores y otro tanto más.»

Con este texto legal no cabe duda de que el puesto de regidor era pago. Ahora, en el terreno de los hechos podía suceder que el comprador de una vara de regidor no realizara los propósitos que había tenido en vista, y que los municipios ó cabildos, particularmente en el Río de la Plata, no produjeran los resultados pecuniarios que se calculaban en España, y así sucedió, en efecto, según lo demuestra el acta capitular de Buenos Aires de 6 de Abril de 1631, que dice así: «En este Cabildo propuso don Diego de Rojas, «Regidor *perpetuo* de esta ciudad, que Su Señoría le «mande dar por testimonio cómo en este Cabildo no «se les da ningún salario á los regidores de los propios de él ni de otra renta, por razón de sus oficios, «para guarda de su derecho; y visto por Su Señoría,



«manda que el Escribano de Cabildo se lo dé así por testimonio para el efecto que lo pide, atento que no se les paga ninguna renta, ni hay propios de que sólo poder hacer.»

Ahora veamos los requisitos indispensables para desempeñar el oficio de regidor. Hevia Bolaños, en su Curia Filípica, dice que el cargo de regido implica dignidad y honra, y siendo este el punto de partida de la institución, se comprende que estuvieran alejados de los cabildos todos aquellos que desempeñaban oficios viles ó que habían sufrido una disminución en su capacidad política ó civil. Es curioso saber cuáles eran los oficios viles á los efectos de la prohibición para desempeñar el puesto de regidor. Estaban comprendidos en esta calificación todos aquellos que se dedicaban al pequeño comercio, como ser mercaderes, despachantes de comestibles, géneros, etc. Solórzano pretende que la prohibición sólo era imperiosa cuando el comerciante desempeñaba por sí mismo las funciones de expendedor, pero que cesaba cuando hacía el negocio por interpósita persona; pero la prohibición es absoluta, aún en ese caso, porque así lo dispone expresamente la ley 12, título 10, libro 4, de la Recopilación de Indias.

Otro requisito para poder ser regidor era la vecindad. Vecino, dice la ley 6, título 10, libro 4, de la Recopilación de Indias, es aquel que tiene casa poblada, aunque no tenga encomienda de indios. La vecindad no era derecho que se adquiría por la simple residencia; era necesario que el que pretendía las prerogativas que acordaba la vecindad se presentara al cabildo y solicitara ser tenido por vecino. El



cabildo tomaba en cuenta la solicitud y generalmente acordaba la gracia que se le impetraba.

En España, á falta de vecinos, podían ser regidores los forasteros, siempre que fueran españoles. Traslada la cuestión á América, ocurre preguntar si se requería la naturaleza y vecindad en la ciudad donde debía desempeñarse la función. Jurídicamente podemos decir que sí, porque según la ley citada, esa era una de las calidades exigidas para el puesto en España y ninguna ley de Indias introdujo excepción á la regla. Solamente respecto de los Tenientes Gobernadores la ley 7, título 8, libro 4, de la Recopilación de Indias, consigna la prohibición de que no podrán serlo de las grandes ciudades los naturales de ellas.

Pero, si tal era la situación del punto de vista jurídico, no sucedía lo mismo del punto de vista práctico. En el Río de la Plata los cabildos fueron por lo general de puros españoles, ya porque traían sus títulos de España, ya porque las vacantes que ocurrían, y que podía proveer el cabildo eran llenadas con vecinos europeos. Fue necesario que se produjeran los trastornos políticos en la vida colonial que causó la primera invasión inglesa, para que esta situación se modificara fundamentalmente.

Todos sabemos que el 25 de Junio de 1806 Sir William Carr Berresford desembarcó á inmediaciones de Buenos Aires, de la cual se apoderó el día 27 del mismo mes, pues el virrey Sobremonte, lejos de cumplir con su deber, defendiendo la ciudad, la abandonó para buscar auxilios en Córdoba y que la reconquista estuvo á cargo de los elementos coloniales dirigidos por el cabildo, siendo el nervio de ella el elemento criollo ó propiamente nacional.



La consecuencia de la conducta de Sobremonte fue que el 14 de Agosto de 1806 el Cabildo reunió á los principales vecinos en cabildo abierto y constituyó nuevo gobierno, entregando la dirección política y el mando militar á Liniers y poniendo de lado al virrey Sobremonte, por su cobardía y por el abandono de sus deberes públicos.

Posteriormente, la corona de España quiso recompensar á Liniers por sus servicios durante las invasiones inglesas, y lo confirmó virrey; pero el partido español no tardó en emprender una vigorosa campaña contra la autoridad del nuevo virrey que se apoyaba en los criollos. Esta oposición culminó en la conspiración que estalló el primero de Enero de 1809, día señalado por la regla y costumbre de los cabildos para la elección de los nuevos funcionarios del municipio. Ese día el alcalde de primer voto, don Martín Alzaga, y los que le acompañaban se reunieron en la Plaza de Mayo para deponer al virrey Liniers, y éste, después de formular su renuncia, quiso y pudo retirarla, gracias al concurso de los patricios, que habían comprendido su importancia y no querían que el gobierno cayera de nuevo bajo la influencia de los españoles.

La consecuencia de este acontecimiento político fue que los principales conspiradores, Alzaga, Villanueva, Santa Coloma, Neyra y otros, fueron deportados á Patagones con el mismo traje de seda con que habían asistido al cabildo. El partido español quedó, pues, vencido, y cuando se trató de la reorganización del nuevo cabildo, don Mariano Moreno, la más noble y bella de las figuras de nuestra historia, obtuvo que la reorganización se hiciera con cinco cabildantes españoles y cinco naturales.

↓ y la más



Este cabildo fue el primero en que se sentaron por mitad, en virtud de derecho reconocido, hombres nacidos en suelo argentino, y sirvió de instrumento para la revolución que debía terminar con la declaración de la independencia de la patria. He aquí los nombres de los primeros cinco cabildantes argentinos: Juan José Lezica, Dr. Manuel Mansilla, Manuel José Ocampo, doctor Tomás Manuel de Anchorena y Dr. Julián de Leiva.

Hemos dicho anteriormente que después de 1800 los cabildos no elegían regidores, sino en los casos de vacantes no renunciadas en forma, ni vendidas por la Corona, y quizá fue esa la circunstancia por la cual el cabildo designó los que debían reemplazar á los cesantes. Como las actas capitulares de ese año no se han publicado, es difícil afirmarlo á ciencia cierta; pero desde ahora debe tenerse en cuenta que la ciudad de Buenos Aires era dueño de seis varas, en virtud de concesión real de Carlos II, como lo veremos más adelante.

Respecto de la edad requerida para ejercer el cargo de regidor, Bobadilla en su Política y Hevia Bolaños en su Curia Filípica dicen que bastaba tener diez y ocho años. Cuando se trataba de funciones especiales se exigía generalmente la mayor edad, siendo escusado decir que tratándose de los alcaldes ordinarios, se requería la edad de veinte y cinco años.

La presidencia de los cabildos correspondía á los gobernadores ó corregidores y en su defecto á los alcaldes de primero y segundo voto respectivamente.

—

V.—Los cabildos tenían funciones de carácter diverso: electorales, deliberantes, administrativas y contenciosas.



En el primer tiempo, cuando no eran venales los oficios consejiles, desempeñaban funciones electorales, designando cada año á los que debían reemplazarlos, y después éstos, entre sí, designaban los oficios públicos del cabildo; así, por ejemplo, había un fiel ejecutor, que era un funcionario con atribuciones análogas á las de los ediles cereales del Derecho Romano: estaban encargados de la vigilancia de los mercados y abastos de la ciudad. Se nombraba también un depositario de penas de Cámara, encargado de recibir las multas, los alcaldes ordinarios, los de Hermandad, etc. Designaba, además, el procurador de la ciudad, que originariamente era el representante directo del pueblo. Al principio parece que este fue el único funcionario elegido directamente por los vecinos para que los representara dentro del Cabildo y ante los tribunales administrativos, defendiendo los derechos y prerogativas de la ciudad. Esta es la tradición del gobierno de los municipios en España, y está explícitamente dicho por Hevia Bolaños en el siguiente pasaje: «Aunque el pueblo romano transfirió, en el principio, la jurisdicción de hacer leyes, «potestad del cuchillo y elección del magistrado, «todavía reservó en sí la administración de otras cosas «concernientes á otros menores gobiernos de la República, en los cuales el pueblo tiene mano y poder, «aunque subordinado y expuesto á la censura del «príncipe, sus tribunales y justicias. Por lo cual el «Cabildo es y representa todo el pueblo y tiene la «potestad suya, como su cabeza; porque, aunque en «toda la congregación universal resida, fue transferida y reside en los cabildos que pueden lo que el pueblo puede, el cual nombra procuradores genera-



«les que asistan en ellos para contradecir lo mal ordenado, como consta de una glosa y lo traen Pisa y Quevedo.» Pero en 1634 la corona de España dictó una resolución para las Indias, en virtud de la cual quedaban autorizados los cabildos para proceder por sí á designar el procurador de la ciudad, con prescindencia del vecindario, que hasta entonces debía concurrir á la elección en cabildo abierto. La ley es de 1623; pero creo que antes de ella el cabildo de Buenos Aires había usurpado esa atribución. En las primeras actas capitulares de 1589 consta que ya el cabildo elegía al procurador de la ciudad, á pesar de no haberse dictado todavía la ley que lo autorizaba para ello.

Las facultades deliberantes de los cabildos consistían en el poder de dictar todas las ordenanzas y estatutos para el mejor gobierno de la ciudad. Pero no nos hagamos ilusiones con la generalidad de esos términos. No nos imaginemos que en «todas las ordenanzas y estatutos para el mejor gobierno de la ciudad» estaban comprendidas muy amplias facultades. La práctica colonial había reducido el poder real de los cabildos dentro de límites muy estrechos, y además las ordenanzas del municipio estaban, según Solórzano, sometidas á la confirmación del Virrey ó de la Audiencia. De modo que este poder no podía ejercitarse libremente, y es claro que no había de pasar ordenanza que pudiera molestar ó perjudicar los intereses del gobierno central, como la Corona los entendía entonces. Entre la funciones deliberantes estaba comprendido todo lo referente á policía, abasto, *propios* y *arbitrios*. Conviene explicar lo que significa *propios*

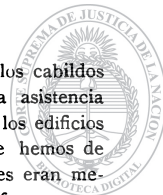


y *arbitrios*, para que no se dé á estas palabras una significación más extensa de la que tienen.

Los propios era una designación técnica del derecho español. Los propios no es otra cosa que las propiedades y rentas pertenecientes á la comuna. Así, dice Bobadilla, son propios las calles y plazas que están fuera del comercio, las tierras y dehesas que la comuna puede vender ó arrendar y todas las rentas que ingresan al tesoro del municipio. Bobadilla menciona, además, los propios de propios, distinción que se refiere á los propios comunes de todo el municipio, diferentes de los propios que eran particulares á la ciudad, y es á estos últimos que llama propios de propios. Parece que entre nosotros no se hacía la distinción. Los arbitrios eran todos los pequeños recursos que resultaban del derecho de abasto, del de romana, de los permisos, etc.

Los recursos de la comuna eran en extremo limitados y, sin embargo, cuando se dictó la Ordenanza de Intendentes para el Río de la Plata, en 1782, la Corona entendió que debía restringir los poderes del Cabildo, y puso bajo la dirección de la junta de hacienda que aquella ordenanza organizó, lo referente al gobierno de los propios y arbitrios, y dispuso que los sobrantes ingresaran á una caja especial para ser invertidos en objetos locales; pero con intervención de la autoridad superior que instituía.

Las funciones judiciales del Cabildo eran muy limitadas. Intervenía en los asuntos de menor cuantía y era el tribunal de apelación de las resoluciones de los alcaldes, siempre que se tratase de la aplicación de sus ordenanzas. Desempeñaba entonces jurisdicción contencioso-administrativa.



Entre las funciones administrativas de los cabildos se encontraba la instrucción primaria, la asistencia pública, los hospitales, los bastimentos, los edificios públicos, las vaquerías, etc. Más adelante hemos de ver, sin embargo, que todas esas facultades eran meramente teóricas, pues en la práctica le fueron arrebatadas por los gobernadores ó por los virreyes. De las funciones que hemos enunciado, la única que tal vez necesita explicación es la que se refiere al derecho de vaquerías, que era lo siguiente: poco después de 1600 una gran peste diezmó los habitantes de la campaña, quedando muchísimos ganados sin tener quién los cuidara. Estas haciendas se multiplicaron en gran número y se convirtieron en ganados alzados que llegaban hasta las puertas mismas de la ciudad. Como las haciendas alzadas no se podían marcar, no se sabía á quién pertenecían, y entonces el cabildo constituyó el derecho de vaquerías, que se acordaba generalmente á los que acreditaban haber tenido ganados en la época del alzamiento. Este derecho de vaquerías dió lugar á la cuestión de límites entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé, porque los tres cabildos daban permisos de vaquerías y los que los obtenían se internaban en las provincias vecinas.

VI.—El cabildo abierto es una institución que merece nuestra atención, porque ha sido, si no la fuente, el medio ocasional de que se valieron los revolucionarios argentinos para formular sus primeras pretensiones al propio gobierno de la patria. Anteriormente hemos hecho referencia al cabildo abierto de 1806, que declaró cesante al virrey Sobremonte; después hemos recordado los nombres de los cinco primeros cabil-

Desde esa época de más lo gobernan



dantes argentinos. Aquel hecho histórico creó un precedente al cual concurrieron los mismos españoles, que, movidos por un sentimiento de dignidad nacional y de patriotismo local, no quisieron continuar bajo la autoridad del virrey que no se había mantenido á la altura de sus deberes; pero, seguramente, no preveían que, reconociéndole al pueblo el derecho de modificar la situación jurídica en que la corona de España había colocado á la América, se establecía un antecedente que más tarde había de servir para fines trascendentes.

Es curioso y extraño. El cabildo abierto es una institución cuyo origen jurídico se pierde en el pasado. El ilustre historiador de la revolución argentina afirmaba magistralmente y con acierto que el cabildo abierto es la reunión de los vecinos afincados de una ciudad, llamados á deliberar conjuntamente con el cabildo en las emergencias imprevistas, cuando se presentaban asuntos de gran importancia. Infructuosamente se buscará un precepto, una ley que establezca esta institución: el cabildo abierto ha nacido de los usos y costumbres políticas del pueblo español. Así lo enseña Bobadilla en su Política. «Algún caso tan grave é importante se podía ofrecer en que conviniera, para mejor acierto, llamar algunas personas de buen celo, parecer y experiencia de fuera del ayuntamiento, que asistan en él al trato y conferencia del negocio; y en tal caso no es cosa agena de razón y de utilidad llamarlos y que den su voto y parecer, y aunque esto se use pocas veces, yo lo he visto y proveído alguna de voluntad y gusto de los Regidores: de lo que el pueblo se satsface mucho por ver que es deseo y celo de acertar y esto se puede hacer, aunque haya



«contradicción, según Compostelano y otros y aunque
«Bellega diga que contradiciéndolo alguno de los
«capitulares no se deben admitir; y esto mismo refie-
«ren Cicerón, Budeo Lonceloto y otros, que usaban
«los antiguos romanos y los Emperadores, metiendo en
«el Senado caballeros y otras personas supernumera-
«rias que hubiesen tenido Magistrados ú otros varones
«escogidos de los Censores para consulta y consejo
«de negocios graves. Y en los Parlamentos de París y
«de Tolosa, de Francia, entran con los consejeros los
«Obispos, que son Pares de Francia ó presentados por
«el Rey, según Juan Lucio y otros. *Y de aquí nace lo*
«*que hoy se usa en los pueblos menores, hacer Con-*
«*sejos abiertos*».

Esta es la tradición de cabildo abierto. En los anales de nuestra ciudad se encuentra el recuerdo de algunos cabildos abiertos. En 1633 el cabildo de Buenos Aires resolvió mandar á España un procurador que gestionara el despacho de solicitudes vitales para los intereses de esta humilde y oscura colonia; pero la ciudad era tan pobre, que no tenía recursos para mantener al procurador que nombró, y entonces el cabildo reunió á todos los vecinos para pedirles que contribuyeran al sostenimiento del procurador que iba á defender los intereses de la comuna cerca de la corte de España. Es una página curiosa de la vida colonial las instrucciones dadas al comisionado don Eugenio Castro: ellas revelan la triste situación de este pueblo en aquellos tiempos ya lejanos. Las instrucciones que llevaba el comisionado eran estas:

1°. Gestionar la creación de una Real Audiencia en el Río de la Plata, porque las cuestiones que se resolvían aquí en primera instancia tenían que llevarse en



apelación á Chuquisaca; de manera que resultaba que los beneficios de la segunda instancia sólo existían para los asuntos de excepcional importancia;

2°. Que en caso de no accederse á esta petición, se solicitara la unión de los gobiernos eclesiástico y secular de esta Provincia y del Paraguay, como antes estuvieron;

3°. Que se le volviera á conceder permiso para comerciar con el Brasil, porque á España no podían mandarse sino los cueros; pero las carnes, los sebos y las harinas no alcanzaban á satisfacer el gasto de flete y sólo se podían comerciar en las costas del Brasil. Lo pedían *como un derecho divino y humano*;

4°. Que se permitiera introducir al país 600 esclavos del reino de Angola, porque la peste y la viruela habían diezclado á los naturales y no había quién hiciera los servicios domésticos y las faenas de campo. Era tan grande la pobreza, que ni siquiera había en la ciudad plata acuñada para pagar los derechos de sisa y aduana y pedían que se permitiera llevar 300 de esos esclavos al Perú, para venderlos en aquel mercado y pagar los derechos en Potosí;

5°. Que se permitiera á los vecinos que fueran al Perú, Tucumán y Chile, llevar esclavos para su servicio, con la condición de volverlos á traer;

6°. Que las encomiendas por dos vidas se prorogasen por otros dos;

7°. Que se le otorgara á la ciudad las penas de Cámara y gastos de repartición, porque no tenía propios;

8°. Que no se mandasen más jueces en comisión, porque en los últimos 14 años habían costado más de 100.000 pesos y las cosas habían quedado como estaban;



9°. Que si sobraba algo de los retornos, lo pudieran vender en Tucumán, sin pagar derechos de aduana en Córdoba;

10° Que se mandasen 200 soldados por la proximidad al Brasil, donde el enemigo holandés *era tan poderoso*, y porque se habían alzado los indios de Tucumán;

11° Que se permitiera introducir 50.000 pesos en plata acuñada, para poder comerciar entre sí y tener uso de moneda como tenían todos los vasallos del rey para sus necesidades.

Como se ve, no podía ser más estrecho el régimen que nos imponía la metrópoli; no permitía que comerciaran dos ciudades de la colonia, ni les consentía el uso de la moneda, obligándolas á verificar los cambios en la forma primitiva, artículo por artículo, producto por producto! Este razgo peculiar de la colonización española, muestra cual era la verdadera situación de los pueblos americanos y determina el sistema de administración cuyo estudio justificará siempre el derecho con que los naturales, cuando pudieron, declararon su independencia.

Otro Cabildo abierto que registran los anales de Buenos Aires tiene un objeto análogo al anterior, es decir, análogo del punto de vista de lo que se proponía alcanzar, que era dinero; diferente del punto de vista de la aplicación á que se destinaba. El Cabildo no tenía propios ni arbitrios suficientes para satisfacer sus pequeñas necesidades y se vió obligado á recurrir á la generosidad del vecindario, para atender las exigencias de la Corona, que le reclamaba subsidios.

Hemos dicho que el Cabildo elegía de entre sus miembros las personas que debían desempeñar los

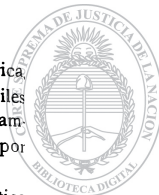


oficios públicos, y vamos á ver cómo practicaba esa elección. La elección se hacía por votación secreta ó pública. Hay muchas leyes y cédulas reales que recomiendan á los gobernadores dejar á los cabildos en la más amplia libertad para desempeñar sus funciones. No podían votar los cabildantes por su padre, ni por sus hijos ó hermanos, ni el uno por el otro los casados con dos hermanas, porque ya entonces se sabía lo que tal vez se olvidó más tarde, esto es, que los vínculos creados por la unión de dos familias son tan íntimos y estrechos, como los de la propia sangre, y que la conveniencia pública y el decoro personal obliga á los funcionarios del Estado á no influir directamente en favor de sus allegados, porque de otra manera el gobierno puede llegar á convertirse en torpe nepotismo.

Los tratadistas de derecho administrativo español discutían si los cabildantes podían votar por sí para el desempeño de los oficios públicos, y alguno, como Hevia Bolaños, en la Curia Filípica, resuelve el caso por la afirmativa ó negativa, según la forma de la votación; afirmativamente, cuando el voto era público y otros habían votado ya por él; negativamente, cuando el voto era secreto. Consta en las actas capitulares que en casos especiales, los cabildantes impedidos para concurrir al capítulo votaban en su casa ante el escribano.

—

VII.—La conclusión á que necesariamente debemos llegar después del estudio que acabamos de hacer, dista mucho, por cierto, de la de Alberdi, Varela y otros. Podría observarse que acaso las prácticas no se ajustaban estrictamente á las leyes y que, dada la distan-



cia en que se desenvolvían las colonias de América es posible que se hubieran formado cuerpos consejiles con prerogativas, facultades y atribuciones más amplias y de carácter más popular que las instituidas por las leyes.

Sucede, en efecto, muchas veces que en la práctica se descuidan y abandonan las leyes. Esa es la enseñanza constante de la historia; pero, por regla general, cuando esto sucede, no es en beneficio de los derechos y libertades que ellas consagran. Y quizás es única excepción á esa regla, entre los pueblos modernos, la Inglaterra y los Estados Unidos, donde el *common law*, el derecho común y consuetudinario, precede la ley escrita, la modifica y aún se sobrepone á ella. Pero, tratándose de la colonización española, del siglo XVI al XVIII, de antemano se puede afirmar que las prácticas eran peores que las instituciones. Bastaría recordar los elementos que sirvieron para la colonización, para presuponerlo. Los soldados que venían al frente de las expediciones con hábitos de disciplina adquiridos en largas guerras, donde el mando era absoluto y la obediencia ciega, no podían dar, y en efecto no dieron, á la autoridad comunal mayor amplitud de acción, ni mayores libertades que las que le atribuía la legislación vigente.

El Rio de la Plata fue poblado á fines del siglo XVI; de manera que para nosotros tiene muchísimo interés la historia de España desde 1600, porque debe reflejarse en América la tendencia política prevalente en la madre patria y nuestro progreso y desenvolvimiento marchar paralelamente al progreso y desenvolvimiento de la metrópoli. El siglo XVII se abre para España bajo muy tristes auspicios. Han pasado



los tiempos de Carlos V y ha desaparecido también el atrasado y sombrío, pero enérgico, Felipe II. El siglo XVII comienza bajo el reinado de Felipe III, que era un rey bueno y piadoso, tanto, que no comprendía cómo un hombre podía acostarse y dormir tranquilo después de haber cometido pecado mortal; pero estas excelentes condiciones personales se borraban ó se esterilizaban en el manejo de los negocios de Estado, á causa de la fatal debilidad de su carácter. Desde el principio de su reinado delegó el mando en sus válidos, que llevaron la monarquía por sendas extraviadas y precipitaron su decadencia. Felipe IV sucede á Felipe III, y, como éste, entrega el gobierno á sus favoritos, reservándose para los placeres de la vida galante y las delicadas satisfacciones artísticas. No es necesario decir que sus ministros cuidaban más del engrandecimiento propio y de sus allegados, que de la prosperidad del reino; esta época no vive en la memoria de los hombres sino por el recuerdo de los grandes artistas que la ilustraron; del punto de vista político y gubernamental, Felipe IV no hace sino continuar la obra de su antecesor, arruinando á España con su administración interna y con su desastrosa política exterior, hasta entregarla vencida en las manos inertes de Carlos II, el hechizado, pobre de espíritu, á quien se le supuso poseído del demonio.

La América, subordinada á la monarquía española, debía sufrir necesariamente los efectos de sus malos gobiernos, y para concretarnos al Río de la Plata, que es el objeto principal de nuestro estudio, referiremos algo de lo que revelan los documentos oficiales y las crónicas de aquella época, que basta para demostrar la pobreza y el atraso de estas colonias.

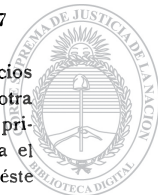


En 1661 se creó la Audiencia del Río de la Plata, lo que importa decir que en España se tenía elevado concepto de estas comarcas y se les atribuía grande importancia; sin embargo, Trelles afirma que en 1664 no se vendían los puestos venales dependientes de la Audiencia, ni ninguno de los oficios capitulares, porque no había quién los comprara. Esta es la razón porqué en ciertas épocas no aparecen vendidos los oficios de regidores: nada valían.

La población de Buenos Aires, en 1664, no alcanzaba sino á 1200 personas, incluyendo en esta cifra los habitantes de las chacras y estancias de los alrededores; y los vecinos, es decir, aquellos que tenían casa poblada, apenas llegaban á la limitadísima suma de 250 personas. Era este el resultado de la clausura de nuestro puerto y del monopolio comercial de la metrópoli.

A fines del siglo XVII encontramos una real cédula sobre regidores, que va á confirmar todo lo que hemos dicho anteriormente y á demostrar que, en la práctica, lejos de crecer el poder comunal y de extender la esfera de funciones que le señalaban las leyes, era restringido y burlado por los gobernadores.

En 1685 el Cabildo de Buenos Aires petitionó á Carlos II para que, en atención á la pobreza de esta ciudad, le hiciera donación de seis oficios de regidores. La crónica no lo dice, pero debe entenderse, que no sólo se pedía facultad para nombrar los regidores, sino también para percibir los derechos correspondientes, porque, como sabemos, en los casos de renuncia era la Corona la que recibía la mitad ó la tercera parte del precio de venta del oficio, según los casos, y el Cabildo no cobraba nada. Carlos II acce-



dió á la petición del Cabildo y le donó los seis oficios de regidores, como podía haber donado cualquier otra renta real; pero el despacho vino dirigido á la primera autoridad colonial que era en esa época el gobernador Don Manuel de Prado Maldonado; éste vió de lo que se trataba, y como no había sino un regidor, se apoderó de la prerogativa acordada al Cabildo y procedió á nombrar los seis regidores, designando á las personas que mejor le parecieron. De modo que esta concesión hecha al Cabildo de Buenos Aires, fue usurpada por el gobernador que constituyó el Cabildo por sí y ante sí.

Pero aún hay más. En 1705, siendo gobernador Don Alonso Juan de Valdez Inclán, mueren dos de esos seis regidores; en virtud de la concesión real, correspondía al Cabildo llenar las vacantes. Este, dando muestra de subordinación á la autoridad superior, formó una lista de las personas que podían ser regidores y lo sometió al gobernador, antes de hacer el nombramiento. Pero sucedió lo que debía suceder: los candidatos del Cabildo no fueron del agrado del gobernador, y éste designó los nuevos regidores. El Cabildo protestó, pero el gobernador se presentó con los nombrados, que eran dos capitanes, y fueron aceptados.

Más tarde el Cabildo ocurrió á la Audiencia reclamando contra la usurpación del gobernador, y la Audiencia declaró que el Cabildo debía proceder á nueva elección; pero como el gobernador tenía el derecho de penetrar en el Cabildo, asistió á la sesión é intimó á los capitulares que se abstuviesen de proceder á nueva elección, bajo multa, y ordenó al alcalde de primer voto que continuara citando á los que él había nombrado.



Como el alcalde no diera cumplimiento á su orden, «ejecutó con tanto estrépito la multa de 200 pesos que le impuso, que sin atender á su carácter, la trabó de su mandamiento el alguacil mayor, en una mulata, «su esclava.» (1)

Se ve, pues, que si la ley era deficiente, raquítica y estrecha, las costumbres eran peores. Las prácticas de los Cabildos no es punto de partida del gobierno libre.

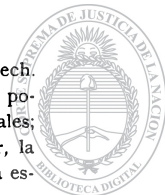
¿Se quiere conocer por un solo rasgo cual era la situación de las colonias respecto de la madre patria? Hay un hecho documentado muy elocuente. En 1708 el Cabildo de Buenos Aires creyó necesario aumentar el número de pulperías que había en la ciudad, y para hacerlo, tuvo que pedir permiso al rey de España; solicitó permiso para establecer veinte, porque las cuatro que había no le producían sino 80 pesos de renta y los propios únicamente alcanzaban á 320 pesos, en tanto que los gastos ascendían á 800. ¿Es posible suponer que el Cabildo tuviera poderes tan vastos como los que se le han atribuido y no tuviera la facultad elemental, primaria, de conceder permiso para establecer pulperías dentro de su jurisdicción?

Hasta aquí nos hemos ocupado de la situación de la colonia en los primeros cien años después de la conquista; vamos á ver cómo esta situación se modifica en el siglo siguiente, es decir, en el siglo XVIII, cuando la monarquía de la casa de Austria es sustituida por la de Francia, que, con Felipe V, adquiere los ricos y vastos territorios que formaban todavía la grandeza relativa de España.

(1) Revista del Archivo, tomo I, pág. 241



Felipe V, obtuvo que se le reconociera rey de España en el tratado de Utrech, en 1713, que terminó la guerra de sucesión. Este tratado tiene para nosotros mucha importancia, porque en él consiguió la Inglaterra el derecho de hacer el comercio de esclavos con el Río de la Plata. Hasta entonces el Río de la Plata había estado cerrado para el comercio del mundo y aún para el de España, que sólo de vez en cuando mandaba los buques de registro con algunas mercancías para cambiarlas por cueros. La Inglaterra transfirió a la Compañía del Mar del Sur el derecho que le acordaba el tratado de Utrech, y ésta aprovechó su franquicia para hacer el contrabando en grande escala, que debía enriquecer á esta pobre, oscura y olvidada colonia del Río de la Plata. A Felipe V se debió la organización del «Ministerio de las Indias y del Comercio», por el cual giraron desde entonces los negocios que se relacionaban con el comercio colonial y que puso término á la prepotencia de la casa de contratación de Sevilla. Fernando VI sucedió á Felipe V y siguió sus huellas. Bajo el reinado de Carlos III, que vino en seguida y durante el cual se acentuó y llegó al más alto grado el sistema liberal de la casa de Borbón, se estableció el Virreynato del Río de la Plata (1776). Buenos Aires ya no era una aldea, sino una hermosa ciudad y en sus vastas campañas se multiplicaban los ganados que hasta ahora constituyen su principal fuente de riqueza. Dos años después, en 1778, se abrió el puerto de Buenos Aires al comercio libre con la metrópoli. Hasta entonces sus operaciones habían estado limitadas á los buques de registro y á las *permisiones* que otorgaba la Corona para el comercio de esclavos, por tiempo determina-



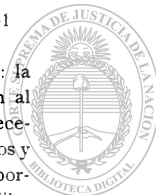
do, después de vencido el plazo del tratado de Utrecht.

El comercio, relativamente libre, atrajo mayor población, y llegamos á los buenos tiempos coloniales; sin embargo, en esa época, como en la anterior, la administración colonial continúa encerrada en una esfera de acción limitadísima.

Los virreyes ya no le arrebatarán al Cabildo el derecho de llenar las vacantes que se produzcan en su seno, para entregar la vara de regidor á sus allegados, pues, en general, los virreyes eran personas honorables y discretas; pero con la vasta extensión de sus facultades absorberán toda la administración local, y las funciones de los Cabildos seguirán tan reducidas que no se notará diferencia alguna con lo que sucedía en el siglo anterior.

Era la regla que los virreyes, al dejar el mando informaran á su sucesor, en una memoria cuidadosa y detallada, del estado del virreynato y de las medidas de gobierno que habían adoptado durante su período para la mejor administración de los intereses de los pueblos confiados á su cuidado. El señor Angelis y el señor Trelles han publicado esos interesantes documentos y en todos ellos se vé que los virreyes se ocupaban de los más insignificantes asuntos de barrio, sin dejar terreno libre á la acción de los Cabildos.

El virrey Arredondo, en su memoria de 1795, declara que Buenos Aires tenía en esa fecha 60.000 almas. La cifra puede ser exagerada, pero basta para demostrar que la capital del virreynato era entonces una ciudad colonial de primer orden. Examinando los actos de gobierno que ilustran su administración, inferiremos lo que se dejaba á los Cabildos.



Las primeras medidas de que da cuenta son: la creación de alcaldes de barrio y las que se refieren al empedrado de una cuadra de la ciudad. No se necesita demostrar que en uno y otro caso se trata de actos y obras esencialmente municipales, á pesar de la importancia que el virrey les atribuye y de la grandilocuencia de sus conceptos. En segundo término, se ocupa de los trabajos que ha hecho para tapar los pantanos de las calles y no deja de mencionar la delincuencia que ha dado á los nuevos edificios. Trata de la beneficencia, de la policía y del alumbrado, y uno concluye por no saber qué era lo que quedaba librado á la administración del Cabildo.

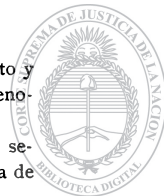
El virrey Arredondo termina su memoria con la enumeración de los bandos que había publicado durante su gobierno. Por ellos sabremos hasta donde alcanzaba la mano del Superior en la administración colonial.

Tomemos los más característicos y significativos.

Uno de ellos tiene por objeto impedir los desórdenes en la noche buena. Parece que desde entonces era costumbre promover bullicios y disturbios en los templos durante la misa de navidad.

Existía también el hábito de jugar carnaval, con las formas brutales que todavía no se olvidan; se arrojaba huevos, harina y agua sobre los transeúntes, y este es asunto que motiva un bando anual del señor virrey durante toda su administración.

Hemos referido anteriormente que á principios del siglo XVIII la ciudad impetraba permiso real para autorizar el establecimiento de pulperías dentro de su jurisdicción. Al finalizar el siglo no se recurre al rey de España, porque el virrey es su representante, con fa-



cultades omnímodas, y éste interviene en el asunto y publica bando, ordenándoles que se presenten á renovar sus licencias.

También se encuentra entre los bandos del señor virrey Arredondo uno que ordena la matanza de perros, de la que sólo exceptuaba á los falderos.

Otro bando sobre abasto determina precauciones para impedir que el grano malo ó carbunclo de los ganados introducidos para el consumo produzca desgracias en la ciudad.

Otro determina que las carretas y los carros no deben tener más de dos bueyes, ni caballos cincheros.

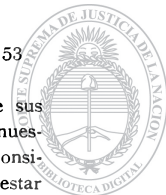
Se acostumbraba en aquel tiempo encender hogueras y fuegos artificiales para ciertas fiestas, en el día de San Juan particularmente. Se preparaban cerca de los templos, y el virrey dictó bandos sobre la materia, prohibiendo que se encendieran sin su especial permiso.

Por último, hay disposiciones sobre apertura de calles en las quintas, basuras, etc.

La enumeración basta y sobra para probar la proposición que hemos establecido anteriormente, á saber: que en realidad el gobierno comunal estaba más restringido en los hechos que por las reglas constitucionales; y si estábamos autorizados para decir que con sujeción á estas no existía comuna, ni gobierno propiamente libre, nos parece que los casos citados comprueban que la estrechez de la ley había sido apretada por los excesos que se cometían en la práctica.

—

VIII—Vamos ahora á dar ligera noción de los alcaldes

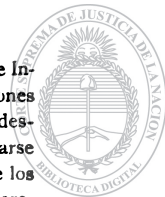


ordinarios, deteniéndonos poco en el estudio de sus funciones que han pasado á otras entidades de nuestro organismo político y que no tienen, por consiguiente, la importancia de los Cabildos, que por estar vinculados á la historia política en sus últimos años, debíamos averiguar si habían sido, en realidad, asiento de las primeras libertades argentinas.

Los alcaldes eran dos, de primero y segundo voto, y los elegía el Cabildo de entre los vecinos más capaces de la ciudad. Hemos dicho anteriormente que de los oficios municipales el único que no se vendía era el de alcalde, porque sus funciones eran esencialmente judiciales, y Solórzano repite, con Alejandro Severo, que si el juez compraba su título, sería natural que después vendiera su justicia. La elección se hacía por voto escrito y firmado. Una vez designado, el Cabildo le tomaba juramento y le entregaba la vara de su cargo.

Es para mí dudoso si el nombramiento de los alcaldes hecho por el Cabildo necesitaba la confirmación del gobernador ó del virrey; los gobernadores presidían el Cabildo y era natural que no se necesitara su confirmación; pero Solórzano dice que era necesaria la confirmación del virrey; sin embargo, en las actas capitulares que he tenido á la vista, no he encontrado antecedentes al respecto.

El alcalde debía ser natural y vecino, tomando esta última palabra en el sentido que le da la ley 6, título 10, libro 4 de la Recopilación de Indias. Se preguntaba si era necesario que los alcaldes fueran letrados, y se contestaba que la ley no lo prescribía, pero que era conveniente que lo fueran, porque la naturaleza de sus funciones requería muchas veces conocimientos jurídicos.



La ley 5, título 3, libro 5, de la Recopilación de Indias recomienda que para el ejercicio de las funciones de alcalde se prefiera á los descendientes de los descubridores y conquistadores; pudo esta ley invocarse para contestar al obispo Lúe, cuando pretendía que los españoles nacidos en la península tenían mejor derecho para gobernar la América, que los americanos.

Hevia Bolaños, en su Curia Filípica, dice que el Cabildo podía nombrar alcaldes de entre los regidores; pero, Solórzano sostiene la opinión contraria, y recuerda un antecedente histórico. En 1620, siendo virrey del Perú el Príncipe de Esquilache, la ciudad de Lima pidió permiso para nombrar alcaldes de entre sus regidores y le fue denegado; más tarde se le acordó el permiso para que designara uno sólo de los dos; pero fué porque el Cabildo hizo á la Corona un préstamo de dinero.

Los alcaldes ejercían su cargo por el término de un año y no podían ser reelectos sino después de un hueco de tres años. Esta regla parece que se ha observado regularmente. En 1589 se eligió en Buenos Aires un vecino que había sido ya alcalde el año anterior. Uno de los regidores reclamó contra este nombramiento y el gobernador lo anuló, mandando al Cabildo que respetara la regla que exigía el hueco de tres años. Sin embargo, el alcalde de primer voto don Martín de Alzaga, que desempeñó esas funciones en 1807, fué reelecto en 1808, según Sagui.

Los alcaldes eran esencialmente funcionarios judiciales y entendían en primera instancia de los asuntos civiles y criminales. Su jurisdicción llegaba hasta poder enjuiciar un alcalde al otro, en los casos de urgencia.



Los alcaldes eran miembros natos del Cabildo y lo presidían á falta de gobernador.

Reemplazaban á los gobernadores en los casos en que quedaba acéfalo el gobierno, hasta tanto fuera nombrado otro gobernador por la Corona.

Como funciones administrativas tenían, además, el derecho de visitar las pulperías, mesones y ventas, y se ocupaban de los abastos, cuando y donde faltaban los fieles ejecutores.

El puesto de alcalde era, pues, de real importancia: tenía puesto señalado en las ceremonias, su jerarquía no era inferior sino á la de los virreyes, gobernadores y oidores, y en Méjico no podían ser presos sin autorización del virrey.

[REDACTED] na. co [REDACTED] manzó á [REDACTED] los [REDACTED] podían dejar las tierras [REDACTED] librados al señorío que habían constituido [REDACTED] los adelantados y de la justicia y administración elemental de los alcaldes y de los Cabildos, que eran los únicos elementos de gobierno que habían sido proveídos, y entonces trasladaron á América la institución española de los corregidores. Corregidores llamáronse en el Perú, Alcaldes mayores en Méjico y en Buenos Aires gobernadores.

Esta institución de los gobernadores responde á los buenos propósitos de la Corona respecto del gobierno de América y de los naturales, porque se debe tener presente que, aunque las instituciones coloniales eran deficientes y aunque las prácticas establecidas por los administradores que representaban la Corona eran viciosas y hasta perversas, la intención, el deseo de los

reyes era, sin duda, ayudar y fomentar la prosperidad de estas comarcas. Desde la época de Isabel la Católica ya se señala este propósito, y todos los reyes de España, sin excepción, han manifestado el anhelo de que los pueblos americanos fueran gobernados con equidad y justicia. *¿Por qué no se daban?* *6 consecuencia*

Así, pues, cuando crearon los corregidores ó gobernadores creyeron que iban á ser en América «los ángeles custodios de los españoles y de los indios». Desgraciadamente, la realidad no correspondió al propósito de la Corona, y en ésta, como en otras muchas ocasiones, los funcionarios que ella instituyó con fines sanos fueron verdadero azote de los pueblos. Y para que no se crea que un espíritu de crítica excesiva nos induce á desnaturalizar las *noticias* del *lonial* *que:*

que: «...za que cerca el sembrado.»
Corregidores y gobernadores eran de nombramiento regio lo mismo en Méjico y en el Perú, que en el Paraguay y Río de la Plata. Debían prestar el juramento que determina la ley 7, título 2, libro 5, de la Recopilación de Indias. En él se obligan á tratar bien á los indios, á no tener ni celebrar negocios dentro de su jurisdicción, ni procurarse grangerías ni por sí, ni por interpósita persona, ni á negociar con el sueldo de sus empleados inferiores.

Los términos del juramento serían bastante indicio de la clase y naturaleza de abusos que se acostumbraba cometer. Es evidente que si dichos funcionarios no hubieran descendido á tan viles maniobras para aumentar su peculio con daño público, no se hubiera establecido en las formas solemnes de juramento la





prohibición de incurrir en esas faltas determinadas.

Casi siempre las reglas, leyes y preceptos prohibitivos que limitan la arbitrariedad de los funcionarios públicos corresponden á un precedente abusivo que se trata de prevenir para lo futuro, y más adelante hemos de encontrar la confirmación de esta verdad en las instituciones que nos rigen.

Las leyes llevaban la precaución al último extremo, y así, la ley 8, título 2, libro 5, de la Recopilación de Indias imponía la obligación de hacer inventario de los bienes que tenía el corregidor en el momento de subir al gobierno, y este inventario, que se entregaba á las Audiencias Reales, se conservaba como antecedente para cuando cesaba en el mando y se iniciaba el efecto de comprobar si la fortuna en su gobierno había crecido ó disminuido. El manejo de los intereses que

Los gobernadores estaban obligados por la ley 10, título 2, libro 5, de la Recopilación de Indias, á dar fianza para responder de todos los abusos que cometieran contra la fortuna pública y de las agresiones al derecho privado, porque una vez terminado su período y sometidos al juicio de residencia, no sólo el rey, sino todos los habitantes de la gobernación podían pedirle cuenta de sus actos. Les estaba también prohibido casarse dentro de su distrito, sin licencia, y dar oficios públicos á los miembros de su familia y á sus allegados.

La duración de los corregidores en el ejercicio de sus funciones era, según la ley 10, título 2, libro 5, de la Recopilación de Indias, de tres años, si se trataba de personas que tenían ya establecida su residencia en



América, y de cinco, cuando el nombramiento recaía en persona que residía en España. La diferencia del término se explica por las demoras de los transportes, por los mayores inconvenientes que había que vencer para trasladarse á América, gastos, etc.

Los salarios de los gobernadores eran fijados por la Corona y, además, tenían participación en ciertas rentas, como la pesca de perlas y otras.

Hemos dicho más arriba que casi siempre las prohibiciones de las legislaciones y sus limitaciones responden á necesidades que la experiencia ha relevado ó á los abusos que han cometido los encargados del poder, y precisamente podemos comprobarlo respecto de los corregidores, por una circunstancia especial.

En los primeros títulos que se [redacted] [redacted] no f[redacted] [redacted] en [redacted]

pero [redacted] entendieron el aprovechamiento de tal manera, que fue necesario suprimir la cláusula, porque en virtud de ella cometían todo género de exacciones sobre los habitantes de los distritos sometidos á su jurisdicción.

Las funciones de los corregidores están casi todas enumeradas en el libro 5 de la Recopilación de Indias.

Tenían jurisdicción civil y criminal para conocer en grado de apelación de las resoluciones de los alcaldes ordinarios, antes de la creación de las Audiencias Reales; pero la ley 14, título 2, libro 5 de la Recopilación de Indias, les prohibía usurpar la jurisdicción de los alcaldes ordinarios.

Visitaban los términos de su provincia; pero sus visitas eran tan pesadas para los pueblos por los gastos que les ocasionaban, que una ley estableció que no



debían visitarlos más de una vez durante su gobierno. En su visita administraban justicia, y sino tenían tiempo para terminar los pleitos, delegaban la jurisdicción que les era propia en los alcaldes ó Cabildos, según la naturaleza del caso.

Hemos dicho que los gobernadores ó corregidores presidían los Cabildos: más tarde presidieron las audiencias. Tenían, en general, todas las facultades de gobierno y administración de sus provincias, bajo la dirección de los virreyes, sin perjuicio de que en muchos casos prescindieran de éstos y se entendieran directamente con el consejo de Indias.

—
X.—En 1782 se dictó la ordenanza general de Intendentes del virreynato de Buenos Aires.

Esa ordenanza dividía el virreynato en ocho Intendencias: Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Mendoza, La Plata y Potosí. Las cuatro primeras tenían la misma jurisdicción real que sus obispados respectivos. La de La Paz comprendía, además, algunos otros territorios. La de Mendoza tenía bajo su jurisdicción las provincias de San Juan y San Luis. Las de La Plata y Potosí tenían entre las dos la jurisdicción del obispado de Charcas.

Los Intendentes estaban investidos de análoga autoridad á la de los gobernadores ó corregidores. Sus facultades se extendían á lo que entonces se llamaba los cuatro ramos: justicia, policía, hacienda y guerra.

El objeto de las intendencias fue dar organización uniforme á la administración del virreynato y cuidar especialmente de cuanto tocara de cerca ó de lejos á la Real Hacienda.

La Intendencia general de Buenos Aires fue supri-



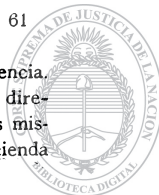
mida á causa de conflictos de atribuciones entre el Intendente y el virrey.

Decíamos que el objeto principal de la creación de las intendencias fue la administración de la Hacienda pública, á cuyo fin se organizaba una Junta Superior de la Real Hacienda, compuesta del Intendente, los dos ministros más antiguos del Tribunal de Cuentas, un asesor, el contador general del ejército (con voto informativo), y del fiscal de la Real Hacienda.

Las atribuciones de los Intendentes, con relación á la hacienda pública, eran muy vastas: salvaban el límite de lo que era propio del tesoro general y tocaban á lo peculiar de la vida comunal. Cuando nos ocupamos del gobierno de los propios y arbitrios dijimos que le habíasido arrebatada á la Comuna y, en efecto, el art. 5º. de la Ordenanza de Intendentes establece la jurisdicción de la Junta de Hacienda sobre los propios y arbitrios de la Comuna; la autoriza para examinar la inversión y distribución del producido de los propios, y respecto de los arbitrios, para mantenerlos ó suprimirlos, según lo estime conveniente, para fijar el presupuesto y determinar los gastos ordinarios y extraordinarios de los cabildos.

Si los Cabildos no cubrían sus necesidades con la suma que se les acordaba, debían recurrir al intendente para que les otorgara cantidades supletorias. Los intendentes tenían facultad para acordarles hasta veinte pesos, si se trataba de pueblos de indios, y cuarenta, si de pueblos de españoles: más allá de esta cantidad, era necesaria la autorización de la intendencia general del virreynato.

Desempeñaban también el vice patronato real en seis de las intendencias. En Buenos Aires lo ejercía el



virrey y en La Paz el presidente de la Audiencia.

Resumiendo las atribuciones de las intendencias diremos que en justicia, policía y guerra tenían las mismas atribuciones que los gobernadores, y en hacienda mayores facultades que los virreyes.

XI—Las Audiencias Reales eran las instituciones más acreditadas de la administración colonial. Verdaderos Tribunales Superiores de Justicia de la Colonia, además de la jurisdicción que les era propia, desempeñaban funciones políticas acompañando al gobernador ó virrey, en su caso, y reemplazándolos también, cuando por cualquier causa se producía vacante, mientras llegaba la provisión real.

La Audiencia de Buenos Aires fue creada el 6 de Abril de 1661 y la componían, según la ley 13, título 2, libro 15, de la Recopilación de Indias, un presidente, gobernador y capitán general, tres oidores, un fiscal, un alguacil mayor y un teniente gran canciller. No es necesario decir que estos funcionarios eran todos de nombramiento regio.

La jurisdicción de esta Audiencia fue el Río de la Plata, Paraguay y Tucumán.

La ley 13, título 2, libro 15, de la Recopilación de Indias antes citada fija de una manera clara la posición del gobernador y capitán general, presidente de la Audiencia, con relación á ella, y la transcribimos á continuación, porque la lectura de su texto será más provechosa que todas las explicaciones que pudiéramos dar. «Y es nuestra voluntad, dice, que al Gobernador y Capitán General de las dichas provincias y «Presidente de la Real Audiencia de ellas pertenezca «privativamente proveer en las cosas de gobierno, salvo

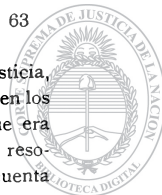
«que para mejor acierto mandamos que en los casos y cosas que se ofrecieren de gobierno y fueren de importancia el dicho gobernador las haya de tratar y trate con los oidores de la misma Audiencia para que le den su parecer *consultivamente*, y habiéndolos oído, provea lo que más convenga al servicio de Dios y al nuestro, paz y tranquilidad de aquellas Provincias y República y en todo procedan conforme á decho.»

Como se ve, esta ley establece una regla fundamental: lo que es materia de gobierno corresponde privativamente al presidente de la Audiencia, al gobernador de la provincia; pero, en lo referente á la justicia, aunque el gobernador tenía intervención formal, no podía mezclarse en el fallo de las causas.

Las facultades especiales del presidente de la Audiencia eran las siguientes: como capitán general, tenía á su cargo la defensa de la provincia y todo lo relativo al régimen militar. Podía levantar sumarios é informaciones para averiguar si los miembros de la Audiencia cumplían las ordenanzas reales en el ejercicio de sus funciones y aún en las relaciones de la vida privada, como, por ejemplo, si se habían casado, sido padrinos, etc. En estos casos levantaba información y la mandaba por la vía reservada al Consejo de Indias. Podía también, en los casos graves, como sedición ó alboroto popular, consultando con los otros oidores, prender al oidor delincuente; pero no podía destituirlo, ni desterrarlo.

Quando había duda de si un caso era de justicia ó de gobierno, cuestión importantísima, porque en el primer caso no había otra opinión que la de la Audiencia y en el segundo debía prevalecer la del presidente, gobernador ó virrey, la ley determina que la Audien-

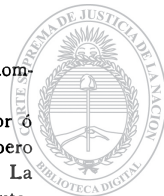




cia considerará el punto, y si cree que es de justicia, reclamará ante el virrey ó gobernador; pero dicen los autores que si éste insistía *tenazmente* en que era asunto de gobierno, la Audiencia debía acatar la resolución de su presidente, sin perjuicio de dar cuenta por la vía reservada al Consejo de Indias, para que la Corona resolviera lo que considerara más justo y conveniente.

Era también regla que no podían intervenir en los negocios de los particulares, y es muy notable la facultad que se le daba á la Audiencia para decidir los casos en que los gobernadores ó virreyes procedían invocando sus poderes de gobierno, pero que agredían el derecho privado. La persona lastimada en su derecho podía acudir á la Audiencia y ésta conocer del asunto como de un caso de justicia. Si la resolución de la Audiencia era contraria á la del virrey ó gobernador y éste insistía en que era materia de gobierno, se seguía el procedimiento que antes hemos indicado.

Las Audiencias eran Tribunal de Apelación de las resoluciones de los alcaldes en las cuestiones civiles y criminales. Conocían de las causas de patronato, cuidaban de la protección de los indios y de que sus pleitos terminaran con prontitud. Podían quejarse á la Corona de la conducta de los virreyes ó gobernadores; pero no les era lícito levantar informaciones. La diferencia gerárquica entre el gobernador y la Audiencia estaba marcada en este rasgo: los gobernadores podían denunciar los abusos cometidos por los oidores y levantar información, de tal manera que la prueba iba junta con la acusación; mientras que las Audiencias se limitaban á hacer la denuncia, sin acompañar información de ninguna naturaleza, quedando reservado al



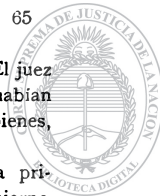
Consejo de Indias ó á la Corona el derecho de nombrar juez visitador, si lo consideraba oportuno.

Las Audiencias prestaban acuerdo al gobernador ó virrey, para que librase contra las cajas reales; pero esto sólo podían hacerlo en casos excepcionales. La libranza debía ser firmada por todos los que la autorizaban, quienes eran personalmente responsables del gasto, si no resultaba justificada su necesidad.

Las leyes españolas reglamentan de manera tan prolija el procedimiento de las Audiencias, que hasta fijaban las horas en que habían de reunirse, según las estaciones; mandaban que cada Audiencia tuviera reloj, para que sus miembros se encontrasen presentes á la hora señalada y no se retirasen antes del tiempo reglamentario, y disponían que á aquel que no concurriera á las sesiones se le quitaría el salario correspondiente á los días de inasistencia.

Los oidores eran personajes de la más alta categoría. El Señor Manuel Moreno en la biografía de su ilustre hermano, don Mariano Moreno, dice que en Chuquisaca, cuando un particular encontraba á un oidor, si iba á caballo, debía bajarse y sacarse el sombrero, y los que iban á pie estaban obligados á seguir y á acompañarle hasta su casa; de manera que, cuando un oidor volvía de paseo, las gentes iban tras de él en verdadera procesión.

Estaba prohibido á los oidores: casarse en el distrito en que ejercían sus funciones, ser padrinos, tener amistades íntimas, visitar, comerciar, tener chacras, recibir dádivas, etc.; en una palabra, no podían ejecutar actos de naturaleza alguna que los vinculara á las personas sometidas á su autoridad ó que les produjera lucro; cuando cesaban, estaban sujetos al juicio de



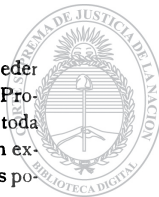
residencia que decretaba el Consejo de Indias. El juez de residencia tenía facultad para prenderlos, si habían cometido delitos privados, para secuestrar sus bienes, embarcarlos y conducirlos á España.

El virrey, como su nombre lo indica, era la primera entidad política y administrativa del gobierno colonial. Solórzano le compara con el Prefecto del Pretorio, con el Sátrapa de los persas, con el Bajá de los turcos, con los legados *ad latere* del Papa, y recuerda que los reyes le llamaban *alternos*. Estaba investido de toda la representación del poder real en América; de tal modo que, para saber hasta donde se extienden sus poderes, no hay que averiguar lo que les era lícito, sino lo que les estaba vedado. Tenían todos los poderes de la Corona, excepto aquellos que expresamente se había reservado el monarca ó que las leyes ponían fuera de su jurisdicción.

En los casos graves despachaban con el nombre y sello del rey, excepto en casos de justicia. Presidían las Audiencias y firmaban las sentencias, pero no votaban; en las causas criminales no firmaban.

Se entendía que todos sus poderes tenían por objeto la mejor administración y la prosperidad de la colonia y que para ese único fin debían de usar sus facultades.

Podían extrañar á los sediciosos, aunque fueran eclesiásticos. Extrañar no implicaba otra cosa que sacar de los límites de su jurisdicción á los individuos que perturbaban la paz. Esta prerogativa era de gran importancia cuando se trataba de eclesiásticos, porque, como no podía privarlos de su investidura canónica, no tenía otro medio que el de trasladarlos de un punto á otro para quitarles el gobierno de sus fieles en el distrito sometido á su autoridad espiritual.



Podían otorgar encomiendas de indios y conceder gracia, particularmente en los casos de rebelión. Proponían y nombraban los oficios y beneficios de toda la administración del virreinato que no estuvieran expresamente reservados por la Corona y aún éstos podían proveerlos interinamente, siempre que no fuesen oficios togados como los oidores y otros. Tenían también á su cargo el cuidado y administración de la Real Hacienda, con las limitaciones de la ordenanza de intendentes.

No podían conceder legitimaciones por rescripto. Esta atribución se la habían reservado especialmente los monarcas.

De 1625 en adelante no duraron sino tres años, lo mismo que los antiguos gobernadores; pero si su conducta era buena, la Corona los mantenía en el puesto, no nombrando la persona que debía reemplazarlos.

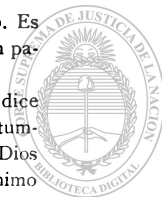
XIII—La más alta entidad del gobierno colonial era el Consejo de Indias, que fue creado por Carlos V en 1524. Hasta entonces los asuntos de América se habían tratado con el Consejo de Castilla; pero el desarrollo que en pocos años habían tomado la conquista y colonización hizo necesaria la creación de un consejo especial. El número de los consejeros era al principio de diez y siete; pero más tarde fue aumentado. Componían el Consejo de Indias ocho consejeros togados, un fiscal, dos secretarios, un teniente gran canceller, tres relatores, un escribano, cuatro contadores, un tesorero, dos solicitadores, y como personal, un cronista mayor y cosmógrafo, un catedrático de matemáticas, un iniciador de procesos, un abogado y procurador de pobres, un capellán, cuatro porteros y un alguacil.

Estos consejeros eran de nombramiento regio. Es interesante recordar las calidades que se requerían para formar parte del Consejo de Indias.

La ley 1, título 1, libro 2, de la Recopilación dice que los consejeros deben ser «aprobados en costumbre, nobleza y limpieza de linaje, temerosos de Dios y escogidos en letras y prudencia.» Y don Gerónimo Osorio, que debe haber sido eminente personaje, pues Solórzano lo llama el Cicerón portugués, determina en estas palabras las condiciones de los consejeros: «Que en cuanto á lo primero, dice, es necesario que «los consejeros reales sean dotados de grande ingenio, «instruidos en buenas artes, expertos en todas cosas «con el largo uso de ellas y versados diligentísimamente en las historias, y que no solamente huelan y «penetren con sagacidad lo que tienen presente, sino «también lo que en lo de adelante puede ser útil «á la República para conjeturarlo, prevenirlo y proveerlo.»

Esto da la noción clara de que para consejero se requería y se buscaba verdaderos hombres de gobierno, estadistas, en toda la extensión de la palabra, con la competencia que el estudio y la experiencia proporcionan.

Las facultades del Consejo de Indias eran muy amplias del punto de vista legislativo, y aunque era el supuesto que todas las leyes se habían de consultar con el rey y la ley lo dice así, en realidad el consejo de Indias dictó todas las que han regido la América. La ley á que nos acabamos de referir es la 1, título 1, libro 11, de la Recopilación, según la cual «el «Consejo de Indias tiene la jurisdicción suprema de «todas las Indias descubiertas y que se descubrie-





«ren, con facultad de ordenar, previa consulta, las le-
«yes, pragmáticas y provisiones generales y particula-
«res que por el tiempo para el bien de aquellas pro-
«vincias convinieren.»

El Consejo de Indias nombraba, previa consulta, virreyes, corregidores ó gobernadores, alcaldes mayores, oidores, intendentes, jueces visitadores y de residencia. Tenía también el ejercicio del derecho de patronato y la reglamentación superior de todo lo referente á la Hacienda Real. Formaba junta de guerra para tratar y resolver las cuestiones navales y militares, expediciones bélicas, etc., á cuyo efecto se reunían cuatro miembros del Consejo de Indias con otros cuatro del Consejo de Guerra de España; y por último, corría con todo lo referente á la conversión y buen tratamiento de los indios.

El Consejo de Indias acumulaba, además, facultades judiciales. Era tribunal de apelación del capitán general y de los Consejos de Guerra. Resolvía, como tribunal supremo, las cuestiones mixtas, es decir, aquellas que por su naturaleza eran de carácter civil, pero que correspondían á la jurisdicción militar por razón de fuero personal. Tenía jurisdicción suprema sobre todos los tribunales de América; pero era regla. no usar jurisdicción conferida á otros tribunales, sino en casos extraordinarios y muy graves. Resolvía las cuestiones sobre propiedad y posesión de las encomiendas de indios y las que versaban sobre juicios de residencia y visitación.

Solórzano dice que «en el Consejo de Indias se ha-
«bía tratado y tenido por conveniente, aunque nó
«con resolución precisa de ejecutarlo, que hubiera en
«él algunos consejeros naturales, como en los de Ara-



«gón, Italia y Portugal, donde *todos*, ó son naturales, ó han servido allí largos años.»

He aquí bosquejado á grandes rasgos lo que era el gobierno de la América. Fue todo lo que España pudo darnos en su época.

Los reyes católicos tienen la honra de haber mostrado sus buenos deseos hacia estos países, y las últimas palabras de Isabel la Católica son palabras de amor para sus súbditos de América, plegaria de protección para los indígenas. Después de los reyes católicos vienen los reyes absolutos y despóticos de la casa de Austria, y no se debía esperar que Carlos V, que suprimió las libertades comunales en España, estableciera un gobierno libre en América. No se podía esperar que el gobierno férreo y despótico de Felipe II fomentara la libertad en el nuevo mundo, ni tampoco que los príncipes degenerados que le sucedieron otorgaran al Río de la Plata franquicias que negaban á la metrópoli. Con la dinastía de la casa de Francia, con Felipe V, con Fernando VI y, sobre todo, con Carlos III, alcanzamos gobierno é instituciones más liberales; pero esa liberalidad es relativa y transitoria.

España no podía darnos más, porque el renacimiento del siglo XV no tuvo sino un destello fugitivo para España en el siglo XVIII, y la luz se apagó de nuevo bajo la administración de Carlos IV.



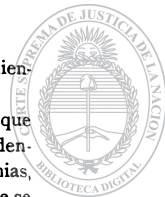
pe
de
por
cio
su
L
me
1
gra
ordi
Rea
ción
los a
Vi
sitas
que

CAPÍTULO II



SUMARIO — I. Sistema de las colonias de la América del Norte.—II. Gobiernos Provinciales.—III. Gobiernos de las Cartas.—IV. Gobiernos de los Propietarios; Pennsylvania.—V. Gobernadores—Consejos Provinciales—Asambleas—VI. Rasgos comunes y diferenciales en los tres sistemas de gobierno —VII. Proyecto de Benjamín Franklin para el gobierno general de las colonias (1753-54).—VIII. Paralelo entre las instituciones inglesas y españolas.—IX. Situación del gobierno en el norte y en el sur de América después de la emancipación.

I.—Las leyes que nos rigen son fruto de la propia experiencia y de la experiencia extraña. Nuestra nacionalidad ha sido formada con diferentes razas y nuestra organización política ha sufrido la influencia de las ideas y de los principios de gobierno de diferentes naciones. Hemos incorporado á nuestra constitución principios de derecho público universal y especialmente preceptos de gobierno tomados en la República norteamericana. Nos proponemos estudiar la constitución argentina y paralelamente, hasta donde sea posible, la constitución de los Estados Unidos, porque sólo de esa manera sabremos aplicar con acierto, más adelante, la doctrina de sus ilustres comentadores. Y por eso, después de tener noticia del gobierno colonial en el Río de la Plata, vamos á informarnos del sistema



y reglas de gobierno de la América del norte, mientras dependió de la corona inglesa.

Los historiadores y juristas están de acuerdo en que cuando los Estados Unidos declararon su independencia, los gobiernos que existían en las tres colonias, podían dividirse y agruparse en tres categorías, que se han llamado gobiernos provinciales, gobiernos de las cartas y gobiernos de los propietarios. Formaban el primer grupo las colonias de New-York, New-Hampshire, New-Jersey, Virginia, Nord Carolina, South Carolina y Georgia; se encontraban en el segundo las colonias de Connecticut, Rhode-Island y Massachussetts, y tenían gobierno de propietarios las de Pensilvania, Delaware y Maryland. Vamos á dar ligera noticia de la organización de estos tres órdenes de gobierno.

II.—Los gobiernos provinciales reposaban sobre la teoría general de que las colonias estaban bajo la completa dependencia de la Corona y sujetas á la voluntad real. Esta era la doctrina fundamental; pero en la práctica, aunque estuvieran regidas por la comisión y las instrucciones que la Corona había dado al gobernador de cada una de ellas y que podía modificar cuando creyese que era conveniente á los intereses públicos, todas ellas tenían este rasgo genérico: aseguraban la libertad civil y política de los colonos en la misma medida que esa libertad estaba asegurada para los ingleses en la madre patria; de tal manera que no se hubiera establecido regla de gobierno para la colonia, que no hubiera sido aceptada por el pueblo inglés dentro de la tradición de sus libertades y de los derechos adquiridos en la larga contienda del parlamento con la prerogativa real.



La Corona nombraba el gobernador y lo removía á voluntad. Era el gobernador la entidad ejecutiva ó activa, como la llaman algunos publicistas; su campo de acción estaba limitado por las instrucciones reales y por el consejo provincial, que también era nombrado por la Corona y que unas veces funcionaba como consejo de gobierno y otras como cuerpo colegislador. Frente al gobernador y al consejo provincial de nombramiento regio estaba la asamblea de representantes, elegida en comicio público por los terratenientes y pobladores de la colonia (*free-holders and planters*). Esta era la rama popular del gobierno y en ella residía el poder legislativo colonial, de que participaba el consejo provincial, como cámara alta, y el gobernador, con el derecho de veto y de disolución. La Asamblea de Representantes, el Consejo Provincial y el gobernador legislaban sobre todo asunto de interés local, establecían impuestos, reglamentaban el comercio, etc., subordinados teóricamente á la supremacía de la Corona y real y efectivamente á un principio superior que no podían transgredir y era: que sus ordenanzas, reglamentos ó leyes no debían, en caso alguno, ser repugnantes á las leyes y estatutos de Inglaterra, sino, por el contrario, ajustarse á ellos en cuanto fuera posible. Esta restricción tiene la más alta importancia, porque es el punto de partida de todas las libertades americanas y de la evolución histórica de su independencia.

Tenemos, pues, los gobiernos provinciales organizados así: poder ejecutivo ó activo, de nombramiento regio, con un consejo provincial de idéntico origen y una asamblea ó cámara de diputados elegida por el pueblo en comicios libres. Estas tres entidades tenían á su



cargo el gobierno propio y completo de la provincia ó colonia, y aunque teóricamente estaban subordinadas á la Corona, en realidad no dependían de ella, sino por el nombramiento de las dos primeras.

III.—Al lado de los gobiernos provinciales existían los gobiernos de las cartas. Dice Story que las cartas eran verdaderas constituciones, en virtud de las cuales cada colonia era un gran cuerpo político, con los poderes generales de gobierno en su propio territorio, aun^{que} dependiente del reino de Inglaterra.

Tenían esos instrumentos el carácter de compromiso solemne y estaban revestidos con las formalidades de las leyes supremas, por escrito y bajo el sello real. Siempre se entendió que el gobierno inglés no tenía derecho de modificar las franquicias ó privilegios consignados en ellos, y cuando, en los albores ya de la revolución (1774), el parlamento reformó la carta de Massachussetts, todas las colonias se sintieron amenazadas, y Curtis dice que fue ésta una de las causas que precipitaron la revolución.

Las cartas no eran absolutamente idénticas para todas las colonias que tenían esta forma de gobierno, aunque en lo fundamental fueron similares.

La de Massachussetts, otorgada en 1691 bajo el reinado de Guillermo y de María, establecía el derecho real de nombrar el gobernador, teniente gobernador y secretarios provinciales, acordándole al gobernador la facultad de votar las leyes que sancionara la legislatura local y la prerrogativa de disolución. Establecía también un consejo compuesto de veinte miembros nombrados por la asamblea ó cámara de diputados, y este consejo formaba la verdadera cámara alta de la



colonia. En el nombramiento de los miembros de la cámara alta intervenía también el gobernador, pero en forma negativa, vetando los candidatos designados por la cámara baja, si no los consideraba con las calidades requeridas para el buen desempeño del puesto.

La cámara baja tenía facultades legislativas de orden general y cierto número de las llamadas ejecutivas, como proponer ó designar los miembros de la cámara alta.

La reforma de 1774 á que nos hemos referido modificaba la rama ejecutiva fundamentalmente y en parte la judicial, para dar mayor eficacia á las leyes que votara el parlamento: despojaba á la asamblea de la prerogativa que se le había acordado para designar los consejeros ó miembros de la cámara alta y atribuía su nombramiento y el de los magistrados á la Corona.

Rhode-Island y Connecticut poseían cartas más adelantadas que la de Massachussetts. En estas dos colonias el gobernador, la cámara alta y la cámara baja eran elegidos directamente por el pueblo, es decir, por los terratenientes y pobladores de la colonia, que se reunían en día dado y ejercitaban su derecho electoral al amparo de las leyes y de las buenas costumbres que habían traído de la madre patria.

Así, cuando se declaró la independencia, en 1776, la legislatura, el gobierno de Connecticut pudo hacer la siguiente declaración, que está incluida en las cartas y constituciones de los estados del norte de América:

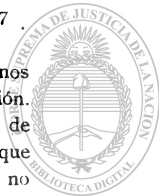


ACTA QUE CONTIENE UNA ABSTRACTA DECLARACIÓN
DE LOS DERECHOS Y PRIVILEGIOS DEL PUEBLO DE
CONNECTICUT:

«El pueblo de este Estado, siendo, por la provi-
«dencia de Dios, libre é independiente, tiene el exclu-
«sivo derecho de gobernarse á sí mismo, como un
«Estado libre, soberano é independiente; y habiendo
«recibido de sus antecesores una libre y excelente
«constitución de gobierno, por cuanto la legislatura
«depende de la elección anual y libre del pueblo, tie-
«ne en ella la mejor garantía de conservación de sus
«derechos y libertades civiles y religiosas.»

«Se establece y declara por el Gobernador, Con-
«sejo y Cámara de Representantes, reunidos en corte
«general: Que la antigua forma de gobierno civil
«contenida en la carta de Carlos II, rey de Ingla-
«terra (1662), y adoptada por el pueblo de este Estado,
«será y continuará siendo la constitución civil del Es-
«tado bajo la sola autoridad del pueblo, independiente
«de todo rey y príncipe. Y que esta República es y
«será por siempre un Estado libre, soberano é inde-
«pendiente, con el nombre de Estado de Connec-
«ticut.»

Difícilmente se encontrará demostración más elo-
cuente del gobierno libre de las colonias. En aquellos
días de altas aspiraciones, de anhelos ardientes por
asegurar los derechos y libertades amenazadas, el pue-
blo de Connecticut declara que no necesita otras ga-
rantías, ni mayores libertades que las que su carta
contiene. ¿Cuál de los pueblos de la América Españ-
la habría podido decir otro tanto?



IV—Los gobiernos de propietarios eran gobiernos *qui generis*, y su estudio reclama señalada atención. Estos gobiernos se habían constituido en virtud de concesiones reales hechas á una ó más personas que se llamaban propietarios, á los que se entregaba, no sólo el territorio, para que lo poblasen y cultivasen, sino también todos ó la mayor parte de los poderes del gobierno local.

Esta forma de gobierno tuvo origen en el derecho feudal.

El gobierno feudal estaba constituido sobre el dominio de la tierra. El rey ó señor de grandes vasallos tenía dominio eminente sobre los territorios sometidos á su jurisdicción y, ejercitándolo, traspasaba el dominio útil de la tierra á otra persona, en quien delegaba sus poderes de gobierno, exigiéndole, en cambio, fidelidad y vasallaje. El feudo comprendía la tierra y sus habitantes.

La Corona de Inglaterra estableció el gobierno de propietarios sobre esa base, transfiriendo al propietario el derecho de gobernar y administrar la colonia, con el reconocimiento de su vasallaje á la soberanía de la Corona Inglesa.

Para hacer el estudio de los gobiernos de propietarios tomaremos como modelo la concesión de Pennsylvania. Esta concesión fue otorgada por Carlos II en 1681 á Guillermo Penn.

En la concesión de Pennsylvania se establecía el principio ya indicado de que el propietario tendría derecho de administración y de gobierno sobre todas las tierras que se le concedieran, pero respetando la soberanía del rey y prometiéndole fidelidad y lealtad. Caracteriza el rasgo feudal el tributo que se obligaba á



pagar al rey de Inglaterra, en prueba de vasallaje; debía entregarle dos cueros de castor en el castillo de Windsor el primero de Enero de cada año, tributo simbólico, pero reconocimiento pleno de la soberanía suprema que residía en el rey de Inglaterra.

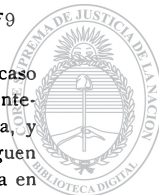
Además del tributo simbólico, tenía obligación de darle la quinta parte del oro y plata que encontrara.

Este tributo se llamaba *socage* en derecho feudal. Era libre *socage* cuando se pagaba en cosa determinada, y consistía en un servicio honorable que no hacía desmerecer á la persona que lo rendía; era *socage vil* cuando se pagaba en servicios de domesticidad ó de otro orden, que disminuían la dignidad personal.

El propietario tenía el derecho de gobernar la colonia ó de designar la persona que había de gobernarla. Podía dictar leyes y fijar los impuestos para atender los gastos públicos, *con el consejo y la aprobación de los hombres libres de la colonia ó de sus diputados*, y designaba los magistrados. Podía usar del derecho de gracia con homicidio alevoso ó de traición: en este caso lo único que podía hacer era suspender la ejecución de la sentencia y consultar al rey.

El propietario podía dictar leyes, pero éstas debían ser tales, que se «armonicen con la razón y que no «sean repugnantes ó contrarias á las leyes, estatutos «y derechos de este nuestro reino de Inglaterra y «que estén de acuerdo con ellos en cuanto sea posible.»

Dice la carta de Pennsylvania que pudiera suceder que en ciertos momentos no hubiera tiempo de convocar á los hombres libres de la colonia para el ejer-



cicio de las facultades legislativas y que en tal caso era lícito al gobernador dictar ordenanzas, manteniendo la limitación á que hemos hecho referencia, y agrega que estas ordenanzas «no restrinjan, recarguen «ó destruyan el derecho ó intereses de una persona en «relación á su vida, miembros, tenencia de la tierra, «bienes ó efectos.» De manera que la libertad civil del colono no caía bajo la potestad del propietario.

Las leyes dictadas por la autoridad colonial, por la cámara de diputados, que supone la concesión, y promulgadas por el gobernador, tenían inmediata ejecución, pero debían ser sometidas á la aprobación de la Corona dentro del plazo de cinco años, y la Corona tenía seis meses para desaprobarlas, si eran «inconsistentes con la soberanía ó prerogativa real, ó «contrarias á la lealtad y fidelidad juradas.» Como se comprende, esta limitación corresponde al sistema feudal.

Debemos suponer que esa prescripción era una fórmula para mantener la supremacía de la Corona y el vasallaje, lealtad y fidelidad de la colonia.

La concesión consagra el derecho de comerciar libremente con las otras colonias y la madre patria, de tal manera que, sin conexiones políticas entre sí, todas las colonias estaban vinculadas por el comercio, al revés de lo que pasaba en la América del sur, donde el comercio estuvo prohibido durante más de un siglo entre pueblos que formaban parte del mismo virreynato. Pero, aún con relación al comercio con el extranjero, había cierta liberalidad, porque los productos de las colonias llevados á Inglaterra, después de un año de permanencia, podían ser vendidos en el extranjero.



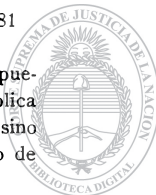
El propietario, vasallo de la Corona inglesa, no podía mantener relaciones de ningún género con los gobiernos extranjeros.

Como consecuencia de la distancia y para las necesidades de vida propia, el rey acordó á la colonia el derecho de tener armas y ejército, para defenderse del enemigo extranjero y de los indios.

Con tales condiciones se le entregó á Guillermo Penn el territorio donde se fundó Pennsylvania. Penn, á su turno, dictó una especie de constitución para el gobierno de la colonia. La redactó en Inglaterra en 1682, en concepto de que fuera aceptada y jurada en el territorio americano por las entidades jurídicas y políticas que constituía y por los habitantes que formaran el primer núcleo de población. Y así sucedió, en efecto, porque en 1683 fue jurada y firmada por trece consejeros, cuarenta y tres diputados y cuatro de los pobladores que aceptaron, á nombre de los demás, los compromisos del propietario, obligándose á respetarla y hacerla cumplir.

Este documento tiene como prefacio una exposición de ideas políticas más bien doctrinaria que imperativa. Entre sus principios hay una declaración que merece ser recordada. «Any government is free «to the people under it, where the laws rule and the «people are a perty to those laws» (todo gobierno es libre para el pueblo que se encuentra bajo él, si las leyes tienen imperio y si el pueblo tiene participación en la sanción de las leyes.)

La ciencia política ha confirmado después que, en efecto, todo gobierno puede rendir beneficio á la humanidad y asegurar la libertad del hombre, si las leyes reglan las relaciones de gobernantes y goberna-



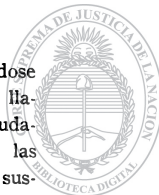
dos y si el poder de hacer las leyes reside en el pueblo. Dentro de esta regla cabe, no sólo la república democrática representativa de los Estados Unidos, sino también el gobierno monárquico representativo de la Gran Bretaña.

—

V—Penn distribuyó los poderes del gobierno en tres departamentos: el ejecutivo, desempeñado por el gobernador, que debía ser él mismo ó la persona que él designara; el legislativo, que estaba á cargo de un consejo provincial ó cámara alta, y de una asamblea ó cámara baja, elegidas popularmente, y el judicial, que lo constituían cortes y magistrados designados por el gobernador, de acuerdo con el consejo. El consejo se renovaba por terceras parte cada año y la asamblea íntegramente; pero el primer año debían formar parte de ésta todos los hombres libres de la colonia.

«El consejo provincial, dice Penn, debe ser designado por los pobladores y terratenientes de la colonia, eligiéndolos entre los hombres de mayor virtud, «sabiduría y habilidad.» Esos eran los únicos requisitos que se exigían para el desempeño de las altas funciones del gobierno de la colonia, y el acierto de la designación quedaba enteramente librado al pueblo.

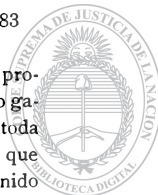
Las funciones de este cuerpo, que presidía el gobernador con triple voto, eran las siguientes: preparar las leyes que la vida colonial reclamara y publicarlas durante treinta días, antes de la reunión de la asamblea, en los sitios públicos de la colonia, para que todos los habitantes tuvieran idea exacta de las reformas que se proyectaban en la legislación. De acuerdo con el gobernador organizaba las cortes y tribunales de justi-



cia y desempeñaba funciones ejecutivas, dividiéndose en cuatro secciones. La primera sección, que era llamada de fundación, corría con la fundación de ciudades y villas, apertura de caminos, etc., y resolvía las cuestiones que con motivo de tal población se suscitaban. La segunda estaba encargada de todo lo referente al comercio y á la hacienda pública. La tercera tenía bajo su cuidado la justicia y seguridad y, por fin, la cuarta estaba encargada de velar por la educación, las buenas costumbres y las artes. El consejo ó sus diversas secciones debían, además, entenderse, para la sanción de las leyes, con la asamblea de diputados, cuyas funciones vamos á conocer.

La asamblea se reunía anualmente durante ocho días para que los diputados conversaran y cambiaran ideas sobre las necesidades é intereses de la colonia, y durante esos ocho días sugerían á las comisiones del consejo provincial las reformas que reclamaban las leyes existentes ó las que el consejo proyectaba y había publicado en la forma ante dicha. El noveno día se reunía la asamblea bajo la presidencia del gobernador, quien exponía el motivo de las leyes, de los reglamentos que el consejo había proyectado ó de las reformas que pedían los diputados. En seguida la asamblea general decidía por dos tercios de votos.

Como anexo á la constitución y carta de Pensilvania, el fundador agregó una serie de preceptos, que llamó leyes, que rigieron la vida política colonial desde el primer momento. Entre esos preceptos aparece la regla que el derecho parlamentario ha consagrado después en todos los países de gobierno representativo, á saber, que «el consejo provincial y la «asamblea, respectivamente, será el único juez de la



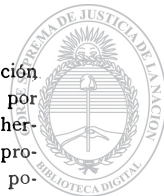
«regularidad ó irregularidad de la elección de sus propios miembros»; y otra, más fundamental como garantía de las libertades públicas, según la cual «toda «contribución debía fundarse en ley», agregando que quien cobrase contribuciones ilegales sería tenido por «enemigo público y traidor de las libertades del pueblo». Apesar del énfasis, esta no era vana declaración: cincuenta años antes Hampden había resistido el impuesto del *Ship money*, porque no lo había votado el parlamento, y ese había sido punto de partida de la revolución que le costó la cabeza á Carlos I. ⁽¹⁾

También fijaba como regla que los procedimientos de los tribunales fueran en lengua inglesa y en forma ordinaria y sencilla, para que todo el mundo pudiera entenderlos y para que la justicia se administrara con rapidez.

¡Cuánto habrían adelantado nuestras prácticas judiciales si hubiéramos tenido ese punto de partida, en vez de la enseñanza de los juristas, que tan buenos discípulos han dejado!

Otra de esas reglas ó leyes disponía que la justicia, en lo civil y criminal, debía ser desempeñada por jurados. Otra establecía el principio de la excarcelación bajo fianza, prescribiendo que ésta no debía ser excesiva, para que no quedara frustrado el principio.

Otra recomendaba que se fomentaran todos los matrimonios que no estuvieran prohibidos por la ley de Dios.



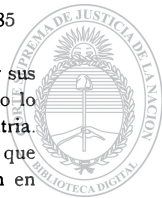
Otra establecía el registro civil para la inscripción de los matrimonios, nacimientos y defunciones, y por último, consagraba la libertad religiosa en estas hermosas palabras: «Toda persona que viva en esta provincia y que confiese y reconozca que el Dios poderoso y eterno es el creador, supremo señor y director del universo, y que se entienda obligado en conciencia á vivir pacífica y justamente en la sociedad civil, no podrá ser molestado ni perjudicado en manera alguna por sus opiniones religiosas ó prácticas en materia de fe ó de culto, ni será obligado, en ningún tiempo, á frecuentar ni mantener ningún culto, lugar, ni ministro religioso.»

Era la carta de Guillermo Penn una de las dos que subsistían en el momento de la revolución, y la hemos analizado para dar idea exacta de lo que fue en aquellos tiempos *el gobierno de los propietarios*, ya que por su fecha y por su carácter feudal podía considerarse como una de las más atrasadas. Guillermo Penn amplió y modificó su constitución en 1696 y 1701.

—

VI—Las colonias entre sí y las tres clases de gobierno que hemos estudiado tenían muchos rasgos comunes que en momentos y en circunstancias dadas debían ayudar la obra de la organización nacional.

Desde luego, los pobladores de las colonias habían sido, casi en su totalidad, ingleses que en esa época constituían ya una raza con tipo formado y fisonomía propia: hablaban todos la misma lengua, tenían los mismos hábitos políticos y sociales, y la divergencia engendrada por el libre examen en materia religiosa no tocaba la fe cristiana, cuya doctrina evangélica era profesada por todos.



Además, estaban vinculadas por el comercio, y sus relaciones civiles eran igualmente regidas en todo lo fundamental por el *common law* de la madre patria.

Era doctrina inglesa, incorporada al *common law*, que siempre que los súbditos británicos se establecían en tierras desiertas, se entendía que llevaban consigo el cuerpo de legislación de la madre patria, legislación escrita y legislación común, en cuanto fuera aplicable á la nueva situación en que se encontraban. La razón y fundamento de esta regla eran que el pueblo inglés había alcanzado con esfuerzo sus libertades, y no podía admitir que los ciudadanos que se trasladaran á tierras colonizables perdieran las prerogativas y privilegios de que gozaban en la patria, para volver al estado de naturaleza y ensayar una nueva organización social.

Era diferente la doctrina, por el contrario, cuando se trataba de territorios cedidos ó conquistados; entonces se entendía que la Inglaterra, cesionaria ó conquistadora, tenía el derecho de modificar el cuerpo de legislación que regía en los pueblos cedidos ó conquistados; pero que mientras no lo hacía, las poblaciones cedidas ó conquistadas continuaban bajo su legislación primitiva. Conviene tener presente esta distinción, porque cuando comenzaron las divergencias entre las colonias americanas y la Corona Inglesa, los jurisconsultos de la Corona pretendían que las colonias no tenían los privilegios del *common law*, y sostenían que les era aplicable la doctrina de las tierras cedidas ó conquistadas.

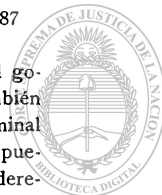
Así lo enseñaba Blackstone; pero los jurisconsultos norte-americanos rechazaron semejante pretensión y sostuvieron las prerogativas y privilegios del *common*



law, no sólo porque la Inglaterra invocaba el derecho del descubrimiento como base de su dominio y, por consiguiente, consideraba la América tierra desierta, sino también porque en todas y cada una de las cartas, en las concesiones, en las instrucciones dadas á los gobernadores, se había salvado este derecho primordial de los súbditos ingleses y se había declarado que los colonos, sus hijos y los que con ellos fueran á habitar los nuevos establecimientos tendrían los derechos y privilegios que correspondían al nativo inglés en la tierra de su origen.

La única excepción de esta regla era la carta de Pennsylvania; pero en esta misma concesión se establecía de una manera explícita que la leyes que dictara el gobierno local no podrían ser repugnantes á las leyes inglesas, de que formaba parte principal el *common law* y, por consiguiente, el *common law* estaba implícitamente comprendido en ella.

El gobierno de todas las colonias, en el momento de su independencia (1776), era, si no idéntico, muy semejante. Todas habían dividido el gobierno en tres departamentos: ejecutivo, legislativo y judicial. En todas intervenía el pueblo para la discusión y sanción de las leyes. En algunas concurría á la elección de las dos cámaras y aún del gobernador; en otras intervenía solamente para la designación de los miembros de la cámara baja ó de diputados; pero en todas estaba consagrado su derecho para intervenir en el gobierno de los propios intereses. Todas tenían facultad amplia de legislación local, y aún cuando algunas estuvieran subordinadas á la restricción teórica de que las leyes que sancionaran debían ser sometidas á la aprobación de la Corona, en el hecho, hasta los últi-



mos tiempos, la Corona no había entorpecido el gobierno local de sus provincias. Gozaban también de la administración de justicia en lo civil y criminal por medio de jurados, institución que para los pueblos de raza sajona es base y garantía de los derechos civiles y de las libertades políticas.

Estos eran los caracteres comunes, las fuerzas que concurrieron para realizar la organización nacional. Ahora veremos las peculiaridades, las fuerzas que propendían á la vida autonómica é independiente de cada colonia.

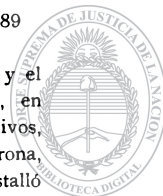
No es necesario insistir en lo que ya hemos apuntado. El derecho común inglés era patrimonio de las trece colonias; pero en cada una de ellas se había formado un derecho común, de carácter esencialmente local, con las nuevas costumbres adquiridas bajo el imperio de las ocurrencias y necesidades de una nueva vida. El *common law* no era, pues, idéntico en las diversas provincias. Eran también diversas las sectas religiosas que predominaban en ellas, aún cuando en ninguna faltara tolerancia ó respeto para los disidentes. La organización de cada gobierno conservaba la señal de su origen. El gobernador y el consejo eran nombrados por la Corona en los gobiernos provinciales; el propietario ó sus herederos tenían parte principal en la administración de los que llevaban ese nombre, y en los otros, gobernador y consejo eran nombrados por el pueblo en comicio libre, como los diputados. Pero estas diferencias no son sino de forma; lo fundamental es que á cada gobierno local correspondía el exclusivo poder de legislación, la exclusiva jurisdicción dentro de su territorio. En consecuencia, las leyes dictadas en una de las colonias no



tenían imperio en las demás; las sentencias de los tribunales no se aplicaban más allá de su jurisdicción, y la tendencia particularista se desenvolvía de acuerdo con los intereses de cada localidad.

VII—Generalmente se olvida un antecedente de la vida colonial de los Estados Unidos, que aclara mucho este concepto. Nos referimos al ensayo de gobierno general que se intentó en 1753 y 54.

El departamento de comercio de Inglaterra (Board of Trade) envió instrucciones al gobernador de New York para que celebrara un tratado de amistad y de comercio con las seis naciones indias que poblaban las tierras inmediatas, é indicó á los gobernadores de las otras colonias que concurrieran á la reunión y procuraran acordar las bases de un gobierno general, para defenderse de las tribus indias y de los franceses. La convención se reunió en 1754 con asistencia de veinte y cinco comisionados de las colonias de New York, New Hampshire, Massachussetts, Rhode Island, Connecticut, Maryland y Pennsylvania, y sancionaron un plan de gobierno general, proyectado por Benjamin Franklin, que consistía en la creación de un presidente ó gobernador general de todas las colonias, nombrado por la Corona, y en un gran consejo de carácter federal, designando un miembro las colonias de menor importancia y dos ó más las de importancia mayor. Para el sostenimiento de este gobierno se creaba una tesorería general con derecho para percibir cierto impuesto sobre los consumos. Los poderes y obligaciones se referían especialmente á la defensa común contra ataques externos. Ese plan embrionario y simple de gobierno fue rechazado por todas las



legislaturas locales ante las cuales se presentó, y el departamento de comercio de Inglaterra creyó, en vista de la actitud de las colonias ó por otros motivos, que no debía someterlo á la aprobación de la Corona, y la idea no tuvo mayor consecuencia. Cuando estalló la guerra, Franklin lamentaba que su pensamiento no hubiera sido aceptado, porque creía que sobre esa base se hubieran evitado los desgarramientos entre las colonias y la madre patria. Pero los historiadores americanos piensan, con razón, que Franklin estaba equivocado y que no debe lamentarse el fracaso de su pensamiento, porque si hubiera triunfado, los Estados Unidos, probablemente, no se habrían constituido como nación independiente y no ofrecerían al mundo el ejemplo de una democracia representativa que asegura el bienestar de cincuenta millones de hombres.

—

VIII—Conocemos ya en detalle las instituciones coloniales del norte y del sur; vamos á ensayar la síntesis, por medio de un rápido paralelo de la vida política de uno y otro extremo de América, en el momento de su respectiva independencia. La oposición fundamental entre los dos sistemas de colonización y, por consecuencia, la lógica diferencia de sus resultados, aparecerán con mayor relieve si comparamos la organización del gobierno, rama por rama; y así lo haremos, para sacar en seguida el concepto general de sus rasgos diferenciales.

Ocupémonos primero del Poder Ejecutivo. El gobernador nombrado por la Corona, por el propietario ó por el pueblo era, en el norte, un funcionario público, con poderes limitados por sus instrucciones ó por las cartas. A su lado se levantaba el Consejo pro-



vincial, que participaba con él de la administración y no dejaba terreno libre para la arbitrariedad, sino en los detalles del gobierno; á su frente tenía la asamblea de los diputados del pueblo, que lo subordinaba con todos los poderes de la legislación local. Esta asamblea de diputados representaba los mismos intereses que la cámara de los comunes en Inglaterra y se apropiaba su tradición. Se debe recordar que á fines del siglo XVII, cuando se asentó la colonización del norte, la cámara de los comunes ya era un poder eficiente para contrapesar las otras ramas del gobierno y para contener las arbitrariedades que la Corona intentó bajo el manto de la prerogativa regia. Los comunes habían resistido primero y agredido después, llevando la lucha á sus últimos extremos. Las cabezas de Strafford y de Carlos I habían caído en el cadalso, y Jacobo II la había salvado huyendo del reino y perdiendo la Corona. Con esa enseñanza de la madre patria fueron á la América del norte los primeros colonizadores, y es sabido que precisamente pertenecían á las ideas políticas más avanzadas. Su asamblea de diputados era, pues, una institución con autoridad real, y frente á ella ningún gobernador habría osado caer en los excesos que el poder discrecional ocasiona.

Por el contrario, los gobernadores se reconocían subordinados á las legislaturas, aún cuando tuvieran la facultad de disolverlas ó prorogarlas, porque en la legislatura respetaban al pueblo de la colonia. La legislatura, además, enfrenaba al gobernador con el derecho de investigación administrativa y de manifestación de opiniones, que á nadie se le ocurría discutir, porque ese era el derecho nacional y porque



sin él los cuerpos deliberantes, mutilados, no habrían podido llenar los fines de su institución.

Los gobernadores estaban también contenidos por la opinión pública, fuerza que ha existido en todo momento, aún cuando le hayan faltado medios adecuados de expresión. Sin duda que no tendría entonces la eficacia que ha adquirido después por medio de la prensa; pero como existía el cuerpo deliberante y legislativo y en él se levantaba la tribuna libre de tradición inglesa, allí podía manifestarse la opinión pública y hacer efectiva, por lo menos, la responsabilidad moral del funcionario.

No escapaban tampoco á la responsabilidad legal los gobernadores cuyo nombramiento y remoción dependió de la Corona Inglesa, porque en Inglaterra estaba consagrada la tradición de la responsabilidad de los funcionarios públicos que extralimitaban los poderes de su cargo, y no había obstáculo serio para que el pueblo pudiera formular y hacer llegar sus reclamaciones al trono, porque la relativa proximidad de la Gran Bretaña con la parte norte de nuestro continente y la actividad del comercio colonial inglés facilitaban las comunicaciones.

Opongamos ahora al Poder Ejecutivo de una colonia inglesa, ponderado y limitado, según se ha visto, el mismo Poder en las colonias del Río de la Plata, y quizá vamos á encontrar el punto de partida de los gobiernos fuertes y personales de nuestra historia. El Poder Ejecutivo de la colonia española era desempeñado por el virrey, que, como representante de un rey absoluto, estaba investido de facultades omnímodas, según el propio concepto: su autoridad no tenía limitación ni contrapeso, sino la eventual y re-



mota del juicio de residencia, que dependía enteramente de la Corona. Solórzano estaba en lo cierto cuando lo equiparaba al Sátrapa de los persas ó al Bajá de los turcos.

No hay en la organización sud-americana entidad alguna que limite el poder del virrey y que, en su caso, pueda amparar el derecho individual ó las libertades colectivas. Ya sabemos á lo que estaba reducido el poder de los cabildos y cómo se había limitado su esfera de acción. La audiencia era una corporación respetable, alto tribunal de justicia, y sus oidores gozaban de preeminencias excepcionales; pero hemos visto que solamente tenía voz en los asuntos de gobierno, cuando el virrey la consultaba, y que si éste lastimaba derechos privados y motivaba reclamos ante la Audiencia, podía declarar el caso de justicia y no de gobierno; pero que si el virrey insistía *tenazmente*, según la expresión de Solórzano, debía someterse y acatar la resolución del virrey, con el recurso de reclamar ante el Supremo Consejo de Indias residente en España.

La opinión pública no tenía medio alguno de expresión en la América española: no había prensa, ni tribuna. Sus manifestaciones, reducidas á la crítica casera y de vecindad, no era freno para el poder público, y si la historia del virreynato no se señala por abusos sistemáticos de autoridad, se debe, nó á las instituciones, sino á la índole personal de los virreyes que nos tocaron en suerte y á la quietud de la vida colonial.

Existía el derecho de queja ante el Supremo Consejo de las Indias; pero se comprende sin esfuerzo que ese era un recurso puramente nominal para el dere-



cho privado. A triple distancia de la metrópoli que la América del Norte, las comunicaciones eran tardías y difíciles, aún después de declarado el comercio libre. La navegación entre nuestro puerto y los de España estaba expuesta á peligros de corsarios que hacían la guerra por cuenta de su bandera y en beneficio propio; y cuando el poder naval de la Metrópoli se sumergió en la batalla de Trafalgar, los riesgos se centuplicaron. La primera dificultad de toda reclamación era que llegara á su destino; después aparecían las que son peculiares á la tramitación de asuntos lejanos, que no tocan á los que deben decidirlos. De modo que, en definitiva, el poder omnímodo del virrey queda en pie y es su autoridad ilimitada la que oponemos á la del Poder Ejecutivo de las colonias inglesas.

Veamos ahora el departamento judicial. La justicia Norte Americana estaba en manos del pueblo. Los jueces eran los hombres buenos, vecinos del lugar, que aplicaban las leyes según su ciencia y conciencia, siguiendo la tradición inglesa modificada por las circunstancias locales, en tanto que la justicia de las colonias españolas era la justicia de hombres de derecho, de competencia técnica, extraña al pueblo, y lo que es más, desempeñada por magistrados que, á excepción de los alcaldes, venían de la Metrópoli; y por un concepto erróneo, aunque bien intencionado, se mantenía invariablemente la regla de que el juez debía ser y mantenerse extraño en su jurisdicción, por cuyo motivo le estaba prohibido contraer matrimonio, ser padrino ó estrechar relaciones sociales. No cabe duda que el propósito de esta prescripción era mantener al juez en completa independencia de las perso-



nas sometidas á su jurisdicción, para que le fuera más fácil aplicar la ley con imparcialidad, desde que no le movieran afecciones personales; pero se desconocía del modo más absoluto la naturaleza humana, suponiendo que era posible mantener la vida de un hombre libre, agena á las influencias que le rodeaban, y con aquel precepto lo único que se conseguía era que el juez no tuviera con el país otra vinculación que la de sus intereses.

Afortunadamente, no hemos tenido que lamentar en esta rama de administración pública los abusos que su sistema autorizaba, porque los oidores fueron generalmente personas honorables y porque siendo la audiencia un cuerpo colegiado era más difícil la arbitrariedad. Sin embargo, en la vida del Dr. Mariano Moreno, escrita por su hermano, se refiere un hecho que demuestra que, á pesar de la bondad relativa de esta parte de la administración, no podía equipararse, ni de lejos, con la buena justicia norte-americana.

Cuenta Don Manuel Moreno que su ilustre hermano defendió á un comerciante americano, honorabilísimo, hombre de fortuna y de posición social distinguida, que por su mala ventura compró en remate una propiedad que interesaba á algunas de las personas influyentes en la administración pública. Cuando tuvo lugar la primera invasión inglesa este caballero, que litigaba la posesión de la propiedad que había comprado, entró al fuerte, habló con el general Berresford, tal vez sobre el mismo asunto, y esto bastó para que, restablecida la autoridad española, se le confiscaran sus bienes y se le condenara á diez años de destierro en las Islas de Juan Fernández. Tres años y medio pasó en la cárcel, de donde salió después de la revo-



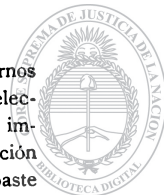
lución de 1810. Dice Moreno que cuando se le fue a buscar al calabozo estaba desnudo y casi comido por las sabandijas. Este hombre pudo decir, como Cicerón, que la causa de su desgracia era su hermosa villa de Tusculum.

Veamos ahora el poder legislativo. En las colonias de la América del Norte había un poder legislativo local completo para todos sus fines, con facultad de dictar leyes, ordenanzas y estatutos para el mejor gobierno de la colonia, con poder para establecer impuestos y contribuciones que debían aplicarse y se aplicaban en beneficio de ella misma.

Es muy simple en este caso el paralelo con las colonias españolas. En éstas no existía poder legislativo de ninguna naturaleza, salvo el de dictar ordenanzas por medio de bandos, que residía en el virrey, ó el derecho reducido que se había dejado á los cabildos para reglamentar los abastos y la iluminación de las calles.

En las colonias del norte existía un sistema electoral que, si no es la última palabra de la ciencia y de la experiencia en nuestra época, era la última palabra de la ciencia y de la experiencia humana en la época á que nos referimos.

Hemos visto que el derecho electoral residía en los terratenientes y pobladores de la colonia y que este derecho se ejercitaba con garantías de pureza y de libertad, porque era privilegio de un pueblo educado en la buena escuela del gobierno libre; hemos visto también que los cuerpos que emanaban del voto popular eran los jueces únicos de la legalidad ó validez de la elección de sus miembros. ¿Qué más se podía pedir? No se podía aspirar en aquella



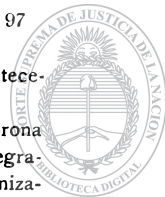
época á las franquicias que los pueblo modernos han alcanzado en virtud de los cuales el derecho electoral se ha extendido á todo el que, si no paga impuestos, paga la contribución de sangre. Tal noción no existía en los tiempos de que nos ocupamos, y baste decir que el sistema electoral norte-americano era superior, bajo todo punto de vista, al sistema electoral que rigió en Inglaterra hasta 1832.

En Inglaterra el derecho electoral se había cimentado sobre la propiedad territorial, excluyendo á los extranjeros; después se había concentrado poco á poco en manos de los grandes propietarios; del derecho electoral radicado en la tierra había surgido la institución que en la historia parlamentaria inglesa se conoce con el nombre de burgos podridos. Eran burgos que en un principio enviaban sus representantes al parlamento: el derecho electoral residía en un cierto número de personas; pero más tarde la propiedad se había acumulado en pocas manos, y el derecho anexo de enviar representación al parlamento había pasado á un grupo limitadísimo, muchas veces á una sola persona.

Esta situación legal subsistió en Inglaterra hasta 1832, y por consiguiente, puede afirmarse de una manera acertiva, que el derecho electoral norte-americano era superior al del mismo pueblo inglés.

En las colonias del Río de la Plata no se conocía sistema electoral de ninguna especie, porque no había cuerpos electivos.

IX—La situación en que quedan las colonias del norte y del sur de la América cuando cortan los vínculos que las unían con su respectiva Metrópoli y se



declaran independientes corresponde á esos antecedentes.

En el norte desapareció la autoridad de la corona inglesa; pero el gobierno quedó constituido íntegramente con su asiento en el pueblo, con su organización propia y adecuada para todas las funciones que le están atribuidas. Existían el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y de ese modo se comprende que Connecticut declarase, después de la independencia, que iba á seguir regido por la carta de Carlos II, y que Rhode Island haya conservado su carta de la misma época de Carlos II hasta 1842.

Las colonias españolas se encontraron en diversa y triste situación. Desconocimos la autoridad de la regencia, depusimos al virrey y nos quedamos sin poder ejecutivo; no teníamos poder legislativo, ni conocíamos sistema electoral alguno para constituirlo, de modo que, suprimido el sistema colonial, no teníamos medios adecuados para reemplazarlo ordenadamente.

Este es el origen de la forma tumultuaria de nuestra revolución, y allí comienzan las vicisitudes que no debían concluir sino medio siglo después, cuando todos los pueblos argentinos juraron la constitución bajo cuyo imperio vivimos.

Y sin embargo, el aforismo político de Spencer se cumple al pie de la letra: no hay sistema de gobierno, por malo que sea, que no haya realizado algún bien, ni tan bueno, que no haya producido algún mal. Los Estados Unidos de América han gastado tesoros y han derramado sangre preciosa un siglo después de su independencia para resolver el problema que sus antecedentes coloniales dejaron incierto; para de-



cidir si las estrellas de su bandera representaban una constelación del cielo nacional ó entidades que podían á voluntad fragmentar la república y dispersar sus elementos de civilización en los vastos territorios; mientras que el centralismo colonial sud-americano, con sus opresiones y sus estrecheces, dejaba en el Río de Plata el sentimiento vivo y profundo de la unidad nacional, sentimiento que se manifiesta desde la primera hora de la revolución, que asegura la independencia, que se salva de la anarquía, que persiste bajo la dictadura, que habla á voces en todos los ensayos constitucionales y en todos los tratados interprovinciales, hasta el acuerdo de San Nicolás, y que resiste y termina el período de separación, dejando establecida por siempre la unidad y la soberanía suprema de la nación argentina.

CAPITULO III



SUMARIO—I. Causas determinantes de la revolución—II. Causas sustanciales—III. Causas ocasionales—*La semana de Mayo*—Manifiesto del Virrey Cisneros—Petición de cabildo abierto—V. Cabildo abierto—El obispo Lúe—Castelli—El fiscal Villota—Passo—VI. Procedimientos del cabildo—Junta presidida por Cisneros—Reglas de gobierno—VII. Renuncia de Cisneros—Intervención popular—Junta provisoria.

I—Será siempre difícil determinar todos los factores que en un momento dado concurren á la evolución social y originan ó modelan nuevas instituciones políticas; pero no lo es tanto distinguir los principales, y vamos á ensayarlo respecto de la revolución argentina, con la rapidez que nos impone la necesidad de llegar cuanto antes á la exposición de la constitución. Tomaremos como fuente principal de información la provechosa enseñanza de los dos eminentes historiadores argentinos que han narrado el génesis de la vida nacional, sin descuidar los documentos, apuntes biográficos y monografías que se relacionan con el asunto.

Las causas ó motivos de la revolución de Mayo pueden agruparse así: motivos sustanciales, entre los que se cuenta la distinción entre españoles y americanos y su proporción numérica, la distribución de la riqueza frente al monopolio comercial y el sistema



político y administrativo de la colonia; y motivos ocasionales, entre los que colocamos las dos invasiones inglesas, la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa y la invasión de Napoleón a España.

II—En el norte de la América la raza colonizadora mantuvo su homogeneidad; pero en la América del sud y especialmente en el Río de la Plata, el proceso de diferenciación comienza al día siguiente de la conquista con la heterogeneidad de los elementos que concurren á la organización de la familia. Sabemos ya que la colonización se emprende con muchos hombres y pocas mujeres; nos hemos referido al reparto de indias entre los soldados de Oyolas y vamos ahora á robustecer esos antecedentes con documentos de la época. El Sr. General Mitre ha publicado, en una nota de la Historia de Belgrano, un documento inédito de 1579, suscrito por Hernando de Montalvo, que vino al Río de la Plata en 1574 y fue cabildante de Buenos Aires en 1587, que arroja mucha luz sobre este punto. Dice así: *«Estas Provincias han menester gente española, sobre todo porque es muy poca y van cada día en más crecimiento los hijos de la tierra, así criollos como mestizos, que de cinco partes de la gente, las cuatro son de ellos y van cada día en mayor aumento.»*

El dato es interesante, porque revela dos cosas: primero, la desproporción numérica entre españoles y americanos; segundo, la distinción que establecían los europeos, desde los comienzos de la conquista, entre los peninsulares, los criollos y los mestizos, colocando á estas dos agrupaciones en análoga categoría



diferente de la primera, lo que es muy digno de notarse, porque *criollo* se llama al hijo de españoles nacido en América.

Juan de Garay pobló por segunda vez esta ciudad en 1580 con setenta soldados que trajo del Paraguay, y el Sr. D. Eduardo Madero ha comprobado con documentos auténticos del mismo capitán que de esos setenta soldados, sesenta eran americanos: la memoria vuelve á las mujeres de Oyolas.

Por estrecha que fuera la vinculación del europeo con la raza que se formaba en torno suyo, no estaba en su mano detener el proceso de diferenciación que comenzó con su aproximación á mujeres extrañas.

El español venía con el concepto de la civilización europea, con la tradición de su raza de guerreros, poderosa y gobernante, y aunque la grandeza nacional se dirijiera ya á su ocaso, aún conservaba la luz de las letras y de las artes. Era natural que tuviera elevado concepto de su valer, cuando se encontraba entre bárbaros, y que no dudara de su superioridad sobre los americanos, que aún siendo hijos suyos, no tenían sino noticia de aquellas grandezas.

No es necesario volver á los tiempos de la conquista para darse cuenta acabada de este fenómeno social. No obstante la cultura de que nos encontramos hoy día, en contacto con los europeos podemos notar, al través de las formas que la cortesía impone, el desdén con que nos miran los que se consideran representantes de una civilización superior. Todavía somos para ellos naturales, indígenas, casi silvestres. Lo observamos donde quiera que ponemos los ojos. Si es hombre de letras, se considerará representante de la literatura universal en América; si es comerciante,



entenderá que las ideas de probidad y de escrúpulo honorable en el manejo de los negocios, que le fijaban línea de conducta recta é invariable en su país, no tienen la misma aplicación en el Río de la Plata, sobre todo si se trata de negocios con el gobierno. La regla tiene excepciones pero es la regla.

Si este es el concepto actual de los europeos, se comprende sin esfuerzo que los españoles que vinieron á América en los siglos XVII y XVIII creyeran, de buena fe, que su superioridad era incontestable desde cualquier punto de vista.

Entre los americanos se había desarrollado un sentimiento de viva oposición contra los peninsulares. Las clases superiores, los hijos de españoles educados en Chuquisaca ó en España no se conformaban con la dependencia é inferioridad de su posición y fácilmente adquirían la certeza de que los títulos que invocaban sus progenitores no eran de tan buena ley como ellos lo creían. Los hombres del pueblo, comparados con los europeos de su clase, si no eran más fuertes, eran más ágiles, más inteligentes, mas audaces y no aceptaban los motivos que los peninsulares alegaban para sobreponérseles como clase privilegiada. La diferenciación había crecido y comenzaba el antagonismo. Cuenta el Sr. Saguí, en su crónica de los últimos cuatro años de la dominación española, que el sábado santo que precedió á la segunda invasión inglesa un soldado español tenía preparado un Judas vestido con el uniforme de los patricios. Afortunadamente la noticia llegó con tiempo á conocimiento del cuerpo, que formuló su reclamo ante Liniers y éste evitó los trastornos á que seguramente hubiera dado lugar insulto



semejante en los días en que comenzaba á hervir el sentimiento patrio.

La desproporción numérica entre la raza gobernante y la gobernada era motivo suficiente para que esta última, con la conciencia de su fuerza, pensara en la independencia. Los censos de la época son deficientes; faltan datos estadísticos y no es posible saber siquiera cual era la población de cada virreynato. Sin embargo, es un hecho indiscutible y fuera de controversia que los españoles que vinieron á América formaban pequeña agrupación dentro de la enorme masa de los americanos. Torrente, en su historia sobre la revolución Hispano-Americana, calcula en 14.000.000 la población total de las posesiones españolas en América y acepta la cifra de 300.000 españoles que da Humboldt, es decir, 2 1/2 p. ‰, más ó menos. Admitiendo que la proporción fuera excepcionalmente favorable para los peninsulares en el Río de la Plata, creo que no podía elevarse esta última cifra á más del 10 p. ‰.

Era también causa sustancial del antagonismo la distribución de la riqueza y el monopolio comercial. En los primeros tiempos de la colonización la pobreza común unía á españoles y americanos, no había comercio; la única industria era el comercio ocasional de cueros. El cabildo abogaba por los intereses colectivos cuando enviaba sus procuradores á España para que solicitaran el permiso de comerciar con el Brasil y con el reino de Angola; pero esta situación se modificó poco á poco, y cuando el contrabando dió aliento á las industrias y desarrolló las transacciones obedeciendo á leyes naturales, el americano se dedicó á la ganadería y fue el único y verdadero pro-



ductor del país, mientras que el español, favorecido por sus relaciones con la administración pública aquí y en la península, monopolizaba los giros y negocios comerciales.

Los americanos buscaron mercados para sus productos; á los españoles les perjudicaba la concurrencia; eran y aspiraban á continuar siendo los intermediarios exclusivos de los productores y del comercio de la Metrópoli. La divergencia y oposición de estos intereses se manifestó en muchas ocasiones y quedó consignada en la historia con la célebre Representación de los hacendados del Dr. Mariano Moreno. Los hacendados reclamaban comercio libre y puertos abiertos; el Ayuntamiento, que representaba el interés y la tradición española, el consulado, donde prevalecía el comercio monopolista, se opusieron tenazmente, y si el virrey accedió á la representación elocuente de los hacendados, se debió, más que á todo, al estado exhausto del tesoro colonial.

Para tener idea de lo que era, en realidad, el consulado, bajo cuyo cuidado se habían puesto los intereses industriales del país, basta leer algunas breves líneas de la autobiografía de Belgrano, que fue su secretario. «No puedo decir bastante mi sorpresa cuando conocí los hombres nombrados por el rey para la junta que habia de tratar de agricultura, de industria y de comercio y propender á la felicidad de las Provincias que componían el Virreynato de Buenos Aires; todos eran comerciantes españoles, y exceptuando uno que otro, nada sabían más que de su comercio monopolista, á saber, comprar por cuatro para vender por ocho con toda seguridad.»

El antagonismo de los intereses económicos en-



tre españoles y americanos se caracteriza definitivamente recordando que el gobierno de la Metrópoli revocó la resolución del virrey y ordenó clausurar de nuevo los puertos, orden que llegó á Buenos Aires después de la revolución de Mayo, según Moreno.

El sistema político y administrativo que la Corona de España había establecido en América correspondía á la idea general de subordinación de la colonia respecto de la metrópoli. Solórzano dice que se trató de incorporar al supremo Consejo de las Indias algunos americanos; pero esta idea no se realizó. Los virreyes, oidores, gobernadores, etc., fueron casi siempre peninsulares y el mismo historiador Torrente lo confiesa en los siguientes términos: «En cuanto á la población española en América, si damos crédito á «Mr. Humboldt, ascendía tan sólo á 300.000 almas «cuando estalló la revolución; pero como *casi todo* «*el capital activo del país estaba en sus manos, así* «*como los primeros empleos civiles y militares, pa-* «rece que no debía haber sucumbido su dominio sin «un concurso de circunstancias inesperadas y aflic- «tivas.»

El monopolio del comercio y el monopolio de las altas funciones administrativas concurrían á levantar y vigorizar el espíritu de resistencia de los naturales hacia los europeos, y una afortunada sucesión de grandes acontecimientos precipitó el desenlace que ya se preveía.

III—Los historiadores señalan como punto de partida del período revolucionario sud americano el tiempo que corre entre la primera y la segunda invasión de los ingleses (1806-1807.) Es entonces que se

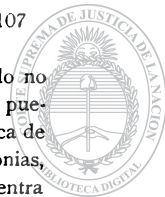


rompe la tradición de sumiso respeto hacia el representante de la persona real; es entonces que se descubre la tribuna donde la opinión ha de manifestarse en adelante y el resorte que, tocado con mano segura, puede volcar la autoridad constituida por el rey y colocar en su lugar otra más digna de la confianza pública.

Sabemos que el Cabildo abierto del 14 de Agosto de 1806 designó á Liniers, gefe de la reconquista, para encargarse del mando político y militar de la ciudad. Sabemos que este primer acto fue seguido de otro más trascendental: la destitución y prisión del virrey; es decir, que el pueblo y las autoridades coloniales que quedaron bajo su influencia osaron poner mano sobre el representante legítimo de la Corona real.

El señor Torrente, ocupándose de los cabildos abiertos de 1806 y de 1807, reconoce la trascendencia de aquel movimiento y declara cual era el concepto español sobre el derecho de los americanos para intervenir en los negocios públicos. Dice, hablando de la reconquista de Buenos Aires y de la designación de Liniers: «Este gran triunfo produjo, sin embargo, efectos muy contrarios á la estabilidad del dominio español, porque debilitado con la complicación de los sucesos el imperio de las leyes y el respeto hacia las autoridades, se extinguió totalmente aquel prestigio *«tan necesario para mantener al pueblo en sumisa dependencia.»*

Estas palabras del señor Torrente encierran el objeto fundamental de la política española respecto de la América: mantener al pueblo en sumisa dependencia.



Es un historiador que escribe en 1829, cuando no se había reconocido aún la emancipación de los pueblos americanos, quien caracteriza así la política de su gobierno y de su patria, respecto de las colonias, que se habían declarado independientes. Encuentra malo, pernicioso y funesto un movimiento que conquistó la ciudad colonial de manos del invasor, porque ese movimiento se consumó sustituyendo el mal virrey, el funcionario cobarde, con una autoridad española también, pero designada por el cabildo, con el concurso de la autoridad eclesiástica de la parte más sana del vecindario, y repudia y condena ese procedimiento, porque ponía las cosas en camino de que el pueblo saliera de la sumisa dependencia en que se le debía mantener!

Pero el señor Torrente es mucho más explícito. En otra parte dice: «Cualesquiera que hubieran sido los cargos que resultasen contra el virrey Sobremonte, no era el pueblo quien debía erigirse en su juez, sino el Soberano Español; he aquí el primer eslabón desprendido de la gran cadena política en la que estaban enlazados los intereses de aquellos países.»

El señor Torrente dice la verdad del punto de vista jurídico. Bajo el gobierno colonial no era el pueblo el que tenía derecho para pedir cuenta al virrey Sobremonte de su cobardía y del abandono de la ciudad. Podía entregarla inerte al dominio del invasor: el pueblo no tenía derecho para protestar contra él, cuando faltaba al cumplimiento de los deberes más sagrados de su cargo; si la servidumbre, si el cambio de señor era la consecuencia de aquellas faltas, debía resignarse, porque el derecho de repararlas ó de castigarlas correspondía exclusivamente al Soberano de España;



si el pueblo procedía por su cuenta, en defensa propia, rompía la gran cadena que ataba los intereses de estos países.

Tal era la situación legal de las colonias respecto de la Corona Española, y es por eso que no puede discutirse el derecho con que los pueblos americanos se declararon independientes.

Más adelante dice el mismo señor Torrente: «Si bien «la elección del nuevo gobernador no podía ser más «acertada, *fue, sin embargo, aquel atentado, de un pé- «simo ejemplo, y de las más fatales consecuencias la «importancia que se dió á la muchedumbre, hacién- «dola creer que estaba en su mano elegirse un jefe «y mezclarse en los asuntos públicos, profanando el «santuario de las leyes y del legítimo poder.»*

Hoy día no habrá seguramente un español, ni aún en los extremos del partido conservador, que sostenga esas doctrinas monstruosas; pero esos fueron los principios en que la España gobernó las colonias hasta el momento de su emancipación.

Si el comercio y el capital activo del país estaban monopolizado por los peninsulares; si las mismas manos acaparaban las altas gerarquías de la administración y del ejército; si se le negaba á los americanos el derecho de mezclarse en los asuntos públicos; si no estaba en su facultad elegir jefe, ni aún para defenderse contra la invasión extranjera, se comprende que tal sistema de gobierno fuera repugnado y resistido por los nacidos en América, hijos de padre y madre españoles, ó hijos de padre español y de madre americana, que se sentían con mayor capacidad y aptitudes para el gobierno y con el derecho que brota de las entrañas de la tierra y que le dá á todos los pueblos,



civilizados ó salvajes, la noción clara de que ningún extranjero tiene título para imponerle gobierno extraño á nombre de una civilización superior ó de la fuerza.

La independencia norte-americana y la revolución francesa concurren á la evolución argentina con el ejemplo y con la propaganda.

La América del norte había consagrado el derecho de las colonias para romper el vínculo de unión con la Metrópoli, si ésta abusaba de su prepotencia, y los revolucionarios de 1789 habían arrojado á todos los vientos sus ideas de igualdad política y civil. Belgrano ha contado la impresión que dejó en su espíritu el grande acontecimiento, y es notorio que la mayor parte de los argentinos cultos de su época estaban empapados en la filosofía política del siglo XVIII, que preparó la famosa declaración de los derechos del hombre. En el curso de nuestros estudios hemos de encontrar viva la influencia de Rousseau, y en alguna de las constituciones argentinas hallaremos preceptos textuales de su sistema de gobierno.

La abdicación de Carlos IV y de Fernando VII, el nombramiento de José I, la resistencia popular, la invasión del ejército francés, la creación de juntas de gobierno que no eran sino juntas de guerra para la defensa del territorio, sin carácter nacional ni poder legal, según los principios de la monarquía absoluta establecida en España, precipitaron la hora de la revolución.

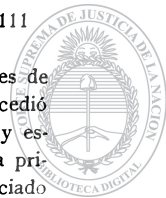
La política de Napoleón y la invasión del ejército francés en España han sido juzgadas por la historia. Sin duda alguna, Napoleón es el hombre de guerra más grande de los tiempos modernos, y para encontrar su



parecido en la antigüedad, hay que llegar á César; ocuparía posición análoga entre los políticos, si la política consistiera en el supremo desdén por todos los derechos humanos, en la habilidad sin escrúpulo para burlar la confianza de los hombres y de los pueblos y en la ambición ilimitada de engrandecimiento personal. Su intervención en los negocios de España se señala por la más refinada perfidia, y el gobierno que fundó contra la voluntad del pueblo español, sin otra base de sustentación que la fuerza, debía encontrar la resistencia de una raza varonil, que tanto se distinguía por la energía del sentimiento nacional.

Los monarcas abdicaron; una y más veces reconocieron la soberanía del usurpador; incurrieron en cobardías y debilidades que avergüenzan; pero el pueblo español llevó el heroísmo á sus últimos extremos y se levantó en masa. Al principio los soldados del imperio vencieron todas las resistencias, despedazaron las tropas indisciplinadas que les disputaban el paso, salvaron los desfiladeros de las montañas y dominaron la Andalucía, donde se había concentrado la resistencia. La Junta Central huyó de Sevilla á Cádiz, se refugió en seguida en la Isla del León y desapareció, dejando en su lugar la Regencia de España y de las Indias, que no tenía título legítimo que invocar para gobernar en América, porque no representaba los derechos de la Corona, sino los que se derivaron del alzamiento popular, contra los actos más solemnes y formales de los mismos monarcas.

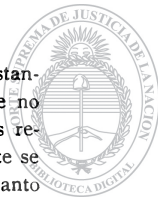
Era la hora de los americanos. Tenían medios para constituir gobierno propio, y desde el primer momento podían cohesionar el movimiento revolucionario con el ejemplo de las juntas metropolitanas, que



ya habían funcionado en América por rivalidades de mando entre dignatarios españoles, como sucedió cuando Elío desconoció la autoridad de Liniers y estableció la junta de Montevideo. El rey estaba prisionero, el título del nuevo monarca aparecía viciado por la violencia y los pueblos de América debían proveer á la conservación de los derechos de su Soberano legítimo y á su propio bienestar. Y así llegamos al término de la vida colonial.

IV—No intentaremos contar la revolución de Mayo. El señor General Mitre y el doctor don Vicente López han escrito esa página de nuestra historia con alta elocuencia y con el sentimiento vivo del patriotismo. Pero necesitamos indicar la marcha de los sucesos, para mostrar á su paso cómo se desenvuelve la vida política argentina, cuáles son las primeras ideas y cuáles las primeras formas del gobierno propio, cuáles han sido los ensayos hechos en busca de un sistema adecuado á las tradiciones y á la situación del país, hasta el momento en que se sanciona la constitución que actualmente nos rige.

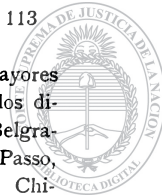
El 13 de Mayo llegó á Montevideo una fragata inglesa con las noticias de los acontecimientos á que antes nos hemos referido. Los rumores corrieron, pasaron á Buenos Aires y en pocos días todo el mundo estuvo al corriente de la situación de la Metrópoli. El 18 el virrey publicó un manifiesto para aquietar los ánimos, dirigido «á los leales y generosos pueblos del virreynato de Buenos Aires», en el que, después de dar noticia exacta, aunque somera, de los sucesos, declaraba el propósito de fidelidad á la Corona de España, aún cuando no le quedarán otras posiciones que las



de América, concluyendo con esta indicación sustancial: «que no se tomará determinación alguna que no «sea previamente acordada en unión de todos los representantes de esta capital, á que posteriormente se «reunan los de sus provincias dependientes, entretanto «que, de acuerdo con los demás virreynatos, se establece una representación de la soberanía del señor «don Fernando VII.»

El plan de gobierno del virrey era, pues, mantener las cosas como estaban, trasladando el ejercicio de la soberanía de la Corona á las autoridades constituidas en esta ciudad, á las análogas de las provincias interiores y en definitiva á la junta de los virreyes americanos. Conocida la predisposición del espíritu público y las tendencias divergentes de europeos y americanos, no es necesario detenerse ahora á comentar el efecto que debió producir en estos últimos una solución que respondía única y exclusivamente á las conveniencias y á los sentimientos de los peninsulares.

La agitación que ya había comenzado desde que llegaron los primeros rumores continuó hirviendo el 18 y 19. Los patriotas se reunieron y llamaron á los gefes militares que participaban de sus ideas, para fijar el rumbo que debían seguir. El general Mitre dice que existía ya organizada una junta ó sociedad secreta que había tomado la dirección de los sucesos y que no esperaba sino el momento propicio para dar impulso al movimiento popular. El doctor López cree que no había organización formal, sino que, como consecuencia del estado de los negocios públicos, se habían estrechado las relaciones de los hombres que representaban el sentimiento nacional y que se reunían



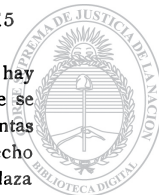
con frecuencia en casa de los que tenían mayores comodidades. Sea como fuere, los nombres de los directores de la opinion pública son conocidos: Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Agustín Donado, Passo, Manuel Alberti, Vieytes, Terrada, Darragueira, Chiclana, Irigoyen y Castelli, teniendo por agentes activos á French, Beruti, Viamont, Guido y otros jóvenes entusiastas. De común acuerdo resolvieron dar por caduca la autoridad de la Corona de España en América y establecer gobierno propio, evitando, en cuanto fuera posible, trastornos dolorosos. Para este fin se decidió, dice el Señor General Mitre, tomar como campo de maniobras el ayuntamiento. Ya sabemos cual era el motivo de la preferencia. No existía cuerpo ó centro de autoridad organizado, en que el elemento nativo tuviera representación, si no era el cabildo, donde, en virtud de los acontecimientos referidos, se había consagrado como hecho y como derecho que la mitad de los cabildantes serían americanos y la otra mitad españoles. Por consecuencia, decididos á impulsar los sucesos que nuestros antepasados no habian ensayado, y no pudiendo tener confianza en la acción popular, ocurrieron á la corporación donde el elemento nacional estaba representado, iniciando así la lucha dentro de una institución legal, cuya eficacia para sus fines se había probado en 1806 y 1807.

Los episodios individuales, el modo cómo ganaron la voluntad de los primeros cabildantes y doblaron la resistencia del virrey para que se convocara el vecindario á Cabildo abierto es materia de la crónica ó de la historia argentina. Los dos escritores á que nos hemos referido cuentan todos los incidente de esos primeros días con preciosos detalles: cómo Saavedra y



Belgrano persuadieron á Lezica, alcalde de primer voto cómo Castelli obtuvo la cooperación del síndico procurador de la ciudad, doctor don Julián de Leiva, los pasos que dieron cerca del virrey los dos capitulares, la reunión de los gefes, la consulta de la Audiencia y, por fin, el paso audaz y decisivo con que los patriotas arrancaron el consentimiento formal para que se convocara la Asamblea que debía desidir cuáles eran los mejores medios de asegurar la quietud pública. El virrey vacilaba todavía el 20 á la noche, cuando Castelli y Martín Rodríguez, invocando la representación de los patriotas, le exigieron la indispensable autorización para el Cabildo abierto, como el único medio de evitar perturbaciones y trastornos cuya magnitud y últimas consecuencias era imposible calcular; cedió por fin y prometió acordar permiso cuando lo solicitara el Cabildo.

El 21 se reunió el Cabildo. Desde ese día podemos seguir el proceso revolucionario en los documentos oficiales, en las mismas actas capitulares que se alarган y se animan como si el relator hubiera olvidado las reglas del oficio, para convertirse en cronista emocionado de los sucesos, bajo la influencia de las pasiones que soplaron de afuera hasta subyugar el ánimo de los cabildantes. Abierta la sesión del Cabildo, el alcalde de primer voto y el procurador de la ciudad dan cuenta de sus diligencias cerca del virrey y de la aquiescencia de éste para que se celebrara Cabildo abierto. Los capitulares deliberaban sobre el asunto cuando, según dicen las actas, «se agolpó un número considerable de gente á la plaza mayor, explicando á voces el mismo concepto que habían manifestado el señor Alcalde de primer voto y el caballero síndico:



«y los señores, persuadidos de la necesidad que hay de poner prontas precauciones á los males que se anuncian, convencidos de que deben tomarse prontas providencias con la mayor brevedad, por el hecho mismo de haberse agolpado la gente á la plaza expresando á voces sus deseos, y afianzados en la exposición del señor Alcalde y caballero síndico, acordaron se pase oficio *en el acto* al exmo. señor virrey, suplicándole se digne conceder á este Cabildo permiso franco para convocar, por medio de esquelas, la principal y más sana parte del vecindario, á fin de que en un congreso público exprese la voluntad del pueblo, y acordar en vista de ello las medidas más oportunas para evitar toda desgracia y asegurar nuestra suerte futura. Que al propio tiempo se sirva disponer que en el día del Congreso se ponga una reforzada guarnición en las avenidas ó boca calles de la plaza para que contenga todo tumulto y sólo permita entrar en ella á los que, con la esquila de convocatoria, acrediten haber sido llamados.»

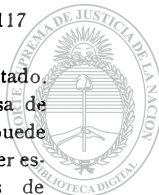
Redactado el oficio, fue enviado al virrey con una diputación compuesta de los capitulares Manuel José de Ocampo y Andrés Domínguez, quedando el Cabildo en sesión permanente. El virrey contestó á los pocos momentos accediendo al pedido con la recomendación de «que nada se ejecute ni acuerde que no sea en obsequio del mejor servicio de nuestro amado Soberano Fernando VII, integridad de estos sus dominios y completa obediencia del supremo gobierno nacional que la represente durante su cautividad.»

Nuevas voces del pueblo reunido en la plaza recla-



man que se presente en los balcones el caballero síndico procurador; «quería saber lo que se había «contestado á la diputación del Exmo. Cabildo.» El doctor Leiva explicó que el virrey había accedido á todas las solicitudes del Cabildo y clamaron entonces de nuevo que lo que querían era la deposición del exmo. señor virrey; y habiendo el caballero síndico tratado de persuadirlos, esforzando más y más las insinuaciones que anteriormente tenía hechas (para que se aquietasen) se retiró á la sala. Por último, intervino don Cornelio Saavedra, gefe de los patricios, y se resolvió celebrar Cabildo abierto ó Congreso general al día siguiente á las 9 de la mañana. En cumplimiento de esta resolución se imprimieron y repartieron 450 esquila de invitación.

Faltaban en el sistema de gobierno colonial español los cuerpos representativos de la opinión pública que existían en las colonias de la América del norte, y la necesidad obligaba á recurrir á un Congreso general formado arbitrariamente por el Cabildo, que tampoco había sido elegido por el pueblo, para que decidiera, como soberano, de la suerte futura del país. Si los invitados pertenecían al partido español, la resolución del Congreso no podía corresponder á los deseos de los patriotas. El peligro era manifiesto y López dice que la invitación por medio de esquelas ocasionó nuevas reclamaciones que eludió el caballero síndico procurador, insinuando á los que dirigían el movimiento que las esquelas se iban á imprimir y que podían tomar las que quisieran y que, además, la guardia de la plaza estaría á cargo del coronel Saavedra que era de los suyos. El doctor Leiva era hombre de recursos y de arbitrios; hombre profundo, se-



gún el general Mitre; el fácil expediente fue aceptado. La irregularidad de los medios continúa á causa de la falta de formas orgánicas de gobierno y sólo puede ser excusada porque todos los resortes del poder estaban indebidamente concentrados en manos de autoridades que se habían constituido prescindiendo absolutamente del pueblo cuya suerte se iba á decidir.

El Cabildo abierto del 23 de Mayo ha sido pintado con vívidos colores por los historiadores de la revolución argentina, y no necesitamos reproducir el cuadro de la solemne sesión. De los 450 invitados asistieron doscientos y tantos; los españoles se abstuvieron de concurrir en su mayor parte; pero haremos constar que, si la multitud invadió la plaza aprovechando el expediente sugerido por el síndico procurador, en la Asamblea del Cabildo no entraron sino los invitados, lo que se comprueba por el acta de la sesión en la que se menciona el nombre de los concurrentes, altas dignidades de la iglesia, funcionarios de la administración, miembros del foro, representantes del comercio y del ejército y los vecinos más acaudalados.

El escribano del Cabildo leyó un discurso preparado por el ayuntamiento, en que invitaba á los miembros del Congreso á que expresaran su opinión con libertad y dignidad, como lo debía hacer «un pueblo «sábio, noble, dócil y generoso», recomendando especialmente que se procurara «evitar toda división, y «se tratara de radicar la confianza entre el súbdito «y el magistrado, afianzar la unión con todas las «provincias y dejar espeditas las relaciones con los «otros virreynatos del continente, evitando toda innovación ó mudanza.»



Los contemporáneos han referido que fue el primero en usar de la palabra el señor Obispo Lúe y Riega, tan respetable por su moralidad privada como por su alta investidura eclesiástica, representante genuino del gobierno absoluto, enérgico, exaltado, intemperante. Una anécdota de los últimos años de la colonia, que cuenta un cronista de la época, le retrata perfectamente. En la fiesta del Corpus de 1807, que se celebraba en Buenos Aires con la acostumbrada solemnidad, pasaba el Obispo delante de las tropas, entre las que figuraba el tercio de gallegos, cuya gloriosa bandera; era entonces saludada con salvas en alta mar por todas las naves españolas, aunque la izara un falucho. Al pasar el Obispo, el joven abanderado batió la bandera; pero el Obispo creyó que no era ese el debido homenaje, y deteniendo la procesión le intimó con arrogancia:—Rinda V. esa bandera.—No la rindo, contestó el abanderado. Insistió con mayor arrogancia el Obispo, y por último, el abanderado cedió y el Obispo pasó por encima pisándola con dureza. El incidente motivó una reclamación del jefe del cuerpo á la Corona de España.

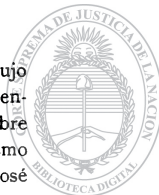
Tal era el hombre que abordaba la grave cuestión de que dependía la independencia de la América del sud. El señor Lúe sostuvo que las colonias de América estaban subordinadas á la Metrópoli; que mientras existiese un pedazo del suelo de la madre patria libre, allí se debía decidir sobre su gobierno, y que si toda la península quedaba definitivamente sometida al invasor, los derechos de la Metrópoli pasaban exclusivamente á los españoles peninsulares que residían en América.

Castelli se levanta para contestar esta audaz pro-



vocación. Era Castelli un verdadero tribuno revolucionario, caloroso, elocuente, de palabra arrebatada y vibrante. Opone á la doctrina absurda del Obispo el derecho de la Corona española y el de los primitivos descubridores y conquistadores. Según los principios del gobierno absoluto de España, la América no era dependencia del pueblo español, sino de la Corona, de la persona real, que era fuente y resumen de la soberanía, y estando el monarca privado de libertad, era deber y derecho de cada pueblo cuidar de la propia integridad para someterse á su imperio en el momento oportuno; si el descubrimiento y la conquista daban algún derecho á los descubridores y conquistadores, ese derecho lo representaban sus descendientes que eran los americanos y nó los españoles que habían llegado á América dos siglos más tarde.

El debate habría terminado con esa réplica, si el fogoso tribuno no hubiera tenido otro adversario que el Obispo, quién, cuando se vió batido, replicó con altanería que había sido invitado para dar su opinión y nó para discutir. Pero también formaba parte de la Asamblea el fiscal Villota, ilustrado y honorable jurisconsulto, que aceptó el debate en el terreno en que lo había colocado Castelli, y reconociendo el derecho de los pueblos de América para decidir de su suerte mientras durase el cautiverio de Fernando VII, desconoció el que pudiera pretender la ciudad de Buenos Aires, para adoptar resoluciones en una Asamblea de su vecindario que pudieran afectar el gobierno de todo el virreynato. Sobre esta sólida base argumentó con la dialéctica de un verdadero jurista, y todos los historiadores argentinos



cuentan que fue tan honda la impresión que produjo en su auditorio, que los patriotas se consideraron vencidos; pero volviendo los ojos, descubrieron al hombre que necesitaban, un americano discípulo del mismo Villota, legista habilísimo, el doctor don Juan José Passo. Este correspondió á la expectativa de los suyos y batió al erudito fiscal en su propio terreno, desenvolviendo la doctrina del *negotiorum gestor*, en virtud de la cual el hermano, el pariente, el amigo, toma la personería del ausente para defender los derechos amenazados por un peligro inminente y que no da espera. El doctor López ha dicho con razón que el doctor Passo dió en ese instante una base jurídica á la revolución que encabezaba la comuna de Buenos Aires, contra las autoridades del virreynato.

Nadie replicó; los patriotas, seguros de su triunfo, pidieron la votación.

Después de propuestas varias fórmulas, se convino en que serviría de base para el voto escrito que cada uno de los presentes debía dar, la siguiente proposición:

«Si se ha de subrogar otra autoridad á la superior que obtiene el Exmo. señor virrey dependiente de la soberana, que se ejerza legítimamente á nombre del señor don Fernando VII y en quién?»

La cuestión quedaba así planteada en el terreno revolucionario: ¿debía cesar en el mando el funcionario que legalmente representaba al soberano? Si así se resolvía, que decidiera también la asamblea quién debía de reemplazarlo.

La asamblea se había reunido á las 9 de la mañana; la votación terminó á las 12 de la noche y á esa hora se suspendió la sesión. A medida que cada uno de



los concurrentes entregaba su voto, el escribano del cabildo lo leía en alta voz, de manera que, aún cuando no se había hecho el escrutinio de la votación, se sabía que la resolución adoptada por gran mayoría de votos era la siguiente: «que el virrey cese en el «mando y recaiga éste provisionalmente en el cabildo, «con voto decisivo en el caballero síndico procurador «general, hasta la erección de una junta que ha de «formar el mismo cabildo en la manera que estime «conveniente; la cual haya de encargarse del mando, «*mientras se congregan los diputados que se han de «convocar de las provincias interiores para estable- «cer la forma de gobierno que corresponda.»*

Tomemos nota de esta declaración final. La revolución se inicia por la ciudad de Buenos Aires, pero desde el primer instante manifiesta propósitos y fines nacionales. Este será uno de los numerosos antecedentes que nos servirá para fijar más tarde la índole y verdadero carácter de nuestras instituciones y para justificar la interpretación de preceptos constitucionales que los comentadores norte-americanos explican á su manera, según los antecedentes históricos de aquella República.

El Cabildo, abierto á las 9 a. m. el 22, se suspendió á las 12 de la noche, para continuar el 23 á las 3 de la tarde. La citación se hizo por medio de carteles. Pero la sala capitular se reunió á las 9 de la mañana y declaró que ya era necesario proseguir. Aquí empieza el Cabildo á torcer los procedimientos, como debía suceder, porque no era una corporación elegida por el pueblo y no representaba sus intereses ni sus aspiraciones. Pero no se detiene en esto, sino que después de dejar constancia de la resolución de la asamblea, tal



cual la hemos consignado, decide proceder en sentido contrario, burlando la confianza con que se le había honrado. El acta dice: «Y tratando los señores de conciliar los respetos de la autoridad superior con el bien general de estas interesantes provincias. acordaron, sin embargo de haber á pluralidad de votos cesado en el mando el Exmo. Señor Virrey, no sea separado absolutamente, sino que se le nombre acompañados con quienes haya de gobernar hasta la congregación de los Diputados.» Es decir, acuerda, á pesar de la resolución de la asamblea, sustancialmente lo que el virrey había indicado desde el primer momento en la proclama del 18; los revolucionarios quedan burlados por la corporación en la que habían depositado la más absoluta, la más extensa confianza, pues en ella habían delegado la facultad de constituir el gobierno que las circunstancias reclamaban, eliminando al virrey. Esta resolución fue comunicada inmediatamente al Sr. Cisneros; éste aceptó por escrito, pero temiendo que la resolución del cabildo quedase reducida á simple acto de oficina, verbalmente indicó la necesidad de llamar á los comandantes de fuerza para saber si podía contar con ellos. El cabildo los llamó: concurrieron españoles y nativos, declarando todos que lo que el pueblo quería era la cesación del virrey y que no había posibilidad de llegar á otra solución.

Entre tanto, el pueblo en la plaza se agita y da voces y reclama siempre la deposición del virrey.

Al fin, el cabildo, rendido por el consejo de los gefes de fuerza y amedrentado por las voces del pueblo, resuelve publicar bandos declarando la cesantía del virrey. Al mismo tiempo ordena que no se despache correo para el interior. El bando dice así: «Por cuan-

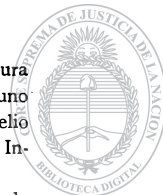


«to el congreso celebrado ayer 22 del corriente Mayo
«ha resultado á pluralidad de votos deber subrogar-
«se en el mando superior de estas provincias que ejer-
«cia el Excelentísimo Señor D. Baltazar Hidalgo de
«Cisneros y refundirse en este Exmo. Cabildo provi-
«sionalmente y hasta tanto se erija una superior junta
«que haya de ejercerlo, dependiente siempre de la que
«legítimamente gobierna á nombre del Señor Don Fer-
«nando VII, se hace saber así al público, por medio
«del presente bando, para su gobierno é inteligencia,
«y que deseche cualesquiera recelos que hayan podi-
«do infundirle las últimas infaustas noticias recibidas
«de la Península, bien entendido que este Exmo. Ca-
«bildo procederá inmediatamente á la erección de la
«junta que haya de encargarse del mando superior,
«hasta que se congreguen los diputados que se con-
«vocarán de las provincias interiores, para establecer
«la forma de gobierno más conveniente.»

—

VI—La sala capitular de Buenos Aires se reunió el 24 por la mañana, después de haber tranquilizado la opinión pública con el bando de la noche anterior.

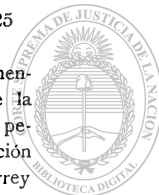
El primer acto de los cabildantes fue considerar si debía llevarse adelante la resolución sancionada en el cabildo abierto el 22, y después de maduras reflexiones, declararon que en su concepto era riesgoso que se procediera en la forma resuelta por el congreso general, separando de toda ingerencia en el gobierno al virrey y adoptaron un temperamento, que acaso los sedujo, con la doble esperanza de satisfacer la opinión pública é impedir que se consumara la revolución que implicaba aquella, con la organización de una junta bajo la presidencia del mismo virrey,



compuesta del Dr. Juan Nepomuceno de Sola, cura párroco de Monserrate, el Dr. Juan José Castelli, uno de los dos tribunales del 22, el comandante D. Cornelio Saavedra, jefe de los patricios, y D. José Santos Inchaurregui, vecino muy respetable.

Constituida así la junta, consideraron los poderes de gobierno que debían otorgarle, y hay que llamar especialmente la atención sobre este punto, porque es la primera vez que el gobierno del Río de la Plata va á estar sujeto á reglas establecidas por autoridad que, hasta cierto grado, representaba la voluntad popular. Ante todo, resolvieron que continuara el virrey en el mando, asociado á las cuatro personas ya indicadas, conservándole su renta y las prerogativas de su dignidad, y que los señores nombrados para componer la junta comparecieran á prestar juramento y en el mismo día fueran reconocidos autoridad superior del virreinato. Se reservaron el derecho de llenar las vacantes que se produjeran, el de vigilar su marcha y el de deponerlos si fuera necesario. Establecieron que la junta, una vez constituida, publicaría decreto de amnistía para todos los que habían concurrido á la asamblea del 22, á quienes el cabildo tomaba, además, bajo su especial protección. Esta cláusula es muy significativa, porque implica declarar que no obstante las garantías ofrecidas en aquella asamblea á los concurrentes y la libertad plena de opinar que había asegurado el cabildo en su discurso preliminar, entendía que la libre manifestación del pensamiento podía motivar responsabilidades, más aún, entendía que podía constituir delito, puesto que no es necesaria la amnistía sino para cubrir delitos.

Establecieron, también, la incompatibilidad de las



funciones judiciales y ejecutivas y la publicidad mensual de las cuentas del erario, y declararon que la junta no podría establecer nuevas contribuciones, pechos, ni gravámenes sin consentimiento y autorización del cabildo. Dispusieron que las órdenes del virrey no se ejecutaran si no iban con la firma de todos los miembros de la junta, y finalmente, que la junta dirigiera circular á todos los cabildos del virreinato para que, llamando á los vecinos á cabildo abierto, constituyeran representantes que se trasladasen á la capital para decidir en congreso la forma de gobierno que se había de establecer en esta parte de América. La junta organizada el 25 modificó esta resolución en la circular que dirigió á las provincias el 27, y dió motivo al incidente decisivo de la lucha entre Moreno y Saavedra, que tanta influencia tuvo en nuestra evolución política.

El cabildo procedía en concepto de que era dueño de la situación; pero, á fin de dar mayor seguridad á su acción, convocó á todos los comandantes de cuerpo y les sometió el plan para saber si podía contar con su concurso. Los comandantes, después de algunas observaciones, concluyeron por aceptar la organización de la junta, tal como la había ideado el cabildo. La presencia de Castelli y Saavedra, como elementos seguros y activos, la santidad del doctor Sola y la buena reputación de Incháurregui, indujeron á los comandantes de fuerzas á convenir en una solución que contrariaba abiertamente la resolución adoptada en el cabildo abierto, porque mantenía en el mando el virrey Cisneros que la asamblea había resuelto separar del gobierno. Pero la circunstancia más notable y que enseña hasta dónde las ideas pue-



den perturbarse en el torbellino revolucionario es que Saavedra y Castelli aceptaran esa solución y que el fogoso tribuno que había sostenido el debate con el Obispo y votado después por una fórmula extrema aceptara un puesto en el gobierno al lado del virrey, si no subordinado á su autoridad.

Casi es escusado agregar qué el virrey asintió sin esfuerzo á un plan que estaba de acuerdo con su iniciativa del 18, para mantener la autoridad establecida con el concurso de las entidades más representativas de la colonia.

Obtenida la aquiescencia de los comandantes y la aceptación de Saavedra y Castelli, el Cabildo dispuso que la junta concurriera á prestar juramento y tomar posesión del cargo inmediatamente con asistencia de todos los dignatarios de la capital. El acto tuvo lugar con las formalidades que el caso reclamaba y la junta quedó constituida.

La contra revolución estaba consumada. Los patriotas habían iniciado un movimiento para independizar los pueblos de América del gobierno español, manteniendo como fórmula el nombre de Fernando VII, porque en realidad este nombre coonestaba dificultades del momento y no traía inconvenientes fundamentales de ninguna naturaleza al propósito final que ellos perseguían; pero la situación cambiaba, si se mantenía la autoridad del virrey, pues como no tenía otra fuente de derecho, ni otro título para el gobierno de América que el nombramiento real, necesariamente sostendría la subordinación colonial.

VII—La misma noche del 24 comenzó la agitación entre los patriotas. Saavedra y Castelli reaccionaron



y se encargaron de manifestar al virrey que el pueblo no se conformaba con su continuación en el mando y le significaron que era forzoso que renunciara, por lo menos el mando de las tropas. Esta forma era tan depresiva, que para eliminar dificultades, surgió y fue aceptada la idea de que renunciara toda la junta. He aquí el oficio presentado al Cabildo el 25 de Mayo á primera hora:

«Al Excmo. Cabildo, Justicia y Regimiento de esta capital: En el primer acto que ejerce esta junta gubernativa ha sido informada por dos de sus vocales de la agitación en que se halla alguna parte del pueblo, por razón de no haberse excluido al excelentísimo señor Vocal Presidente del mando de las armas, lo que no puede ni debe ser, por muchas razones de la mayor consideración. Esto le causa imponderable sentimiento y motiva á trasladarlo á su conocimiento para que proceda á otra elección en sujetos que puedan merecer la confianza del pueblo, supuesto que no se la merecen los que constituyen la presente junta, creyendo que será el medio de calmar la agitación y efervescencia que se ha renovado entre las gentes. La solución es de urgentísima expedición; de modo que, sin pérdida de instante, será preciso que V. E. se junte en Cabildo y se expida como corresponde, en la inteligencia de considerarse con el poder devuelto. Dios guarde á V. E. muchos años—Buenos Aires 24 de Mayo de 1810—*Baltasar Hidalgo de Cisneros—Cornelio de Saavedra—Juan Nepomuceno de Sola—Juan José Castelli—José Santos de Inchaurrategui.*»

El Cabildo, con energía inusitada, persistió en su propósito y contestó en los siguientes términos:



«Exmo. señor Presidente y vocales de la Junta superior provisional gubernativa. Exmo. señor: Desde que los individuos de esa respetable junta prestaron el juramento de desempeñar bien y legalmente el cargo que se les ha conferido por este Ayuntamiento, en virtud de las facultades que le confió el pueblo, V. E. se ha encargado de la autoridad que residió en este Ayuntamiento y que anteriormente obtenía el Exmo. señor virrey, de la cual no tiene V. E. facultad para desprenderse. En esta atención y de que lo que solicita alguna parte del pueblo, en concepto de V. E., no puede ni debe ser, por muchas razones de la mayor consideración, teniendo V. E. las fuerzas á su disposición, está en la estrecha obligación de sostener su autoridad, tomando las providencias más activas y vigorosas para contener esa parte descontenta: Y de lo contrario este Ayuntamiento hace responsable á V. E. de las funestas consecuencias que pueda causar cualquier variación en lo resuelto. Dios guarde á V. E. muchos años—Sala capitular Buenos Aires 25 de Mayo de 1810—*Juán José de Lecica—Martín Gregorio Yáñez—Manuel Mansilla—Manuel José de Ocampo—Juán de Llano—Jaime Nadal y Guarda—Andrés Domínguez—Tomás Manuel de Anchorena—Santiago Gutiérrez—Julión de Leiva*».

La nota del Cabildo á la Junta acaso no había llegado á su destino, cuando, según dicen las actas: «ocurió multitud de gente á los corredores de las casas capitulares y algunos individuos en clase de diputados, previo el competente permiso, se apersonaron en la sala, exponiendo que el pueblo se hallaba disgustado y en conmoción; que de ninguna manera se



«conformaba con la elección de presidente vocal de la junta, hecha en el Exmo. don Baltazar Hidalgo de Cisneros y mucho menos con que estuviese á su cargo el mando de las armas; que el Exmo. Cabildo, en la erección de la junta y su instalación, se había excedido de las facultades que á pluralidad de votos se le confirieron en el Congreso General; y que, para evitar desastres que ya se preparaban, según el fermento del pueblo, era necesario tomar prontas providencias y variar la resolución.» Los diputados eran French y Beruti, que con el concurso de la juventud, habían tomado á su cargo la agitación popular en el último momento. French acababa de repartir entre los patriotas como distintivo, cintas celestes y blancas, y á Beruti se le atribuye haber dado forma definitiva al clamor público, designando las personas que constituyeron la primera junta gubernativa. Veremos en las actas hasta dónde resistió el Cabildo el impulso revolucionario.

«Los señores procuraron serenar aquellos ánimos acalorados con la promesa de que iban á tratar el asunto y después de varias reflexiones vinieron á convenir en que cualquiera innovación en orden á lo resuelto el día de ayer, produciría males de la mayor entidad, pues que los pueblos del virreynato y aún los del continente, entrarían en desconfianzas al observar una tan repentina variación. que la insistencia de una parte descontenta del pueblo no podía exponernos á conveniencias de tanto bulto y era necesario contenerlo por medio de la fuerza.»

Pero la fuerza no estaba en sus manos, y los señores llamaron de nuevo á los comandantes. Concurrieron todos, y con excepción de tres, que nada dijeron, los

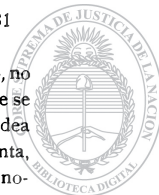


demás contestaron: «que el disgusto era general en el pueblo y en la tropa, que no podían sostener al gobierno establecido y que ellos mismos eran sospechados; que el pueblo y las tropas estaban en terrible fermentación y que era preciso atajar el mal con tiempo.»

En ese mismo momento «las gentes que cubrían los corredores dieron golpes por varias ocasiones a la puerta de la sala capitular» y oyéronse entre el tumulto las voces de French y de Beruti que repetían que el pueblo quería saber de lo que se trataba. Bajo esta presión de fuerza el Cabildo se sometió a la ley imperiosa de la necesidad y su forzada resignación consta en los siguientes términos: «y los señores, conociendo que en tan apuradas circunstancias no se presentaba otro arbitrio sino que el Exmo. señor don Baltazar Hidalgo de Cisneros hiciese absoluta dimisión del mando, acordaron:

«Que en el momento pase una diputación compuesta de los señores Manuel Mansilla y doctor Tomás Manuel de Anchorena á hacer presente á la Exma. Junta que nuevas ocurrencias y muy graves han estrechado á este Cabildo á variar de las ideas que manifestó en su oficio de hoy, y que era de necesidad indispensable para la salud del pueblo, que el Exmo. señor Presidente se separase del mando; y que en caso de avenirse sea sin protesta alguna para no exasperar los ánimos.»

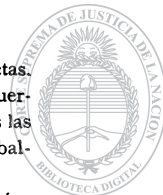
La diputación volvió con la respuesta de que el señor Cisneros iba á enviar su renuncia. Esperaban, cuando algunos individuos del pueblo (Chiclana, Grela, Beruti y French) á nombre de éste se presentaron en la sala exponiendo que para su quietud y tranquili-



«dad y para evitar cualesquiera resultas en lo futuro, no
«tenía por bastante que el Exmo. señor Presidente se
«separase del mando, sino que habiendo formado idea
«de que el Exmo. Cabildo, en la elección de la junta,
«se había excedido en sus facultades, y teniendo no-
«ticia cierta de que todos los señores vocales habían
«hecho renuncia de sus respectivos cargos, había el
«pueblo reasumido la autoridad que depositó en el
«Exmo. Cabildo y no quería que existiese la junta
«nombrada, sino que se procediese á constituir otra,
«eligiendo para presidente-vocal y comandante gene-
«ral de armas al señor don Cornelio Saavedra, como
«vocales á los señores Castelli, Azcuénaga, Belgrano,
«Alberti, Matheu y Larrea, y como secretarios á los se-
«ñores Moreno y Passo, con la previa é indispensa-
«ble cualidad de que, establecida la junta, debería pu-
«blicarse en el término de quince días una expedición
«de 500 hombres para las provincias interiores, cos-
«teada con la renta del señor virrey, señores oidores
«y contadores mayores, empleados de tabacos y otros
«que tuviesen á bien cercenar la junta, dejándoles
«congrua suficiente para su subsistencia.»

La resistencia del Cabildo había desenvuelto la energía de la masa revolucionaria que ya no quería delegar en entidad alguna la organización del gobierno, sino que tumultuariamente exigía la organización de una Junta que volviera fundamentalmente el sistema colonial español por su índole y por su composición personal.

El Cabildo toma en consideración esta solicitud, exige que se presente por escrito y al poco rato la solicitud vuelve al Cabildo con la firma de personas numerosas del clero, del ejército, del vecindario acau-



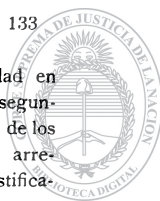
dalado de la ciudad, según lo declaran las actas.

El Cabildo desea, tal vez, intentar un último esfuerzo, y para cerciorarse de que eran fuerzas reales las que exigían la innovación fundamental, salió á los balcones de la sala capitular.

El tiempo era lluvioso; las gentes que no se habían podido abrigar en los corredores de la casa capitular y en las de su alrededor se habían retirado en su mayor parte; los que quedaban eran pocos, y el señor Síndico Procurador de la ciudad, don Julián de Leiva, preguntó: *¿dónde está el pueblo?*, á lo que contestaron los que hablaban en su nombre que se tocara la campana del Cabildo para que la población se congregara y que si no se hacía por falta de badajo, ellos tocarían generala y abrirían los cuarteles y que entonces sabría el Cabildo dónde estaba el pueblo.

El Cabildo creyó, por fin, en el pueblo y resolvió nombrar la junta que éste le había designado por medio de su diputación.

«Los señores, viéndose conminados de esta suerte y «con el fin de evitar la menor efusión de sangre, que «sería una nota irreparable para un pueblo que tenía «dadas tan incontrastables pruebas de su lealtad, nobleza y generosidad, determinaron que, por mi, el «actuário, se leyese en altas é inteligibles voces el «pedimento presentado y que los concurrentes expresaran si era aquella su voluntad. Se leyó el pedimento y gritaron á una: Que aquello era lo que «pedían y lo único que querían se ejecutase. Seguidamente se leyeron varios capítulos que había meditado el Exmo. Cabildo para el caso en que se hiciese lugar á la erección de la nueva junta; primero: que se encargara á ésta que velase por el orden



«y la tranquilidad pública, bajo responsabilidad en
«caso contrario: contestaron de conformidad; segun-
«do: que el Cabildo velaría sobre la conducta de los
«vocales y los removería siempre que no fuera arre-
«glada:—contestaron que esto debía ser con justifica-
«ción de causa y conocimiento del pueblo, á que re-
«puso el caballero síndico procurador que el excelen-
«tísimo Cabildo no procedería sin causa y sin mani-
«festarla: se callaron; tercero: que la junta debía
«nombrar quién ocupase cualquiera vacante por re-
«moción, muerte, renuncia, ausencia ó enfermedad:
«contestaron de acuerdo; cuarto: que la junta no
«podía imponer pechos, gravámenes y contribuciones
«al vecindario sin consulta y consentimiento del pue-
«blo: contestaron de conformidad.»

Y finalmente acordaron «que sin pérdida de instan-
«tes, se establezca una nueva junta por acta *separa-*
«*da y sencilla*, eligiéndose para ella de vocales los
«mismos individuos que han sido nombrados de pala-
«bra *en papeles sueltos* y en el escrito presentado
«por los que han tomado la voz del pueblo, *archi-*
«*vándose esos papeles* y el escrito para constancia
«en todo tiempo; que sin pérdida de instante, en pre-
«caución de que sobrevenga la noche, se proceda á
«la instalación de la junta y se publique el bando, sin
«detenerse en las fórmulas que se observaron para la
«instalación de la primera, porque estrechan los mo-
«mentos, citándose únicamente á los señores vocales
«y Ministros, Gefes, Prelados y Comandantes que pue-
«dan ser habidos en tan limitado tiempo.»

La junta nombrada se instaló de acuerdo con esta
resolución en el mismo día 25 de Mayo, consignán-
dose en el acta especial las reglas de gobierno que



había establecido el Cabildo el día 24 para la junta que entonces constituyó, según las cuales quedaba separado el poder judicial del poder administrativo, se radicaba en el cabildo el derecho de votar nuevos impuestos y se ordenaba á la junta que pidiera á las provincias del interior sus representantes para establecer «la *forma de gobierno* que se considere más conveniente.»

Se llegó, pues, al éxito por los caminos que conocemos. Estamos ahora en situación de apreciar cuantas y cuan grandes debieron ser las dificultades que desde el primer momento se opusieron á la organización del país.

Los revolucionarios arrancaron tumultuosamente el gobierno de manos del virrey y como no tenían hábitos políticos, ni existía sistema electoral, ni base alguna de gobierno representativo, el poder se concentró íntegro en la junta revolucionaria. Nada se pierde en la historia. Tal vez allí comienza nuestra democracia turbulenta y el recurso extremo de la intervención directa del pueblo para corregir el abuso de los gobiernos.

CAPÍTULO IV



SUMARIO: I—Junta provisional gubernativa; sus facultades; su acción reformadora, dictatorial y centralista—II Reglamento de la Junta; Moreno y Saavedra; decreto de 6 de Diciembre—III La Junta el 18 de Diciembre; los diputados de las provincias; la circular del 27 de Mayo; incorporación de los diputados á la Junta; renuncia de Moreno—IV Juntas provinciales; su composición, su nombramiento y sus facultades; su carácter político—V La Junta y la Sociedad patriótica; asonada del 5 y 6 de Abril; sus medios y su objeto; exclusiones y destierros—VI Descrédito de la Junta; creación del triunvirato; la Junta conservadora; preámbulo; Poder Legislativo; Poder Ejecutivo; Poder Judicial.

I—Ya tenemos idea general de los sucesos de Mayo; vamos ahora á tratar de la nueva forma dada al gobierno, de la entidad política constituida en aquellos días memorables.

Partiremos de los antecedentes que ya hemos establecido. La proposición que sirvió de base al voto público del congreso ó asamblea del 22 de mayo fue la siguiente: «si se ha de subrogar otra autoridad á «la superior que obtiene el Exmo Sr. Virrey, dependiente de la soberanía, que se ejerza legítimamente «á nombre del Sr. D. Fernando VII, y en quién?» La resolución de la asamblea fue que la autoridad que desempeñaba el virrey pasara al cabildo con voto decisivo en el caballero síndico Procurador, don Julián



de Leiva, hasta que se constituyera la junta que el mismo cabildo debía nombrar y que ésta, en seguida, procediera á convocar un congreso de diputados de todas las provincias del virreynato, para que determinara el gobierno que se había de establecer definitivamente.

Estos antecedentes comprenden dos hechos fundamentales. Primero, que se trataba de constituir una entidad política que sustituyera la del virrey, entendiéndose por todos, desde el primer momento, que á la nueva entidad debían pasar las facultades y los poderes que hasta entonces habían residido en el virrey, como en efecto pasaron á la junta revolucionaria. Segundo, el carácter provisorio de la junta; provisorio cuyo término puede ser la organización del congreso ó la conclusión de sus trabajos. La sucesión ó coexistencia de una y otra autoridad es asunto que interesa á la marcha de las instituciones, porque se liga con uno de los incidentes de mayor trascendencia del período revolucionario, según lo referiremos más adelante.

No cabe duda que pasaron á la junta todas las facultades del virrey en materia de gobierno, guerra y hacienda, con la especial limitación de que no establecería nuevas contribuciones sin la aprobación del cabildo y con la prohibición de conocer de los negocios de justicia. El cabildo se reservaba el derecho de vigilar la marcha de la junta para separar, llegado el caso, los miembros que no cumplieran sus deberes ó se apartaran de las reglas enunciadas.

Aunque excluida de lo judicial y limitada en su facultad de imponer contribuciones, era la junta revolucionaria una entidad con poderes omnimodos en



los ramos de gobierno y guerra, eficaz, sin duda, para los fines revolucionarios y para las exigencias de la lucha á muerte que iba á comenzar pero inadecuada para corresponder á las aspiraciones de libertad civil y política que se habían despertado en el país, aun cuando ella también participara del anhelo público. Se organizó y subsistió con las ideas que habían prestado fuerza incontrastable al movimiento popular; pero bajo el impulso de las necesidades supremas de la guerra, se vió obligada á posponer la reforma liberal, mostrando, sin embargo, sus tendencias en toda circunstancia favorable.

Siete días después de instalada creó la *Gazeta*, para dar al país una exacta noticia de sus procedimientos, para manifestar los estorbos que encontraba y los medios de eliminarlos, para dar cuenta de la marcha de la Real Hacienda, para mantenerse en continuada comunicación con la opinión pública é informarla del modo como desempeñaba el mando político que había recibido, entregando su conducta y sus actos á la crítica y á la censura de los pueblos, al mismo tiempo que hacia la propaganda de las nuevas ideas. Encomendó la redacción á Castelli, Moreno y Belgrano, y al mismo tiempo solicitó el concurso de los *sabios* que existían en el país, para que ilustraran con sus discursos las cuestiones de principios que interesaban al porvenir de los pueblos y sostuvieran y dirigieran su patriotismo. La creación de este periódico, cuyo objeto fue defender las ideas liberales, fortalecer el patriotismo y poner en luz la administración pública, que hasta entonces había sido materia reservada, no se debe confundir con la creación posterior de papeles oficiales costeados por el tesoro para escusar los excesos ó jus-



tificar las torpezas de los gobiernos personales, ni con los diarios subvencionados de época más próxima, cuya inutilidad ha demostrado la experiencia. A fines de 1410 recomendó á los curas párrocos que leyeran la *Gazeta* á sus feligreses todos los domingos después de la misa; medio elemental y embrionario para difundir ideas, pero quizás el mejor en aquellos días. Poco después creó la biblioteca pública y la academia de música, sin olvidar la instrucción primaria. Cuidó también los intereses del comercio y de la industria: habilitó los puertos de la Ensenada, de Maldonado y del Río Negro y mandó estudiar la canalización del Río 3°; suprimió los derechos de exportación que pagaba la harina, la carne, el sebo, y disminuyó el que pagaban os cueros; creó un fondo permanente para ayudar la explotación de los metales de Famatina y autorizó la exportación de la plata y oro amonedados, para facilitar los cambios y saldar el comercio exterior. Las leyes españolas prohibieron hasta el siglo XVII que se introdujera moneda en las Provincias del Río de la Plata, y en 1810 les estaba vedado exportarla. La prohibición de exportar metales preciosos bajo cualquier forma era la regla en todos los dominios españoles, incluso la Metrópoli.

Pero eran escasos los momentos que la junta podía dedicar á la reforma y progreso social. La necesidad primordial, imperiosa, incesante, era la propia conservación, mantener el orden político, defender el país contra la reacción amenazadora, y esa misión la desempeñó con acierto y con extraordinaria energía, poniendo en acción la suma de facultades que se le habían conferido. Pasado el estupor de los primeros momentos, los españoles reaccionaron y á los pocos



días comenzaron á correr voces de que se proyectaba una contra-revolución á la que no era extraño el virrey Cisneros, que permanecía en Buenos Aires rodeado de consideraciones personales. El Cabildo de Maldonado envió copia á la junta de una circular reservada de Cisneros para que resistiera el gobierno revolucionario. La junta invitó al virrey y á los oidores á una conferencia en el fuerte á prima noche. Asistieron todos, el virrey en gran uniforme y los oidores con sus bastones de puño de oro en señal de jurisdicción, y allí supieron por boca de Castelli que un buque inglés estaba listo y que iban á embarcarse para España. El oficio en que el virrey Cisneros daba cuenta al soberano de la revolución de Mayo lleva esta post-data: *Señor: Inés Gastambide de Cisneros. En este momento que son las 7 y media de la noche, acaban de llevarse á mi marido con engaño, y de allí lo han embarcado ignorando su destino; lo que pongo en noticia de V. M. y por tanto firmo este parte. Buenos Aires, fecha ut supra, (22 de Junio).*

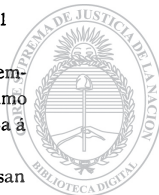
El 25 de Mayo se había resuelto que inmediatamente de constituida la junta despacharía una expedición al interior de quinientos hombres, y la expedición salió con doble fuerza en los primeros días de Julio bajo las órdenes del coronel Don Francisco Ortiz de Ocampo, para sofocar la resistencia que encabezaban en Córdoba Concha, Liniers y el obispo Orellana. Y cuando los gefes de la expedición vacilaron por consideraciones de humanidad ó por antiguo afecto hacia el gefe de la reconquista, allá fue Castelli, el inflexible representante de la justicia revolucionaria, si justicia puede llamarse la aplicación del último suplicio en nombre de necesidades



políticas. Vivo el recuerdo de la ejecución de los Pazeños en 1809, los patriotas se habían empeñado en guerra á muerte y sin cuartel, como son casi siempre las guerras en que se pelea por la independencia nacional, y aceptaron desde el primer instante todas sus responsabilidades. Otro tanto sucedió en el alto Perú, donde el mismo Castelli sentenció é hizo pasar por las armas á Nieto, Córdoba y Sanz, cumpliendo al pie de la letra las severas instrucciones que sugería ó imponía Moreno en la Junta con su voluntad avasalladora.

Montevideo, retenido bajo la autoridad de los españoles, era centro de conspiraciones contra el nuevo gobierno. La Junta expidió el severísimo decreto de 31 de Julio para limitar las comunicaciones con Buenos Aires é impedir una propaganda perniciosa. En ese decreto se previene que se aplicarán inexorablemente las penas siguientes: al que se ausentare sin licencia del gobierno, la confiscación de bienes, sin necesidad de otro requisito que la constancia de su salida; al patrón de buque que lo condujera, cuatro años de cadena y confiscación del barco; al que retuviera armas del rey, hasta el último suplicio, según las circunstancias; al que fomentase la división entre españoles y americanos, las penas de la sedición; y al que se le sorprendiera correspondencia con individuos de otros pueblos, sembrando desconfianzas contra el gobierno, *arcabuceado, sin otro proceso que el esclarecimiento del hecho.*

La autoridad revolucionaria llevaba lejos la acción represiva; pero quizá no más lejos del límite que le señalaban con imperio las necesidades supremas del momento.

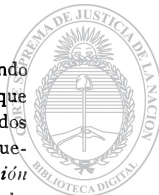


Los revolucionarios franceses le habían dado ejemplo *cuando la patria estaba en peligro*, y severísimo como fue el decreto de 31 de Julio, no se acercaba a las medidas extremas de salud pública.

Las circunstancias de la época explican y excusan las medidas de fuerza del gobierno revolucionario; debe tenerse presente, por otra parte, que el gobierno estaba investido de todos los poderes legales de los virreyes, con las dos excepciones que hemos enunciado. Así, no podía mezclarse en los negocios de justicia; pero podía, llegado el caso, discutir si un negocio era de justicia ó de gobierno y su opinión debía legalmente prevalecer sobre la del tribunal; también era su derecho proveer los altos cargos públicos y *ad interim* los que la Corona se reservaba; en consecuencia, podía nombrar gobernadores ó intendentes para las provincias, y durante el año de 1810 designó, en efecto, los de Santa Fé, Córdoba, Salta, Mendoza, Charcas y Potosí. En sus facultades *omnímodas*, como decían los virreyes, entraron la de sancionar los gastos públicos, determinar sueldos, legislar sobre las aduanas, fijar las calidades que debían reunir los miembros del futuro Congreso, etc.

—

II—El cabildo había declarado el 25 de Mayo, que los miembros de la junta serían responsables ante sus estrados por el mal desempeño de las funciones que se les encomendaba; pero esa precaución debía frustrarse en el desarrollo de la revolución ante el poder y la fuerza real de la junta: no pasó mucho tiempo sin que el cabildo, que se había reservado los poderes de alto tribunal político, fuera disuelto y reorganizado por la junta á nombre del pueblo. El de-



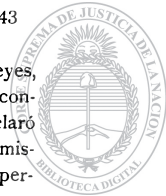
creto de 17 de Octubre de 1810 dice así: «Exigiendo
«el orden público la remoción de los individuos que
«formaban ese Exmo. Ayuntamiento por los repetidos
«ultrajes que han inferido á los derechos de ese pue-
«blo, y *residiendo en esta junta una representación*
«*inmediata del pueblo que la constituye órgano le-*
«*gítimo de su voluntad*, ha separado á los expresa-
«dos capitulares con expresa declaratoria de que
«jamás puedan ejercer cargo consejil en esta ciudad,
«ni en ninguna otra de su distrito, y en su lugar *ha*
«*elegido á nombre del pueblo á los señores. . . .*»

El poder real de la junta resultaba mayor que el de los virreyes por ser revolucionario y porque no tenía contrapeso, ni correctivo, desde que no existía en América, ni fuera de América autoridad alguna que pudiera refrenar sus demasías.

La junta dividió sus funciones en dos secretarías: la de hacienda, que puso á cargo del Dr. Passo, y la de gobierno y de guerra, que encomendó al Dr. Moreno.

El decreto de 28 de Mayo dispuso que en los asuntos leves y de urgente despacho bastara la firma del presidente autorizada por el respectivo secretario, y que en los negocios que debieran decidirse por la junta formaran ésta el Presidente y cuatro vocales, agregando que «en los asuntos interesantes de alto go-
«bierno debieran concurrir todos precisamente.» (1)
Los negocios relativos al patronato debían dirigirse á

(1) Esta parte del reglamento estuvo en vigencia mientras subsistió la Junta; sin embargo, el decreto de 23 de Setiembre de 1811 que creó el primer triunvirato, que era, sin duda alguna, «asunto interesante de alto gobierno,» no aparece firmado sino por cinco miembros de la Junta, notándose la ausencia del más caracterizado de todos: el dean Funes.



la junta en los mismos términos que á los virreyes, «sin perjuicio de las extensiones á que legalmente conduzca el sucesivo estado de la península.» Declaró también que la junta en corporación tendría los mismos honores del virrey y que los recibiría en la persona de su presidente.

El último detalle interesa á la historia política del país más de lo que á primera vista puede parecer, porque dió motivo ocasional á que las rivalidades suscitadas dentro de la junta, por la incompatibilidad de caracteres y de tendencias entre presidente y secretario, estallaran en el ruidoso suceso que la dislocó y la transformó á fines del mismo año.

El presidente de la Junta era un patriota honorable, en toda la extensión de la palabra, pero de inteligencia limitada, casi estrecha, conservador por educación y por índole y muy apegado á las exterioridades del mando. Moreno encarnaba el espíritu de la revolución, era el genio fulgente de nuestro pueblo, la representación más alta del pensamiento liberal y moderno en esta parte de América; era, acaso, el único de los hombres de la época que se había arrojado en la aventurada empresa de llegar á la independencia del país con el propósito de constituir un gobierno orgánico que asegurase para el futuro la libertad civil y política.

Uno y otro se distinguían por los rasgos acentuados del carácter. Saavedra era grave, enérgico y tenaz; Moreno impetuoso, osado y más enérgico que Saavedra. El Presidente de la Junta, con el mando tradicional y prestigioso de los patricios, había adquirido verdadera influencia en la masa popular; contaba, además, con la buena voluntad de la clase conserva-



dora y con la obligada preferencia de los europeos que debían optar entre él y Moreno. Este tenía, en cambio, el concurso entusiasta de la juventud ilustrada, y, lo que valía mucho más, la fuerza del carácter y la luz del espíritu.

Al principio todos unieron sus esfuerzos para conjurar los peligros que amenazaban la causa nacional; la opinión de Moreno preponderaba en los consejos y Saavedra no la resistía, porque él, como todos los miembros de la junta, antepone a las rivalidades personales el interés supremo de salvar la causa de la patria; pero, cuando se despejó el horizonte, cuando los pueblos del virreynato, con excepción de Montevideo y del Paraguay, acataron el nuevo gobierno y, sobre todo, cuando llegó la noticia de la victoria de Suipacha, el antagonismo latente se manifestó sin reserva, hasta convertirse en lucha de facciones.

Un incidente imprevisto precipitó los sucesos. Los oficiales patricios quisieron celebrar en su cuartel la victoria de Suipacha, en la que tan gran parte habían tenido uno ó dos cuerpos del mismo regimiento. Entre los invitados á la fiesta figuraba en primer término el Sr. Saavedra, jefe del Regimiento, y los otros miembros de la Junta. Moreno también concurre; pero, por error ó por otro motivo, el centinela le cerró el paso y el fogoso secretario se retiró con el enfado natural.

La fiesta se había preparado con pompa. En la cabecera de la mesa se había formado una especie de dosel, entre cuyos adornos se veían dos coronas de flores y bajo el cual se sentaron el Sr. Saavedra y su esposa. Un oficial de última clase llamado Duarte tomó las coronas y las ofreció al presidente de la junta



y á su digna consorte, con conceptos propios de un beodo. Dice el historiador de la revolución argentina que, según la tradición, se propasó hasta decirle que la América esperaba con impaciencia que tomara el cetro y la corona. El Sr. Saavedra no daría seguramente importancia á tan torpes palabras; pero los liberales, amigos de Moreno, manifestaron allí mismo su indignación. Moreno tuvo conocimiento del suceso la misma noche; tomó la pluma, y con la inspiración del reciente agravio, redactó el decreto vibrante que la junta sancionó el día 6 de Diciembre. He aquí el texto de algunas de sus disposiciones, prescindiendo de los considerandos:

«Art. 1°—El artículo 8° de la orden del día del 28 de Mayo de 1810 queda revocado y anulado en todas sus partes.» El artículo derogado declaraba que correspondía á la junta, en corporación, los mismos honores que á los virreyes y que los recibiría en la persona del presidente.

«Art. 2°—Habrà desde este día absoluta, perfecta é idéntica igualdad entre el presidente y demás vocales de la junta.»

«Art. 4°—Ni el presidente ni ningún otro individuo de la junta, en particular, revestirán carácter público, ni tendrán comitiva, escolta ó aparato que los distinga de los demás ciudadanos.»

«Art. 5°—Las esposas de los funcionarios públicos no disfrutará de los honores, ni de las prerogativas de sus maridos.»

«Art. 8°—Habiendo echado un brindis Don Atanasio Duarte con que ofendió la probidad del presidente y atacó los derechos de la patria, debe perecer en un cadalso; por el estado de embriaguez en que se halla-



«ba, se le perdona la vida; pero se le destierra perpetuamente de esta ciudad, porque un habitante de Buenos Aires ni ebrio, ni dormido, debe tener impresiones contra la libertad de su país.»

El Presidente Saavedra firmó ese decreto, aplazando su resentimiento para mejor oportunidad, como se verá en seguida.

—

III—Entre las resoluciones de la asamblea del 22 de Mayo figuraba la que expresan las actas del 23, 24 y 25 en estos términos:

«Que los referidos señores (los de la junta) despa-
«chen sin pérdida de tiempo, órdenes circulares á los
«gefes de lo interior y demás, á quienes corresponde,
«encargándoles muy estrechamente y bajo de respon-
«sabilidad, hagan que los respectivos cabildos de cada
«uno convoquen, por medio de esquelas, la parte
«principal y más sana del vecindario para que, for-
«mando un congreso de sólo los que en aquella forma
«hubiesen sido llamados, elijan sus representantes y
«éstos hayan de reunirse, á la mayor brevedad, en
«esta capital para establecer la forma de gobierno
«que se considere más conveniente.»

Parece deducirse de los términos empleados que se trataba de organizar un congreso con facultades de cuerpo constituyente *para que determinara la forma de gobierno que considerase más conveniente*, lo que era muy distinto de convocarlo para que asumiera el gobierno; pero la junta no lo entendió así, ó quiso dar mayor extensión á la resolución y en su circular de 27 de Mayo, dirigida á los pueblos del virreynato, después de dar cuenta de las graves ocurrencias de



los días anteriores y de la transformación del gobierno, decía estas textuales palabras:

«Así mismo importa que quede entendido que los «diputados han de irse incorporando en esta junta «conforme y por el orden de su llegada á esta capital, para que así se hagan de la parte de confianza pública que conviene al mejor servicio del «rey y gobierno de los pueblos, imponiéndose con «cuanta anticipación conviene á la formación de la «general, de los asuntos que tocan al gobierno.»

El biógrafo de D. Mariano Moreno afirma que la junta había encargado la redacción de la circular al Dr. Castelli en horas de mucho trabajo y que la había firmado sin leerla; que el principal asunto de esa pieza era incitar á las provincias á que mandaran pronto sus diputados al congreso y que la ampliación de Castelli pasó inadvertida. Pero los historiadores de la revolución argentina desechan esa explicación y opinan que la junta modificó, deliberadamente, por graves motivos, la resolución del 22. Se había resuelto enviar una expedición al interior para ayudar la buena voluntad de los pueblos, pero no era posible calcular en aquellos momentos si la mayoría de los diputados traería instrucciones y propósitos de adherir con firmeza al pensamiento trascendental de la junta, que era en definitiva la independencia del país, y era prudente halagarlos desde el primer día con la participación en el mando, y envolverlos, á medida que llegaran, en la solidaridad que resulta del gobierno y de las responsabilidades comunes.

Es inadmisibles la suposición de que la junta firmara sin leer un documento de tanta importancia. Era esa la primera palabra que dirigía á los pueblos del in-



terior, y comunicaciones de esa naturaleza no son tan livianas como para encomendarlas á una sola persona y firmarlas á ciegas. En aquellos días el gobierno revolucionario no tenía en mano asunto de mayor trascendencia: la ciudad festejaba su triunfo, los peninsulares, amedrentados y encojidos, no pensaban todavía en revueltas ni conjuraciones, aún no se habían movido armas y no habría causa que justificara ó disculpara lijereza semejante en hombres como Belgrano, Passo y Moreno.

Los diputados comenzaron á llegar Fúnes, el célebre deán de la catedral de Córdoba, fue de los primeros. Pero después de seis meses, á principios de Diciembre, era todavía escaso el número de las ciudades representadas. El tiempo les debía parecer largo á los que vinieron desde el principio. Aunque recibidos como huéspedes ilustres en la más distinguida sociedad de la capital, no tenían participación alguna en el gobierno. Habían hecho algunas insinuaciones para que se les incorporara á la junta, pero ésta las había eludido cortésmente. La situación era incómoda para hombres de valer y de temperamento político como el deán Funes.

Por motivos diversos, que sería largo detallar, los diputados de las Provincias, á quienes dirigía el deán, se habían agrupado en torno de Saavedra, y éste, para contrarrestar la influencia de Moreno dentro de la junta y vengar el agravio del decreto de 6 de Diciembre, acordó con ellos que formularan oficialmente la exigencia para que se les diera participación en el gobierno.

El 18 de Diciembre se presentaron en la sala de la Junta los nueve diputados que se encontraban en Bue-



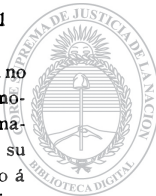
nos Aires (por Mendoza, Santa-Fé, Corrientes, Salta, Córdoba, Tucumán, Tarija, Catamarca y Jujuy) y tomando la palabra el deán Funes, por todos ellos dijo: que venían á reclamar el derecho que les competía para incorporarse en la Junta Provisional hasta que se reuniera el Congreso; que este derecho, además de ser incontestable porque la capital no tenía títulos para elegir gobernantes por sí sola, había sido reconocida por la misma Junta en la circular de 27 de Mayo, que los pueblos miraban con pesar que sus representantes no hubieran sido puestos en posesión de la autoridad que les correspondía y que les había sido prometida solemnemente, y que á esto se agregaba la necesidad de restablecer la tranquilidad pública comprometida por el general descontento contra la Junta. Los vocales de la Junta (Passo y Moreno) contestaron: que los diputados no tenían el derecho que pretendían, porque habían sido convocados para celebrar un congreso nacional, y hasta que éste no se reuniera no podían desempeñar sus funciones; que su carácter era inconciliable con el de miembros de un gobierno provisorio, que debía cesar cuando aquel comenzara á funcionar; que la cláusula de la circular había sido un rasgo de inexperiencia que el tiempo había demostrado enteramente impracticable; que el ejemplo de las cortes y de toda Asamblea Nacional se oponía á la pretensión de los diputados; que el reconocimiento posterior de los pueblos subsanaba la falta de su concurso á la instalación y que en los poderes, único título de su representación, no se les destinaba á gobernar el virreynato, sino á formar un Congreso Nacional y establecer en él un gobierno sólido y permanente. Agregaron que el descontento público que



se mencionaba resultaba del decreto de 6 de Diciembre (aboliendo los honores del Presidente) y que no podía considerarse como la expresión de la opinión preponderante del pueblo.

Agotada la discusión, se trató sobre la manera de decidir la cuestión, conviniendo todos en que sería peligroso convocar al pueblo y que además el vecindario de Buenos Aires no tenía autoridad para decidir un conflicto que tocaba al derecho de todas las Provincias, por lo cual se acordó que, reunidos á los vocales de la Junta, los diputados presentes decidieron el punto, votando por el orden de asientos que casualmente habían tomado.

Como era de esperarse, los nueve diputados que reclamaban participación en el gobierno votaron por la incorporación y concurrieron en el mismo sentido el presidente de la Junta y los vocales Azcuénaga, Alberti, Matheu y Larrea, declarando que no procedía la incorporación, según derecho, pero que accedían á ella por conveniencia pública. El Dr. Passo y el Dr. Moreno fueron los únicos que votaron en contra. El último fundó su voto y lo consignó en el acta en los siguientes términos: «que consideraba la incorporación «de los diputados á la Junta contraria á derecho y al «bien general del Estado en las miras sucesivas de la «gran causa de su constitución; que en cuanto á la «convulsión política que ha preparado esta reclamación, derivándose toda ella de la publicación del «reglamento de 6 de Diciembre, cree contrario al bien «de los pueblos y á la dignidad del gobierno, preferir «una variación en su forma á otros medios enérgicos «con que pudiera apaciguarse fácilmente; pero que «decidida la pluralidad y aceptado el concepto de un



«riesgo inminente contra la tranquilidad pública, si no
«se acepta esta medida, es un rasgo propio de la mo-
«deración de la Junta conformarse con ella. Última-
«mente, que explicado de un modo singular contra su
«persona el descontento de los que han impelido á
«esta discusión, no pudiendo ser provechosa al público
«la continuación de un magistrado desacreditado,
«renuncia su empleo, sin arrepentirse del acto de 6
«de Diciembre (publicado en *La Gazeta* del 8), que
«le ha producido el presente descrédito; antes bien,
«espera que algún día disfrutará la gratitud de los mis-
«mos ciudadanos que ahora lo han perseguido, á quie-
«nes perdona de corazón, y mira su conducta errada
«con cierto género de placer, porque prefiere al interés
«de su propio crédito que el pueblo empiece á pensar
«sobre el gobierno, aunque cometa errores que después
«enmendará, avergonzándose de haber correspondido
«mal á unos hombres que han defendido con intencio-
«nes puras sus derechos».

La junta primitiva sacrificó y puso en peligro va-
rias veces los derechos individuales con la extensión
de sus poderes discrecionales; pero, en cambio, res-
pondió con eficacia á las necesidades premiosas de
la revolución. Con la incorporación de los diputados
de las provincias perdió vigor para la acción y no
aumentó las garantías de buen gobierno. El deán Fu-
nes, sobre quien pesa la responsabilidad histórica de
la transformación que sufrió el 18 de Diciembre, lo
ha declarado ingenuamente en su *Ensayo de Historia
Civil*. «Hacia tiempo, dice, (hablando de la nueva junta)
«que ella tocaba los malos resultados de un sistema sin
«exactitud en sus dimensiones, sin medios proporciona-
«dos á su destino y sin una fuerza motriz capaz de



«recorrer desembarazadamente su espacio. Fuese por precipitación, fuese por artificio, fuese, en fin, porque se creyó que el período de la primera junta sería muy limitado, lo cierto es que *dando a los diputados una parte activa en el gobierno, fue desterrado de su seno el secreto de los negocios, la celeridad de su acción y el vigor de su temperamento*».

La junta había hecho ya oficialmente idéntica declaración en el preámbulo del Reglamento de 22 de Octubre de 1811. Explicando la creacción del triunvirato después de la triste experiencia recogida desde el 18 de Diciembre del año anterior, dijo: «Por este principio, no menos evidente, fue que, *palpando la junta el riesgo que corría el Estado por no ser compatible con el gobierno de muchos sufragantes la unidad de planes, la celeridad del despacho, ni el secreto de las deliberaciones, se creyó obligada a hacer un nuevo reglamento provisorio* por el cual, salvo aquellos inconvenientes, se viese la forma bajo la que debían obrar las ciudades en calidad de cuerpo político. La base en que creyó debía fundarlo fue la división de poderes, etc».

La renuncia de Moreno fue desechada por la junta y así se hizo constar en el acta de la misma sesión; pero, como lo dice su biógrafo, «esta renuncia de un hombre de bien era irrevocable».

Seis días después fue nombrado plenipotenciario en Londres: aceptó, para continuar sirviendo a la patria, y murió en la travesía. Para tener idea de tan poderosa individualidad basta recordar que ninguna otra ha dejado una impresión más viva de fuerza y de genio político, a pesar de no haber figurado en el gobier-



no sino durante el tiempo corrido desde el 25 de Mayo, hasta el 18 de Diciembre de 1810.

Modificada la junta de Mayo con la incorporación de los diputados, no tardó en revelar las tendencias excluyentes de una verdadera oligarquía. Las formas con que intentó cubrir el propósito deliberado y persistente de conservar la dirección política del país, postergando sin término la reunión del Congreso constituyente, no engañaron á los contemporáneos, ni extraviaron el juicio de la posteridad. Se vió en transparencia cuando decretó las juntas provinciales el 10 de Febrero de 1812, cuando organizó el triunvirato de 23 de Setiembre y cuando dictó el reglamento constitucional el 22 de Noviembre del mismo año, documentos que vamos á examinar en seguida.

—

IV—El decreto que creó las juntas provinciales comenzaba declarando que «los mismos motivos que «obligaron á sustituir una autoridad colectiva á la individualidad de los virreyes debieron también introducir una nueva forma en los gobiernos subalternos. «El justo temor de no arriesgar unos primeros pasos, «que debían decidir de nuestra suerte en la premura «de un tiempo en que la junta no tenía una confianza entera en los pueblos, la puso en la necesidad de «no alterar el sistema antiguo, depositando los gobiernos en manos de una fidelidad á prueba de peligros.»

Después, dando la medida de la importancia que atribuía al gobierno colectivo como la forma propia y adecuada del gobierno libre, agregaba: «la autoridad que no es contenida por la atención inquieta y celosa de otros colegas, rara vez deja de corromper «las mejores intenciones; lo contrario sucedería ha-



«llándose el mando del gobierno en manos de muchos. De aquel continuo flujo y reflujo de autoridad se formarán costumbres públicas que templen la acrimonia del poder y la bajeza de la obediencia». Insiste sobre esto y al fin invoca como circunstancia concurrente, pero secundaria: «para que esta grande obra tenga su perfección, cree también la junta *que será de mucha conducencia el que los individuos de estas juntas gubernativas sean elegidos por los pueblos*. Por este medio se conseguirá que, teniendo los elegidos á su favor la opinión pública, sólo el mérito eleve á los empleos y que el talento sea el único titulo para mandar».

Era hasta donde alcanzaba en ese momento la noción del gobierno regular, orgánico y ponderado, después que se había apagado el espíritu luminoso de Moreno, quien, apenas salvados los primeros peligros de la revolución, propagaba en *La Gazeta* la necesidad de que se reuniera sin demora el Congreso constituyente para que creara un gobierno de poderes limitados. Invocando el ejemplo de Inglaterra decía que era «el modelo que presentan los tiempos modernos á los pueblos que desean ser libres», y que esa misma nación «habría visto desaparecer la libertad que le costó arroyos de sangre, si el *«equilibrio de los poderes no hubiese contenido á los reyes sin dar lugar á la licencia de los pueblos. Equilíbrense los poderes y se obtendrá la pureza de la administración»*. Los constitucionalistas posteriores no han dicho nada más conceptuoso en términos tan breves. Y nótese que Moreno escribió estas palabras en 1810, usando la expresión propia de poderes equilibrados, en lugar de la equivo-



cada división de poderes independientes que enseñaba Montesquieu y que tanta boga alcanzó en Europa y América.

La parte dispositiva del decreto de 10 de Febrero del año 11 merece toda nuestra atención. Establecía juntas de dos categorías: las provinciales, que debían constituirse en las capitales de Provincia, y las subalternas que correspondían á cada ciudad ó villa con derecho á designar representantes en el Congreso. Por decreto de 10 de Julio de 1810 se había resuelto que correspondía nombrar representantes á las ciudades ó villas cabeceras de partido. Las juntas provinciales debían componerse de cinco miembros: el gobernador ó intendente en ejercicio y cuatro colegas elegidos por el pueblo (art. 1°); y las juntas subalternas de tres miembros: el comandante de armas y dos socios que el pueblo elegiría. (Art. 6°).

En las juntas provinciales residía *in-solidum* toda la autoridad del gobierno de la Provincia, siendo de su conocimiento los asuntos que por las leyes y ordenanzas pertenecían al Presidente ó gobernador intendente; *pero con entera subordinación á la junta superior* (art. 2°). A las juntas subalternas se les atribuía el conocimiento de los asuntos en que hasta entonces entendían los subdelegados de la Real Hacienda (art. 7°). Las juntas subalternas dependían de las de Provincia (art. 8°).

Encargaba especialmente á las juntas que velaran incesantemente por la tranquilidad, seguridad y unión de los pueblos y que mantuvieran y fomentaran el entusiasmo por la causa común (art. 12); que disciplinaran é instruyeran las milicias (art. 12); que calcularan los recursos de cada ciudad para cuando fue-



ran requeridos (art. 14), y que entendieran en el alistamiento de reclutas (art. 15).

Les prohibía intervenir en los negocios judiciales ó de competencia de los cabildos, y expresamente declaraba la incompatibilidad entre el puesto de miembro de la junta y el de alcalde ordinario (art. 17), y la inhabilidad absoluta de los eclesiásticos seculares ó regulares, lo que no obstaba á que el autor del Reglamento, deán de una catedral, fuera miembro de la Junta Superior de la Capital.

Por primera vez se declaraba en el Río de la Plata el derecho electoral del pueblo, en cuyo nombre y en cuyo beneficio se inició la revolución, y nos interesa conocer sus caracteres originarios. Disponía el art. 21 del Reglamento que, para la elevación de vocales, los alcaldes de barrio *citaran á los vecinos de sus respectivos cuarteles para que concurrieran á prestar libremente su voto* por un elector, que debía asistir con su sufragio al nombramiento de los miembros de la junta, advirtiendo que, con excepción del gobernador, *debían concurrir* al nombramiento de electores todos los individuos del pueblo, incluso los que formasen parte de los cabildos eclesiásticos y seculares.

El decreto omite la sanción penal para los inasistentes; pero los términos preceptivos de la disposición y la citación oficial no dejan lugar á duda que en ese documento se atribuye al sufragio el doble carácter de un derecho y de un deber político. Cincuenta años después todavía se citaba al vecindario de la campaña por medio de los alcaldes, cada vez que debía tener lugar una elección en la provincia de Buenos Aires, y aquella regla, fundada en el concep-



to de que el sufragio es moralmente obligatorio para los ciudadanos de un pueblo libre, amparaba la práctica abusiva de la influencia y de la coacción oficial que ha bastardeado nuestro régimen electoral.

Los electores designados en cada cuartel debían reunirse el mismo día en la sala capitular para proceder al nombramiento de los vocales de la junta (art. 22). Si se producía empate, la decisión correspondía á la junta gubernativa de la Capital (art. 23). Las juntas provinciales así constituidas debían durar hasta que, reunido el Congreso, resolviera lo conveniente al bien de la patria.

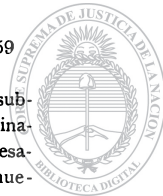
Teniendo presente que las principales ciudades del Virreynato habían designado ya sus diputados y que todos ellos figuraban en la junta gubernativa, se comprende que no se habría reformado provisionalmente los gobiernos de provincia con este mecanismo bastante complicado para las ideas de la época, si no hubiera existido el propósito deliberado de postergar la reunión del Congreso, desde que era más sencillo incitar á las ciudades que aún no habían mandado sus representantes á que cumplieran el programa de la revolución de Mayo. Si las ciudades podían constituir juntas provinciales y subalternas por medio del sufragio popular, no se ve cual podía ser el inconveniente para que los cabildos nombraran en consejo abierto los diputados que faltaban.

Un historiador argentino, que es, además, respetado constitucionalista, señala como los primeros síntomas del federalismo en el Río de la Plata la incorporación de los diputados á la Junta gubernativa y la creación de las Juntas Provinciales. Respetando como debemos tan autorizada opinión, disentimos de ella



sustancialmente. La incorporación de los diputados en la Junta correspondió á la idea embrionaria del sistema representativo y no tiene relación directa con el federalismo. La revolución de Mayo se hizo en nombre del derecho de los pueblos para darse gobierno propio, durante la acefalía del régimen monárquico. Ese derecho era el patrimonio de todos los pueblos del virreynato. La forma jurídica con que Passo había sustentado la iniciativa de la capital presumía el derecho colectivo de todas las provincias para participar del gobierno, una vez que estuvieran en situación de hacerlo. Ya se adoptara el sistema federal ó el régimen unitario, era igualmente incontrovertible que los pueblos del interior podían y debían intervenir en el gobierno. La junta de Mayo, que asumió el poder y la autoridad de los virreyes, fue esencialmente unitaria y no perdió ese carácter con la incorporación de los diputados, porque éstos no la desmembraron como poder nacional, sino que refundieron en ella la representación de que estaban investidos. Hasta el 18 de Diciembre eran diputados de las Provincias, y desde el 19 fueron miembros de la Junta superior y única del virreynato, con las mismas facultades que había recibido la originaria el 25 de Mayo. Las Provincias no habían tenido representación cuando se organizó la primera, y fue esa representación la que reclamaron y obtuvieron los diputados, representación á la que tenían título los pueblos del interior, ya se les considerase como cuerpos políticos independientes ó como agrupaciones de un solo Estado.

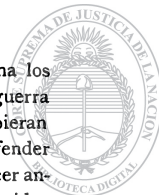
En cuanto al decreto que creó las Juntas Provinciales, parécenos que lleva el sello propio del sistema



unitario. Las juntas sustituyen á los intendentes y subdelegados, pero continúan, como aquellos, subordinados al poder central. El artículo 2º lo declara expresamente. Además, la Junta Gubernativa nombra y renueva los presidentes de las provinciales y subalternas, decide los empates de la elección de los vocales é interviene en su mecanismo interno hasta señalarles los días y horas de despacho (arts. 10 y 11). Las atribuciones que les confiere son exactamente las que correspondían á los Intendentes y subdelegados, y en ellas no hay el menor rastro de federalismo, porque todas tienen como punto de arranque la ordenanza de Intendentes de 1782. Las modificaciones que introduce en el antiguo régimen son las que expresa el preámbulo: gobierno colectivo en vez de gobierno individual y elección popular de los vocales, modificaciones que se avienen del mismo modo con el sistema unitario que con el sistema federal. La Junta Gubernativa es siempre el centro del gobierno y las nuevas autoridades continúan *en entera subordinación*, según los términos del decreto.

No negamos que existiera desde entonces en los pueblos del interior la tendencia federalista, que no es otra cosa que descentralización de poder y que principia por la organización del municipio; pero no creemos que ninguno de los dos antecedentes citados sea su expresión propia, ni su manifestación inicial.

V.—Sigamos la marcha de los sucesos que van á transformar las instituciones. Estamos en los comienzos del año 11. D. Javier de Elío, investido con el cargo de virrey que le confirió el consejo de la Regencia, ha declarado la guerra á la Junta de Buenos Aires, des-



de Montevideo. La escuadra española domina los ríos. La Junta, urjida por la opinión, arma en guerra tres pequeñas embarcaciones, y antes de que hubieran completado sus preparativos, las despacha á defender la navegación del Paraná, con la orden de perecer antes que rendirse. La escuadrilla sutil de Montevideo persigue los débiles barcos, los alcanza frente á San Nicolás y los aborda. El combate se concentra sobre la cubierta de la goleta *Invencible*, y dos terceras partes de su tripulación sucumben combatiendo con heroismo: allí estaba Azopardo, que cayó herido cuando iba á incendiar la Santa Bárbara. Belgrano acaba de ser derrotado en Tacuarí y corre riesgo de quedar cortado con su división. El espíritu público, irritado por los desastres, inculpa su impericia á la Junta Gubernativa. Los amigos de Moreno se reúnen y organizan un club de propaganda con el nombre de «Sociedad Patriótica», cuyo programa es debatir los principios históricos y científicos del gobierno libre, mientras se reúne el congreso decretado el 25 de Mayo. La Junta siente que la tempestad se le viene encima y ensaya conjurarla, dando satisfacción á las exigencias del patriotismo con una medida de extremado rigor contra los españoles. En sus tribulaciones no se le ocurre otra cosa que ordenar el extrañamiento inmediato de todos los españoles solteros que residían en la capital: pasaban de tres mil, estaban vinculados por los negocios por las relaciones sociales, por lazos de familia con la masa nacional y era conciencia pública que, aún cuando en el fuero interno deseaban el triunfo de su bandera, no habían dado el menor motivo para la proscripción. El efecto del decreto fue contrapudemente, porque era injusto é inútil: el



pueblo se conmovió en presencia del inmerecido castigo, y á las pocas horas ya se hablaba de peticionar en favor de los desterrados. La sociedad patriótica aprovechó la favorable oportunidad, tomó la iniciativa y presentó la solicitud de gracia con la firma de sus adherentes más caracterizados: Agustín Donado, Julian Alvarez, Beruti, French, Dupuy, etc. Era imposible resistir, y la Junta decretó al pie de la solicitud: *23 de Marzo de 1811. Penetrado el gobierno de los mismos nobles sentimientos del pueblo de Buenos Aires ¿cómo podría dejar de prestarse con la mayor satisfacción á tan generosa súplica? Concedida—Saavedra, etc.*

El decreto de proscripción había movido el sentimiento público con su crueldad, y el de perdón no engañó á nadie con la afirmación enfática de la generosidad gubernativa. La impopularidad de la Junta aumentaba cada día. La Sociedad Patriótica iniciaba el debate público sobre los principios de buen gobierno, atraía la juventud y los espíritus liberales, y á nadie se le ocultaba que el objeto de su propaganda era apresurar la reunión del Congreso Constituyente, postergado sin término por la tendencia oligárquica de la Junta.

Tal era la situación política de la Capital cuando estalló la escandalosa asonada del 5 y 6 de Abril, que no puede ser llamada revolución sin decir un absurdo, porque fue un acto de fuerza en favor del gobierno establecido para disolver la sociedad patriótica y sofocar la oposición. El Sr. General Mitre dice que es ésta la única revuelta argentina que no ha encontrado quién asuma ó acepte su responsabilidad; pero la tradición y la crítica histórica atribuyen la cábala de

su organización al célebre deán de la Catedral de Córdoba.

El 5 de Abril por la noche se reunieron en los suburbios de la ciudad grupos de gente colecticia, bajo la dirección del alcalde de las quintas D. Tomás Grijera, vecino apasionado, devoto de Saavedra, á quien secundaba el Dr. D. Joaquín Campana, abogado mediocre, cuya insignificancia política, notoria en su época, ha sido conformidad por la posteridad, y cerca de las once se dirijieron á la plaza de Mayo. Cuando llegaron, prorrumpieron en gritos reclamando cabildo abierto, porque el pueblo tenía que pedir. El Cabildo que estaba reunido, fue llamado á la fortaleza por la Junta. Vieytes y Rodríguez Peña exigieron, al saber de lo que se trataba, que se disolviera el tumulto por la fuerza; y en esa discusión estaban cuando se oyeron redobles de tambor: eran los Patricios, los Arribeños, los Montañeses, la Artillería y los Húsares del Rey que habían salido de sus cuarteles para incorporarse al movimiento. Un grupo como de sesenta personas se presentó en la fortaleza encabezado por el Dr. Campana y por el coronel de los Húsares, Martín Rodríguez, devoto, como Grijera, del Presidente Saavedra, y exigieron que volvieran los cabildantes á la sala capitular, para oír lo que el pueblo y el ejército pedían en el interés de la salvación de la patria.

En la madrugada del 6 el Cabildo presentó á la Junta las peticiones del pueblo, entre las cuales figuraban las siguientes, que bastan para señalar el origen y fin políticos de la asonada y la torpeza del que las formuló por escrito (probablemente el Dr. Campana). Decía una de ellas: «como el depósito «del Poder Ejecutivo en muchas personas prepara-





«ba las trabas, entorpecimientos é inconvenientes que
«*tocamos desde que se le sustrajo al Presidente D.*
«*Cornelio Saavedra á quien el pueblo había dado*
«*el mando de las armas y nombrado General, es su*
«*voluntad ahora que retrovierta á él ese mando en*
«*toda su plenitud, mediante la suma confianza que*
«*le merece, y porque ¡siendo una prerogativa que*
«*el pueblo le concedió, no hubo en nadie facultad*
«*para quitársele.*»

El propósito era torpe y el antecedente que se invocaba contenía dos inexactitudes, una fundamental y de principios, la otra que se relacionaba con las pretensiones de mando del Presidente de la Junta: el Poder Ejecutivo nunca estuvo á cargo del Presidente de la Junta, y bastaba leer el reglamento de 28 de Mayo para saber que sus facultades individuales se limitaron á los asuntos de trámite y á los que fueran *leves y urgentes*; el generalato era una invención arrancada del mando de las armas que se le había confiado, en efecto, como cargo anexo á la Presidencia de la Junta.

Y agregábase: «Teniendo el pueblo, como acaba
«de sentarse, toda su confianza en el Sr. D. Corne-
«lio Saavedra, quiere que la inspección de las tro-
«pas corra á su cargo incorporado al mando de las
«armas, para que se desempeñe por él mismo ó *del*
«*modo que él lo tenga por conveniente.*»

En otra se exigía la separación y extrañamiento de los vocales de la oposición: Rodríguez Peña, el patriota cuya casa fue centro de la revolución, el secretario de Castelli en la campaña del interior: Vieytes, Larrea y Azcuénaga, miembros de la junta primitiva, con cuyos nombres estamos familiarizados



desde los días de Mayo, y que fueron sustituidos por Chiclana que llegaba de Salta, á quién se recordaba para prestigiar el atentado, por D. Anastasio Gutiérrez y por D. Juan de Alagón, vecinos sin importancia política, y por el Dr. Campana que debía ocupar el puesto de vocal secretario, el puesto de Moreno!

Se pedía también el extrañamiento de French, que el 25 de Mayo descubrió los colores que más tarde debían formar la bandera de la patria; de Berutti, á quién se atribuye la designación del personal de la primera junta, los dos diputados que golpearon las puertas del Cabildo á nombre del pueblo y pusieron término á sus procedimientos tortuosos; de Donado, el amigo de Moreno, y para que nada faltara en ese documento de vergüenza, exigían que se hiciera bajar á la capital al General Belgrano, que había conseguido pasar el Uruguay y preparaba la victoria de Las Piedras con los restos de su heroica división, para que respondiera del fracaso de la campaña del Paraguay. El Sr. General Mitre ha dicho, con razón, que ese movimiento, cuya responsabilidad ha sido repudiada por todos los partidos, mutiló al gobierno y decapitó al ejército frente al enemigo.

Por último, la cláusula 17 consignaba esta monstruosidad: El pueblo quiere que cualquier individuo que cometa en adelante un crimen sea juzgado *por el Gobierno, con arreglo á las leyes, debiendo entenderse lo mismo con respecto á los que á la fecha lo hayan cometido y no hayan sido «juzgados por este orden»*

Hemos atribuido la cabala del motín al deán Fu-



nes; pero estamos lejos de creer que él hubiera aconsejado tamaña enormidad. A él le bastaba la separación y el estrañamiento de los miembros de la junta y la disolución de la *Sociedad Patriótica*; lo demás debió ser la obra exclusiva del Dr. Campana y de la intemperancia de los jefes militares.

La junta accedió á todas las peticiones, y al día siguiente los desterrados salieron de Buenos Aires. Belgrano recibió orden de bajar á la Capital á rendir cuenta de su conducta, y aún cuando vaciló si debía someter la suerte de la campaña á las eventualidades de un nuevo mando, prevaleció en su noble espíritu la idea de la disciplina y cumplió la orden inícuca, dejando consignado en su nota oficial de 2 de Mayo, que tuvo «impulsos de obedecer y no «cumplir.»

El 15 de Abril se publicó en una *Gazeta extraordinaria* la representación del *pueblo*, que encabezó Grigera, precedida de consideraciones políticas, cuyo estilo no deja duda que eran de la pluma docta del deán Funes, como lo dicen las crónicas de la época y lo corroboran los historiadores argentinos versados en las letras. Sin embargo, él también rehusa la responsabilidad del motín, y en su Historia Civil asienta que la junta no tuvo influjo alguno en los sucesos que sancionó, poniendo al pie de la petición: *concedido enteramente.* 2

El 18 de Mayo Artigas ganó la batalla de Las Piedras con los elementos militares que había reunido y vigorizado el general Belgrano antes de su innecesaria degracia, y el 26 el general Vigodet abandonó la colonia del Sacramento, buenos sucesos que debieron fortalecer la autoridad de la junta, pero



que no pudieran contrarrestar la influencia del desastre del ejército del norte, batido y deshecho en los campos de Huaqui, el 26 de Julio, á poco de haber comenzado el bombardeo de la escuadrilla española y coincidiendo con la amenaza de las tropas portuguesas sobre la Provincia oriental.

—

VI—La junta no pudo mantener el poder en sus manos impotentes, y el 23 de setiembre constituyó el primer triunvirato en el siguiente bando:

«La Junta Provisional Gubernativa de las Provincias Unidas del Río de la Plata, á nombre del Sr. D. Fernando VII—Teniendo en consideración la celeridad y energía con que deben girar los negocios de la patria y los trabajos que ofrecen al efecto la multitud de los vocales por la variedad de opiniones que frecuentemente se experimentan, ha acordado constituir un Poder Ejecutivo compuesto de tres vocales y tres secretarios sin voto; y debiendo ser los sujetos en quienes recayese la elección de probidad y pública aceptación, se procuró explorar la voluntad general de esta ciudad, por no estar en ejercicio sus diputados electos; y habiéndola conocido, por unánime votación se eligieron los siguientes: para vocales los señores coronel doctor don Feliciano Chiclana, don Manuel de Sarrautea y el doctor don Juan José de Paso, y para secretarios, sin voto, los señores doctor don José Julián Pérez, de gobierno; doctor don Bernardino Rivadavia, de guerra; y el doctor don Vicente López, de hacienda; los cuales tomarán el gobierno bajo las reglas y modificaciones que deberá establecer la corporación ó junta conservadora que formarán



«los señores diputados de los pueblos y Provincias
«en consorcio con los dos suplentes que eligirá esta
«Capital, por impedimento de los dos propietarios
«que están constituidos vocales, debiendo entender-
«se que los miembros que componen el Poder Ejec-
«utivo son responsables de sus acciones á la jun-
«ta conservadora. Y para que así se tenga entendido,
«se publicará por bando en la forma ordinaria, fi-
«jándose ejemplares en los parajes de estilo. Bue-
«nos Aires, 23 de Setiembre de 1811—Domingo Ma-
«theu—Juan de Alagón—José Antonio Olmos—Doctor
«Juan Ygnacio de Gorriti—Francisco Antonio Cruz
«de Ocampo».

La oligarquía formada por los diputados del inte-
rior y dirigida por Funes declaraba así la propia in-
capacidad y rendía su autoridad, con la vana espe-
ranza de mantener, bajo la forma insólita de Junta
Conservadora, la influencia y el poder que no había
podido conservar como Junta Gubernativa. Por se-
gunda vez, en el espacio de un año, los sucesos iban
á demostrar las inanidad de estos cálculos. El ca-
bildo de 1810 se reservó el derecho de vigilar y re-
mover á los miembros de la junta que el pueblo le
impuso el 25 de Mayo, y fue la junta la que disol-
vió el cabildo el 17 de Octubre del mismo año, in-
vocando la autoridad originaria del pueblo. Ahora
la oligarquía de los diputados, abatida por la opi-
nión pública, organiza el primer Triunvirato, insti-
tuyéndose juez de sus acciones y poder superior
del Estado; pronto veremos que corre la misma
suerte que el Cabildo de 1810, comprobando que
es de todo punto efímera la garantía que ofrece una
corporación que no está apoyada por la opinión



pública, para responsabilizar á los depositarios de la fuerza.

—

VII—El decreto de 23 de Setiembre modifica ó, más bien dicho, transforma sustancialmente el gobierno constituido. Suprime la Junta Gubernativa y con ella los últimos vestigios de la autoridad organizada el 25 de Mayo; fracciona el poder entre las dos entidades que debían sustituirla, pero deja indeterminadas las atribuciones que corresponden á la una y á la otra, declarando simplemente que el triunvirato gobernará según las *reglas ó modificaciones* que la Junta Conservadora establezca. El triunvirato reclamó inmediatamente reglas de gobierno que determinaran sus atribuciones y fijaran su responsabilidad. La Junta confió al deán Funes el encargo de prepararlas y éste proyectó el «Reglamento de la Junta Conservadora», promulgado el 22 de Octubre de 1811, del cual vamos á dar breve noticia.

Un preámbulo histórico precede la parte dispositiva. Declara la Junta en él que la experiencia le ha demostrado la necesidad de reglamentar el gobierno de una manera más adecuada á las circunstancias, y agrega: «La base en que creyó debía fundarlo (el reglamento) fue la división de poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, reservándose aquéllos la Junta «de Diputados, bajo el título de Junta Conservadora.»

En 1811 corrían por el mundo las ideas sobre el sistema de gobierno de Inglaterra que había divulgado Montesquieu en el siglo XVIII. El ilustre publicista enseña, ó por lo menos deja entender, que el gobierno inglés está constituido de tal manera, que el Poder Ejecutivo no interviene en la legisla-



ción, ni el Parlamento en lo administrativo, ni uno ni otro en lo judicial, división é independencia de poderes que garantiza las libertades individuales. Esta equivocada apreciación llegó á adquirir la autoridad de axioma en la ciencia política, se consagró muchas veces en las leyes fundamentales de Francia é influyó en la organización del gobierno de los Estados Unidos. Como tendremos que ocuparnos especialmente de este punto más adelante, nos limitaremos ahora á consignar que la división absoluta de atribuciones y la entera independencia de los departamentos del gobierno es un error científico que no corresponde al sistema de gobierno inglés, ni á ningún otro.

La Junta debió preveer que se cuestionaría su derecho para cambiar la forma de gobierno establecido. El pueblo de Buenos Aires entregó el gobierno, el 25 de Mayo, á una Junta Provisional constituida determinadamente con un Presidente y ocho vocales; esa Junta, aceptada por los pueblos del antiguo virreynato, fue en seguida bastardeada con la incorporación de los diputados que las ciudades habían nombrado con el diferente fin de formar el Congreso Constituyente; pero, aún así, conservaba la forma de la primitiva entidad y subsistía con su prestigio tradicional. El nuevo reglamento sacaba las cosas de quicio: los diputados que dejaron de lado su investidura de miembros de un cuerpo deliberante para tomar á su cargo las funciones ejecutivas, abandonaban éstas ahora y volvían á su primitivo carácter, y extendiendo su derecho, se anticipaban al Congreso Constituyente, usurpando sus facultades y organizaban nuevo gobierno, con nuevo personal y distinto mecanismo



reservando para sí atribuciones que nadie les había conferido. Por eso, anticipándose á las objeciones, decía el preámbulo:

«Es evidente que no hallándose abierto á la sazón «el Congreso Nacional, la Junta actual de Diputados «sólo tiene una representación imperfecta de la soberanía, es decir, que no reúne en su persona ni toda «la magestad que corresponde al cuerpo que representa, ni todos los derechos y facultades que le son «propios. Pero no por eso es una representación nula, «ni sin ningún influjo inmediato y activo, así como «no lo era la que tenía la Junta antes de la división «de poderes. En ella residía seguramente la soberanía, «en aquel sentido en que el bien mismo del Estado «exigía imperiosamente para aquellos casos urgentes «de que sólo ella podía salvarlos».

Como se ve, la Junta declara que su representación es imperfecta; sin embargo, en el Reglamento que promulga á continuación asume poderes que eran exclusivos del Congreso Constituyente, puesto que da nuevas formas al gobierno y lo organiza sobre bases totalmente diferentes de las que existían; y, yendo más lejos de lo que seguramente habría ido aquel cuerpo, se atribuye á sí misma facultades legislativas, electorales y judiciales para proveer á las necesidades del gobierno, para designar los miembros del Triunvirato y para juzgarlos cuando el caso llegue. En el hecho, queda dominando á los otros poderes por el conjunto de sus facultades y por su duración sin término, como lo veremos analizando la parte dispositiva del decreto.

El reglamento se divide en tres secciones y éstas en veintisiete artículos; la primera sección se refiere á



la Junta Conservadora, cuyo título se explica en el art. 1º, que dice así: «Los diputados DE LAS PROVINCIAS UNIDAS, que existen en esta Capital, componen una Junta con el título de conservadora de la soberanía del Sr. D. Fernando VII y de las leyes nacionales, cuando no se opongan al derecho supremo de la libertad civil de los pueblos americanos». Se mantenía así la apariencia de subordinación á la corona de España, que fue la política argentina hasta 1816; pero salvando desde entonces el derecho de resistir toda ley que contrariase la libertad civil de los pueblos. El primer estatuto constitucional promulgado en el Río de la Plata designa con el nombre de PROVINCIAS UNIDAS, á las que hoy forman nuestra República, antecedente que debemos recordar siempre, para conservar vivo el sentimiento y la idea de la unidad nacional.

Los artículos segundo y tercero de la misma sección establecen que formarán parte de la Junta Conservadora los diputados que lleguen de las ciudades que aún no tienen representación y que corresponderá la presidencia del cuerpo, por turno mensual, á cada uno de sus miembros.

El artículo cuarto enumera las amplias facultades de la Junta Conservadora en los términos siguientes: «La declaración de la guerra, de paz, de tregua, tratados de límites, de comercio, nuevos impuestos, creación de tribunales ó empleos desconocidos en la administración actual, y el nombramiento de individuos del Poder Ejecutivo, en caso de muerte ó renuncia de los que le componen, son asunto de su privativo resorte, precediendo el informe y consulta del Poder Ejecutivo.»

Repl 22 de oct 1811: Jurisdicción
de los diputados



Estos poderes se amplían en las secciones segunda y tercera con los siguientes: art. 13 de la sección 2ª «El P. E. será responsable á la Junta Conservadora «de su conducta pública»; arts. 3º y 5º de la sección tercera: «El Poder judicial será responsable del menor «atentado que cometa en la sustancia ó en el modo, «contra la libertad y seguridad de los súbditos.» «La «Junta Conservadora se reserva el derecho de explicar «las dudas que pueden ocurrir en la ejecución y obser- «vación del presente Reglamento».

El artículo 5º de la primera sección concurre tam- bién á demostrar la importancia y preeminencia que la Junta se atribuye, declarando que le corresponde el título de *alteza*. Finalmente, el artículo 7º estatuye que «las personas de los diputados son inviolables, y en «caso de delito serán juzgados por una comisión inte- «rior, que nombrará la Junta Conservadora, cada vez «que ocurra».

La sección segunda está consagrada al Poder Eje- cutivo, y su artículo 1º dice así: «El Poder Ejecutivo, «compuesto de los individuos que anuncia el decreto «de 23 de Setiembre, es independiente». Los artícu- los segundo y tercero detallan las facultades propias de ese poder; pueden resumirse así: organización de los ejércitos, el sosiego público, la libertad civil, la recaudación é inversión de los fondos del Estado, el cumplimiento de las leyes, la seguridad real y perso- nal de los ciudadanos y el nombramiento de los empleados de la administración. El artículo cuarto confía al Poder Ejecutivo «las providencias necesarias «para la reunión de los diputados, elección de los que «faltan y celebración del Congreso á la mayor posible «brevedad, y *en los términos que permita el estado*

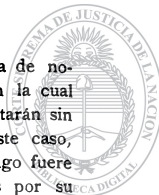


«de las circunstancias.» El deán Funes era un hombre de letras, de educación clásica; pero la intención de reunir el Congreso es tan vaga y tan remota, que se refleja en la frase incierta y torturada «cuando lo permita el estado de las circunstancias.» Habría encontrado la expresión clara y exacta, si su pensamiento hubiera sido preciso.

El artículo quinto autoriza al triunvirato para nombrar sus secretarios y juzgar «de su conducta «pública.» El sexto consagra una buena regla de gobierno y es que «los parientes del Poder Ejecutivo, hasta el tercer grado inclusive, no podrán ser «secretarios de gobierno, ni serán provistos para «empleo sin previa consulta y aprobación de la Junta Conservadora.» Era esa una regla de gobierno que habría convenido mantener, para que las funciones públicas se confiaran á los mejores y no á los más próximos. El séptimo estatuye «que el Poder Ejecutivo no podrá conocer de negocio alguno «judicial, abocar causas pendientes, ni ejecutariadas, «ni mandar abrir nuevamente los juicios, ni alterar el sistema de la administración de justicia, «ni conocer de las causas de los magistrados superiores ni inferiores, ni demás jueces subalternos y funcionarios públicos, quedando reservado «al tribunal de la real audiencia ó á la comisión «que en ~~se~~ caso *nombrará la Junta Conservadora.*» El octavo dispone que los juicios de contrabando y todos aquellos en que se persiga el cobro de caudales adeudados al Estado, por derechos de Aduana ú otros reglamentos, sean resueltos por el Ejecutivo, siguiendo en esto la tradición de lo contencioso administrativo, que venía de la metrópoli y

*s. i. f. e.
relativo*

*era
fuzgada*



que persiste hasta nuestros días. Es digna de notarse la disposición final del artículo, según la cual «las sentencias contra el fisco no se ejecutarán sin consulta del Poder Ejecutivo, quién, en este caso, podrá suspender los libramientos, si el pago fuere incompatible con otros objetos preferentes por su urgencia y utilidad hacia el bien común.» Más tarde relacionaremos este precepto con la doctrina constitucional que impone la necesidad de obtener el permiso del Congreso para demandar á la Nación.

Habeas corpus

Debe también recordarse el artículo 9 que limitaba la facultad del Poder Ejecutivo para mantener arrestado un individuo á 48 horas, dentro de cuyo término debía someterlo al juez competente, con un recurso ante la Junta Conservadora, análogo, aunque menos eficaz, que el de habeas corpus. «La infracción de este artículo», dice, «se considerará como un atentado contra la libertad de los ciudadanos, y cualquiera en este caso podrá elevar su queja á la Junta Conservadora.» Los artículos diez, once y doce son de menor importancia, y el décimo cuarto fija en un año la duración del triunvirato.

La sección tercera, que sólo consta de tres artículos, está dedicada al Poder Judicial. Repítese también allí que éste es un Poder independiente, y que serán la regla de sus resoluciones las leyes generales, las municipales y los bandos de buen gobierno.

Reconstituycamos ahora este instrumento para darnos cuenta de su carácter político y de los motivos por qué fracasó.

Desde luego, se nota que quedan totalmente ex-



cluidos del gobierno todos los miembros de la primitiva Junta de Mayo, porque en la Junta Conservadora únicamente tenían cabida *los diputados de las provincias que existan en la Capital* (art. 1°), y *los que llegasen en seguida* (art. 2°); la designación de los triunviros depende exclusivamente de la voluntad de la Junta. En consecuencia, quedan definitivamente separados del gobierno revolucionario Belgrano y Castelli, como habían sido despojados de su investidura por el motín de Abril Azcuénaga, Larrea y Matheu. Queda excluido el mismo Saavedra, presidente de la Junta, quien, tal vez para escapar á las recriminaciones de la opinión pública, se había ausentado de la Capital después del desastre del Desaguadero, con la excusa decorosa de atender en el interior y más de cerca á las necesidades de una situación crítica. Se eliminaban así todos los miembros de la Junta que representaban fuerza social y política en esta ciudad, cuna de la revolución, centro del poder y de la resistencia contra la restauración española; error político de la mayor trascendencia, que motivó odios y recriminaciones cuyas últimas consecuencias sufre el país todavía.

La Junta procedía con el propósito de perpetuarse en el poder, y su intención se revela en diversas disposiciones del estatuto. Había pasado un año desde que los diputados se incorporaron á la Junta y ésta no había adoptado medida alguna para apresurar la reunión del Congreso decretado el 25 de Mayo de 1810; y no obstante que ahora recomendaba al Poder Ejecutivo que adoptara las medidas conducentes á ese fin, en los términos que lo



permitiese *el estado de las circunstancias*, y que declaraba que el triunvirato era un poder provisorio, le fijaba un año de duración, lo que implícitamente quería decir que el Congreso no se había de reunir en un año más. Esta fue, por otra parte, la opinión de los contemporáneos y uno de los motivos que invocó el triunvirato para disolverla, como se verá en seguida. No es necesario decir que la Junta Conservadora debía durar hasta que el Congreso se reuniera. Los diputados reconocían que no tenían sino una representación imperfecta de la soberanía, y sin embargo, se colocaban en la cúspide del gobierno que organizaban, con ánimo de permanecer allí indefinidamente, dejando en estricta subordinación á los otros dos poderes.

La Junta procedía bajo el falso concepto político de que un decreto de esta naturaleza iba á satisfacer la opinión pública de la ciudad de Buenos Aires. Los acontecimientos no tardaron en demostrarle su error.

El prestigio de que gozaba el jefe de los Patricios entre los elementos conservadores de la sociedad y su autoridad sobre las tropas, era la base sobre la cual había descansado la Junta desde el 18 de Diciembre 1810, y así, cuando el Sr. Saavedra partió para el interior, los diputados quedaron asentados, pero sin raíz, en el suelo de la ciudad. En tal situación daban éstos medida de su incapacidad política, excluyéndole definitivamente de su seno, para erigirse como autoridad suprema sobre el triunvirato, en cuyas manos iban á depositar la fuerza, y sobre el país que les echaba toda la culpa de los desastres nacionales. Haremos notar de paso que el Sr. Saavedra, que disfrutaba de tan alta autoridad

moral en la ciudad de Buenos Aires y á quien el pueblo honró con su confianza, designándole para presidente de la Junta de Mayo, era natural de Potosí, circunstancia que por sí sólo basta para poner en evidencia el carácter eminentemente nacional de la revolución, y para demostrar que en aquellos días de sano patriotismo no existían las rivalidades que más tarde hicieron germinar la ~~semilla~~ maldita del antagonismo local entre porteños y provincianos.

El Reglamento de la Junta Conservadora es el primero de la colección de constituciones de D. Florencio Varela. Al pie lleva la nota siguiente: «Por decreto de 7 de Noviembre de 1811 el superior gobierno, con la debida instrucción de espediente promovido sobre la materia, declaró por atentatorio el dictado de la Junta Conservadora, disolviendo esta corporación; en consecuencia, quedó sin efecto el anterior Reglamento.»





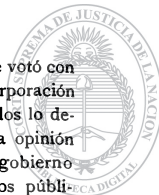
CAPÍTULO V



SUMARIO: --I. Primer triunvirato—Chiclana, Sarratea y Passo—Rivadavia—Disolución de la Junta Conservadora y anulación de su reglamento.—II.—El estatuto Provisional: su preámbulo y sus preceptos; su juramento.—III. Decretos sobre libertad de imprenta y seguridad individual.—IV. Sublevación de los patrióticos—Expulsión de los diputados de las provincias.—V. Reglamento de la Asamblea Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata—Primeras elecciones populares—La oligarquía porteña—Reunión de la Asamblea; su disolución.—VI. José de San Martín y Carlos de Alvear en Buenos Aires—Organización de la «Logia Lautaro».—VII. Armisticio entre el gobierno de las Provincias Unidas y el príncipe regente de Portugal —Conspiración de Alzaga; enérgica represión.—VIII. Convocatoria de la segunda Asamblea—Intervención del P. Ejecutivo en los actos electorales. — Parcialidad del Cabildo—Exclusión de Montegudo—Reclamación de la ciudad de Mendoza.—IX. Reunión de la Asamblea—Revolución del 8 de Octubre.

San. Passo. Alvear. Sarratea. Passo.

I.—En el triunvirato figuraban Chiclana y Passo, á quienes vemos en la escena desde la primera hora de la revolución. Chiclana era, como Castelli, un patriota resuelto, capaz de todas las audacias, siempre dispuesto al sacrificio. En los primeros meses de la revolución fue nombrado por la Junta Gobernador Intendente de Salta, más tarde Gobernador de Potosí, y acababa de regresar á Buenos Aires cuando la Junta le designó miembro del triunvirato. Conocemos á



Passo: fue el único miembro de la Junta que votó con Moreno el 18 de Diciembre contra la incorporación de los diputados. Ahora los mismos diputados lo designan triunviro, porque han consultado la opinión de la ciudad y ésta reclama que vuelva el gobierno á manos de los que encaminaron los negocios públicos con felicidad en el año 10. Por último, aparece como secretario del triunvirato, el Sr. D. Bernardino Rivadavia, nueva personalidad llamada á ocupar el primer puesto en la política argentina. Rivadavia tenía de sí mismo altísimo concepto, y sus contemporáneos pensaban que no se estimaba en más de lo que valía. Austero, de una probidad inmaculada, como fueron probos todos los hombres de la revolución, dotado de poderosa iniciativa, ilustrado, enérgico, estaba llamado á ocupar en la evolución argentina el sitio que había dejado vacante Moreno. Si no tenía el génio político, ni la ciencia sólida y profunda del primer secretario, le igualaba en iniciativa reformadora y, á pesar de su formalismo habitual, no le cedía un ápice en fortaleza de carácter y en la indomable energía con que desempeñaba sus altos deberes. Ya le veremos cuando tenga que llevar la acción represiva del gobierno á los últimos extremos en el año subsiguiente.

Rivadavia
p. austero
sp. fradizi es
austero
inclusion
fronzi es
Rivadavia

La desconceptuada Junta ponía en las manos robustas de estos hombres toda la fuerza pública, les confiaba la misión de salvar la pátria, descargando en ellos la propia responsabilidad, y al mismo tiempo intentaba atarles los brazos, mutilarlos, debilitar su acción, reservándose la dirección suprema del gobierno, la guerra, la paz, la tregua y el derecho de juzgar la conducta política. El triunvirato procedió como debía esperarse: puso de lado el Reglamento y di-



solvió la Junta, con el aplauso público. Los procedimientos que empleó antes de llegar á ese desenlace muestran de relieve la inclinación formulista de Rivadavia, que los dirigía: decidida la disolución desde el primer instante, el secretario aconsejó al triunvirato que salvara las formas, consultada la opinión del cabildo sobre el Reglamento, y con tan peregrina ocurrencia se hizo expediente, según el estilo de la época, sometiendo al juicio del ayuntamiento, corporación subalterna, parte de la administración local, el estatuto fundamental promulgado por la autoridad suprema del Estado. La Junta protestó, pero el expediente siguió su curso, y con el informe del cabildo, el triunvirato decretó la disolución de la Junta, de la cual emanaba toda su autoridad. Moreno habría procedido de otra manera: la habría decretado simplemente, á nombre de las necesidades de la patria, como disolvió el cabildo de 1810.

II—El 22 de Noviembre el triunvirato promulgó el «Estatuto Provisional del gobierno superior de las «Provincias Unidas del Río de la Plata, á nombre del «Señor Fernando VII», precedido, como el Reglamento de la Junta, de un preámbulo en el que describe con calor la situación del país y explica los motivos del golpe de Estado.

Comienza así: «La justicia y la utilidad dictaron á «los pueblos de las Provincias el reconocimiento del «gobierno provisorio que instituyó esta Capital en los «momentos en que la disolución y conquista de casi «toda la península dejaban expuesta nuestra seguridad «interior á la invasión extranjera, ó al influjo vicioso «de los gobernantes españoles interesados en sostener



«el brillo de una autoridad que había caducado.
«Cambia de aspecto la fortuna y repentinamente se ve
«la patria rodeada de grandes y urgentes peligros.
«Por el Occidente derrotado ó disperso nuestro ejér-
«cito del Desaguadero; expuestas á la ocupación del
«enemigo las Provincias del alto Perú; interceptadas
«nuestras relaciones mercantiles y casi aniquilados los
«recursos para mantener el sistema. Por el Oriente un
«ejército extranjero, á pretexto de socorrer á los go-
«bernantes españoles que invocaron su auxilio, avan-
«zando su conquista sobre una parte la más preciosa
«de nuestro territorio; el bloqueo del río paralizando
«nuestro comercio exterior; relajada la disciplina mili-
«tar; el gobierno débil; desmayado el entusiasmo; el
«patriotismo perseguido; envueltos los ciudadanos en
«todos los horrores de una guerra cruel, extermina-
«dora, y obligado el gobierno á sacrificar á los cir-
«cuntarios el fruto de las victorias con que los hijos
«de la patria en la Banda Oriental han enriquecido
«la historia de nuestros días. No era mucho, en medio
«de estas circunstancias, que convirtiendo los pueblos
«su atención al gobierno, le atribuyesen el origen de
«tanto desastre.» El pueblo de Buenos Aires.
«presentó al gobierno por medio de su respetable
«Ayuntamiento, la necesidad urgente de concentrar
«el poder para salvar la patria en el apuro de tantos
«conflictos. La Junta de diputados, que no desconocía
«la necesidad, adoptó la medida sin contradicción, y
«aplicando sus facultades, traspasó á este gobierno su
«autoridad, cuyo acto debía recibir la sanción del con-
«sentimiento de los pueblos. *Si la salvación de la*
«*patria fue el objeto de su institución, una absoluta*
«*independencia en la adopción de los medios debía*



«constituir los límites de su autoridad. De otro modo, ni el gobierno habría aceptado las responsabilidades que descargó la Junta sobre sus hombros, ni su creación habría podido ser útil en ningún sentido, cuando agitada la patria de una complicación extraordinaria de males, *exigía una pronta aplicación de remedios violentos*. Parece que la Junta de diputados, cuando formó el Reglamento de 12 de Octubre, tuvo más presente su exaltación que la salud del Estado. Con el velo de la pública felicidad se erige en soberana, y rivalizando con los poderes que quiso dividir, no hizo más que reasumirlos en grado eminente. Sugetando al gobierno y á los magistrados á su autoridad soberana, se constituye por sí misma en Junta Conservadora *para perpetuarse en el mando* y arbitrar sin regla sobre el destino de los pueblos.

«Convencido el gobierno de los inconvenientes del Reglamento, quiso oír el informe del ayuntamiento de esta Capital. . . . Nada parecía más justo ni conforme á la práctica, á las leyes, á la razón y á la importancia del asunto. Pero los diputados. . . , sin reflexionar que después de la abdicación del Poder Ejecutivo, no era ni podía ser otra su representación pública que aquella de que gozaban antes de su incorporación al gobierno, calificaron aquel trámite de notorio insulto contra su imaginaria soberanía, promoviendo una competencia escandalosa. . . .

«El gobierno, después de haber oído el dictamen del respetable cabildo y el juicio de los ciudadanos ilustrados, ha determinado *desechar el reglamento y existencia de una autoridad suprema y*



«*permanente* que envolvería á la patria en todos los horrores de una furiosa aristocracia.»

No puede pasar inapercibida la declaración fundamental de este documento, la que expresa el pensamiento y los propósitos políticos de su autor: para salvar la patria, la autoridad del gobierno no debe tener otro límite que el de la *más absoluta independencia en la adopción de los medios*.

Cierto es que la Junta Conservadora parecía dominada por el deseo de *conservar* la alta dirección de los negocios públicos; cierto es igualmente que si los diputados renunciaban el Poder Ejecutivo, no les quedaba otra investidura que la de miembros del futuro congreso; pero el triunvirato no prueba con esto su mejor derecho para el mando, desde que, negadas las facultades del poder constituyente, desaparecía con ellas la legalidad del poder constituido. Si la Junta tenía representación para organizar un nuevo gobierno, podía hacerlo como entendiera que convenía á la situación del país; si no tenía tal representación, todo lo que hiciera era vicioso y nulo y, en consecuencia, el triunvirato llevaba consigo el vicio original. En verdad, no era esta una cuestión de estricto derecho, ni de doctrina, sino un negocio político resuelto prácticamente en el terreno de los hechos, con el favor de la opinión. No era una revolución, pero era un golpe de Estado, cuya verdadera y única excusa debió ser la franca declaración de las necesidades supremas de la patria. Era necesario combatir y triunfar en condiciones casi desesperadas en un país sin organización gubernamental, y para esos fines, el sistema más adecuado era el



más simple: la dictadura momentánea y la responsabilidad ulterior.

Tal fue el concepto real y verdadero del estatuto Provisional, como se verá en seguida.

El estatuto no consta sino de nueve artículos; pero declara que forman parte de él los decretos sobre libertad de imprenta, de 26 de Octubre de 1811, y de seguridad individual, que se dictó el día siguiente, es decir, el 23 de Noviembre.

El art. 1° del Estatuto declara que siendo la amovilidad de los que gobiernan el obstáculo más poderoso contra las tendencias de la arbitrariedad y de la tiranía, los vocales del gobierno tendrán que removerse alternativamente cada seis meses; para su elección se creará una Asamblea General compuesta del Ayuntamiento de Buenos Aires, de los representantes que nombren los pueblos, y de un número considerable de ciudadanos, elegidos por el vecindario de la Capital, según las reglas que el Gobierno determinará más tarde. Llama la atención, desde luego, la composición de una Asamblea que por sus fines debía ser esencialmente nacional. El mismo artículo dispone, al final, que los vocales ausentes serán suplidos por los secretarios. Este precepto motivó el conflicto con la primera Asamblea.

El artículo 2° estatuye que el Gobierno no podrá resolver los graves asuntos del Estado *que por su naturaleza tengan un influjo directo sobre la libertad y existencia de las Provincias Unidas*, sin acuerdo expreso de la Asamblea General.

En el 3° se obliga el Gobierno de un modo *público y solemne* á tomar las medidas conducentes para acelerar la apertura del Congreso, cuando las cir-



cunstancias lo permitan, y ante el cual será responsable el triunvirato de su conducta pública, responsabilidad que se hará efectiva ante la Asamblea General, si el Congreso no se reuniera en los diez y ocho meses siguientes.

El 4° consigna que siendo la libertad de la imprenta y la seguridad individual el fundamento de la felicidad pública, forman parte del Estatuto los decretos en que se establecen, y manda que los miembros del Gobierno jurarán guardarlos y hacerlos guardar religiosamente. El 5° establece que los asuntos de justicia corresponderán exclusivamente á los magistrados.

En el 6° fija las atribuciones del triunvirato en esta forma amplia é ilimitada: «al gobierno corresponde «velar sobre el cumplimiento de las leyes y adoptar «cuantas medidas crea necesarias para la defensa y «salvación de la patria, según lo exijan el imperio «de la necesidad y las circunstancias del momento». He ahí el Poder Ejecutivo con facultades omnímodas y sin otro límite que el que le fije el propio criterio de las personas que lo constituyan.

El artículo 7° dispone que en caso de renuncia, ausencia ó muerte de los secretarios, el Gobierno nombrará los que deben sustituirlos, presentando el nombramiento en la primera Asamblea siguiente. El 8° consagra el título de «Gobierno Superior Provisional «de las Provincias Unidas del Río de la Plata á nombre «del Sr. D. Fernando VII», y por último, el 9° establece que la menor infracción del Estatuto será un atentado contra la libertad civil, y dispone que éste sea jurado solemnemente.

Los señores López y Pérez, secretarios designados conjuntamente con el señor Rivadavia por la Junta



Conservadora en su decreto de 23 de Setiembre, habían renunciado su cargo y únicamente el último había quedado en ejercicio, como secretario general, hasta que fue nombrado el señor D. Nicolás Herrera para acompañarle, tomando Rivadavia las carteras de Gobierno y Relaciones exteriores, y Herrera la de Hacienda. Algún tiempo después Rivadavia se hizo cargo de la cartera de Guerra y Herrera tomó la de Relaciones exteriores.

Hemos dado ya idea del carácter formulista del señor Rivadavia. El Dr. D. Vicente López, en su historia de la Revolución Argentina, aclara el concepto de esta personalidad, diciendo que era un repúblico liberal, pero grave y serio, de la escuela de Aranda y Florida Blanca, con los razgos propios de un alto funcionario español, y nó como la democracia de nuestros días concibe á sus representantes más genuinos. Todos los actos administrativos de Rivadavia llevan el sello de su individualidad y comprueban el juicio del ilustre historiador.

Como era él, en realidad, quién dirigía el Triunvirato, revistió la ceremonia del juramento del Estatuto con todas las solemnidades del caso. Designó al efecto para la ceremonia el día 1° de Diciembre, que coincidió con la llegada del ejército del Uruguay, que acababa de levantar el sitio de Montevideo, y de esta manera se incorporaron á la fiesta patriótica los vencedores de Las Piedras. Los detalles de la ceremonia aparecen á lo vivo en la Gazeta del 3 de Diciembre. Las fuerzas de la guarnición, tendidas desde el muelle hasta el arco de triunfo, abrieron ancha calle para que pasara el ejército del Uruguay; éste penetró en la plaza de la Victoria pasando bajo el arco triunfal, y formó con



la guarnición sobre tres lado de la plaza. Los miembros del Triunvirato, con sus secretarios, el Ayuntamiento y las altas corporaciones del Estado, aparecieron en los balcones del Cabildo en medio de las salvas, de vivas estruendosos y de las bulliciosas manifestaciones del contento público. Se leyó el Estatuto y el Alcalde de primer voto, á nombre del Cabildo y del pueblo, exigió á los triunviros su juramento en los términos siguientes: «¿Jura el Superior Gobierno Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, á nombre del Sr. D. Fernando VII, á esta Capital y demás pueblos unidos, por Dios nuestro señor y estos santos Evangelios, observar y hacer cumplir inviolablemente el Estatuto y decretos que lo integran y que acaban de leerse? *Sí, juro.* Si así lo haceis, en bendición y pro os sea, y si no en maldición eterna».

En seguida juró el Cabildo *por sí y por todas las clases que forman el pueblo de la capital*, y después el comandante general de armas, como gefe de la guarnición, sobre su espada y palabra de honor, por sí y por los gefes, oficiales y tropa á sus órdenes. Una salva general fue la señal de acatamiento, y el acto que con tanta solemnidad había preparado Rivadavia, terminó en medio del entusiasmo y del regocijo del pueblo, que creía haber asegurado ya su independencia y sus libertades.

El Estatuto promulgado fue comunicado en seguida, oficialmente, al Cabildo, y la honorable corporación aprovechó la oportunidad para elogiar á los miembros del Triunvirato por el desprendimiento de que daban prueba, consagrando como un principio inviolable la renovación periódica de su personal.

Sin embargo, el propósito dictatorial del Triunvi-



rato se manifiesta con claridad en el preámbulo del Estatuto: si la salvación de la patria fue el grande objeto de su institución, dice, *una absoluta independencia en la adopción de los medios debía constituir los límites de su autoridad*, lo que equivale á declarar que no debía tener límite de ninguna naturaleza; y de acuerdo con este concepto es que el artículo 6° declara que corresponde al Gobierno adoptar cuantas medidas crea necesarias para la defensa de la patria, *según lo exijan el imperio de la necesidad y las circunstancias del momento*. Quedaba en pie la responsabilidad que debía hacerse efectiva ante la Asamblea ó ante el Congreso; pero la experiencia universal ha demostrado que las responsabilidades de este orden no garantizan la libertad civil, ni enfrenan los abusos del poder. La historia extraña y la propia historia demuestran que el juicio político de los gobernantes no es defensa suficiente contra los excesos de autoridad, si faltan en el cuerpo político otros órganos que ponderen su influencia en la marcha ordinaria de los negocios. El gobierno constituido por el Estatuto era, pues, una verdadera dictadura, análoga á la de la Junta de Mayo, eficaz para la defensa de la patria, pero inadecuada para los fines liberales que la revolución tenía como programa. Los sucesos posteriores demostrarán la axacitud de este juicio.

El antagonismo local de las provincias contra Buenos Aires, que apareció á poco de incorporados los diputados á la Junta, el 18 de Diciembre de 1810, se manifestó á todas luces desde el 5 de Abril de 1811: la hora de la reacción había llegado, y el Triunvirato señala el comienzo de la oligarquía porteña: el sen-



timiento local de la ciudad, irritado contra la Junta de diputados, se iergue, y dueño de la fuerza, establece á su turno el predominio sin contrapeso, la hegemonía de Buenos Aires sobre todos los otros pueblos del Río de la Plata. La tendencia se revela en la composición de la Asamblea general de que habla el artículo 1°, que aparece en la penumbra, pero con las grandes líneas de una autoridad suprema, puesto que á ella se le atribuía el nombramiento de los triunviros, y era ella la que debía hacer efectivas todas las responsabilidades del Gobierno, si no se reunía el Congreso Constituyente. Era natural que cuando se trataba de organizar una asamblea deliberante con atribuciones y fines esencialmente nacionales, los pueblos del Virreinato tuvieron en ella una representación proporcionada, si no al número de su población, á su importancia política; pero el Estatuto no lo resuelve así, sino que la compone de los representantes de las ciudades, agregados al Ayuntamiento de Buenos Aires, al cual le entrega la presidencia, y para que el platillo de la balanza se incline más todavía, dispone que la asamblea será integrada por un número *considerable* de ciudadanos designados por el vecindario de la capital.

Temieron, quizá, los miembros del Triunvirato que una asamblea así compuesta no alcanzara á ganar las simpatías de los pueblos del interior, y por eso declararon que podían ser elegidos en los comicios de Buenos Aires y en la Junta electoral las personas nacidas en otras provincias que se encontraran en la Capital avencidadas ó por accidente, (art 2° del Reglamento de 19 de Febrero). Cohonestaban así ó intentaba cohonestar, la supremacía y privilegio que



se acordaba al vecindario de la ciudad de Buenos Aires sobre el de las demás. Pero la injusticia era demasiado visible, para que tal concesión pudiera satisfacer la opinión del interior.

Es digno de tenerse en cuenta que es este el primer estatuto en que se consagra la responsabilidad de los secretarios ó ministros del Triunvirato, y se indica la regla de someter su nombramiento á la aprobación del Poder Legislativo, (art. 7º). Aunque el precepto no es explícito, entendemos que cuando el Estatuto dice que el gobierno debe nombrar los secretarios y presentarlos en la primera asamblea siguiente, significa someter ese nombramiento á la aprobación ó desaprobación del cuerpo deliberante, porque como mera noticia, el precepto no tendría importancia y no habría merecido los honores de ser incorporado entre los principios fundamentales del nuevo gobierno.

La circunstancia de que los decretos sobre libertad de imprenta y seguridad individual se declaran incorporados al estatuto nos obliga á detenernos en ellos un momento, no obstante que tendremos que volver á considerarlos cuando nos ocupemos especialmente de tan importante asunto.

III—La libertad de pensamiento fue una de las primeras proclamadas por la revolución de Mayo, y la *Gazeta* que fundó Moreno apareció, desde el primer día, teniendo como epígrafe las célebres palabras de Tácito: *rara tempora felicitatum ubi sentire quae velis et quae sentias dicere licet*.

La libertad de imprenta estaba regida por el decreto de 20 de Abril de 1811, cuando se organizó el Triunvirato, el 23 de Setiembre.



Uno de los primeros actos trascendentales del Triunvirato fue dictar otro decreto sobre bases más liberales para amparar el mismo derecho.

Los estudiaremos por su orden.

El de 20 de Abril, formulado por la Junta de diputados, declaraba que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos é ideas políticas, no sólo un freno á la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar á la Nación, en general, y el único camino para llegar al conocimiento de la verdadera opinión pública, en cuya virtud establecía que todos los cuerpos y personas particulares, de cualquiera condición y estado, tienen libertad de escribir, de imprimir y de publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión ni aprobación alguna anteriores á la publicación; pero con las responsabilidades que del abuso pudieran resultar.

El decreto que nos ocupa abolió los tribunales de imprenta y la censura previa de las obras políticas, declarando que los libelos infamatorios, calumniosos, etc., serían castigados por los Tribunales comunes; mantuvo, sin embargo, la censura para los escritos sobre materia religiosa, de acuerdo con lo establecido por el Concilio de Trento. Era deber de los impresores poner su nombre y el lugar y año de la impresión en todo impreso, castigándose la falsedad ó la omisión de estos requisitos, según la gravedad del delito, y publicándose sus nombres en la *Gazeta*.

El reglamento decía que para asegurar la libertad de imprenta y contener, al mismo tiempo, sus abusos, se nombraría una junta suprema de censura, compuesta de cinco individuos en la Capital, y otra de



tres en cada capital de Provincia, cuyas funciones serían examinar las obras denunciadas al Ejecutivo o justicias respectivas para detener la circulación del impreso, si fuera violatorio de las leyes, calumnioso ó difamatorio. El juicio de censura ante las juntas de provincia era apelable ante la de la Capital, la cual intervenía también en los recursos deducidos contra las resoluciones de los Tribunales eclesiásticos, cuando éstos negaban permiso para la publicación.

El decreto de 26 de Octubre del mismo año dictado por el Triunvirato y que era el que declaraba parte integrante del Estatuto, reconoce que la facultad de comunicar sus ideas es tan natural al hombre como el pensamiento mismo, y repite que todo hombre puede publicar sus ideas libremente sin previa censura; pero que el abuso de esta libertad es un crimen cuya acusación corresponde á los interesados, si ofende derechos particulares, y á todos los ciudadanos, si compromete la tranquilidad pública, la conservación de la religión católica ó la constitución del Estado. Crea una junta con el título de «Protectora de la libertad de imprenta» compuesta de nueve individuos elegidos de una lista de cincuenta ciudadanos honrados formada por el Cabildo. Esta junta tenía por misión declarar si había ó no delito en el impreso acusado; en caso afirmativo, el castigo correspondía á las justicias ordinarias. La resolución de la junta era apelable ante otros nueve ciudadanos sacados de la misma lista, y su resolución causaba ejecutoria. La tercera parte de votos, en favor del acusado, hacía sentencia en la primera y segunda instancia.

Este decreto, que derogaba el dictado por la Junta.



fue uno de los motivos de sus reclamaciones antes de ser disuelta el 7 de Noviembre.

El decreto sobre seguridad individual, á que se le refiere el Estatuto, decia:

«Si la existencia civil de los ciudadanos se aban-
«donase á los ataques de la arbitrariedad, la libertad
«de imprenta publicada el 26 de Octubre del presente
«año no seria más que un lazo contra los incautos
«y un medio indirecto para consolidar las bases del
«despotismo. Todo ciudadano tiene un derecho sa-
«grado á la protección de su vida, de su honor, de
«su libertad y de sus propiedades. La posesión de
«este derecho, centro de libertad civil y principio de
«todas las instituciones sociales, es lo que se llama
«*seguridad individual*. Una vez que se haya vio-
«lado esta posesión, ya no hay seguridad, se ador-
«mecen los sentimientos nobles del hombre libre y
«sucede la quietud funesta del egoismo. Sólo la con-
«fianza pública es capaz de curar esta enfermedad
«política, la más peligrosa de los Estados, y sólo una
«garantía afianzada en una ley fundamental es capaz
«de establecerla. Convencido el gobierno de la ver-
«dad de estos principios y queriendo dar á los pue-
«blos americanos otra prueba positiva y real de la
«libertad que preside á estas resoluciones, y de las
«ventajas que les prepara su independencia civil, si
«saben sostenerla gloriosamente y con honor, contra
«los esfuerzos de la tiranía, ha venido en sancionar la
«seguridad individual, por medio del siguiente de-
«creto:

Artículo 1° «Ningún ciudadano puede ser penado
«ni expatriado sin que preceda forma de proceso
«legal.»



Art. 2° «Ningún ciudadano puede ser arrestado sin prueba, al menos semi-plena, ó indicios vehementes de crimen, que se harán constar en proceso afirmativo dentro de los tres días perentorios. En el mismo término se hará saber al reo la causa de su detención y se remitirá con sus antecedentes al juez respectivo.»

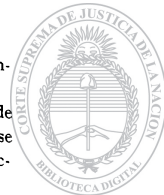
Art. 3° «Para decretar el arresto de un ciudadano, pesquiza de sus papeles ó embargo de bienes, se individualizará en el decreto ú orden que se expida el nombre ó señales que distingan su persona y objetos sobre que deben ejecutarse las diligencias, tomando inventario que firmará el reo y dejándole copia autorizada para su resguardo.»

Art. 4° «La casa de un ciudadano es un sagrado, cuya violación es un crimen; sólo en el caso de resistirse el reo refugiado á la convocación del juez podrá allanarse; su allanamiento se hará con la moderación debida y personalmente por el juez de la causa. Si algún motivo urgente impide su asistencia, dará al delegado una orden por escrito y con la especificación que contiene el artículo antecedente, dando copia de ello al aprehendido y al dueño de la casa, si la pide.»

Art. 5° «Ningún reo estará incomunicado después de su confesión y nunca podrá ésta dilatarse más allá del término de diez días.»

Art. 6° «Siendo las cárceles para seguridad y nó para castigo de los reos, toda medida que, á pretexto de precaución, sólo sirva para mortificarlos, será castigada rigurosamente.»

Art. 7° «Todo hombre tiene libertad para perma-



«necer en el territorio del Estado ó abandonar cuando guste su residencia.»

Art. 8° «Los ciudadanos habitantes del distrito de la jurisdicción del gobierno y los que en adelante se establezcan están inmediatamente bajo su protección en todos sus derechos.»

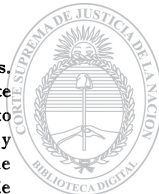
Art. 9° «Sólo en el remoto y extraordinario caso de comprometerse la tranquilidad pública ó la seguridad de la patria podrá este Gobierno suspender este decreto mientras dure la necesidad, dando cuenta inmediatamente á la Asamblea General con justificación de los motivos, y quedando responsable en todos tiempos de esta medida.»

«Buenos Aires 23 Noviembre de 1811—FELICIANO ANTONIO CHICLANA, MANUEL DE SARRATEA, JUAN JOSÉ PASSO—BERNARDINO RIVADAVIA, *Secretario*.»

Todas estas disposiciones, con ligera variación de detalle, las veremos repetidas en las constituciones posteriores y consagradas en la constitución que nos rige. Es allí donde las estudiaremos relacionándolas con los antecedentes que vamos consignando.

—

IV. En aquellos tiempos, cuando la propia experiencia no nos había enseñado cuán efímeros son los juramentos políticos que no están asegurados por la autoridad del carácter, se creyó, tal vez, que las solemnidades del 1° de Diciembre y las hermosas declaraciones de los decretos sobre libertad de imprenta y seguridad individual, que el pueblo recibía con aclamaciones y con un entusiasmo sincero, al que se asociaba al ejército compuesto de ciudadanos interesados en el porvenir de la patria, iban á garantizar las libertades civiles y políticas, al amparo de un gobier-



no prestigioso y respetado por todos los partidos. Pero, desgraciadamente, no sucedió así: al siguiente día de jurado el Estatuto, la junta tuvo conocimiento de que se tramaba una conspiración en la ciudad, y en los días subsiguientes adquirió la certidumbre de que los conspiradores contaban con elementos de perturbación en la fuerza armada

Los promotores de la conspiración eran, según se decía, los diputados de la Junta disuelta por el triunvirato, y su punto de apoyo el regimiento 1° de infantería ó antiguo cuerpo de patricios, como se les había llamado hasta hacía poco. Se ha observado en la vida militar que los cuerpos cuyos gefes ocupan el Gobierno pretenden y obtienen una situación excepcional y privilegiada en el ejército, con perjuicio siempre de la disciplina. Y tal era la condición en que se habían mantenido los patricios desde que su gefe, Don Cornelio Saavedra, había ocupado la primera magistratura en el país. Los patricios habían tomado el número de línea entre los que formaban el ejército de las Provincias Unidas, pero conservaban la supremacía originaria y su índole privilegiada. El nuevo Gobierno, que sintió el peligro que entrañaba este cuerpo, cuando ausente el Sr. Saavedra, se cambió la situación y sus amigos fueron separados de la dirección de los negocios públicos, designó, para mandarlo, al Gral. Belgrano, como la persona más adecuada para restablecer con prudencia, pero con energía, la relajada disciplina. El nuevo gefe del cuerpo hizo sentir su autoridad desde el primer día. Los patricios mantenían como distintivo el uso de la trenza que se había introducido en la época colonial durante el gobierno de Zeballos. Belgrano ordenó



que se la cortaran dentro de un plazo perentorio, que vencía el 8 de Diciembre. Los soldados se consideraron vejados por la orden que les privaba de un distintivo que los enorgullecía, y no fue difícil inducirlos á cometer el atentado del 6 de Diciembre. En las altas horas de la noche se amotinaron con sus sargentos y cabos, y el día 7 la ciudad supo con espanto que los patricios, sublevados, ocupaban el edificio de las temporalidades, que después de 1807 se consideraba inexpugnable.

En el primer momento se temió que hubiera otros cuerpos comprometidos, y el Gobierno, procediendo con prudencia, comenzó por intimarles que se sometieran, enviando al efecto al edecán Igarzábal con la promesa del perdón. Más tarde interpusieron sus buenos oficios el obispo de Buenos Aires y el de Córdoba, que se encontraba también en esta ciudad, y los triunviros hicieron nueva intimación, en términos que dejaba abierto ámpliamente el camino de arrepentimiento; pero nada fue bastante para apartarlos de su propósito, y contestaron con tenacidad que estaban resueltos á combatir. No quedaba otro camino que someterlos por la fuerza, y se ordenó el ataque.

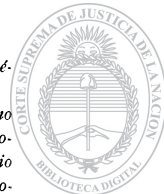
Los valerosos patricios resistieron con heroísmo; fueron dominados después de un sangriento combate, y los cabecillas que sobrevivieron condenados á muerte y ejecutados. Como el Gobierno creía que la conspiración había sido promovida ó á lo menos alentada por los miembros de la Junta disuelta, diputados de las provincias, á los pocos días decidió expulsarlos de la capital, y les dirigió la circular de fecha 16 de Diciembre publicada en la Gazeta del



17, que dice así: «El desagradable acontecimiento del día 7 del corriente puso al Gobierno en la necesidad de investigar por los medios legales los autores de una horrible conspiración que se tramaba contra su existencia por algunos hombres malvados, á quienes la pérdida de su patria es un suceso indiferente, si consiguen llenar sus miras ambiciosas ó satisfacer el espíritu de partido que los domina.

«De las diligencias practicadas al efecto resulta plenamente justificado que no era otro el objeto de su atrevida empresa, que restablecer á V. V. y á los demás diputados de las provincias en el Gobierno, con el fin, tal vez, de cobrar con usuras el premio de este beneficio, prometiéndose un influjo arbitrario sobre el destino de los pueblos. Las consecuencias que necesariamente habrían seguido de la ejecución de este plan contra los verdaderos intereses del Estado y la dificultad de curar esta nueva herida en el corazón de la patria, no pueden esconderse á la ilustración de Vd. Todo hubiera perecido, y el despotismo triunfante se gozaría al fin en la sangre de tantos compatriotas, derramada en defensa de la libertad de sus hijos y de la felicidad del suelo en que nacieron.

«Y si el Gobierno hace á Vd. la justicia de creer que no habrá tenido parte en semejante atentado, no por eso deja de conocer que siendo la exaltación de los diputados la causa motiva de la conspiración, serán inútiles cuantas medidas se adopten para sofocar el germen de las revoluciones, inconveniente el mayor que puede oponerse á los progresos del sistema, si no se aleja el objeto en que



«apoyan su mira los facciosos para ganar prosélitos, á la sombra de un pretexto tan aparente.

«Sobre este principio y en el concepto de que no pudiendo celebrarse el Congreso hasta que las provincias hayan recobrado su libertad con el auxilio de nuestras armas, es, no sólo inútil, sino gravoso á los pueblos, la existencia de los diputados en esta capital, especialmente en un tiempo en que tienen que apurar todos sus recursos para atender á las grandes urgencias del Estado. Por esto ha creído el Gobierno conveniente, en acuerdo de esta fecha, prevenir á Vd. se retire d su provincia, disponiendo su salida dentro de 24 horas.

«Vd. que conoce la exigencia de las medidas que conducen á la conservación de la pública tranquilidad, no extrañará este procedimiento de que no puede desentenderse el gobierno sin faltar á las más sagradas de sus obligaciones, y sacrificando algún pequeño resentimiento particular á los intereses de la patria, sabrá interponer el influjo de su posición para persuadir á los pueblos de la necesidad de esta providencia, de las miras benéficas del gobierno y de la importancia de estrechar los vínculos de la más perfecta unión para llevar á cabo esta obra grande de nuestra independencia civil. El gobierno espera del patriotismo de Vd. que será obedecido con puntualidad, quedando á su cargo instruir á las provincias del urgente motivo que da mérito á estas resoluciones. Dios guarde á Vd. muchos años.—Buenos Aires, Diciembre 16 de 1811.—Feliciano Antonio Chiclana, Manuel de Sarratea, Juan José Passo—Bernardino Rivadavia. secretario.»



El gobierno procedía dictatorialmente desterrando de la ciudad de Buenos Aires á los representantes de las provincias, y daba testimonio de su candor recomendándoles que sirvieran de mensajeros de paz y de concordia para prestigiar la autoridad del poder dictatorial que los expulsaba.

La circular fue publica en *La Gazeta* precedida de comentarios con el titulo de *artículo de oficio*, lo que, en lenguaje de la época, quería decir artículo oficial. Debe ser de Monteagudo, por que hay en su estilo, en su forma, en su pensamiento, la línea varonil, enérgica y atrevida de aquel tribuno.

La publicación de *La Gazeta* terminaba con una nota en la letra bastardilla: «*Aunque la generalidad de la orden comprende á los señores Gorriti y Pérez, sus sentimientos notorios por el interés del país los hacen dignos del reconocimiento de los buenos ciudadanos.*» Lo que significaba que los señores Gorriti y Pérez no estaban vinculados al partido al cual se atribuía el movimiento militar de 6 y 7 de Diciembre.

Decíamos, al comentar el artículo 6° del estatuto provisional, que si el gobierno no podía dictar todas las medidas que las circunstancias del momento exigieran bajo el imperio de la necesidad, ese precepto llevaba en las entrañas el poder discrecional más vasto: el primer trastorno que inquieta al Gobierno, después de jurado el Estatuto, provoca el ejercicio de esas facultades y no deja duda de que con ellas se podía llegar á todos los extremos del gobierno dictatorial.

Notemos que desde esa época el Poder Ejecutivo se apropia el nombre de *Gobierno*, y este abuso



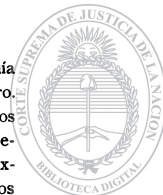
se introduce y se arraiga en el lenguaje político; pasa de allí á la lengua usual y perdura hasta nuestros días, porque responde al hecho real y verdadero: no hay en la historia de la evolución argentina, hasta 1861, otro *Gobierno* que el poder Ejecutivo, dueño de la fuerza, árbitro del tesoro, dispensador de favores y fuente de toda justicia.

El Triunvirato incurría en un error de grave trascendencia expulsando de la capital á los diputados á quienes había despojado del gobierno, porque, como se ha dicho atinadamente, esas diez ó doce personas no tenían en la capital prestigio ni autoridad propia y no podían inquietar al gobierno que acababa de dar prueba tan elocuente de su energía y de su fuerza; mientras que eran hombres de valimiento en sus respectivas provincias é iban á llevar al interior sus pasiones y sus rencores.

V—Ahora podemos entrar al análisis del decreto que terminaba la organización del gobierno. Recordemos que el Estatuto provisional declaraba que se organizaría una Asamblea general para los fines que en él se señalan. A ese fin el triunvirato dictó el Reglamento de 19 de Febrero de 1812, que vamos analizar. Es esta una de las instituciones mas raras y caprichosas de nuestra historia.

El artículo 1° dice que el Ayuntamiento de la Capital, los apoderados de las Provincias Unidas y cien ciudadanos compondrán la asamblea general, bajo la presidencia del Ayuntamiento.

Desde luego, se revela el propósito de colocar á los pueblos del interior bajo el dominio de la opinión de la ciudad capital: es la reacción contra el localis-



mo provinciano de la Junta disuelta, es la oligarquía porteña que busca asiento y seguridad para el futuro. La numerosa Asamblea, en la cual se perdían los doce ó quince diputados que correspondían á los pueblos del interior, no iba á ser otra cosa que la expresión genuina y exclusiva de las ideas y de los intereses de la ciudad de Buenos Aires, que la integraba con sus elegidos, bajo la presidencia de su ayuntamiento.

El artículo 1° se refiere á *los apoderados de las ciudades*, porque desde el primer día de la Revolución se dió á éstas la representación política del país. Cuando en 1810 se pidió á los pueblos del interior que designaran diputados para el congreso constituyente, no se determinó á quién correspondía el derecho de elección y cuál debía ser la representación de cada provincia; villas de escasa importancia pretendieron el derecho de nombrar diputados, hasta que la Junta resolvió, por su decreto de 16 de Julio, que esa prerogativa era exclusiva de las ciudades cabezas de partido ó departamento, cuyo número nunca llegó á determinarse.

Ya hemos dicho que, para cohonestar la tendencia exclusivista de esa organización, el triunvirato declaró que no se requería vecindad en la ciudad capital para ser diputado, dando así á entender que los vecinos de otras provincias, que accidentalmente se encontraran en ella, tenían probabilidades de ser designados entre los cien ciudadanos cuya forma de nombramiento no se determinó en un principio. El artículo segundo del Estatuto, concordante con aquella declaración, establece preceptivamente lo siguiente: «los ciudadanos se elegirán de los de esta capital y de los



«otros pueblos de las Provincias que se hallaren aquí, aunque sea de paso». El mismo artículo prescribe la forma de la elección. Es una elección de segundo grado. Para la elección primaria se dividía la ciudad en cuatro secciones presididas por cuatro regidores; todos los ciudadanos de la sección debían concurrir a casa del regidor y votar por dos electores; el voto era secreto. Los ocho electores así designados, reunidos con el Ayuntamiento, formarían una lista de trescientos ciudadanos, de entre los cuales se sacarían a la suerte cien, para integrar la Asamblea.

Asoma por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, la intervención regular del pueblo en los actos electorales, porque aún cuando el decreto sobre Juntas provinciales estableció en 1811 el sufragio popular para la designación de los *colgas*, esa disposición nunca se aplicó en la capital, y no sabemos que se cumpliera en los pueblos del interior, durante los pocos meses que estuvo en vigencia.

El artículo tercero declara la inhabilidad de las personas que se hallen procesadas ó hayan sufrido pena infamatoria, de los fallidos, extrangeros, menores de veintiún años y de los que no tengan arraigo conocido y una decidida adhesión á la causa de la libertad de las Provincias Unidas, para ser electores ó elegidos. Al mismo tiempo condena á la expatriación y á la privación por siempre de los derechos de ciudadanía al que use de seducción ó intrigas para ganar votos en la asamblea.

A efecto de evitar el influjo del gobierno en las deliberaciones de la asamblea, declara que no podrán formar parte de ella los militares ni los empleados de la administración, (art. 4°). Entre preceptos



de trámite, el artículo 5° incluye una disposición que concurre á demostrar la subordinación en que se colocaba á los diputados de las provincias, la que prescribe que los diputados electos deberán presentar sus poderes al Ayuntamiento de la Capital, con la anticipación debida, para que puedan ser aprobados. Es deber del gobierno, una vez notificado de la organización de la asamblea, remitirle nota de los negocios que han motivado la convocación. La asamblea debe empezar sus tareas por la elección del vocal del Triunvirato en reemplazo del que haya terminado su período, según lo dispuesto en el estatuto Provisional.

El artículo 7° prescribe que «sólo el gobierno puede «convocar la asamblea, y deberá hacerlo una vez «cada seis meses» Agrega: «la asamblea no es una «corporación permanente; en ella no se tratará otros «negocios que aquellos para que ha sido convocada; «no podrá permanecer en sesiones más término que «el de ocho días, á menos que el gobierno juzgue «conveniente prorrogarlas; pasado el término, cuanto «se actúe sin este requisito será nulo.» Tomemos nota de este precepto, de donde deriva en nuestro país la teoría mantenida de que es exclusiva del Poder Ejecutivo la facultad de convocar el Congreso; además, la iniciativa parlamentaria para legislar no aparece y queda íntegra en manos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en esta parte el reglamento fue modificado poco tiempo después, como lo veremos en seguida.

El artículo 8° declara que el gobierno podrá asistir á la Asamblea en los casos en que lo exija el interés mismo de los negocios que debe resolver, y en que su presencia no pueda comprometer la libertad de las votaciones, en cuyo caso tendrá la presidencia. Tal



vez se mantiene en esta disposición la regla tradicional del gobierno colonial durante el cual los gobernadores presidían primero los cabildos y después las audiencias.

Los artículos 9, 10, 11 y 12 reglamentan, bajo forma especial, el antiguo juicio de residencia, determinando que los casos que ocurran serán de la competencia de la Asamblea, y que cuando ésta no pueda sustanciarlos durante sus sesiones, nombrará una comisión de Estado compuesta de once miembros, de los cuales cuatro serán del ayuntamiento. Esta comisión concluirá los procesos y resolverá las causas que se le deleguen; sus resoluciones serán apelables ante la primera Asamblea siguiente, la cual podrá delegar el conocimiento del asunto en otra comisión de siete vocales, de los cuales dos serán de ayuntamiento; las resoluciones de esta última comisión serán irrevocables.

El artículo 13 se contrae á fijar reglas para garantizar la libertad de las deliberaciones de la Asamblea, y prescribe que si ésta llegase á entender que se reúne gente con el fin de perturbar sus deliberaciones suspenderá sus sesiones y dará cuenta al gobierno; en caso de omisión será nulo cuanto en ella se determine, quedando el gobierno autorizado para disolverla, si así lo exige la seguridad y tranquilidad pública. Los que por medios ilícitos comprometan la libertad de las resoluciones del cuerpo deliberante serán considerados reos de lesa patria y, por consiguiente, condenados á muerte.

El artículo 14 fija las reglas de procedimiento interno de la Asamblea. Deben llevar la voz ó nombrar voceros para que en la asamblea se guarde silencio, orden y decoro, el gobernador de la provincia ó, en su defecto,



el alcalde de primer voto como representante del ayuntamiento; hablará el vocal que haya pedido la palabra, á quien no se le podrá interrumpir; concluido su discurso, no volverá hablar sobre la materia, á no ser que de otra manera se decida; el presidente podrá provocar la votación de si un punto está suficientemente discutido cuando lo juzgue oportuno; los votos serán públicos, se escribirán y leerán por el secretario; no se tratará de negocios diferentes antes de concluido el que se haya sometido á la deliberación; se llamará á la cuestión al diputado que se separe de ella; se prohíbe la discusión personal, y se castigará el exceso de la palabra excluyendo de la asamblea al que abusare de ella; una vez terminada la consideración de los asuntos indicados por el gobierno, la asamblea debe disolverse y los vocales volver á su calidad de simples ciudadanos. Para la segunda asamblea deben nombrarse nuevos diputados, y así sucesivamente. He ahí la primera asamblea legislativa de las Provincias Unidas del Río de la Plata, si es que puede llamarse asamblea legislativa aquella que no tiene iniciativa de ninguna naturaleza, cuya duración está limitada al breve término de ocho días y cuyas funciones se subordinan tan estrechamente al Poder Ejecutivo.

El Cabildo promovió la reforma de este reglamento en el mes de Marzo, y el Triunvirato accedió á alguna de sus indicaciones, como se vé por el decreto del día nueve del mismo mes. Reduce á treinta y tres el número de los ciudadanos que deben integrar la asamblea, tomados de una lista de cien; declara que los vecinos de la campaña tienen voto activo y pasivo en la elección; autoriza á la Asamblea para proponer las modificaciones que juzgue convenientes en su reglamento



y le otorga el derecho *para hacer las mociones que haya por convenientes, fuera de las consultas que nazcan precisamente de la decisión de los asuntos designados en la nota que debe pasarle el gobierno.* Finalmente, determina que la asamblea arreglará los votos con que deben sufragar cada uno de los pueblos de las provincias que no estén ocupados por los enemigos.

La primera elección tuvo lugar entre 1° y el 3 de Abril. La ciudad designó en comicio público los 8 electores que, reunidos con el ayuntamiento, procedieron á designar los treinta y tres ciudadanos que debían integrar la Asamblea. Como las provincias no habían nombrado diputados, el mismo cabildo y los 8 electores les nombraron apoderados á las de Salta, Santiago, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santa-Fé, Mendoza, San Juan, San Luis y Banda Oriental. La «Gazeta» del 5 de Abril los enumeró bajo el encabezamiento siguiente: «relación de los apoderados nombrados *para* los pueblos de las Provincias Unidas, para representar sus derechos en la próxima asamblea.» Este decreto ha sido transcrito con error sustancial en el Registro Nacional, poniendo *por las Provincias*, en sustitución de *para las Provincias*, lo que significa algo muy diferente.

El día que precedió á la reunión de la Asamblea, el Triunvirato proclamó por bando la obligación pública de respetar sus deliberaciones, previniendo que sería castigado con el último suplicio el que atentara contra su libertad: no se le había ocurrido quién iba á ser el delincuente.

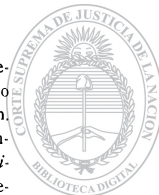
Reunióse la Asamblea el día 4 bajo la presidencia del ayuntamiento y con asistencia de los



33 ciudadanos y de los 11 apoderados nombrados para las Provincias. Su instalación fué saludada como un grande acontecimiento, porque reorganizaba el gobierno y formaba contrapeso á la autoridad ejecutiva.

El día 6 empezó sus funciones declarando que le correspondía la autoridad suprema de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Acto continuo nombró vocal del Triunvirato, en reemplazo del Dr. Passo, al coronel Don José Martín Pueyrredón, y como éste se encontraba ausente, designó para que lo reemplazara provisoriamente, al Dr. Don José Miguel Díaz Veléz. Debemos recordar que el artículo 1° del Estado Provisional disponía que los miembros del Triunvirato serían suplidos por los secretarios. Estos actos fueron transmitidos al Poder Ejecutivo, en los siguientes términos: «Exmo. Sr: Habiendo tratado esta Asamblea sobre el carácter que revise, ha sancionado que le corresponde la autoridad suprema sobre toda otra constituida en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y se lo comunica á V. E. para su inteligencia y para que, circulando las correspondientes órdenes, se haga notorio á todos para el objeto y fines que podrian interesar á la salud del Estado. Dios guarde á V. E. Sala de la Asamblea—Abril 6 de 1812.—Francisco Javier de Riglos, Vicente Anastasio de Elchevarría, secretario».

Y en otro aviso que decía: «Exmo. Señor: Consecuente á la declaración que se avisa á V. E. en oficio que acompaña á éste, sobre el carácter y autoridad suprema que constituye á la Asamblea Provisional de las Provincias Unidas del Río de la



«Plata, espera que V. E. ponga en posesión inme-
«diatamente al Dr. José Miguel Díaz Veléz, como
«suplente del vocal Don Juan Martín Pueyrredón.
«Dios guarde V. E. muchos años. Sala de la Asam-
«blea—Abril 6 de 1812.—*Francisco Javier de Ri-*
«*glos, Vicente Anastasio de Etchevarría, secre-*
«*tario*».

De esta manera quedaba excluido del Triunvirato el secretario Don Bernardino Rivadavia, que lo había integrado al expirar los 6 meses del período del Dr. Passo.

La contestación del Triunvirato no se hizo esperar; fue fulminante. Dice así:

«Exmo. Señor Presidente de la Asamblea: Sien-
«do nula, ilegal y atentadora contra los derechos
«soberanos de los pueblos, contra la autoridad de
«este Gobierno y contra el Estatuto Constitucional
«jurado, reconocido y sancionado por la voluntad
«de las Provincias Unidas la atribución de la auto-
«ridad suprema que se ha abrogado indebidamente
«por sí misma la Asamblea, comprometiendo de un
«modo criminal los intereses sagrados de la patria,
«ha determinado este gobierno, en virtud de sus al-
«tas facultades y para evitar las consecuencias de
«tan extraño atentado, disolver, como disuelve, la
«Asamblea, y suspender á V. E. en las funciones
«particulares de su autoridad ordinaria, sin perjuicio
«de tomar las providencias que convengan para ase-
«gurar la tranquilidad pública y evitar la disolución
«del Estado, á que camina aquella escandalosa reso-
«lución, lo que se comunica á V. E. como su Pre-
«sidente, para que en el acto haga entender á la
«Asamblea que está disuelta, y á sus vocales que se



«retiren sin otro carácter que el de simples ciudadanos, so las penas establecidas en el bando del 3.^o del corriente, avisando V. E. el pronto cumplimiento de esta disposición en todas sus partes.»

«Dios guarde á V. E. muchos años.—Buenos Aires
«Abril, 6 de 1812.—*Manuel de Sarratea, Feliciano Chiclana, Bernardino Rivadavia—Herrera, secretario.*»

De manera que el Triunvirato no solamente disolvió la Asamblea, sino que también suspendió el Ayuntamiento y conminó con la pena del último suplicio á los diputados, si pretendían mantener su carácter después de la disolución: volvía, pues, á manifestarse el poder dictatorial consagrado en el Estatuto Provisional de 22 de Noviembre de 1811.

—

VI—El 9 de Marzo de 1812 llegaron á Buenos Aires el teniente coronel D. José de San Martín, el capitán Vera, el capitán Chilavert, el alférez Zapiola, el alférez Carlos de Alvear y el barón Hølenberg. Los había conducido, bajo los buenos auspicios de su nombre, la fragata inglesa *Jorge Canning*. Jorge Canning fué uno de los más grandes estadistas de Inglaterra y quién presentó ante el mundo, diez años después, las repúblicas sub-americanas, haciendo saber á todas las naciones que la Gran Bretaña había resuelto acreditar ministros cerca de los nuevos países que se habían declarado independientes y soberanos; pudo, con razón, decir más tarde en la Cámara de los Comunes, que *había llamado á la vida de un nuevo mundo para restablecer el equilibrio del antiguo*.

San Martín era un soldado dotado de todas las grandes calidades del guerrero, uno de esos solda-



dos que ponen la fuerza de su genio al servicio de la independencia ó de la integridad nacional, y cuyas glorias no afligen jamás la libertad. Alvear no era un soldado tan completo como San Martín; pero era algo más que un soldado: tenía la inteligencia luminosa del hombre político y el espíritu abierto á las más nobles ideas y á las más audaces iniciativas de progreso.

San Martín traía de Europa la idea fija de la emancipación americana. Había conocido al general Francisco Miranda, precursor de la revolución, había jurado en sus manos, con Bolívar, cooperar á la grande obra, asociándose á la *Gran Unión Americana*, según sus ritos secretos y sus ceremonias simbólicas. Cuando llegó á Buenos Aires, hervían ya los partidos argentinos. Monteagudo se había separado de Rivadavia (1) y había organizado una nueva *Sociedad Patriótica*, sobre la base de la antigua, es decir, con los elementos del antiguo partido de Moreno. La oposición de la Sociedad Patriótica y la influencia de sus debates habían alcanzado tal importancia, que el Triunvirato para refrenarla, incurrió en el grave error de nombrar un fiscal que debía asistir á sus sesiones é intervenir en los debates, clausurándolos cuando á su juicio fueran contrarios al orden público. Esta resolución, cuya monstruosidad no necesita demostrarse, avivó la oposición y dió motivo á nuevas invectivas de Monteagudo.

¹ (1)—Los contemporáneos han referido que el motivo de esta desinteligencia fue un artículo publicado por Monteagudo en «La Gazeta» dedicado á las damas sud-americanas, en el que el ardiente y galante periodista aconsejaba á las bellas de su tiempo que hicieran valer sus seducciones y su prestigio en favor de la causa de la independencia.



Unidos San Martín y Alvear por la identidad del propósito y por las relaciones amistosas que mantenían desde España, se pusieron inmediatamente en movimiento. Alvear tomó la dirección del partido que encabezaba Monteagudo, y San Martín inició la organización de una sociedad secreta, análoga á la Gran Unión Americana, con el nombre de *Logia Lautaro*. En ella entraron, desde el primer momento, Monteagudo, Zapiola, Anchoris y la mayor parte de los personajes que van á distinguirse en el Triunvirato y en la Asamblea del año 13.

El objeto de la Logia Lautaro era «trabajar con «sistema y plan en la independencia de América y en «su felicidad, obrando con honor y procediendo con «justicia.» Sus medios debían ser la solidaridad más absoluta entre todos los miembros de la asociación, la disciplina y obediencia á sus resoluciones y el secreto, cuya violación podía ser castigada hasta con la muerte. Si alguno de sus miembros llegaba á ocupar el primer puesto en el Estado, debía proceder con el acuerdo de la Logia para nombrar ministros, generales, gobernadores, para celebrar tratados, declarar la guerra y hacerla paz, en una palabra, para todas las más elevadas funciones del gobierno y de la política.

Instituciones de esta naturaleza no pueden ser aprobadas en nuestra época; pero se explican y se escuchan en los principios del siglo, cuando no se habian establecido las prácticas á favor de las cuales se asegura hoy día las libertades individuales y colectivas.

La Logia Lautaro no tardó en alcanzar la dirección de la política argentina, y si su influencia fué algunas veces perjudicial á la buena dirección de los negocios públicos, es justo reconocer que fueron mayo-



res sus servicios, porque á ella se debió la organización de la memorable Asamblea de 1813 y la solidaridad de los que lucharon por la independencia sobre el Atlántico y sobre el Pacífico; por ella se mantuvo la unión con Chile, que sirvió para libertar al Perú.

VII—El 26 de Mayo de 1812 se celebró en Buenos Aires un armisticio entre el gobierno de las Provincias Unidas y el representante del Príncipe Regente de Portugal, en virtud del cual debían cesar inmediatamente las hostilidades en la Banda Oriental, entre el ejército portugués y el de las Provincias Unidas, retirándose aquél á las fronteras del Brazil. Mandaba al ejército portugués el general Diego de Souza, que movido por su animadversión á las ideas y tendencias revolucionarias, había hecho causa común con los españoles en Montevideo y se había puesto en comunicación con los residentes en Buenos Aires, alentándoles en el propósito de intemar un golpe de mano que cambiara la situación. Así fué que, no obstante el armisticio celebrado el 26 de Mayo, retardó su cumplimiento hasta el 11 de Julio, día en que llegó á su conocimiento el fracaso de la conspiración Alzaga y el severísimo castigo de los delincuentes. (1)

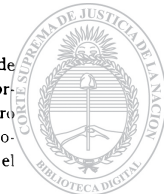
(1) Don Martín de Alzaga era el representante más genuino de los españoles en América: enérgico, orgulloso, soberbio, indomable, no se resignaba con la supremacía de los criollos, ni transigía con la insubordinación revolucionaria respecto de la corona de España. Su intervención en la defensa de 1807 le había señalado como el jefe nato de los peninsulares. La situación de las Provincias Unidas, á mediados del año 12, se presentaba propicia para que ensayara dar satisfacción á sus pasiones: Montevideo continuaba en manos de los españo-

Cuando el general portugués tuvo conocimiento del fatal resultado de la conspiración, levantó su campo y se puso en marcha hacia la frontera.

La causa de la patria no se encontraba en tan buenas condiciones por el Norte. El general Belgra-

les y sus buques dominaban el Río de la Plata y sus afluentes; el ejército portugués en territorio del Uruguay les prometía ayuda decisiva, y los ejércitos del virrey del Perú avanzaban sobre los restos del ejército patriota, que aún no había conseguido reorganizarse, después del desastre en los campos de Huaqui. Alzaga se había puesto en comunicación con el general portugués Diego de Souza y, contando con su cooperación, había iniciado los trabajos de la conspiración que debía costarle la vida. Al efecto había buscado y obtenido la ayuda del director de la orden de los Bethlemitas, fray José de las Animas, antiguo oficial del ejército español y que fue, en realidad, el alma de la conspiración por su actividad y por su energía. Los conspiradores llevaban adelante sus planes con tanto sigilo que el gobierno no tuvo noticia de ellos, sino cuando estaban próximos a su desenlace, en los primeros días de Julio. Un dependiente de Alzaga, comprometido en el siniestro plan, cayó bajo la influencia del terror de sus propias acciones y, víctima del delirio de las persecuciones, comenzó a vagar por los alrededores de la ciudad, hasta que encontró asilo en la choza de un esclavo llamado Ventura, a quien le reveló el proyecto que tenían entre manos. El esclavo, alarmado, transmitió esas revelaciones a su ama y ésta las hizo llegar hasta el gobierno, por medio del alcalde Palavecino. El gobierno no tardó en darse cuenta de que se trataba de un verdadero peligro público e instituyó cinco comisiones judiciales con facultad de sumariar, sentenciar y hacer ejecutar al que resultase culpable. Fray José de las Animas se ocultó, y con él desapareció uno de sus cómplices llamado Francisco Valdeparais, dejando en poder de una esclava un lío de papeles que resultó ser el manifiesto de la revolución, cuyo título era: «Manifiesto Político y Moral» en el que se mezclaba la invasión napoleónica y la re-

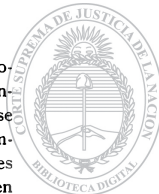




no había retrocedido hasta Tucumán seguido de cerca por el ejército español. El Triunvirato le ordenó que continuara su retirada hasta Córdoba, pero el noble general tuvo la heroica inspiración del momento, comprendiendo que no debía abandonar el

volución argentina, comentando un texto que después de largas disgresiones, conducía a la siguiente conclusión «... .. y entonces podremos, en ambos mundos, asegurar al universo que los españoles, aunque han estado dormidos muchos años, han despertado con la bravura del león rugiente, *tamquam leo rugiens circuit quoerens quent devoret*, para despedazar al que resista obedecer a la soberanía y a sus representantes reconocidos por legítimos por la mayor parte de las naciones y potencias amigas.» *La Gaceta de Buenos Aires*, de 17 de Julio, aseguró que el proceso había comprobado que los conspiradores pensaban apoderarse de los miembros del gobierno y cortarles la cabeza para clavarla en la verja que servía de adorno a la Pirámide. Las cinco comisiones judiciales comenzaron a funcionar inmediatamente y cuando el caso lo requería, los miembros del Triunvirato funcionaban con ellos y juzgaban y sentenciaban asumiendo la responsabilidad de su severa justicia ante los contemporáneos y ante la posteridad. Durante 40 días estuvo en pie, en la plaza de la Victoria, una horca, y cada día aparecía colgado un nuevo cadáver.

Alzaga, el último rico-home español, como le llama el historiador Dr. López, fray José de las Animas, a quien éstas no ayudaron, ni le salvaron sus hábitos, Valdeparais, Cámara, yerno de Alzaga, todos cayeron bajo la terrible represión. Un detalle curioso terminará esta breve referencia de la famosa conspiración: el 22 de Julio el Triunvirato dirigió una nota al gobernador intendente de Buenos Aires en los siguientes términos: «Queriendo el gobierno dar una prueba de su gratitud y estimación a la persona del negro Ventura, esclavo de «Doña Valentina Feijóo, que fue el primer denunciante de la «horrible conspiración contra la patria que acaba de descubrirse, ha venido en concederle la libertad y el uso del uni-



territorio á los invasores, y solicitado por los patriotas de Tucumán para que intentara allí la resistencia, resolvió desobedecer al gobierno y aprestarse al combate, escusando su desobediencia con la imposibilidad de llevar tras de sí los depósitos militares que existían en Tucumán. El gobierno insistió en su orden y el general insistió en su desobediencia: él, que no había vacilado cuando los amotinados de

«forme del regimiento número dos, con un escudo en el brazo izquierdo que tenga la siguiente inscripción: *Por fiel á la patria*; que se le den cincuenta pesos fuertes por vía de gratificación y un sable para custodia de su benemérita persona, declarándolo con opción al sueldo de soldado de la patria, siendo de cuenta del Estado suministrarle el uniforme cuando lo necesite, por todo el tiempo de su vida.—*Chiclana, Pueyrredón, Rivadavia - Nicolás Herrera, secretario.*—No podemos ni debemos aprobar el procedimiento por medio de comisiones judiciales. La historia humana enseña que han sido en todo tiempo perjudiciales para la libertad, aún cuando en casos excepcionales hayan podido responder á las exigencias de una situación anormal. En Inglaterra se conserva todavía el sentimiento vivo contra la tradición odiosa de la Cámara Estrellada. La defensa del Triunvirato tiene que reducirse á la repetición del ejemplo clásico de Cicerón, después de la conjuración de Catalina: al entregar el mando, los cónsules arengaban al pueblo para darle cuenta de sus actos: quizo hacerlo Cicerón, y subiendo á la tribuna, exclamó: «juro» «Jurad que no habeis violado las leyes,» le interrumpió el tribuno Metelus, aludiendo á la ley que prohibía condenar á muerte á un ciudadano romano sin intervención del pueblo. «Juro que he salvado la República», le contestó el cónsul, y el pueblo en coro gritó: «juramos que ha dicho la verdad!» En análoga situación, Rivadavia, Chiclana y Sarateá, con la mano sobre la conciencia, habrían dicho otro tanto, y sus contemporáneos habrían repetido el juramento del pueblo romano.



Abril de 1811 le exigieron que abandonara el mando del ejército del Uruguay, para bajar á rendir cuenta de su conducta personal. Ahora se trataba de la defensa del territorio y no retrocedía ante la más grande responsabilidad en que puede incurrir un general.

El 24 de Setiembre de 1812, con la victoria de Tucumán, justificó su desobediencia y cambió la situación del ejército del norte.

—

VIII—Mientras se desenvolvían estos acontecimientos, el Triunvirato preparaba la reunión de una segunda Asamblea, y había dirigido la circular á los Ayuntamientos de los pueblos libres de las Provincias Unidas, con fecha 3 de Junio, en la que decía: «Desde el momento de la instalación del gobierno «ha sido uno de sus primeros cuidados acelerar la «reunión del Congreso General de las Provincias «Unidas, para que, formada y sancionada la constitución del Estado, señalase la ley al Gobierno los «límites de su poder, á los magistrados la regla de «su autoridad, á los funcionarios públicos la barrera «de sus facultades y al pueblo americano la extensión de su derecho y la naturaleza de sus obligaciones; pero una serie de sucesos desgraciados llamó la atención del gobierno á la defensa común; concluyendo por recomendarles que procedieran con la mayor urgencia á la designación de diputados para esta segunda asamblea, para que, organizada según las mismas bases de la anterior, formase un plan de elección para el congreso constituyente, bajo los principios de la más perfecta igualdad política, y determinarse el lugar de las sesiones futuras



del agosto cuerpo, cuya reunión se esperaba desde los días de Mayo.

Entre tanto, la dirección de los partidos que comienzan á ser históricos se había modificado. Rivadavia y Pueyrredón se encontraban en ese momento al frente de los elementos de opinión que habían formado el núcleo del antiguo partido saavedrista y, por consiguiente, en oposición abierta con Alvear, San Martín y Monteagudo, que dirigían desde la «Logia Lautaro» el partido liberal que encabezó Moreno,

El 2 de Octubre apareció en la «Gazeta de Buenos Aires» un aviso oficial concebido así: «El Gobierno ha resuelto, en acuerdo del 26 del corriente (Setiembre), que se reuna la Asamblea ordinaria para el día 6^o del próximo Octubre, cuya resolución se comunica al excelentísimo cabildo para el examen de los respectivos poderes que le sean presentados y demás efectos prevenidos en el reglamento de la materia.»

El día antes de la reunión de la Asamblea llegó á Buenos Aires la noticia de la victoria de Tucumán. Como Belgrano había combatido contra las órdenes perentorias del Gobierno, el éxito, lejos de favorecer á éste, acrecentó su impopularidad, que había comenzado con la disolución de la primera Asamblea y que el movimiento de los partidos y el vigor de la oposición acentuaron en los tiempos sucesivos.

IX—La Asamblea se reunió el 6 de Octubre, como estaba decretado, y sus primeros actos concuerdan con los del cabildo. La mayoría de la asamblea pertenecía á la agrupación oficial y había le-



vantado como candidato al Dr. Pedro Medrano, para reemplazar en el Triunvirato al miembro cesante.

La oposición tenía de candidato á D. Nicolás Rodríguez Peña. La mayoría, para asegurar el éxito, desechó á los diputados de Salta y Jujuy, fundándose en que estas dos ciudades se hallaban todavía bajo el poder del enemigo y en que, por consiguiente, no debían estar representadas. El deán Zavaleta tuvo algún inconveniente para concurrir á la Asamblea; mandó su voto por escrito, pero no fue aceptado, quedando así Tucumán sin representación. No es necesario decir que triunfó Medrano.

Estas ocurrencias acrecentaron la irritación del partido liberal y precipitaron los sucesos que San Martín, Alvear y Monteagudo preparaban en el seno de la Logia Lautaro. El 8 de Octubre amanecieron en la plaza de la Victoria el regimiento de granaderos á caballo, teniendo á su frente al teniente coronel José de San Martín y á su segundo Carlos de Alvear, el regimiento número dos, bajo el mando de su coronel Francisco Ortiz de Ocampo, y el regimiento de artillería, bajo las órdenes de su comandante Manuel de Pinto. A primera hora se echaron á vuelo las campanas del cabildo y el pueblo acudió á la plaza.

Los directores del movimiento trajeron, de grado ó por fuerza, á los cabildantes, y una vez reunido el Ayuntamiento, presentaron una petición en la que, después de expresar sus agravios, concluían así: «en esa virtud pide á V. E., bajo la protección de las legiones armadas, la parte más sana del pueblo, que en el acto se suspenda la asamblea y cese el gobierno en sus funciones, reasumiendo V. E. la auto-



«ridad que le delegó el pueblo congregado el 22 de
«Mayo de 1810; y creándose, desde luego, un Poder
«Ejecutivo compuesto de las personas más dignas del
«sufragio público, se proceda ulteriormente y sin de-
«mora á la convocación de una Asamblea general
«extraordinaria que decida de un modo digno los
«grandes negocios de la comunidad (separando antes
«de todo, por.sospechosos, á los señores el alcalde
«de primer voto D. Xavier de Riglos, á los regido-
«res D. Manuel Arroyo y D. Manuel García y al sin-
«dico procurador D. Vicente López), en la inteligen-
«cia que estamos resueltos invariablemente á ofrecer
«el último sacrificio á la libertad de la patria, antes
«que consentir que se entronice la tiranía en nues-
«tras provincias. El pueblo espera la contestación de
«V. E. *en el perentorio término de veinte minutos y*
«*lo hace responsable de la menor demora.* Protesta
«por último obrar con dignidad, pero también jura
«delante del eterno no abandonar el lugar que ocupa
«hasta ver cumplidos sus votos,—Plaza de la Victoria,
«8 de Octubre de 1812.—*Bernardo de Monteagudo,*
«etc. etc.»

El cabildo, así conminado, accedió inmediatamente á la petición popular y nombró un nuevo triunvirato compuesto de los señores Dr. Juan José Passo, Nicolás Rodríguez Peña y Dr. Antonio Alvarez de Jontes, para que rigiera el Estado bajo el Estatuto Provisional de 1811. (1)

(1) Hé aquí el acuerdo del Cabildo:

“Los señores del Ermo. Cabildo de Justicia y Regimiento de
“esta Capital Don Miguel de Azcuénaga, gobernador intendente,
“Don José Pereyra de Lucena, alcalde ordinario de segundo



La revolución estaba consumada y triunfante. El antiguo partido de Saavedra, que se había agrupado

“voto, y regidores do *Manuel Mansilla, alguacil mayor, don*
 “*Manuel Lexica, don Permin de Tocornal, don Juan Jose*
 “*Cristóbal de Anchorena, don José M. Yevenes, don Carlos*
 “*José Gómez y doctor don Ventura Díaz de Bedoya* — Por
 “cuanto: Habiéndose enterado en acuerdo extraordinario del
 “día de hoy de una representación que ha hecho á este
 “Exmo. Cabildo una gran parte del pueblo, protegida por
 “toda la fuerza armada de la capital, en que manifestándose
 “resentidas todas las clases del Estado de las públicas in-
 “fracciones de los artículos del Estatuto Provisional de 23 de
 “Noviembre de 1811 y del Reglamento de 19 de Febrero de
 “1812, habiéndose procedido de un modo ilegal y escanda-
 “loso á las elecciones para los dos vocales para el gobierno,
 “escluyendo á los representantes de Salta y de Jujuy y frus-
 “trando el sufragio del diputado suplente de Tucumán, dan-
 “do por impedido sin causa al de Mendoza, usando los guber-
 “nantes de seducción é intriga, para ganar los votos en la
 “Asamblea á favor de la facción, con otros hechos de no
 “menor gravedad que se expresaban, pedían todos los sus-
 “criptos que en el acto se suspendiese la dicha Asamblea y
 “cesasen en sus funciones los individuos depositarios del P. Eje-
 “cutivo, reasumiendo el Ayuntamiento la autoridad que le
 “delegó el pueblo congregado el 22 de Mayo de 1810 y
 “creando, desde luego, un P. Ejecutivo de las personas más
 “dignas del sufragio público, ligado precisamente á la indis-
 “pensable convocación de una asamblea general, que decida
 “de los grandes negocios de la comunidad, porque esta era
 “la manifiesta voluntad del pueblo, que estaba dispuesto á
 “ofrecer el último sacrificio á la libertad de la patria y ju-
 “raba delante del eterno no abandonar el lugar que ocupaba,
 “hasta ver cumplidos sus votos: ha determinado, después de
 “la meditación que permitieron las circunstancias y haber
 “oido á los señores gefes militares de la fuerza que ocupaba la
 “plaza de la Victoria, Don Francisco Ortiz de Ocampo, co-
 “ronel del regimiento número dos; Don José de San Martín,



en torno de Rivadavia y Pueyrredón, fue así desalojado del poder y sustituido por el partido liberal bajo

“comandante de los granaderos montados; Don Manuel de
“Pinto, comandante de la artillería volante; Don Carlos de
“Alvear, sargento mayor de los granaderos montados; Don Ro-
“mán Fernández, de igual clase del número dos, entre otras
“cosas, que quedase suspensa la Asamblea congregada el 6
“del corriente y sin efecto sus resoluciones, y proceder á la
“elección de los individuos que deben constituir el gobierno
“provisorio, y lo ha realizado en las personas de los señores
“Dr. Juan José de Passo, Don Nicolás de la Peña y Dr. Don
“Antonio Alvarez de Jontes, que fue aprobado á pluralidad
“de votos por el inmenso pueb'o que ocupaba los corredores
“y galerías de las casas consistoriales, depositándoles la au-
“toridad bajo las condiciones siguientes: 1ª que los señores
“electos comparezcan sin pérdida de momento en esta sala
“capitular á prestar el juramento de usar bien y fielmente con
“la confianza con que les ha honrado el pueblo; 2ª que luego que
“los referidos señores presten el juramento, sean reconocidos
“por depositarios de la autoridad superior de las Provincias
“Unidas del Río de la Plata por todas las corporaciones de
“esta Capital, su vecindario y cuerpos militares, respetando y
“obedeciendo todas sus disposiciones, hasta la reunión de una
“Asamblea general que se verificará dentro de tres meses pre-
“cisa é indispensablemente, procediendo en cualquier caso de
“acuerdo con el Exmo. Cabildo; 3ª que los poderes para esta
“Asamblea sean con toda la extensión que quieran darle los
“pueblos; 4ª que la Asamblea sea el supremo tribunal de re-
“sidencia de todos los que hayan ejercido el P. Ejecutivo,
“desde el 25 de Mayo de 1810 (esta cláusula se atribuye á
“Monteagudo); 5ª que la Asamblea formará una constitución
“provisoria y que, entretanto, el nuevo gobierno observará in-
“violablemente el Estatuto Provisional, á excepción de los
“artículos que hayan derogado, y cumpliendo con especialidad
“con los decretos de seguridad individual y libertad de imprenta;
“6ª que el presente gobierno nombrará los secretarios que
“crea conveniente, siendo él responsable de su conducta; 7ª



la dirección de Alvear, quien, aún cuando no formaba parte del Triunvirato, era el alma de la nueva situación.

“que haya de ejercer el cargo de vocal suplente Don Francisco Belgrano durante la ausencia de Don Nicolás de la Peña, á consecuencia de habérsele elegido al efecto por unanimidad de votos; 8ª que en caso de enfermedad, ausencia ó fallecimiento de alguno de los vocales del gobierno, quede á cargo del Ayuntamiento el nombrar quién le subrogue; 9ª y última, que haya de instruir eficazmente á los pueblos de la necesidad de justicia y conveniencia de una tan importante medida como la que se ha tomado, reservándose el Ayuntamiento proponer las ideas que juzgue convenientes y á que por ahora no da lugar la premura del tiempo; publíquese esta determinación inmediatamente por bando, para que llegue á noticia de todos y fijese en los lugares acostumbrados. Por tanto, y al indicado efecto, publíquese por bando y fijese. — Sala Capital de Buenos Aires, 8 de Octubre de 1812.”



UMARIO: I—Segundo Triunvirato (Passo, Rodríguez Peña, Alvarez de Jontes)—Su manifiesto—Convocatoria de la Asamblea general constituyente — Bases para la elección de sus miembros—II Proyecto de constitución de 1812—III La Asamblea general de 1813; su instalación; su composición; su supremacía; sus trabajos—IV Renuncia del diputado Carlos de Alvear—Refuerzos á Montevideo — Artigas — Suspensión de las sesiones de la Asamblea—Dictadura institucional—V Vilcapugio y Ayohuma—Belgrano á las órdenes de San Martín—Alvear al frente del ejército de la capital—La Logia Lautaro en el poder—El Poder Ejecutivo unipersonal—Elección de Posadas.

I—El segundo Triunvirato dió un manifiesto que pareció en la *Gazeta* del 22, pero cuya fecha es del 6 de Octubre. Entre otras cosas decía: «acababa de llegar á esta capital la noticia del triunfo (Tucumán), cuando se reunió la asamblea para nombrar el vocal que debía subrogar al señor general don Manuel de Sarratea y discutir los demás negocios públicos que fueran de una atención preferente..... Observaba el pueblo que una facción adormecida se manifestaba con semblante erguido intrigando los sufragios para el nombramiento de electores, diputados y vocal..... Reunida la asamblea, su primer paso fue excluir á los representantes de Salta y Jujuy, sin autoridad y sin causa; ellos fueron nombrados en tiempo hábil por la voluntad libre de



«unos pueblos que, accidental y precariamente, cedieron á la fuerza, sin renunciar por esto sus derechos, ni perder los poderes que habían dado á sus representantes, sin embargo de las altas protestas hechas de la nulidad de cuanto se obrase. La asamblea los excluye, y este atentado contra los derechos de unos pueblos cuyo vecindario acababa de sacrificarse en las llanuras de Tucumán, frustrando igualmente el sufragio del diputado de éste, sirve de preludio á la elección de don Pedro Medrano para vocal del gobierno».

Refiere en seguida el movimiento revolucionario del 8 de Octubre, y concluye con esta declaración sustancial: «El Gobierno sería infiel á la confianza del pueblo, si no consagrarse todos sus esfuerzos á destruir la causa de nuestros pasados males y sofo-car el origen de otros nuevos..... Una asamblea general con toda la plenitud y legalidad que permitan las circunstancias, á la que concurran los representantes de los pueblos con la extensión de poderes que quieran darle, es, sin duda, el mejor arbitrio para asegurar la salud de la patria».

La Logia Lautaro había decidido derrocar el primer Triunvirato y disolver la Asamblea, no solamente con el propósito de cambiar la dirección personal del gobierno, sino también con el de llevar al país decididamente á la independencia nacional.

El 24 de Octubre apareció un decreto convocando la Asamblea General para el mes de Enero de 1813. No había régimen electoral establecido. Recordaremos que cuando la primera Junta de Mayo se dirigió á los pueblos del Virreynato para que designaran diputados al futuro Congreso, les recomendaba



que procedieran en Cabildo abierto, convocando la parte principal y más sana de la población, bajo la presidencia del ayuntamiento; con posterioridad no se había dictado otra regla electoral que la que fijó el decreto de juntas provinciales y que desapareció con la misma institución.

El sistema establecido en 1812 para las Asambleas que se reunieron en Abril y Octubre de ese año no determinaba procedimiento electoral sino para la ciudad capital, y se entendió que los diputados de provincia debían ser designados por los cabildos en la forma preindicada por la Junta de Mayo.

Siendo tal la situación y antecedentes jurídicos del país, era necesario uniformar el sistema electoral para que el futuro congreso tuviera la magestad de la representación nacional. El decreto apareció, como de costumbre, precedido de extensas consideraciones de orden político. Dice así:

«Si pudo proclamarse triunfo la disolución de la «primera Asamblea Provisional del 6 de Abril último, «la patria debe, sin duda, datar un nuevo nacimiento desde el instante mismo en que se salvó de la «terrible crisis que preparaba la del 6 de Octubre. «La Asamblea mostróse como un centro de impulsión «arbitraria en una circunferencia aparentemente «polar».

«Constituido el gobierno, si su primer cuidado fue «la expulsión de sus enemigos exteriores, atender á «los ejércitos y rendir el justo homenaje á los ilustres defensores de la patria en Tucumán, la libertad interior y la felicidad permanente del Estado ha «sido su desempeño principal en importancia.....»

«Así es que, luego que lo permitió el torbellino de



«las primeras atenciones á que nos empeñaban los sucesos militares, se anunció en un manifiesto la «Asamblea General.»

«Después de haber afianzado *el primer paso á la libertad*, con un esfuerzo y resistencia tan general como sublime; después de sostener por el espacio de tres años una lucha de ferocidad y de barbarie peninsular, de una parte, y de virtud y de constancia americana de otra, *cuando la España no puede justificar su conducta en constituirse ante el tribunal de las naciones imparciales, sin confesar, á pesar suyo, la justicia y santidad de nuestra causa*; cuando el eterno cautiverio del señor don Fernando VII ha hecho desaparecer sus últimos derechos con los posteriores deberes y esperanzas las más ingenuas..... cuando la necesidad de mantener aquella, (nuestra seguridad) demanda imperiosamente *una reforma general en la administración pública que facilite en nuestro mismo seno los recursos profícuos que en el día se hacen insuficientes por los vicios del antiguo régimen, y por el ejercicio irregular é incierto del poder.....*, ¿qué otro tiempo puede esperarse para reunir en un punto la magestad y fuerza nacional?..... Y después agrega: «Esta, sin duda, debe ser la memorable época en que el pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, abriendo con dignidad el sagrado libro de sus eternos derechos, por medio de libres y legítimos representantes *votó y decretó la figura con que debe aparecer en el gran teatro de las naciones*».

«.....Cuando se haya establecido *la base y forma de gobierno* que se crea más apropósito al bien y utilidad de todos, resignarán el mando inmediatamente



«en las manos que una legítima elección señale, enteramente contentos con la gloria y el honor de haber conducido á los pueblos del Río de la Plata á la dignidad de una *Nación legítimamente constituida*; así que, reconociendo, desde luego, la representación *nacional* no sólo como un derecho, sino como un deber, la invocan como el medio más eficaz de *proveer á la común defensa, procurar la seguridad general y asegurar las bendiciones de la libertad para la edad presente y futura*».

La parte dispositiva prescribe que se llame á los vecinos *libres y patriotas* de cada cuartel para que concurren á designar un elector á pluralidad de votos; correspondían ocho á cada ciudad. Los ocho electores, reunidos con el ayuntamiento, designaban el diputado ó diputados para la Asamblea.

Correspondía á la ciudad capital cuatro diputados, á las capitales de provincias dos, y uno á cada ciudad de su dependencia, con excepción de Tucumán á la cual se le concedía dos, como un homenaje de consideración por el triunfo de 24 de Setiembre.

El artículo 8° del decreto determinaba que, «como el motivo poderoso que induce á la celebración de la asamblea tiene por objetos principales conducir á los pueblos á la existencia y libertad que no han tenido, y la organización general del Estado, los poderes de los diputados serán concebidos sin limitación alguna y sus instrucciones no conocerán otro límite que la voluntad de los poderdantes, debiendo aquellos ser calificados en la misma asamblea antes de su apertura, en una sesión preparatoria;» precepto que corresponde, en la primera parte, á la idea de la unidad nacional, y en la segunda elimina la regla



según la cual los diplomas de las diputados debían ser aprobados por el ayuntamiento de la Capital.

Tocábale al general Belgrano presidir la elección de Tucumán pero el virtuoso patriota se apartó del acto por las razones que expresó en su comunicación al gobierno, en la que textualmente dice: «no «he querido asistir al acto, y delegué mis facultades en el gobernador de la provincia, para que pro«cediera sin voto, para hacer ver á todos la impar«cialidad con que procedo en estos asuntos y no tu«vieran que atribuirme partido en que no estoy, ni «estaré jamás, suponiendo al gobernador, si le con«cedía voto, como un instrumento de mis proyectos». Noble ejemplo que no ha sido imitado en lo sucesivo!

II—En la *Gaceta* del 13 de Noviembre apareció un aviso oficial en el que declaraba el gobierno que siendo su propósito que la asamblea se reuniera en todo el mes de Enero de 1813, había resuelto designar una comisión compuesta de los señores doctor don Luis Chorroarín, doctor don Pedro José de Agrelo, doctor don Nicolás Herrera, doctor don Valentín Gómez, doctor don Pedro Somellera, doctor don Manuel García, y doctor don Hipólito Vieytes «para que, «asociados, preparen y discutan las materias que han «de presentarse á aquella augusta corporación, formando al mismo tiempo, un proyecto de constitución «digno de someterse á su examen».

El señor Chorroarín renunció y fue reemplazado por el señor don Gervasio de Posadas. La comisión cumplió su cometido proyectando una constitución que merece ser recordada por las declaraciones que



contiene y por su manifiesta superioridad sobre todos los ensayos constitucionales de la época. Fue publicada por primera vez en la Colección de memorias y documentos para la historia y geografía de los pueblos del Río de la Plata de don Andrés Bamas, en Montevideo, el año 1849.

La constitución es unitaria y comienza con esta declaración fundamental: «Artículo 1°: Las Provincias «Unidas del Río de la Plata forman una república libre é independiente», anticipándose así á la declaración de la independencia y á la solución del problema relativo á nuestra forma de gobierno, cuando aún se discutía si se debía mantener la soberanía de la Corona de España ó levantar un nuevo trono en las Provincias Unidas del Sud. Fue, tal vez, ese el motivo por el cual la Asamblea del año 13 no la tomó en consideración, porque, según veremos en su oportunidad, pasados los primeros meses de sus sesiones, graves motivos la obligaron á disimular los propósitos definitivos de la revolución.

El artículo 2° concuerda con aquella declaración estableciendo que la soberanía del Estado reside esencialmente en el pueblo. El territorio de la República, declarado en el capítulo segundo, se extendía entonces á las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Potosí, Charcas, Cochabamba, La Paz, Cuyo, Banda Oriental y Paraguay. (1)

El capítulo 3° está dedicado á la religión, y consagra la católica como religión del Estado. Este debe proteger y mantener con el tesoro público las igle-

(1) Propiamente, el Paraguay no formaba ya parte de las Provincias Unidas, porque el tratado de 1811 consagró su segregación.



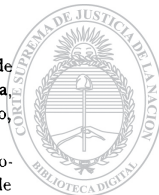
sias, el culto y sus ministros, en las formas que oportunamente establecerán las leyes, declarando en seguida que «ningún ciudadano podrá, desde entónces, «ser forzado á pagar contribución alguna con objetos de religión» y que «ningún habitante de la República puede ser perseguido ni molestado en su «persona ó bienes por opiniones religiosas, con tal que «no altere el orden público y respete las leyes y «costumbres piadosas del Estado».

Los capítulos 4°, 8° 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 20° y 21° distribuyen los poderes del gobierno en los tres grandes departamentos, legislativo, ejecutivo y judicial. Se propone, por primera vez en el Río de la Plata, el sistema bicamarista, organizándolo con una sala de representantes y un senado elegidos popularmente por un sistema de tercer grado, fijando dos años de duración á los diputados y seis á los senadores, designados aquellos cada dos años y renovándose éstos por terceras partes en el mismo período. Atribuye al congreso así constituido las facultades fundamentales de toda asamblea legislativa que tiene la representación del pueblo; votar impuestos, fijar los contingentes, imponer derechos, pagar deudas, proveer á la defensa común, bajo la regla de que todos los derechos han de establecerse en proporción de la población y riqueza de los pueblos; contraer empréstitos, reglar el comercio con las naciones extranjeras y entre las provincias, dar cartas de naturaleza, determinar el cuño y valor de las monedas, dar la ley de pesas y medidas, reglamentar los correos, postas y caminos, conceder privilegios á los autores de libros científicos y á los inventores ó introductores de artes ó industrias, reglar la justicia, decla-



rar la guerra, fijar reglas á las represalias, levantar y sostener ejércitos con la limitada condición, digna de la tradición inglesa, de que «ningún señalamiento ó aplicación de cantidades de dinero ó contribución á «estos objetos podrá ser por más tiempo que el de «dos años;» proveer y mantener una escuadra, dictar las ordenanzas de mar y tierra, declarar la paz y hacer tratados de alianza, disponer la manera de enajenar las tierras del Estado, examinar las cuentas de inversión de los caudales públicos, hacer todas las leyes que sean necesarias y propias para llevar á ejecución los poderes antecedentes, prohibiéndole: suspender la ley de seguridad individual, salvo en los casos de rebelión ó de invasión exterior; establecer ley alguna de proscripción ó con efecto retroactivo; imponer derechos de exportación de una provincia á otra, ni concederles á éstas preferencias ó privilegios en la reglamentación del comercio, ni obligar á los barcos de una provincia á entrar, aduanar ó pagar derechos en los puertos de otra, imponer capitaciones ú otra cualquiera contribución directa, sino en proporción de los censos, ni suspender, ni perturbar la libertad de imprenta.

El Poder Ejecutivo continúa en manos de un Triunvirato elegido por el congreso, por seis años, renovable por terceras partes cada dos años; sus facultades son las propias de este departamento del gobierno ensanchadas con el poder de iniciar leyes, en la misma forma que se practica actualmente; los miembros del Triunvirato eran justiciables ante el senado, mediante acusación de la cámara de Diputados, por traición, malversación ó violación de la constitución, y este juicio no tenía otro efecto que remover al funcio-



nario y declarar su incapacidad para tener empleo de honor, de confianza ó de provecho en la República, quedando sujeto á juicio, para el castigo del delito, ante la corte suprema de justicia.

La organización del Poder Judicial se extiende, como que se trata de una constitución unitaria, desde los alcaldes de ciudad hasta la corte suprema de justicia, siendo privativo de ésta dirimir las competencias de los tribunales superiores de provincias, entre sí ó con otra autoridad de la misma provincia, remover y sentenciar á los jueces de provincia, imponer la pena que corresponda á los miembros del Poder Ejecutivo y otros altos empleados del Estado, después de removidos de sus empleos por el senado en virtud de acusación de la cámara de representantes. En el proyecto de constitución se incluye un consejo de Estado compuesto de diez individuos que correspondían á cada una de las diez provincias en que estaba entónces dividido el territorio del país, y cuyas funciones eran aconsejar al Poder Ejecutivo en todo asunto grave de gobierno y prestar su consentimiento á los proyectos de ley; con la especial atribución de presentar los candidatos para los obispados y prebendas eclesiásticas.

Dejamos constancia de que en este proyecto ya se establecía la propia ciudadanía, declarando que eran ciudadanos todos los hombres libres nacidos y residentes en el territorio de la república, y que ningún hombre nacía esclavo en su suelo, adquiriendo la libertad los que se introdujeran del extranjero, por el sólo hecho de pisar las tierras de la República.

El sistema electoral que se proyectaba tenía varias peculiaridades. Se fraccionaba en asambleas prima-



rias, asambleas electorales de partido y asambleas comunales de provincia. Las asambleas primarias, llamadas también juntas electorales de parroquia, eran formadas por todos los ciudadanos residentes en la parroquia, los cuales, después de oír una misa solemne al Espíritu Santo y de escuchar el sermón que especialmente les dedicaba el párroco, procedían á designar un elector para la asamblea electoral de partido, en proporción de 1 por cada 500 almas ó de una fracción que excediese de 250. Reunidos los electores así designados en asamblea de partido, oían á su turno la misa al Espíritu Santo y procedían á designar un elector por cada 4000 habitantes ó por una fracción que excediese de 2000, para que, en asamblea provincial, designasen los diputados al congreso general, y otro elector por todo el partido para que formase, con los de los otros partidos, el colegio electoral de la provincia que debía nombrar el senador.

La asamblea comunal de provincia, una vez constituida, se debía dirigir á la Iglesia Catedral á invocar el auxilio del ser supremo, y el obispo, prelado eclesiástico, debía celebrar la misa y exhortar á la asamblea al buen desempeño de sus funciones. Después de regresar al local de sus sesiones, y una vez en él, el presidente debía preguntar en voz alta á los ciudadanos concurrentes si tenían que acusar á alguno de los individuos de la asamblea de soborno ó cohecho para ganar la votación. En caso afirmativo se debía hacer allí mismo la justificación pública y verbal del hecho. Acto continuo procedían á la designación de los diputados de la sala de representantes, y de sus suplentes, para los casos de muerte ó de inhabilidad, en proporción de un diputado por cada 25.000 almas.



Al día siguiente se reunían los electores de senador, é integrados con un número de regidores igual á la mitad de los electores, procedían á llenar su cometido.

Aún cuando este proyecto de constitución no llegó á ser sancionado, ni consta que fuera tomado en consideración por la asamblea del año 13, merecía ser conocido por el adelanto de sus ideas.

La influencia decisiva del Triunvirato en la política del país, apoyado como estaba por los elementos más vivaces de la Capital y por las fuerzas del ejército, sirvió para que la asamblea de 1813 fuera un cuerpo homogéneo, con las mismas aspiraciones que había señalado la revolución de 8 de Octubre. Por lo demás, el mismo Poder Ejecutivo, al fijar las calidades de los diputados, había dicho que debían «reunir las más recomendables cualidades, principalmente haber acreditado de un modo indeficiente su fervorosa adhesión á la libertad del país y de una virtuosa imparcialidad que lo pongan á cubierto de la nota escandalosa de faccioso ó de algún otro vicio que desdiga de tan alto ministerio, circunstancia que encarga sobremanera el gobierno, como que de la felicidad ó desacierto de la elección resultará evidentemente ó el feliz destino ó el más ultrajante infortunio de los pueblos.»

III—El 30 de Enero de 1813 se reunieron los diputados electos en sesión preliminar, aprobaron sus diplomas y comunicaron al Poder Ejecutivo que el día siguiente pasarían á buscarlo á la fortaleza para concurrir unidos á la catedral, á fin de implorar el auxilio de la divina Providencia en la expedición de los grandes



negocios de la comunidad que les iban á ser encargados. El 31, después de oída la misa solemne, pasaron á la sala de sus sesiones (1), y el Dr. Passo, que como presidente del Triunvirato había tomado la presidencia de la asamblea, les dirigió una breve alocución, serena y digna, retirándose en seguida para dejarla entregada á sus funciones.

Los objetos primordiales de la asamblea de 1813 fueron, según ya lo hemos indicado, concentrar la acción y el poder gubernamental en una entidad de carácter verdaderamente nacional, para que estirpara, si era posible, el antagonismo local que se manifestaba receloso y enconado; iniciar la reforma institucional que la nueva situación del país reclamaba y entrar valientemente en el camino que debía conducir á la independencia del Río de la Plata.

La primera resolución de la asamblea fue declarar

(1) Calle San Martín, casa actual del Banco de la Provincia.

Cuentan los historiadores que la instalación de la Asamblea fue acompañada por numeroso pueblo que se había aglomerado en la Plaza de Mayo y que siguió á los diputados hasta su recinto. Las gentes que no habían cabido en la sala, colmaban los patios y llenaban las salas circunvecinas manteniendo respetuoso silencio para no perturbar la solemnidad de las deliberaciones del augustó cuerpo. Formaban la Asamblea los diputados siguientes: Agustín Donado, Nicolás Rodríguez Peña, José Valentín Gómez, Hipólito Vieytes, Juan Larrea, Carlos de Alvear, Gervasio Posadas, Vicente López, Tomás Antonio Valle, Mariano Perdríel, José Moldes, José Julián Pérez, Manuel Luzuriaga, Pedro Pablo Vidal, Bernardo de Monteagudo, Pedro José de Agrelo, Francisco Ugarteche, Nicolás Laguna, José de Amenabar, José Gregorio Baigorri, Fray Cayetano Rodríguez y Ramón de Anchoris.



que en ella residía la representación y ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, asumiendo así la supremacía que necesitaba para conseguir sus altos fines. Nombró en seguida su presidente al diputado Cárlos de Alvear; declaró la inviolabilidad de sus miembros y confió provisoriamente el Poder Ejecutivo á las mismas personas que lo desempeñaban, ordenándoles que concurrieran á prestar ante ella el nuevo juramento que había sancionado y cuya forma es significativa por más de un concepto. Decía así: «¿Reconocéis representada en la *Asamblea General Constituyente la autoridad soberana de las Provincias Unidas del Río de la Plata?* ¿Juráis reconocer fielmente todas sus determinaciones y mandarlas cumplir y ejecutar? ¿no reconocéis más autoridad que las que emanan de su soberanía? ¿conservar y sostener la libertad, integridad y prosperidad de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la santa religión católica, apostólica, romana. y todo en la parte que os comprenda?» Es la primera vez que se elimina del juramento político la obligación de fidelidad á Fernando VII, y llama la atención la insistencia con que se declara la soberanía de que está investida la Asamblea. Sus actos posteriores, en el primer período de sus sesiones, marcaban día á día el propósito de llegar, sin demora, á la declaración de la independencia.

Tres días después de la instalación,¹ sancionó por unanimidad de votos, la célebre ley sobre libertad de vientres, promovida por el diputado Carlos de Alvear. «Siendo tan desdoloroso», decía la ley, «como ultrajante á la humanidad, el que en los mismos pueblos que con tanto heroísmo y esfuerzo caminaron hacia la



«libertad permanezcan por más tiempo en la esclavitud los niños que nacen en todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sean considerados y tenidos como libres todos los que en ese territorio hubieran nacido desde el 31 de Enero de 1813 inclusive en adelante, día consagrado á la libertad por la feliz instalación de la Asamblea General Constituyente. Lo tendrá así entendido el supremo Poder Ejecutivo para su debida observancia »

Para afianzar esta disposición sancionó en el mes de Marzo un reglamento sobre la educación de los libertos, en el cual se prescribía á los párrocos que pasaran mensualmente al intendente una razón de los niños de casta que hubiesen bautizado, con expresión de sexo y el nombre de sus padres y patrones, imponiendo obligación análoga á los gefes de familia en cuya casa nacieran niños de esa clase. Disponía el mismo reglamento que la lactancia de los niños libertos durase doce meses, por lo menos; que cuando se vendiera la madre, pasaran con ella á poder del nuevo amo, si no habían cumplido aún los dos años, quedando, en caso contrario, en casa de su patrón, desde esa edad hasta la de 20, con obligación de servir gratuitamente hasta los 15 y con derecho á la mesada de un peso desde los 15 hasta los 20, salario que el patrón debía entregar á una tesorería filantrópica que se creaba especialmente á ese objeto; llegado á los 20 años, el liberto adquiriría libertad plena, y si era varón y quería dedicarse á la labranza, el Estado le entregaba cuatro cuabras de terreno en propiedad; las mujeres quedaban emancipadas á los 16 años y antes, si se casaban, recibiendo desde los 14 la mensualidad de un peso; con el propósito de



inducir á los libertos á que se dedicaran á la labranza, además de las cuatro cuadras, se les entregaba los útiles y aperos necesarios para su establecimiento, los materiales para la casa, las semillas para los primeros cultivos y los animales para su alimento, hasta la primera cosecha.

El 4 de Febrero amplió la ley del día 2 proclamando la libertad de todos los esclavos que se introdujeran del extranjero, por el simple hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Sería muy extenso enumerar todas las leyes de carácter económico y político que sancionó la gloriosa corporación, y mencionaremos solamente algunas de ellas.

Declaró la libre exportación de granos y harinas; creó la facultad de medicina, derogó la mita, el yaconzago y las encomiendas, declarando que los indios eran perfectamente libres y en igualdad de derechos á todos los demás ciudadanos, ley que fue traducida á las lenguas Guaraní, Quichua y Aymará, y circulada entre los indígenas; abolió el tribunal de la inquisición y mandó quemar los instrumentos de tortura en la plaza pública; prohibió la profesión religiosa antes de los treinta años, organizó el Poder Judicial, declaró que el mérito debía preferirse á la antigüedad para ocupar los puestos administrativos; dictó el Estatuto del Poder Ejecutivo; declaró beneméritos en grado heroico á los vencedores de Salta; rindió homenaje á la memoria de Moreno, aumentando la pensión de su viuda; mandó levantar un monumento al sargento Cabral que había salvado la vida á su comandante, don José de San Martín en la acción de San Lorenzo; ordenó que se erigiera otro en memoria de



la victoria de Salta, para mantener vivo el sentimiento de la patria y alentar el valor militar; ordenó la acuñación de moneda con un nuevo sello, sustituyendo las inscripciones que correspondían á la soberanía de Fernando VII con lemas adecuados á la nueva situación del país; las monedas de plata llevaban de un lado el sello de la Asamblea General Constituyente con el letrero «*Provincias Unidas del Río de la Plata*» y del otro lado el sol, con la inscripción «*En unión y libertad*»; las monedas de oro, iguales á las de plata, con la diferencia de que al pie de la pica y bajo de las manos que la afianzan en el sello de la Asamblea General se debían esculpir dos banderas de cada lado, dos cañones cruzados y un tambor al pie. El Poder Ejecutivo, concordando con esa resolución, ordenó que se bajaran las armas del rey de todos los edificios públicos y se pusiera en su lugar el escudo de la Asamblea Nacional. La Asamblea, además, declaró fiesta cívica el 25 de Mayo y consagró como himno nacional la marcha triunfal del doctor Vicente López; abolió los títulos de nobleza y los mayorazgos; decidió que la iglesia argentina no dependía de ninguna autoridad extraña, y ordenó que no se acataran las resoluciones del nuncio residente en España; reglamentó los juicios de residencia y la administración general de justicia, y consagró los principios fundamentales de la independencia parlamentaria, estableciendo la inviolabilidad de los diputados y la libertad absoluta de su palabra.

IV—El año 1813 había comenzado bajo buenos auspicios. El 3 de Febrero los famosos granaderos á caballo habían alcanzado su primera victoria en la



acción de San Lorenzo; el 20, Belgrano venció en Salta y el ejército español tuvo que retirarse del territorio de las Provincias Unidas. En el mes de Marzo la vanguardia del ejército patriota entraba en el Potosí. Pero á mediados del año parece que la rueda de la fortuna da una vuelta y los triunfos amenazan convertirse en desastres.

El 4 de Junio el diputado Carlos de Alvear pide á la Asamblea una sesión secreta y en ella presenta la renuncia de su cargo. El redactor de la asamblea da cuenta de ella en los siguientes terminos:

«El ciudadano Alvear puso en manos del secretario «Gómez una nota dirigida á la soberana Asamblea, «retirándose antes de su lectura. Su objeto era renunciar en forma la representación que ejercía por «la ciudad de Corrientes. La Asamblea aceptó la «renuncia del ciudadano Alvear hecha con el laudable objeto de volver al servicio activo de teniente «coronel de granaderos á caballo, en un tiempo en «que la patria, amenazada de un próximo peligro, reclamaba justamente sus servicios».

Acababa de llegar la noticia de que una fuerte expedición habia partido de Cádiz para traer auxilios á Montevideo, y que otras dos más vendrian en seguida; en efecto, el 20 de Junio llegaron 900 hombres, el 27 de Setiembre 1200 y el 5 de Octubre 1300. Comenzaban también en el territorio de la Provincia Oriental las dificultades del caudillaje bárbaro encarnado en Artigas. Artigas era un montaraz cuya vida militar tiene todas las manchas que pueden deshonrar la faja de servicios de un soldado, y su individualidad merece ser estudiada en la Historia Argentina, para abominar en ella la obra nefanda de estas per-



sonalidades siniestras. Artigas se consideraba investido de la soberanía de la Banda Oriental, y designó en su campamento los diputados que debían representarla en la Asamblea. Esta desechó los diplomas y Artigas no demoró en mostrar su enojo; de manera que al mismo tiempo que la plaza de Montevideo era vigorizada con los refuerzos que llegaban de España, el sitio se debilitaba por el descontento del caudillo oriental: era fundada la zozobra que aconsejó al jefe del partido preponderante renunciar su posición parlamentaria para ocupar un puesto en las filas del ejército.

La Asamblea fue convocada el 8 de Setiembre á sesiones extraordinarias, y en su primera sesión se dió cuenta del grave asunto á que se refiere el redactor en los siguientes términos:

«Es indudable que la fuerza del gobierno debe
«siempre guardar proporción con la resistencia que
«se opone á su influjo; sería destruir todo el objeto
«de su institución el no concentrar el poder cuando
«los mismos peligros dilatan ya la esfera de su actividad. Desde entónces una es la ley que subsiste
«y el silencio en que quedan las demás por su propia virtud recomienda al gobierno la ejecución de
«aquella que sólo se dirige á conservar la vida del
«pueblo. Tan grandes y difíciles funciones encontrarían una traba fatal en la menor dependencia, y á
«la sombra del Poder Soberano sería preciso invertir, en deliberar, el tiempo que las circunstancias
«consagran á la mera ejecución. Pero dada ya la necesidad de ampliar las facultades del Supremo Poder Ejecutivo en aquellos términos, es incompatible
«la permanencia de las sesiones de la Asamblea con



«la fuerza moral que constituye su sér. Si el gobier-
«no puede deliberar por sí sólo y ejecutar sin más
«consulta ó aprobación que la de su mismo conven-
«cimiento, porque así lo exige la salud pública, ¿cuál
«sería, entre tanto, el ejercicio de la potestad legis-
«lativa?»

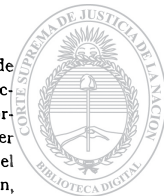
La cuestión estaba bien planteada y fue resuelta así: «La asamblea general declara suspensas sus se-
«siones hasta el día 1° de Octubre.... autorizán-
«dose desde hoy al Supremo Poder Ejecutivo para
«que obre por sí, con absoluta independencia, du-
«rante la suspensión de las sesiones, debiendo dar
«cuenta á la Asamblea en su primera reunión de
«aquellas providencias que la necesidad de proveer
«á la salud de la patria le hubiese obligado á to-
«mar y que por su naturaleza necesiten la sanción
«soberana.»

Suspender las sesiones de la Asamblea para que el Poder Ejecutivo obrara con entera independen-
cia, según lo exigieran las necesidades de la pa-
tria y sin otra limitación de facultades que la que re-
sultara de la responsabilidad, siempre viva, para el
caso de abuso de poder, era constituir una dicta-
dura; no la dictadura de Sylva, ni de César, no la
dictadura sangrienta de Rosas, pero sí la dictadura
gubernamental y transitoria de los primeros y bu-
enos tiempos de la República Romana, de la época
de los Scipiones, con la cual Roma se defendió de
Anibal y destruyó el poder formidable de Cartago.
Cuatro días después de disuelta la Asamblea, el Po-
der Ejecutivo, haciendo uso de los poderes ex-
traordinarios que se le habían acordado, ordenó que
todos los españoles residentes en Buenos Aires y



en sitios próximos á las costas se internaran 40 le-
guas, con excepción de los médicos, boticarios, pa-
naderos, herreros, talabarteros, etc. Les imponía la
restricción de no llevar consigo más de 500 pesos
en dinero efectivo, pagando antes la parte que les
correspondía en el empréstito forzoso que había
sancionado la Asamblea. Esas medidas fueron sua-
vizadas algunos días más tarde, exceptuando del ex-
trañamiento á los comerciantes afincados, á los en-
fermos y á los sexagenarios. Uno de los rasgos que
caracteriza la diferencia de la dictadura del año 13
de las que ha conocido el país más tarde, es el
breve término de su duración tras del cual aparece
la responsabilidad real y efectiva del que la desem-
peñaba. Los Romanos limitaban la dictadura á seis
meses, y la Asamblea del año 13 la limitó del 8 de
Setiembre al 1° de Octubre; llegada esta fecha se
reunió y se prorrogó de nuevo, hasta el 15 de Octu-
bre; pero como la situación no se había modificado,
el 18 acordó una nueva suspensión, fijando antes
las reglas á que había de sujetarse, en el interin, el
Poder Ejecutivo.

V—En Octubre y en Noviembre tuvieron lugar
los desastres de Vilcapugio y Ayohuma. Belgrano
tuvo que desandar el camino que acababa de re-
correr victorioso y su ejército deshecho retrocedió,
perseguido por las fuerzas de Pezuela, á Potosí, á
Jujuy, á Salta, hasta Tucumán, donde al poco tiem-
po entregó el ejército al coronel D. José de San
Martín. El vencedor de Salta y Tucumán quedó á
las órdenes del nuevo comandante en jefe, y acep-
tó esta posición con su abnegación acostumbrada.



He aquí la nota que dirigió al gobierno el 29 de Enero de 1814: «Al instante que tuve la satisfacción de leer el oficio de V. E. fecha 18 del corriente, por el que se ha dignado avisarme haber conferido el mando de general en jefe al coronel de granaderos á caballo D. José de San Martín, permaneciendo yo á sus órdenes á la cabeza del regimiento número uno, lo dí á conocer en la órden del día y, en consecuencia, fui á rendirle los respetos debidos á su carácter. Doy á V. E. mis más expresivas gracias por el favor y honor que me ha dispensado, accediendo á mi solicitud y créame que, si cabe redoblar mis esfuerzos por el servicio de la patria, lo ejecutaré con el mayor empeño y anhelo, para dar nuevas pruebas de mi constancia en seguir el camino que me propuse desde que me decidí á trabajar por la libertad é independencia de América.»

Don Carlos de Alvear fue nombrado jefe de regimiento con el grado de coronel cuando renunció su puesto en la Asamblea, y el 27 de Diciembre de 1813 se le entregó el mando en jefe del ejército de la capital, poniéndose bajo sus órdenes la comandancia general de armas. Alvear tenía en esa época 24 años, la edad de las grandes ambiciones guerreras, más ó menos la edad de Bonaparte cuando invadió la Italia, la que tenía Anibal cuando desafió el poder de Roma.

La Logia Lautaro realizaba su obra. Los ejércitos de la patria estaban bajo las ordenes de sus dos iniciadores; la Asamblea estaba compuesta con sus adeptos y dominaba también en el Poder Ejecutivo, porque los triunviros se contaban en el número de



sus afiliados. La Asamblea convocada extraordinariamente, se reúne otra vez el 21 de Enero de 1814 para reconsiderar el decreto que dictó el 4 de Febrero del año anterior, sobre la libertad de los esclavos que se introdujeran para fines de comercio. No es necesario decir que el gobierno hizo esa concesión al Brazil obligado por la situación general del país.

Acababa de sancionarse esa modificación cuando, con sorpresa de la misma Asamblea y en medio de la expectativa pública, se leyó un nuevo mensaje del Triunvirato, que fue punto de partida de un cambio fundamental en la organización del Poder Ejecutivo. Su importancia justifica que lo incluyamos en toda su integridad.

Dice así: «Desde que el gobierno llega á descubrir un objeto de suma importancia á los intereses de los pueblos, sería criminal á los ojos *de la Nación*, si influido de motivos menos elevados que los de la salud general, guardarse un indecoroso y debil silencio. Por el voto de vuestra soberanía y la confianza pública, los individuos que ejercen ahora este poder supremo fueron llamados á ponerse al frente de los negocios de estas provincias; pero en tan arduo como honroso cargo han descubierto que la serie de los sucesos y la naturaleza de las actuales circunstancias, harían infructuosos todos sus desvelos, como continuasen en dedicarlos á la patria bajo la misma forma en que hasta el presente lo han ejecutado. La experiencia del mando y el conocimiento inmediato de nuestras transacciones han enseñado á este gobierno, que, para dar el impulso que requieren nuestras empresas



«y el tono que nuestros negocios exigen, la concentración del poder en una mano es indispensable.»

«Vuestra soberanía se halla encargada de dirigir los destinos de estos heroicos pueblos, penetra muy bien su carácter, sus costumbres y estado y no necesita la pintura que ahora podría ofrecerse á la vista sobre la situación política de nuestras provincias, en este preciso momento, para persuadirse de la necesidad de condensar la autoridad ejecutiva. Por lo que hace al gobierno, él guarda como el más dulce premio de sus incesantes fatigas, la satisfacción de haber servido al Estado con todo el lleno de sus fuerzas: la más estrecha unión y armonía existe entre los miembros que lo componen actualmente y los inconvenientes que toca en el ejercicio de su alto ministerio, son sólo el resultado de la discordancia que existe entre la forma de la administración actual y lo que los tiempos exigen, según solemnemente protesta ante ese cuerpo respetable. El gobierno hace ante vuestra soberanía la presente gestión más como ciudadano, que como primer magistrado de estas provincias.»

«Esta es la vez primera en que un poder constituido para regir los pueblos se deja ver solicitando la creación de otra autoridad que lo subroga en sus grandes funciones: contra el espíritu de todo cuerpo y contra la propensión natural de todos los que mandan por ensanchar sus prerrogativas, el gobierno desea verlas pasar á otras manos robustecidas por una constitución más análoga á las circunstancias presentes.—Buenos Aires, Enero 21 de 1814.—*Gervasio Posadas, Nicolás Rodríguez Peña, Juan Larrea*»



Los patriotas que realizaron la revolución de Mayo, entendieron que el despotismo gubernamental de España dependía de la constitución unipersonal del Poder Ejecutivo confiado á los virreyes, y pensaron que con la pluralidad de una junta, resolvían los inconvenientes de aquel poder sin contrapeso y daban al pueblo garantías suficientes de libertad. La Junta de Diputados expresó con claridad ese concepto cuando creó las juntas provinciales en 1811. Los acontecimientos demostraron, después, que el número excesivo de una corporación perjudicaba la rapidéz y eficacia de la acción ejecutiva, y la misma Junta de Diputados creó el Triunvirato, reservándose los poderes superiores de carácter legislativo y constituyente; pero el Triunvirato todavía resultaba inadecuado para atender las necesidades de una guerra á muerte.

Oída la lectura del grave documento que dejamos transcrito, la Asamblea resolvió suspender su sesión y reunirse al día siguiente y el 22 de Enero sancionó una ley en estos términos: «La Asamblea General Constituyente ordena que la suprema potestad ejecutiva se concentre en una sola persona, bajo las calidades que establecerá la ley.» Acto continuo procedió al nombramiento de la persona encargada del Poder Ejecutivo, designando por unanimidad de votos al Sr. Gervasio Antonio de Posadas. (1)

(1) Posadas era tío de Don Carlos de Alvear.



CAPÍTULO VII



SUMARIO: I.—El Directorio (Posadas)—Reforma del Estatuto Provisional—Amnistía general: excepciones—II. Nuevos elementos bélicos—Operaciones en la Banda Oriental; capitulación de Montevideo; honores al general vencedor—El ejército del Norte: Salta y Güemes—III. Restauración de Fernando VII; misión de Belgrano y Rivadavia—Alvear, Rondeau y el ejército del norte—Posadas y la Asamblea—Renuncia de Posadas y nombramiento de Alvear—IV. Erección de nuevas provincias—Organización de tres ejércitos—Ascenso de San Martín; su renuncia del gobierno de Cuyo—Anarquía del litoral—Motín de Fontezuelas—La administración de Posadas y Alvear—El decreto del 18 de Marzo de 1815—Fusilamiento de Ubeda—V. El cabildo gobernador—Bando del 18 de Abril para constituir nuevo gobierno y reglas de su reorganización—Junta de Observación—El nuevo gobierno—Rondeau y Alvarez Thomas—El congreso fuera de Buenos Aires—VI. Comisiones Judiciales; civil, militar y de secuestros—Las sentencias—El dictamen de Asesor de Gobierno—VII. Estatuto Provisional para la dirección del Estado (5 de Mayo de 1815) sus principios, sus preceptos, su fin político.

I.—El 26 de Enero de 1814 se reunió la Asamblea para reformar el Estatuto Provisional, de acuerdo con la nueva organización dada al Poder Ejecutivo, y estableció: que recayesen todas las facultades y preeminencias acordadas al supremo gobierno, por el Estatuto del 27 de Febrero de 1813 y demás decretos posteriores, en la persona encargada de la suprema potestad ejecutiva, cuyo título debía ser en



adelante el de Director Supremo de las Provincias Unidas, con el tratamiento de Excelencia y la escolta correspondiente; fijó sus insignias, declarando que llevaría como distintivo de su elevada representación una banda bicolor, blanca al centro y azul á los costados, terminada en una borla de oro; la duración debía ser de dos años. Creó un Consejo de Estado compuesto de nueve vocales, á fin de que la prudencia, sabiduría y acierto presidieran las deliberaciones del gobierno. El Presidente del Consejo de Estado debía sustituir al Director en caso de enfermedad y por este motivo su nombramiento se lo reservaba la Asamblea; los demás miembros del consejo debía nombrarlos el Director. Los secretarios del despacho universal, es decir, los ministros, debían considerarse miembros natos del consejo é integraban el número á que antes nos hemos referido. Los consejeros duraban dos años. Las funciones del consejo consistían en dictaminar sobre los asuntos que le sometiera el Supremo Director y en promover ante él los proyectos que considerara de utilidad y conveniencia para el Estado. El Director debía consultarle indefectiblemente sobre los tratados de paz, guerra y comercio con naciones extranjeras.

El Director Posadas constituyó su ministerio con los señores Nicolás de Herrera, Juan Larrea y Javier de Viana y en la sesión del 8 de Febrero dirigió á la Asamblea un mensaje noblemente inspirado, iniciando la amnistía general de todos los delitos políticos cometidos después del 25 de Mayo de 1810. He aquí el texto de ese notable documento: «Soberano señor: «Por una fatalidad inevitable en el orden de los su-



«cesos de una revolución, empezó á sentirse en esta
«capital el fuego de los partidos que, á manera de un
«contagio, se comunicó insensiblemente á los demás
«pueblos. La ignorancia de la naturaleza y límites de
«la verdadera libertad civil; la frecuente traslación
«de la autoridad suprema en personas de diferentes
«principios, relaciones é intereses; las variaciones en
«los ramos de la administración pública; los movi-
«mientos populares; las proscripciones; la necesidad
«de enfrenar las pasiones revolucionarias para que el
«orden y la energía evitasen la disolución del Estado;
«en una palabra, lo justo y lo injusto, todo contribuyó
«á crear y extender el espíritu de división y partido,
«cuya maligna influencia ha paralizado más de una
«vez, los progresos del sistema».

«Convencido yo de que la fuerza de los estados
«solo consiste en la unidad de acción y de sentimiento,
«he ocupado la mayor parte de los instantes que han
«corrido desde que Vuestra Soberanía me confió la
«suprema magistratura, en meditar algún arbitrio ca-
«paz de restablecer la concordia entre todos los ciu-
«dadanos, para que la patria, contando con la fuerza
«unida de sus hijos, pueda superar los nuevos riesgos
«que la amenazan Pero por más que reflexiono no
«encuentro otro camino para arribar á aquel punto
«que la moderación: *esta virtud, la más recomenda-*
«*ble de los gobiernos, ha producido siempre mejores*
«*efectos que el terrorismo, cuando se ha tratado de*
«*corregir el extravío de las opiniones.* Yo creo, Sobe-
«rano Señor, que la cesación de los juicios de residen-
«cia, el alzamiento de las confinaciones que sufren
«algunos ciudadanos y, en fin, una amnistia general
«con respecto á los delitos puramente políticos, serían



«los mejores medios de restablecer la fraternidad,
«conciliar los ánimos, apagar el disgusto y hacer que
«no haya en las provincias otro partido que el de la
«unión y de la libertad. Todo parece que reclama la
«ejecución de esta medida. Con ella terminará la es-
«cuela de una investigación odiosa en que pudiera la
«inocencia confundirse con el crimen. Los juicios de
«residencia que se han abierto á muchos ciudada-
«nos, sobre su conducta en las altas comisiones que
«han obtenido, desde el princio de la revolución, no se
«expondrán á quedar eludidos contra las intenciones
«de vuestra soberanía, por la dificultad de justificar
«los delitos, ó de imponer la pena, después de justi-
«ficados, que es consiguiente, hallándose muchos de
«aquellos empleados en nuevas *comisiones* de alta
«importancia y algunos fuera del territorio de las
«Provincias Unidas. Finalmente, Soberano Señor, tan-
«tas familias consoladas en su infortunio, bendecirán
«la mano benéfica de Vuestra Soberanía y uniendo sus
«esfuerzos al gobierno que las protege, concurrirán
«con entusiasmo á sostener en la defensa de la patria
«la conservación de su derecho, de sus intereses y de
«su existencia».

«Entonces empezará un nuevo orden de cosas. Yo
«velaré incesantemente y si el inicuo llegase hasta el
«punto de olvidar el beneficio recibido, á la clemencia
«sustituirá el rigor y desaparecerán para siempre las
«facciones que intenten, á la sombra de los partidos,
«perturbar el orden ó alterar la tranquilidad pública».

«Quiera Vuestra Soberanía fijar su atención sobre la
«conveniencia de la medida propuesta y expedir las
«resoluciones que le dicte su celo por la felicidad del
«Estado. Dios guarde á Vuestra Soberanía muchos



«años.—Buenos Aires, Febrero 5 de 1814—*Gervasio Antonio de Posadas—Nicolás de Herrera.*»

La Asamblea aceptó la iniciativa del Director, pero introdujo una excepción verdaderamente odiosa respecto del antiguo presidente de la Junta de Mayo y del secretario de la de diputados Dr. Joaquín Campana. En una ley dijo: «La Asamblea Constituyente aprueba «la amnistía general que el Supremo Director ha pro-
«puesto en su nota del 5 de corriente;» y en otra de la misma fecha, agregó: «La Asamblea General Constituyente ordena que se sobresea en las causas de
«residencia de que se hallaba conociendo la comisión
«permanente, sin perjuicio de los asuntos entre partes;
«en cuya virtud declara espeditos para cualquier destino en servicio del Estado, los ciudadanos que hallaban
«sugetos á ella, á excepción de Don Cornelio Saavedra
«y Don Joaquín Campana que deberán ser extrañados
«fuera del territorio de las Provincias.» Esta excepción no podía ser más injustificada: Saavedra tenía títulos á la consideración pública que no debieron olvidarse y Campana no merecía la distinción de una medida excepcional.

—

II—El Triunvirato había sido sustituido por la autoridad ejecutiva unipersonal, para impulsar con mayor energía la organización de los elementos militares que las nuevas complicaciones de la guerra obligaban á mover.

Alvear, al aceptar el mando del ejército de la Capital, había aceptado la responsabilidad de organizar las fuerzas militares que la situación del país reclamaba, y puso en acción su actividad y su pericia para adiestrar los batallones con que había for-



mado un nuevo cuerpo de ejército. Estableció su campo en «Los Olivos» y allí maniobraba diariamente y sin descanso el regimiento N° 2 de su mando, el de cazadores bajo las órdenes del comandante Conde, los de granaderos 8 y 9, y dos escuadrones á caballo formados con los reclutas de Córdoba y de Cuyo. En poco tiempo esos cuerpos estuvieron en condiciones de entrar ventajosamente en campaña. Pero las fuerzas terrestres no bastaban; era necesario crear marina, porque la escuadra española bloqueaba el Río de la Plata y sus afluentes. Afortunadamente encontró á Brown, el hombre adecuado para la obra, y bajo su mando se organizó la pequeña escuadra que debía servir para sus primeras y grandes empresas. Las Provincias Unidas, que no tenían un barco al comenzar el año 14, llegaron á contar con una verdadera flota militar á principios de Abril, y el 12 de ese mes Brown levó anclas para ir á buscar la escuadra española.

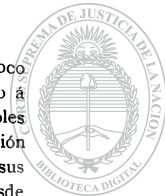
El día 8 de Mayo, el cuerpo de ejército de «Los Olivos» se embarcó para la Colonia, y el 17 se había incorporado á las fuerzas que sitiaban á Montevideo, bajo las órdenes del coronel Rondeau, cuyo mando en gefe tomó Alvear. El mismo día Brown batió y deshizo la escuadra española, y el 23 de Junio Alvear tomó posesión de Montevideo, en virtud de la capitulación pactada con Vigodet. El gobierno nombró gobernador político y militar de la Provincia de la Banda Oriental del Río de la Plata, al presidente del consejo de Estado, Don Nicolás Rodríguez Peña, la Asamblea General declaró beneméritos de la patria, en grado heroico, al ejército vencedor y á su general en gefe, Don Carlos de Alvear; el Cabildo de



Montevideo, por su parte, destinó un lugar de honor en el capítulo al mismo general, en homenaje á sus distinguidas acciones y como testimonio de gratitud.

El ejército del norte, que después de la derrota de Ayohuma se había retirado hasta Tucumán, comenzó su reorganización bajo la dirección prudente y enérgica del coronel San Martín y en esa oportunidad apareció Güemes, el prestigioso guerrillero salteño, á quien le tocó la gloria de defender el territorio de las actuales provincias argentinas con sus valientes gauchos. Salta se había señalado desde los primeros días de la revolución por su espontánea adhesión al movimiento de la Capital, y cuando el ejército español obligó á retroceder á los patriotas, su población se levantó en masa é inició la guerra de recursos con tanta eficacia y con tan grande vigor, que recordaba el levantamiento de la España para resistir la invasión napoleónica. La ciudad quedó desierta, las familias siguieron el rastro del ejército patriota, no quedaron ni frailes en los conventos; los hombres válidos de todas las clases sociales montaron á caballo, se organizaron por grupos, formaron emboscadas y combatieron sin debilidad y sin cansancio, en las montañas y en las selvas, aprovechando el conocimiento del terreno para esa terrible guerra de sorpresas, en la cual un repliegue del suelo, un árbol, sirven de escondite para espiar al enemigo y combatir ventajosamente.

En el mes de Mayo San Martín solicitó su exoneración del mando del ejército del norte, y obtuvo el gobierno de Cuyo, en el cual debía preparar cautelosamente el ejército que más tarde trasmontó los Andes. Fue sustituido por el coronel Rondeau.



III—Fernando VII había recobrado su libertad poco antes de la caída de Napoleón, y vuelto de nuevo á ocupar el trono de España. Los pueblos españoles le llamaron Fernando el deseado, y su restauración arrebató en sincero entusiasmo toda la península: sus súbditos habían olvidado los antecedentes que desde un principio mostraron su alma perversa, y apasionados en la lucha contra los franceses, encarnaban en él el sentimiento de la independencia nacional. Apenas restaurado, se mostró tal cuál era: un déspota absoluto, retrógrado y cruel: disolvió las cortes; restableció el tribunal de la inquisición; las cárceles se llenaron con los hombres más distinguidos del partido liberal y los perseguidos se contaron por millares. La revolución argentina que se había iniciado protestándole fidelidad durante su cautiverio, veíase ahora obligada á reconocer su autoridad, á entablar negociaciones ó á declarar abiertamente su independencia. Lo primero era moral y materialmente imposible; lo último entrañaba serios peligros, porque pacificada la Península, el gobierno español disponía los elementos bélicos organizados para combatir la invasión napoleónica. La diplomacia inglesa aconsejó y el gobierno de las Provincias Unidas aceptó, el plan de enviar comisiones á España para que, al amparo de la Inglaterra, iniciaran arreglos para que en alguna forma aseguraran la suerte de la patria, ó, por lo menos, lo que en aquella época se llamaba la libertad civil de los pueblos, y previa la autorización de la Asamblea, confió ese delicado encargo al General Belgrano y á Don Bernardino Rivadavia.

Alvear, que había regresado de Montevideo con la aureola del triunfo, anhelaba nuevos laureles y el 16



de Noviembre salió de Buenos Aires para ponerse al frente del ejército del Norte; llegó á Córdoba el 7 de Diciembre, y se encaminaba á su destino pocos días más tarde, cuando recibió la noticia de que había estallado un movimiento en el ejército para resistir su comando, impulsado ó consentido por el general Rondeau; fue esa la vez primera en que el ejército nacional se alzó contra las órdenes del gobierno constituido, y la historia ha condenado con severidad ese atentado, origen de tantas desgracias. Alvear regresó á Buenos Aires dispuesto á mover las fuerzas que formaban el ejército de la Capital para reprimir esa insubordinación con la energía que las circunstancias reclamaban; pero Posadas no tenía el enérgico temperamento que exigía una situación semejante, y decidió abandonar el mando, después de justificar su administración ante la Asamblea y ante el país. El movimiento subversivo del ejército del norte había tomado como pretexto las voces que corrían de que el Director trataba de someter las Provincias Unidas del Río de la Plata á Fernando VII, con motivo de la comisión que se había confiado á Belgrano y Rivadavia, y el Director remitió á la Asamblea todos los antecedentes de esa misión que motivaron una resolución de ésta en los siguientes términos: «la conducta del supremo Director en el manejo de los intereses sagrados de la patria, que se le han confiado para la libertad y seguridad del Estado, es de toda su soberana aprobación.»

La Asamblea resolvió, además, dirigir un manifiesto al pueblo para tranquilizar sus inquietudes; en él decía: «pacificado el continente de la Europa, y restituidos los tronos á sus antiguas dinastías, des-



«pués de los sucesos del 31 de Marzo de 1814 en
«París, cambió enteramente de aspecto nuestra si-
«tuación política, y fue necesario no abandonar del
«todo nuestros intereses al éxito dudoso de las ba-
«tallas. El horror que inspiran los desastres de la
«guerra, el deseo de evitar por nuestra parte la
«responsabilidad ante la patria y el interés de ma-
«nifestar al mundo que nuestras pretensiones no se
«fundan en ideas abstractas sino en principios prác-
«ticos de moderación y de justicia, sujirieron al
«gobierno la prudente empresa de enviar diputados
«á la Península que, garantidos por la mediación de
«la Gran Bretaña, impusiesen á S. M. Católica del
«estado de estas Provincias, la necesidad de oír sus
«reclamaciones y el interés recíproco de satisfacer-
«las. Más no por eso dejaba de poner en acción
«todos los recursos convenientes, para rechazar la
«injusta agresión que pudieran intentar sobre nues-
«tros territorios los jefes enemigos; los grandes re-
«fuerzos enviados al ejército del Perú y los nobles
«progresos que ha hecho en todos los ramos nuestro
«sistema militar prueba muy bien que el gobierno,
«al par que emprendía negociar la paz, no olvidaba
«que la guerra es el último tribunal donde se deci-
«den los derechos de los pueblos.»

El director Posadas presentó su renuncia el 9 de Enero de 1815 y fue nombrado en su reemplazo Director provisorio de las Provincias Unidas, Don Carlos de Alvear. La Asamblea suspendió sus sesiones quince días después y no volvió á reunirse más.

IV.—En el periodo corrido desde 1813 hasta 1815,



las Provincias Unidas del Río de la Plata experimentaron modificaciones administrativas y políticas que debemos recordar antes de pasar adelante.

La ordenanza de Intendentes de 1782 dividió el territorio del virreynato en ocho intendencias, de las cuales era la primera Buenos Aires, que comprendía en su jurisdicción el territorio de ese nombre, el de Santa Fé, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental. La Asamblea elevó a la categoría de provincia el territorio de la Banda Oriental con fecha 7 de Marzo de 1813 y el 10 de Setiembre del mismo año hizo otro tanto con el de Entre Ríos y Corrientes, no quedando, por consecuencia, ligado a Buenos Aires, sino el de Santa Fé.

El 23 de Noviembre de 1813 desligó de la gobernación de Córdoba la antigua provincia de Cuyo, compuesta de los territorios de Mendoza, San Juan y San Luis, y el 8 de Octubre declaró que Santiago del Estero y Catamarca formarían provincia con Tucumán y Jujuy, Oran, Tarija y Santa María con Salta.

El general Alvear, nombrado Director de las Provincias Unidas el 5 de Enero de 1815, expidió el decreto del día 23 del mismo mes y año dividiendo las fuerzas de que el país disponía en tres ejércitos «para darles nuevo impulso, facilitar su más pronta organización, arreglo y disciplina y premiar en oportunidad el mérito de los que sirvan en ellos, con examen de las propuestas de sus respectivos gefes.» El primero, formado por las tropas que existían en la Capital, Provincias de Cuyo, Córdoba, Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos, quedaba bajo su inmediato mando. El segundo, que ope-



raba en el Alto Perú, continuaba á las órdenes del general Rondeau, y el tercero, compuesto de las tropas existentes en la Banda Oriental, seguía bajo las órdenes del general Miguel Estanislao Soler. El mantenimiento de Rondeau al frente del ejército norte demuestra que el nuevo Director se proponía seguir una política amplia de olvido y de concordia, propósito que se acentúa con el ascenso de coronel mayor ó general que otorgó en seguida á Don José de San Martín, jefe de los granaderos á caballo, según puede verse en la *La Gazeta* del 1° de Febrero.

En el mes de Febrero ordenó la concentración del ejército de la Banda Oriental en Buenos Aires, para prepararse á dominar el caudillaje que se agitaba ya en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fé.

Entre tanto, por motivos que sería difícil explicar, San Martín había renunciado el gobierno de la provincia de Cuyo apenas asumió el mando el nuevo Director, y su renuncia fue aceptada, nombrándose, para reemplazarle, al coronel Gregorio Perdriel. Cuando la noticia llegó á conocimiento del pueblo de Mendoza la ciudad entera entró en grande agitación y el cabildo se puso á su frente para no dejar partir al prestigioso gobernador. Hubo reuniones populares, se reunieron los vecinos en cabildo abierto y manifestaron la resolución de resistir por la fuerza al coronel Perdriel. San Martín les aconsejó el acatamiento de la nueva autoridad, pero no consta que en ningún momento anunciara que el cambio de gobernador era motivado por su renuncia de fecha 20 de Enero. Por último se comprometió



á aceptar la situación que la simpatía del pueblo de Mendoza le creaba, reteniendo el mando hasta que el Director del Estado tomara en consideración y decidiera sobre la petición que el cabildo iniciaba. Alvear autorizó al general San Martín para que continuara al frente del gobierno.

El movimiento anárquico de los caudillos del litoral amenazó la estabilidad del gobierno general á mediados de Marzo. La vanguardia de Artigas atravesó el Paraná y, reunida á las fuerzas de Santa Fé, avanzó sobre Buenos Aires. Alvear desprendió una división de 1.500 á 2000 hombres á las órdenes del coronel Alvarez Thomas, jefe de su absoluta confianza y éste, al llegar á Fontezuelas el 13 de Abril, se puso de acuerdo con los invasores, se sublevó y exigió la deposición del Director. Alvear intentó resistir con las fuerzas que le quedaban en los Olivos; pero éstas se les desbandaron y se vió obligado á desistir de su propósito esforzado. El cabildo, á quién se había dirigido el coronel sublevado avisándole que estaba en comunicación é inteligencia con Artigas, llamó al vecindario á Cabildo abierto, asumió el gobierno como en los primeros días de la revolución de Mayo y confinó en un buque inglés al general Alvear, con la intimación de que no volviera á pisar jamás el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata (1).

(1) Para que se comprenda el verdadero carácter del movimiento encabezado por Alvarez Thomas, publicamos en seguida la nota que dirigió al Cabildo el día 14 de Abril. Dice así: Excelentísimo Señor: Con esta fecha dirijo la siguiente intimación al Gral. Don Carlos de Alvear: "Al tener



No podemos ser severos con los hombres que en las épocas turbadas de nuestra revolución trataron de asegurar la independencia y organizar el país. Es difícil distribuir con equidad la alabanza y el vituperio medio siglo después de los sucesos, con in-

"el honor de acompañar á V. E. el adjunto manifiesto, creen
"los oficiales y tropas que están bajo mis órdenes, que el sensible corazón de V. E. se prestará á las nobles ideas que
"han concebido en obsequio á la causa pública de América.
"Bajo la protección del ejército Oriental y del Perú, y asegurados por el voto general de la campaña y la gran Capital,
"V. E. debe conocer cuán inoficioso sería el derramar la
"sangre de nuestros mismos compatriotas y compañeros de
"armas. La campaña armada en masa para sostener el eterno juramento que ha pronunciado el ejército libertador; los
"grandes cuerpos de caballería que se unen á él diariamente
"y la alarma general que resuena con el mayor entusiasmo,
"pronostica los más ciertos resultados; despréndase V. E. del
"mando y deje al inmortal pueblo de Buenos Aires elegir libremente su gobierno, y en el momento ha cesado la atroz
"guerra civil que nos está devorando. Entonces verá el mundo entero que nosotros somos los primeros que haremos
"respetar los derechos de las provincias, contra cualquier enemigo que intentase vanamente subyugarla; de lo contrario,
"yo protesto á V. E. altamente y le advierto que un sólo fusilazo que se dispare ha de costar á los malvados torrentes
"de sangre. Yo tengo la satisfacción de trasladarlo á V. E.
"para su conocimiento debido, esperando que, como padre de
"la patria, interpondrá su alto influjo para el logro de la libertad que heroicamente hemos proporcionado á esos dignos
"ciudadanos. El ejército no entrará en cuarteles mientras que
"el pueblo, sin ningún soldado veterano, haya elegido su
"gobierno espontáneamente y que, en consecuencia, hayan
"también traspasado los orientales el Paraná, gozosos de la
"paz que han adquirido; este es su modo de pensar como V.
"E. lo verá claramente en la copia del oficio que remito y he
"recibido de su gefe don José Artigas. Dios guarde á V. E.



formaciones deficientes ó interesadas. El hecho histórico comprobado aparece en plena luz; pero sus causas, sus antecedentes, se ocultan en la sombra ó se pierden en la penumbra. Limitémonos, pues, á la exposición de los sucesos, guardando la palabra

—
“muchos años.—Cuartel general del ejército libertador en “marcha.—Abril 14 de 1814.—*Ignacio Alvarez Thomas*. Al “Excelentísimo Cabildo de la ciudad de Buenos Aires.” El manifiesto á que alude esa nota, suscrito en mala hora por el mismo Alvarez Thomas y por los gefes y oficiales á sus órdenes, decía: “Habitantes de Buenos Aires y su campaña: cuando un pueblo valiente, generoso y lleno de virtudes como el nuestro, que ha plantado los cimientos de la libertad americana, y que la ha sostenido á esfuerzos magnánimos derramando su sangre y sus bienes, se ve ajado, oprimido y degradado por la pequeña acción de hombres inmorales y corrompidos, que en la actualidad componen y son los agentes del gobierno que representa el general Alvear es un deber sagrado de sus hijos hacer todos los esfuerzos que demandan las circunstancias, para librar á sus hermanos y compatriotas de los horrores que sufren y que tan de cerca amenazan á toda su hermosa provincia. Una protección decidida á los españoles y europeos....una administración corrompida.... un espionaje tan furioso que derrama la consternacion en las familias....protegida la desertión del ejército recomendable en el Perú....últimamente las medidas tomadas para abrir una nueva guerra con nuestros hermanos los de la Banda Oriental, que á más de vertirse inoficiosamente torrentes de sangre americana, desolaría nuestra provincia, cuando el voto de las tropas orientales sólo es poner á las provincias en estado de nombrar su gobierno libremente y regresarse después á su territorio. Estas y otras razones que son bien conocidas á todos nuestros amados paisanos, nos han decidido, de unánime consentimiento, á negar la obediencia al actual gobierno de Buenos Aires, mientras se halle regido por el citado Brigadier general Alvear ó por otra cualquiera de las personas que forman aquella facción aborrecida.”



severa y vengadora únicamente para aquellos cuyos propósitos perversos fueron manifiestos y han sido ya juzgados por la posteridad.

El período que corresponde á la Asamblea del año 13 y al Directorio de Posadas y de Alvear será recordado siempre como uno de los más luminosos de la vida argentina. En él se robusteció la fuerza de las Provincias Unidas, se organizó su escuadra y con ella aparece la noble figura de Brown. Cae Montevideo, y todo el Río de la Plata queda libre de la dominación extranjera, se proclaman los principios más liberales y adelantados de la revolución y se echan las bases del sistema representativo y parlamentario. Si el caudillaje no hubiera venido, en mala hora, á perturbar la evolución interna, la guerra se habría podido llevar adelante con mayor rapidez, la victoria se habría alcanzado más pronto, la independencia habría sido proclamada un año antes y las provincias argentinas no habrían tenido que soportar los desgarramientos que comienzan entonces, para no terminar sino con la organización de la República, después de la batalla de Pavón.

El movimiento subversivo del ejército del norte á fines de 1814 y la sublevación de Alvarez Thomas, fueron, por lo menos, faltas funestas cuyas consecuencias tuvo el país que soportar. Alvear incurrió en graves errores, en abusos de autoridad censurables bajo todo punto de vista, pero era el representante de la autoridad legítimamente constituida y de la clase intelectual más eminente de la revolución. Armado con los poderes de la dictadura promulgó el decreto del 28 de Marzo, según el cual los españoles ó americanos que de palabras, por escrito, directa ó



indirectamente atacasen el sistema de libertad é independencia que habían adoptado las provincias serían pasados por las armas dentro de 24 horas; los que divulgasen ó inventasen especies alarmantes contra el gobierno constituido, *capaces de producir la desconfianza pública*, serían fulminados con las penas que establecían las leyes de la Recopilación de Castilla; y en el caso de que acaeciera, por tal motivo, algún movimiento que comprometiese el orden público, con la pena de muerte; pero no recordamos que este decreto tuviera jamás aplicación.

El fusilamiento del capitán Ubeda, juzgado, sentenciado y ejecutado en pocas horas, fue un exceso de rigor militar; pero no un acto de tiranía ni de crueldad.

—

V—El acta del Cabildo de fecha 16 de Abril informa de la manera como el Ayuntamiento asumió el gobierno una vez derrocado el Director Alvear. En ese instrumento se hacía constar que en las circunstancias apuradas en que se hallaba la patria, estando disuelta la Asamblea constituyente, el Cabildo, á solicitud del pueblo, había reasumido provisoriamente la autoridad soberana con la extensión de las facultades que le son propias y con la calidad de nombrar inmediatamente un gobierno provisorio. Dos días más tarde, el 18 de Abril, publicó un bando que debemos analizar detenidamente. Fundándose en la imposibilidad de consultar en el momento el sufragio universal de las provincias y en la imposibilidad de mantener acéfalo el gobierno, sin un centro de autoridad que conserve las relaciones interiores y exteriores, que facilite los recursos á las fuerzas de la patria y que cautele la entera disolución de la unión



que infelizmente se había aflojado entre los pueblos, ordenaba la organización de un gobierno provisional en la siguiente forma: dividía la ciudad en cuatro departamentos y convocaba á los ciudadanos de cada uno de ellos á que concurrieran el día 19 á nombrar tres electores por cada distrito; los votos debían ser escritos y al Cabildo le correspondía practicar el escrutinio; reunidos los doce electores así nombrados, debían decidir la forma de gobierno y proceder á la designación de la persona que debía ejercerlo; organizado el gobierno provisional, era su deber dirigirse á las provincias, dentro de 48 horas, para que ratificaran su nombramiento y designaran los diputados que habían de componer el congreso, fijando el gobierno un lugar intermedio en el territorio de las Provincias Unidas, como punto de reunión, para que allí dictasen la constitución del Estado. Los mismos electores, en unión con el Cabildo, nombrarían una junta de observación compuesta del número de ciudadanos virtuosos que se hallase conveniente, para que diera al nuevo gobierno un estatuto provisorio capaz de contener los grandes abusos que se habían experimentado, restituyera la libertad de imprenta, la seguridad individual y reclamara enérgicamente contra cualquiera infracción.

Verificada la elección, los electores nombrados designaron director del Estado al general Don José Rondeau, y suplente de éste, mientras durase su ausencia, al coronel Alvarez Thomas, quedando así al frente de la nueva situación, el gefe bajo cuyos auspicios se había producido por primera vez un motín militar en los ejércitos de la patria, y como su suplente el autor del movimiento subversivo de Fontezuelas



Se designó también la Junta de Observación para que redactase el estatuto provisional y desempeñase las funciones tutelares que le había atribuido el bando del 18. Estas novedades fueron comunicadas a las provincias el 21 de Abril, en una circular en la cual el Cabildo protesta que «Buenos Aires no aspira «á conservar una prepotencia funesta sobre los demás «pueblos; respeta su opinión, sostiene sus derechos y «espera oír su voz para acreditarles que no habrá «cosa que pueda romper los vínculos que los unen,» agregando que si la elección del coronel Álvarez Thomas ó del general Rondeau les ofrece inconvenientes, Buenos Aires deferirá gustoso al voto de sus hermanos sin orgullo y sin resentimientos.

La Junta de Observación, nombrada en virtud de las resoluciones á que antes hemos aludido, tenía el mismo carácter, la misma significación é idéntica tendencia en el orden político que la Junta Conservadora disuelta el 7 de Noviembre de 1811.

Lor historiadores no están de acuerdo sobre los motivos que indujeron al Cabildo á señalar, para la reunión del Congreso, un punto que no fuera la ciudad de Buenos Aires. Creen algunos que esa resolución fue inspirada por el deseo de que la autoridad nacional fijara su asiento en otra ciudad argentina, para salvar el gobierno propio de la de Buenos Aires, mientras que otros piensan que tuvo por objeto calmar las desconfianzas y recelos del interior, donde se había vigorizado la resistencia del espíritu federalista contra la hegemonía de la Capital. Esta última opinión está autorizada por los términos de la circular á que nos acabamos de referir, y aparecerá comprobada más adelante con el manifiesto que dirigió á los pueblos



el Congreso de Tucumán, en 1816, cuando decidió trasladarse á Buenos Aires, después de declarar la independencia.

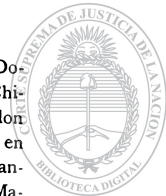
VI—El Cabildo no se limitó á presidir la organización del nuevo gobierno, sino que inició una era de injustas y crueles venganzas contra el partido caído, nombrando tres comisiones judiciales de excepción, para conocer de las causas políticas que se proponía formar á los militares y personas civiles adictas al gobierno del general Alvear. El bando en que anunció al pueblo esa resolución no necesita comentarios. Dice así: «la salud de la patria es el desvelo, es la intención y todo el interés de vuestro representante; «vuestros votos más de una vez lo han publicado; y «sus medidas para emprender y solidar la causa de «la humanidad lo han acreditado. Con tan noble «como principal objeto, acaba de establecer una comisión militar, otra civil y otra de secuestros para «conciliar la dignidad de vuestra regeneración con «el acierto y poder que demandan el imperio de la «necesidad y aún vuestra misma seguridad. Al juzgamiento de la comisión militar sujeta los reos militares; al de la civil los que no lo sean y á la comisión de secuestros la indagación y hallazgo de los bienes é intereses de todos los que resulten reos.

«Sin atacar los derechos del hombre, pero sin exponer la pública tranquilidad, la comisión militar «terminará más pronto sus funciones que la civil; porque contraida la primera *al hecho público de los militares que con su influjo y por facción sostuvieron la opresión y los intentos de degradación y de sangre, no tiene que sondear los secretos que á la*



«segunda toca é importa descubrir, antes que ejecutar, tanto por vuestro actual sosiego quanto por vuestra ileña conservación».

Reaparece pues, así, la odiosa institución de las comisiones judiciales, para juzgar el delito político de *facción* que en el caso actual consistía en haber prestado ayuda á un gobierno de origen legítimo, y que, si cometió errores, no podía ser colocado fuera de la ley. El director Alvarez Thomas no era extraño á esa resolución; en las efemérides de Nuñez se lee la siguiente que corresponde al día 24 de Mayo de 1815: «el 24 el director Alvarez, á las 4 de la tarde, hizo poner grillos al director Posadas, á Gómez, etc. etc. estaba de guardia ese día don Luis «Dorrego». Si el cuidadoso anotador hubiera conservado el nombre de los otros ciudadanos que, con don Gervasio de Posadas y don Valentín Gómez, fueron cargados de hierros, sabríamos que se trataba de los hombres más ilustres de la época, de los revolucionarios de Mayo, de los miembros eminentes de la inmortal Asamblea de 1813. Pero los que calla el anotador lo dicen las sentencias de las comisiones civil y militar, publicadas en la *Gazeta* del 3 de Junio. Prescindimos de detalles; basta saber sobre quienes cayó la dura sentencia de proscripción. Fueron deportados á Estados Unidos don Gervasio de Posadas, el doctor Bernardo de Monteagudo, don Hipólito Vieytes, el doctor José Valentín Gómez, el doctor Nicolás Herrera, el doctor Pedro Pablo Vidal, el doctor Alvarez Jontes y el doctor Nicolás Rodríguez Peña; á don Saturnino Rodríguez Peña, que había venido del Brasil trayendo las amistosas indicaciones de Lord Strangfford, se le ordenó que volviera de nuevo al



extrangero; se confinó al interior á don Agustín Donado, á don Eugenio Balbastro, á don Vicente Chilabert, á don Joaquín Correa Morales y al doctor don Pedro José Agrelo, y durante meses se mantuvo en prisión al doctor Tomás Antonio Valle, á don Francisco Ortiz, á don Pedro Saenz de Cavia, á don Manuel Luzuriaga, al doctor don Vicente López; don Manuel Moreno es condenado á destierro y don Juan Larrea y don Guillermo White, á cuya iniciativa fecunda fue debida la organización de la escuadra con que Brown dominó el Río de la Plata, se les conservó presos hasta que se les pudiera probar delitos que nunca cometieron.

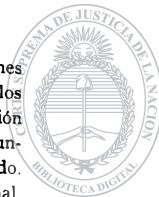
La sentencia, verdaderamente inicua, de la comisión civil contra estos próceres ilustres, pasó en consulta al asesor del gobierno doctor Juan José Passo, y éste, por una de esas aberraciones del espíritu de partido que lleva á tantas injusticias, rompiendo ú olvidando los vinculos del pasado, puso la autoridad de su nombre y el esfuerzo de su ingenio al servicio de las malas pasiones del momento, y formuló un dictamen que quisiéramos no ver suscrito con su nombre prestigioso. El dijo: *«en estos casos es con propiedad que el orden del juicio es no guardarlo, y que es importante sacrificar la rutina ordinaria de las formas judiciales á la notoriedad por evidencia de luz y sentimiento*, cuando ésta es clara, universal y sostenida *«y que no se presenta al juicio sano menos prevenido, «un medio de sustraer la existencia del crimen que se «hizo sentir por sus efectos, ni el de esculpar al que «se vió perpetrarle. En vano se alegraría que la voz «común y notoriedad de que hacen mérito las informaciones es una voz y notoriedad vulgar, vaga é in-*



«cierta; todo al contrario, esta es la voz y notoriedad de todas las provincias, de todos los pueblos, de todos los ejércitos y de la universalidad de los habitantes, en las apartadas distancias en que se hallan; acuerdo y conformidad que la revisten por derecho del carácter de infalibilidad moral sobre que se afianzan la sentencia y seguridad del pronunciamiento».

Esto era declarar paladinamente que la criminalidad de los ilustres enjuiciados no había sido demostrada sino por la voz pública de que daban testimonio sus enconados adversarios, que acababan de arrebatárles el poder. Inútil es decir que la comisión militar no fue más benigna. El distinguido coronel don Enrique Pallardell fue pasado por las armas en la plaza pública el día 2 de Mayo: se le acusaba de haber presidido el consejo de guerra que condenó al capitán Ubeda; el brigadier don Francisco Javier de Viana, ex-ministro de la guerra, coronel del cuerpo de artillería y comandante general de esa arma, fue despojado de sus empleos y confinado á Chascomús por 4 años; otros gefes fueron desterrados para siempre de las Provincias Unidas; otros por diez años; á otros se les confinó en el interior del país, despojándolos de sus empleos, sin que se les probara otro delito que haber servido con lealtad al gobierno constituido.

VII—Veamos ahora cómo cumplió su mandato la Junta de Observación que había recibido el encargo de preparar el «Estatuto Provisional para la dirección y administración del Estado», que fue promulgado el 5 de Mayo de 1815. Es este un documento original en que se han aglomerado principios puramente doctrinarios, reglas morales, preceptos de gobierno y



detalles administrativos. Refleja sanas aspiraciones hacia la libertad y buen gobierno y el temor de los excesos del poder; contiene reglas de administración que habría sido provechoso conservar, y errores fundamentales sobre la constitución política del Estado. Pretende tener el carácter de una constitución nacional, y subordina su imperio á la voluntad de las provincias que quieran aceptarlo, sin que por eso entienda atentar contra el sagrado principio de la unidad de la patria ni debilitar los vínculos que atan á todas las Provincias Unidas, porque precisamente su propósito es el opuesto, y los antecedentes que hemos apuntado acreditan que tenía por objeto dar satisfacción á las exigencias que amenazaban dislocar al país argentino.

Las contradicciones que presenta, considerado desde ese punto de vista, tal vez tienen por causa que es la primera constitución en que se ensaya dar forma propia á la idea federal transigiendo con las exigencias y las fuerzas políticas del interior, sin saber como mantener la supremacía de la Capital y el lazo de la vida nacional.

Prescindamos del preámbulo, cuya retórica no corresponde á las exigencias del buen gusto de nuestro tiempo, y vamos directamente á su parte dispositiva.

La sección primera trata de las relaciones recíprocas del hombre y de la sociedad, de la religión del Estado y de la ciudadanía.

Todo hombre, dice, gozará de seis derechos en el territorio del Estado, sea americano, extranjero ó ciudadano, á saber: la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad, y para que se



entienda el verdadero alcance de la declaración, los define todos, con excepción del primero, que por tener un concepto tan uniforme, no necesita explicación. La honra resulta, según el estatuto, de la buena opinión que cada uno se labra* para con los demás por la integridad y rectitud en sus procedimientos; la libertad es la facultad de obrar cada uno á su arbitrio, siempre que no viole las leyes, ni dañe los derechos de otro; la igualdad consiste en que la ley, bien sea preceptiva, penal ó tuitiva, sea igual para todos; la propiedad es derecho de gozar de sus bienes, rentas y productos; la seguridad es la garantía que concede el Estado á cada hombre para que no se viole la posesión de sus derechos; definiciones que, á pesar de la buena intención, no pueden recomendarse todas por su exactitud científica. (Capítulo 1°).

Los deberes del hombre en el Estado son: «1° sumisión completa á la ley haciendo el bien que ella prescribe y huyendo el mal que prohíbe; 2° obediencia, honor y respeto á los magistrados públicos como ministros de la ley y primeros ciudadanos; 3° sobrellevar gustoso cuantos sacrificios demande la patria en sus necesidades y peligros; 4° contribuir por su parte al sostén y conservación de los ciudadanos y á la felicidad pública del Estado; y 5° merecer el grato y honroso título de hombre de bien, siendo buen padre de familia, buen hijo, buen hermano y buen amigo. (Capítulo VI).

A su turno, el cuerpo social debía garantizar y afianzar el goce de los derechos del hombre y aliviar la miseria y desgracia de los ciudadanos, pro-



porcionándoles los medios de prosperar é instruirse (Capítulo VII).

Todo hombre debe respetar el culto público y la religión católica romana, que se declara religión del Estado; la infracción de ese precepto es mirada como una violación de las leyes fundamentales del país. (Capítulo II).

Es ciudadano todo hombre libre que haya nacido y resida en el territorio del Estado, y cada ciudadano *es miembro de la soberanía del pueblo*, y en esa virtud tiene voto activo y pasivo.

Los extranjeros residentes en el país tendrán voto activo después de cuatro años y pasivo después de diez, pudiendo, en este caso, ser elegidos para todos los empleos de la República, más no para los del gobierno, siendo entendido que para votar ó ser elegidos deberán renunciar antes toda otra ciudadanía.

Exceptúa á los españoles europeos del favor que acuerda á los demás residentes extranjeros, mientras los derechos de estas provincias no sean reconocidos por el gobierno de España; sin embargo, los españoles decididos por la libertad del Estado y que hayan hecho servicios distinguidos al país gozarán de la ciudadanía, obteniendo previamente una carta expedida por *el Congreso general y el jefe respectivo de la provincia, asociado al Ayuntamiento de la Capital*.

Los descendientes de africano, nacidos en el país, cuyos mayores hubiesen sido esclavos en este continente, tendrán sufragio activo siendo hijos de padres ingenios, y pasivo los que ya estén fuera del cuarto grado respecto de dichos sus mayores. (Cap. III y IV).



La sección segunda, dedicada al Poder Legislativo, es breve, pero comprensiva. A semejanza de lo que intentó la Junta Conservadora de 1811, pretende ahora la Junta de Observación mantener en sus manos la plenitud de las facultades legislativas.

El único artículo de esa sección declara que el Poder Legislativo reside originariamente en el pueblo; pero á renglón seguido agrega que «hasta la de-terminación del Congreso General de la Provincias, «la Junta de Observación sustituirá, en vez de le-yes, reglamentos provisionales en la forma que «éste prescribe, para los objetos necesarios y ur-«gentes;» de manera que la primera parte queda consignada como principio, en el orden de las abstracciones políticas, hasta que se reuna el Congreso, y se resucita, para los fines inmediatos de la vida práctica, el desgraciado mecanismo que ensayó la Junta Conservadora de 1811 y que motivó su fulminante disolución. La Junta Conservadora de 1811 invocaba la representación individual de sus miembros, porque, como habían sido elegidos por las provincias, alguno tenían, aún cuando no alcanzaran la que colectivamente debía corresponder al Congreso para el cual fueron designados; pero la Junta de Observación que ahora nos ocupa, elegida por el vecindario de la capital, no podía fundar en título alguno la autoridad que pretendía para decidir los negocios nacionales.

La providencia 12ª del capítulo final prevenía que el Estatuto no tendría imperio, sino en las provincias que lo admitieran libremente, lo que demuestra la puerilidad ingenua de ese plan que levantaba, sin base,



un complicadísimo sistema. No era discreto pensar que las provincias, sublevadas ya contra la prepotencia porteña, aceptaran la autoridad suprema de una Junta á cuya instalación no habían concurrido directa ni indirectamente y cuya renovación continuaba subordinada á la ciudad capital. (Sección 5ª, cap. 6º).

No era suficiente que la Junta de Observación encubriera los poderes legislativos que se reservaba con el nombre de reglamentos provisionales, porque dentro de ellos cabía la reconstrucción del gobierno, según las prácticas establecidas.

La organización del Poder Ejecutivo estaba de acuerdo con el propósito marcado por los antecedentes de la reforma: era una reacción contra la extensión de poderes del Director, y aún podríamos agregar, contra la exaltación al gobierno de los que se parecieran al que se acababa de derrocar. Alvear había sido Director del Estado á los 25 años de edad y el primer artículo del Estatuto, correspondiente á la sección del Poder Ejecutivo, determinaba que en adelante se necesitaría, para el desempeño de ese cargo, la edad de 35 años cumplidos. La elección debía recaer *precisamente* en persona de «reconocido patriotismo», integridad, «concepto público, buenas costumbres y aptitud para el cargo;» su duración en el mando no podía pasar de un año y al asumirlo debía jurar que cesaría «luego que sea requerido por la Junta de Observación y el Excmo. Ayuntamiento.»

Sus atribuciones eran, desde luego, proteger la religión del Estado, atender á su defensa y felicidad, á la ejecución de las leyes, mando y organización de los ejércitos, armada y milicias nacionales; el sosiego público, la libertad civil, la recaudación y arreglada



inversión de los fondos públicos y la seguridad real y personal de todos los residentes en el Estado. Debía nombrar y recibir los embajadores, enviados y cónsules, dando aviso á la Junta de Observación, «bajo grave responsabilidad, de los motivos y objetos de su «misión, en ambos casos.» Le correspondía designar los secretarios de gobierno, guerra y hacienda, siendo responsable de su mala elección y estándole estrictamente prohibido nombrar á sus parientes, dentro del tercer grado inclusive, sin noticia y aprobación de la Junta.

La provisión de empleos en el ramo de hacienda no era arbitraria, sino que debía sujetarse á la propuesta del jefe de cada departamento, según la antigüedad y servicios, quedándoles á los agraviados el recurso de queja ante una junta compuesta del presidente de la Cámara, el decano del Tribunal de Cuentas, el ministro de Cajas más antiguo y el fiscal de la Cámara, la cual tenía poder para decidir sumariamente y sin más recurso.

Esa misma junta debía decidir todo reclamo promovido por un empleado á quien se separase de su puesto sin justa causa y de las apelaciones en los pleitos sobre contrabando y otros ramos de hacienda.

El director del Estado no podía disponer por sí gastos, obras, *aprestos*, ni erogaciones extraordinarias, sino asociado al decano del Tribunal Mayor de Cuentas, al ministro más antiguo de la Caja Principal, al fiscal de la Cámara y al procurador general de la Ciudad.

Era de su incumbencia mantener las relaciones exteriores, conducir los negocios, hacer estipulaciones preliminares, firmar y concluir tratados de tregua, paz,



alianza, comercio y neutralidad; pero nunca podía resolverlos por sí sólo, sino acordándolos, previamente con la Junta de Observación, comisión militar de guerra y Tribunal del Consulado, en su caso.

Le estaba expresamente prohibido intervenir en negocio alguno judicial, civil ó criminal, excepto en las causas de contrabando, y era su deber, cuando la urgencia del caso lo obligase á arrestar algún ciudadano, ponerlo á disposición de los magistrados dentro de 24 horas. No podía «disponer expedición alguna militar para afuera de la provincia, ni imponer pechos, «contribuciones, empréstitos, ni aumento de derechos «de ningún género, sin previa consulta y determinación «de la Junta Observadora, unida con el Exmo. Cabildo «y Tribunal del Consulado.»

Para ocupar la correspondencia privada, cuando se interesare la salud general y bien del Estado, debía requerir el asentimiento de la Junta Observadora, del Fiscal de la Cámara y del Procurador general de la ciudad; prescripciones todas cuyo objeto manifiesto era trabar la acción del Director para impedir los excesos de su poder.

Para el despacho de los negocios creaba tres secretarios de Estado, quienes no podían por sí solos, en ningún caso, tomar deliberación alguna sin previa anuencia del Director, limitándose sus funciones á las de *meros subalternos*. (Art. 2º, Cap. 3º, sección 3ª), y todos los documentos que expedían debían llevar al margen la rúbrica del jefe del Estado, para certidumbre de su conocimiento, sin cuyo requisito no tendría efecto alguno y serían desatendidos impunemente. Los secretarios eran amovibles á voluntad del Direc-



tor ó cuando lo exigiese la Junta de Observación, y lo mismo los oficiales de sus secretarios. (Art. 4°),

El Poder Judicial residía en el Tribunal de recursos extraordinarios, en las cámaras de apelaciones, y en los juzgados inferiores (sección 4ª). Los individuos de las cámaras de apelaciones eran nombrados por el Director á propuesta del cuerpo de abogados.

La sección 5ª del Estatuto está dedicada al sistema electoral, y comprende la elección de diputados de las provincias para el Congreso General, la de los cabildos seculares, la de los gobernadores y la de la Junta de Observación.

La elección de diputados se practicaba por un sistema de segundo grado: en las Asambleas primarias votaban los ciudadanos por un elector en proporción de cada 5.000 almas, y los electores así designados, reunidos en asamblea en la cabeza de cada provincia, nombraban un diputado por cada 15.000 almas; el sufragio en las asambleas primarias duraba dos días. El jefe de la provincia debía instalar el colegio electoral, retirándose en seguida para que éste desempeñara sus funciones.

Los cabildos seculares de las ciudades y villas que ya los tenían eran los únicos que debían designarse por elección popular, y esta elección se verificaba también por un sistema de segundo grado análogo al que acabamos de referir.

Los electores de diputados concurrían también á la designación del gobernador de la provincia: para este nombramiento designaban seis ciudadanos, de los cuales sorteaban tres, y de estos tres elegían, á pluralidad de votos, el gobernador.



Los gobernadores duraban tres años en su ejercicio; los tenientes gobernadores eran nombrados por el Director del Estado, á propuesta en terna del Cabildo de su residencia. La Junta de Observación debía continuar renovándose, según lo prescrito en el bando del Cabildo de 18 de Abril anterior.

La sección sexta está dedicada al ejército y armada, y sus preceptos no ofrecen mayor interés, si se exceptúa el capítulo 3° que se refiere á las milicias cívicas, á las cuales pertenecía todo habitante del Estado nacido en América, todo extranjero con domicilio de cuatro años, todo español europeo con carta de ciudadanía y todo africano ó pardo libres, siendo excluidos aquellos que hubieran sido juzgados y sentenciados *por el atroz delito* de facción ó traición á la patria, y era su deber concurrir á defenderla siempre que fuera llamado por la campana del Cabildo.

El Cabildo de la Capital era brigadier nato de las milicias de la ciudad con antigüedad de 25 de Mayo de 1810, y para que no quedara sin ejercicio la jurisdicción ordinaria, ni se recargase indebidamente la militar, como sucedería si se concediese el fuero á todas las milicias, declaraba el Estatuto que sólo disfrutarían de él los veteranos que se hallaran en servicio y los que en adelante se aumentasen en la brigada para su enseñanza y arreglo. La brigada tenía por patrón principal á la Santísima Trinidad y por menos principal á San Martín.

El artículo 10° prescribía que la milicia estaba subordinada al gobierno, pero agregaba que cuando éste claudicase en la observancia del Estatuto ú obrase



contra la salud ó seguridad de la patria, declararán dolo así la Junta de Observación y el Excelentísimo Cabildo por escrito ó de palabra, quedaría sujeto á la dicha Junta de Observación para sostener sus determinaciones en el caso que las resistiese el Director. La brigada cívica no debía nunca ser obligada á hacer servicios fuera de la ciudad; sus individuos debían mantener y conservar en su poder sus armas y municiones, reputándose por sospechoso al que las perdiera ó enagenare.

La brigada cívica no podía reunirse para hacer ejercicios dentro ó fuera de la ciudad sin avisarlo al gobernador de la plaza; el armamento de la brigada debía ser provisto por la armería del Estado; pero era deber del Excmo. señor Brigadier (el Cabildo) procurarse armamento propio, con sus municiones correspondientes, y aumentar las fuerzas hasta 8.000 hombres de infantería, caballería y artillería, en proporción. La señal de que *la patria se hallaba en peligro* era la bandera puesta al tope de la torre del Cabildo y el toque de su campana, y para que la noticia llegase rápidamente al resto de la provincia, el Estatuto prescribía al Ayuntamiento que invitara á la ciudad y sus dependencias para que proyectaran un telégrafo, ofreciendo una demostración de honor, á nombre de la patria, al autor del modelo que se adoptase.

En la sección 7ª, dedicada á la seguridad individual y libertad de imprenta, declaraba que las acciones privadas de los hombres que no ofendiesen el orden público ni perjudicasen á tercero, estaban reservadas á Dios y exentas de la autoridad de los



magistrados; que ningún habitante del Estado sería obligado á hacer lo que no manda la ley clara y expresamente, ni privado de lo que ella no prohíbe del mismo modo; que el crimen consistía en la infracción de una ley que se encontrara en entera observancia, pues sin este requisito debe reputarse sin fuerza; que ningún habitante del Estado podía ser penado sin proceso y sentencia legal: que toda sentencia en causa criminal debía ser fundada en el texto expreso de la ley y que la infracción de este precepto era un crimen en el magistrado, por el que respondería con el pago de costas, daños y perjuicios; que los ciudadanos y demás habitantes del país que formaban la milicia cívica podían tener en sus casas pólvora, armas blancas y de fuego, para la defensa de sus personas y propiedades en casos urgentes; que ningún individuo podía ser arrestado sin que existiese semi plena prueba ó indicios vehementes de crimen, y que en el término de tres días debía hacerse saber al reo la causa de su prisión; que no se decretaría prisión, pesquisa de papeles ó embargo de bienes, sin individualizar en decreto el nombre de la persona, debiendo formar inventario de los bienes y papeles embargados, con la prevención de que el juez ó comisionado que arrestase á cualquier individuo sin guardar las formalidades establecidas, salvo el caso de *fragante* delito, sería removido, y el que faltase á la regla del inventario en el embargo sería responsable de la substracción de que se quejase el interesado; que la casa de un ciudadano era un sagrado y que no podía allanarse sino por orden de juez competente; que ninguno estaría incomunicado después de su confesión, la cual debería tomársele en el término



de diez días; que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los reos, y que toda medida que, á pretexto de precaución, sólo sirviera para modificarlos, debería ser corregida por los juzgados y tribunales superiores, indemnizando á los agraviados los males que hubiesen sufrido por el abuso; que todo hombre tenía derecho de resistir hasta con la fuerza la prisión de su persona y el embargo de sus bienes, que se intentase fuera del orden y formalidades prescritas, y que el ayudar á esa resistencia no podía reputarse delictuoso; que todo hombre tenía libertad para permanecer en el territorio del Estado ó retirarse de él, siempre que con esto no expusiera la seguridad del país; y finalmente, que estas garantías no podían suspenderse jamás, y «cuando por muy remoto y extraordinario acontecimiento que comprometa la tranquilidad pública ó la seguridad de la patria, no puede observarse cuanto en él se previene, las autoridades que se viesen en esta fatal necesidad darán razón de su conducta á la Junta de Observación y Excmo. Cabildo, que deberán observar los motivos de la medida y el tiempo de su duración.»

Se restablecía el decreto de libertad de imprenta de 16 de Octubre de 1811 y se ordenaba que se estableciera un periódico pagado por el Cabildo, que se publicara todas las semanas con el título de *Censor*, cuyo objeto debía ser reflexionar sobre los procedimientos injustos de los funcionarios públicos, ilustrando á los pueblos en sus derechos y verdaderos intereses; y otro periódico, publicado con los fondos del Estado, con el nombre de *Gazeta*, para que noticiase al pueblo los sucesos interesantes y satisficiera la censura ó reflexiones del *Censor*, debiendo cuidar el gobierno y el



Ayuntamiento de que en ambos periódicos se hablase con moderación y decoro, sin faltar el respeto debido á los magistrados, al público y á los particulares.

Viene en seguida el Estatuto Provisional de la Junta de Observación, en el cual se prescribe que el objeto de esta Junta es esencialmente celar la puntual observancia del Reglamento Provisional, reclamando enérgicamente contra la menor infracción ú oponiéndose á cuanto de algún modo perjudique á la felicidad común: promover todos los arbitrios y medidas que crea conducentes á tan importante objeto y en su virtud, limitar, añadir ó enmendar el Estatuto ó hacer otros nuevos, según lo exijan las circunstancias.

Toda adición ó corrección se debía consultar con el Gobierno y con el Cabildo antes de publicarse, y éste, en el término de ocho días, debía expresar su consentimiento ó disenso, exponiendo, en el último caso, las razones fundamentales de su oposición. Si el gobierno, á quien se debía consultar primero, disintiese con la nueva ley ó Estatuto, lo devolvía á la Junta y ésta lo pasaba al Cabildo; si éste lo aceptaba, se publicaría en seguida; si no lo aceptaba, quedaba sin efecto; precepto del cual resulta que para oponerse á una ley ó reglamento de la Junta de Observación, se requería la conformidad de opiniones del Gobierno y del Cabildo.

La resolución de las dudas que ocurrieran sobre inteligencia de las leyes ya sancionadas era de la competencia exclusiva de la Junta de Observación.

Los vocales del Gobierno eran inviolables y estaban exentos de toda autoridad; únicamente podían ser juzgados por una comisión especial que para cada caso nombraría la misma Junta.



Finalmente, en el capítulo titulado «providencias generales» se abolía el Consejo de Estado, se declaraban sin efecto las leyes y decretos de la Asamblea de 1813 sobre profesión religiosa, se revocaba el decreto que prohibía á los maestros el castigo corporal de sus discípulos y se determinaba que las contribuciones impuestas en una provincia en su beneficio particular no se cobrarían en otras; que todas las provincias podían, sin necesidad de licencia y con sólo avisar al Director, hacer los establecimientos que creyeran útiles á sus industrias, artes y ciencias con los fondos que ellas mismas arbitrasen, sin perjuicio de los del Estado y que el Estatuto regiría en todas las provincias que lo aceptaran libremente.

Este estatuto debía recibir su sanción fuera de la Provincia de Buenos Aires en todas las que lo aceptaran libremente, según se establecía en la Providencia 12ª; pero las provincias que aceptaron sin dificultad la autoridad del Director Rondeau y la de su suplente, el coronel Alvarez Thomas, no prestaron igual acatamiento á la Junta de Observación ni al estatuto formulado por ella. Idéntica actitud asumieron los ejércitos de los Andes y del Norte. Salta, que procedía bajo la inspiración de Güemes, su prestigioso caudillo, tomó en consideración las comunicaciones del nuevo directorio en un cabildo abierto y declaró que reconocía la nueva autoridad constituida, pero no se subordinaba á las prescripciones del estatuto, agregando que su acatamiento al nuevo gobierno era bajo la expresa condición de que se había de reunir un congreso nacional en el término de quince meses, para que, si esto no se efectuaba, se consideraría desligada de todo compromiso y libre para gober-



narse con entera independencia y como mejor se lo aconsejaran las circunstancias y sus intereses.

Mendoza, que obedecía al General San Martín, ob-
servó análogo procedimiento: tomó en consideración en
cabildo abierto la comunicación que había recibido
de la Capital y resolvió nombrar siete comisarios del
pueblo para que las examinaran y determinaran su
aceptación ó rechazo. Los comisarios se reunieron
el 3 de Junio y acordaron «que en circunstancias en
«que la patria se presenta en su última crisis por la
«proximidad de la expedición española, las innovacio-
«nes de una legislatura que, restringiendo al Poder
«Ejecutivo, enervaría toda la prontitud de su acción,
«podía comprometer la suerte de las Provincias Uni-
«das, excitándose acaso entre los pueblos el triste
«celo de las discusiones.....; que de consiguiente, por
«ahora, se suspenda la sanción del estatuto, se ace-
«lere la elección de los diputados de Cuyo para el
«Congreso en los términos más sencillos para reali-
«zar esta augusta Asamblea que en todo evento pue-
«da dar dirección al Estado».

El General San Martín reunió una junta de guerra,
y ésta declaró respecto del estatuto «que no lo re-
«conocía en parte alguna, por no considerarse oportu-
«tuno para el actual régimen de las Provincias y en
«concepto á que el reconocimiento del Supremo Go-
«bierno provisorio sólo ha sido extensivo á las cir-
«cunstancias y ajustado á lo prevenido en la junta de
«guerra (30 de Abril), en que no se ha reconocido
«otra superioridad que la del Supremo Director pro-
«visorio hasta la celebración de la Asamblea General,
«á cuya sola exposición y deliberación debía someter-
«se en atención á que en la actual crisis debe tener



«el primer jefe de nuestra confianza todas las facultades y poder que son necesarios á dar rapidez al giro de las medidas y providencias que se hayan de librar para el buen éxito de los negocios públicos y conservación de las libertades nacionales».

Las razones apuntadas por los comisarios del pueblo de Mendoza y repetidas en la junta de guerra que presidía el General San Martín señalan en breves términos las verdaderas deficiencias del gobierno que se trataba de constituir, en el que la autoridad ejecutiva quedaba reducida de tal manera que, de antemano, se podía preveer que sería ineficaz para los fines de la vida nacional en esos momentos de nuestra historia.

La oposición hecha al estatuto y sus motivos demuestran que el motín de Fontezuelas había tenido por verdadera causa la oposición personal al director Alvear y no al sistema de poderes concentrados que había inaugurado el directorio de Posadas y que Alvear no hizo sino continuar.

[REDACTED]



CAPÍTULO VIII



SUMARIO: I Desinteligencias entre el Director, la Junta de Observación y el Cabildo—Sublevación del General Díaz Vélez—II Instalación del Congreso en Tucumán—Complicaciones internas—Nombramiento del Director Pueyrredón—Resistencia en Buenos Aires—Acta capitular del 17 de Julio y bando del 18—Reunión popular—Sistema adoptado para explorar la opinión pública—Triunfo de los nacionalistas—Destitución de Balcarce—III. La independencia: antecedentes—La revolución de Mayo y el mantenimiento de la autoridad de Fernando VII—Opinión de Mr. Walton: principios feudales—IV. La guerra á muerte y sin cuartel—Doctrina sostenida por Moreno en «La Gaceta»—V. La escarapela nacional—La bandera azul y blanca—VI. Convocación de la asamblea del año 13—La Constitución proyectada—La asamblea—El juramento—Ciudadanía de los empleados españoles—Cuño de la moneda—Las armas del rey y el escudo de la asamblea—El himno nacional—Los títulos de nobleza—Las autoridades eclesiásticas—VII. Situación de la república en 1816—Declaración de la independencia nacional—La bandera nacional.

I—El Estatuto Provisional rigió en Buenos Aires desde su sanción y, á poco andar, el roce de sus autoridades tan mal constituidas produjo desinteligencias entre las dos ramas principales del gobierno.

La Junta de Observación pidió que se le comunicara todo lo relativo á la misión que había desempeñado Belgrano en Europa, y el Director, por evitar dificultades al ilustre comisionado, con quien estaba estrechamente ligado por vínculos de parentesco, re-



husó acceder á esa justa petición. La desinteligencia llegó á tanto, que el señor Alvarez Thomas decidió convocar al pueblo el día 11 de Febrero de 1816, á efecto de que decidiera la mejor manera de encaminar los asuntos del Estado en la gran crisis que el país atravesaba.

El bando de convocatoria decía: «que en la confluencia de opiniones contradictorias acerca del rumbo y dirección que debía darse á nuestros negocios en la presente crisis, hallándose empeñados los unos y los otros en hacer pasar las suyas por una expresión del voto general y no sabiendo el gobierno cual de tantas sea el verdadero sentimiento del pueblo.... lo convocaba para que en un congreso popular lo expusiera de una manera incontrovertible».

La convocatoria era para el día 12; pero en ese mismo día apareció un bando de la Junta de Observación y del Cabildo que declaraba cesante al Director Alvarez Thomás, pasando provisionalmente el gobierno al alcalde de primer voto, don José Antonio de Escalada, ofreciendo exponer en un cabildo abierto todos los antecedentes del conflicto con el director cesante. Por interposición de personas de gran valía se consiguió aproximar el Director Alvarez Thomas á la Junta de Observación y al Cabildo, y un nuevo bando declaró que todos los representantes del pueblo habían resuelto sacrificar sus dissentimientos en obsequio del bien público y convocar al pueblo á cabildo abierto para el día 13.

En esta reunión, después de grandes tumultos, se acordó: que el Director quedara con las facultades propias del Poder Ejecutivo; que se nombrara una junta para que proyectara las reformas que con ma-



yor urgencia reclamaba el Estatuto y que esas reformas se imprimieran y circularan para ser consideradas en un nuevo congreso popular. Se nombró, además, una Junta de seguridad encargada de velar por el mantenimiento de las leyes y por la libertad individual de los ciudadanos.

Las reformas se proyectaron, pero no fueron tomadas en consideración, porque ya se había instalado el Congreso Nacional en Tucumán y se consideró que á él le correspondía decidir todas las cuestiones que afectaban al gobierno general del país.

Entre tanto, los anarquistas del litoral llevaban adelante su obra de desquicio. El general Viamont se vió obligado á capitular en Santa Fé. El general Belgrano fue designado para ponerse al frente del ejército que se organizó en San Nicolás de los Arroyos y el Director Alvarez Thomas experimentó en cabeza propia las funestas consecuencias del motin de Fontezuelas, porque su ejemplo fue imitado por el general Díaz Vélez, jefe de la vanguardia de Belgrano, quien se entendió con los montoneros, tomó prisionero á su general y volvió sobre Buenos Aires para exigir la separación del Director. Alvarez Thomas renunció el 16 de Abril ante la Junta de Observación y el Cabildo; su renuncia fue aceptada y se nombró para reemplazarle al Brigadier Antonio Balcarce.

—

II—Trasladémonos ahora á Tucumán, asiento del Congreso que se había instalado el 24 de Marzo con las dos terceras partes de sus miembros.

La situación no podía ser más complicada: la anarquía desgarraba todo el litoral; el general Rondeau

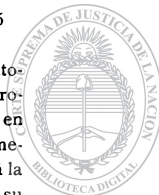


había fracasado en el norte y retrocedía deshecho después del desastre de Sipe-Sipe; en Buenos Aires aparecía el pensamiento de desligar la provincia de las responsabilidades del gobierno general y ganaba terreno la idea de que no convenía á la populosa ciudad continuar como asiento de la autoridad nacional. Los celos y rivalidades que había despertado su 'prepotencia en el interior despertaron resentimientos en la capital, y poco á poco se agregaron fuerzas y elementos de opinión en torno de aquellos que querían continuar la vida nacional, pero sin las responsabilidades del gobierno central, que en la lucha por la independencia, sacaba de Buenos Aires la mayor parte de los elementos de guerra.

El Congreso de Tucumán era en ese momento el único vínculo y la única esperanza de unidad nacional. Debía organizar un gobierno que salvara el país de la anarquía del litoral y que pudiera oponer resistencia eficaz á los españoles por el norte, y prepararse para resistir las nuevas expediciones que se anunciaban.

Afortunadamente, se reunieron para esos grandes propósitos las tres entidades más prestigiosas con que contaban las provincias en ese instante: el general San Martín, el general Belgrano y el general Güemes, y procediendo de acuerdo con ellos el Congreso de Tucumán declaró director de las Provincias Unidas del Río de la Plata al coronel don Juan Martín de Pueyrredón. *The right man for the right place.*

Al principio esta designación no consiguió uniformar las opiniones de los partidos de la Capital. Los que querían que Buenos Aires dejara de ser asiento del gobierno nacional y que rodeaban al Director provisorio Balcarce se dirigieron al Ayuntamiento para que



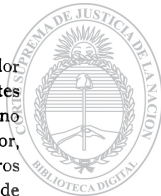
éste solicitara del Congreso, por intermedio de las autoridades superiores, una resolución de acuerdo con propósito de que la autoridad nacional se estableciera en cualquiera de las otras provincias argentinas, prometiéndole acatamiento, con tal que se reconociera á la provincia de Buenos Aires el derecho de constituir su propio gobierno.

El asunto era de naturaleza tan grave, que ninguno de los poderes públicos se creyó habilitado para resolverlo por sí sólo, y decidieron de común acuerdo consultar la opinión del pueblo; pero surgió una nueva dificultad: ¿cuál sería la forma que se adoptaría para la consulta? ¿Se llamaría á Cabildo abierto, ó se consultaría la opinión por medio de una elección de diputados que trataran y decidieran el asunto?

El 17 de Julio se reunió la Junta de Observación y el Cabildo en la sala capitular, con asistencia del Director y «conviniendo la Junta en la necesidad de explorar la voluntad de los ciudadanos de Buenos Aires y «su campaña, por las ideas ya generalizadas y que «tenían dos representaciones que se leyeron en aquella «sesión, resultó acordado por ambas corporaciones que «el pueblo y su campaña debían de oír de un modo «digno y decoroso, haciéndolo por representantes y no «en Cabildo abierto, por los inconvenientes que «ofrece, según dictamen de todos los políticos».

La Junta propuso los artículos siguientes:

«Artículo 1º; en vista de las ideas que se han generalizado, se elijan por esta ciudad y por su campaña «23 representantes del mismo modo que se eligieron «los 23 electores para el nombramiento de los diputados para el soberano Congreso; 2º, que los alcaldes «de los cuarteles, por medio de sus tenientes, inviten



«á los ciudadanos á sufragar libremente ante el regidor
«de sus respectivas secciones; 3º; los representantes
«deberán ser simples ciudadanos; en su virtud no
«podrán ser representantes el Exmo señor Director,
«los empleados que dependan del gobierno, miembros
«del Exmo. Cabildo ni los que componen la Junta de
«Observación. No se consideran exceptuados los indi-
«viduos del Cabildo eclesiástico; 4º; los que resulten
«representantes de esta ciudad y la campaña á plura-
«lidad de éstos, se apersonarán en la sala capitular el
«día 1º de Agosto para oírlos y consultarles, en ocho
«sesiones, sobre cuanto pueda convenir á esta provin-
«cia, adoptando las medidas que sean conducentes á la
«felicidad particular de ella y general de la unión, sin
«separarse de la obediencia y sometimiento debido al
«soberano Congreso; en este estado y al extender el
«acta se mandó suspender por el Exmo. señor Director
«presidente, hasta mañana á las 11.» Tal es la cons-
tancia del acta capitular de Julio 17 de 1816, publicada
en hoja suelta.

La suspensión ordenada por el Director Balcarce no
tenía otro objeto que escapar á un procedimiento que
no convenía á los intereses políticos que representaba,
y el día siguiente apareció un bando que convocaba al
pueblo, no á Cabildo abierto, sino á una reunión po-
pular que debía celebrarse en la Iglesia de San
Ignacio.

He aquí el texto del bando: «El director interino del
«Estado, por cuanto: en varias representaciones de un
«considerable número de ciudadanos se ha pedido que
«se oiga su exposición sobre asuntos de alto interés
«para la patria, en las críticas circunstancias en que se
«halla particularmente la provincia de Buenos Aires;



«no queriendo el gobierno atraer sobre sí la gravísima
«carga de estorbar la libre manifestación de los votos
«de sus contrayentes, ni oponerse en manera alguna
«al uso tranquilo de ese derecho tan sagrado como
«imaginable que compete á los individuos libres de
«un Estado de manifestar, sea de palabra ó por es-
«crito, sus opiniones y deseos en las materias que tocan
«á la felicidad y á la vida de la república. Por tanto,
«hace saber á los dichos ciudadanos y á las corporacio-
«nes y jefes de esta heroica ciudad, que mañana á las
«10 se celebrará una reunión popular en la Iglesia de
«San Ignacio, con el objeto de discutir las representa-
«ciones indicadas y recibir la opinión general sobre el
«asunto, á cuyo efecto todos los ciudadanos podrán
«asistir á aquella respetable sesión, declarando en ella,
«sin coacción ni recelo alguno, sus deseos y pensa-
«mientos. El Gobierno para tan solemne acto, promete
«toda su garantía con el fin de que la tranquilidad pú-
«blica no sea perturbada en modo alguno; y, para que
«puedan todos concurrir á un acto tan importante para
«aquel que ama de veras los intereses de su patria, or-
«dena que desde las 9 de la mañana de ese día se
«cierren todos los talleres, tiendas de oficio y cesen los
«trabajos».

Se trataba, pues, de un verdadero cabildo abierto en el sentido que esta institución tenía en el sistema colonial y que había conservado después de la revolución, porque, según hemos visto, el cabildo abierto era la asamblea de la parte principal y más sana del vecindario y no la reunión tumultuosa de todas las clases sociales, mientras que en el caso actual el director convoca al pueblo todo, sin distinción de gerarquías, ni de clases. Una reunión de esta natu-

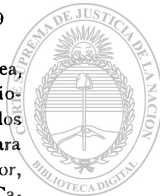


raleza en una ciudad ya populosa debía necesariamente tener todos los caracteres de un *meeting* moderno, sin las garantías que ahora ofrece, gracias a las prácticas y costumbres adquiridas después.

La reunión tuvo lugar en medio de manifestaciones estruendosas, y en el más grande tumulto resolvieron: 1° que se hiciera venir á la asamblea al Director, al Cabildo y á la Junta de Observación, diputando dos de las personas presentes para que hicieran entender á tales funcionarios que tal era la voluntad soberana del pueblo.

Concurrieron el Director, dos miembros del Cabildo y dos de la Junta de Observación; después de acalorada discusión, «se acordó por el soberano pueblo que, reunido el Exmo. señor Director, la honorable Junta de Observación y Exmo. Cabildo, traten «del modo como debe convocarse individualmente al «pueblo soberano; debiendo en el día de mañana publicar el acuerdo que celebren, notoriándose por «tanto esta resolución en el momento y pasándose «copias certificadas á las expresadas corporaciones.»

Reunidas al día siguiente las autoridades á que se refería la resolución anterior, después de pensar «con «madurez y serenidad el grande negocio de deberse «escuchar el libre voto de los ciudadanos en términos que, alejando los males que amagan la pública «tranquilidad y refluyen contra el interés de la salud «de los pueblos, pueda conseguirse el objeto de conciliar las divergencias de opiniones en que funestamente se había comprometido el bien general, y á «fin de que la voz de la provincia sea oída con dignidad y sin los riesgos que justamente se temen, reunidas las tres entidades en la mejor armonía, así como



«en que ningún ciudadano, de cualquier clase que sea, «llegue á ser removido ó perseguido por las opiniones que haya descubierto, corriendo un velo á los «sucesos ocurridos, acordaron: 1° que se nombrara «una comisión de tres individuos, uno por el Director, «otro por la Junta de Observación y otro por el Cabildo para que, reunidos en la sala capitular, recibieran los sufragios de los ciudadanos de los treinta y «dos cuarteles; 2° esa comisión debía tener preparados dos registros foliados y rubricados; uno con la «inscripción siguiente: *voto porque se oiga al pueblo «en cabildo abierto*, y el otro con la que sigue: *voto «porque se oiga al pueblo por representantes.*»

No está de más consignar que *La Gazeta*, órgano oficial del Director, abogaba porque se oyera el pueblo en Cabildo abierto, mientras que *El Censor*, costeadado por el Cabildo, sostenía que se le oyera por medio de representantes.

Sea que la discusión ilustrara y concurriera á uniformar las opiniones ó que se hubiera sentido la necesidad de que la idea nacional prevaleciera sobre la tendencia anárquica y sobre todo interés personal, el resultado fue que la votación arrojó una inmensa mayoría en favor del voto por representación, prevaleciendo, en consecuencia, el partido con tendencias nacionales que tenía por representantes, en ese momento, á la Junta de Observación y al Cabildo.

El triunfo alentó á estas corporaciones, y dejando de lado la cuestión que estaba en debate, procedieron sumariamente y destituyeron al Director por los motivos que expusieron en el bando de 11 de Junio, cuyo texto insertamos á continuación: «La Honorable Junta de Observación y el Exmo. Cabildo, por



«cuanto: la falta de cumplimiento en el Director interino del Estado, brigadier don Antonio González Balcarce, á los artículos jurados al recibirse del mando, las inconsecuencias repetidas con que irregularmente se ha regido para con la Honorable Junta de Observación y Exmo. Cabildo, el disimulo que ha empleado, los arbitrios que en estos días se le han visto suscitar y la apatía, la inacción y ningún calor observado para preparar la defensa del país. . . . por tanto: anhelosos la H. J. Observación y el Exmo. Cabildo de calmar la inquietud del pueblo. . . . han intimado el cese en el mando interino de Director al mismo brigadier don Antonio González Balcarce, y en su conciencia han nombrado para correr con el despacho del gobierno, una comisión gubernativa de la dirección del Estado, compuesta de los señores don Francisco Antonio de Escalada y don Miguel de Irigoyen, durante llega el Exmo. señor Director propietario á quien se da cuenta.»

Con esto terminó el conflicto, y cuando llegó Pueyrredón, asumió el mando sin obstáculo.

III—Llegamos al momento en que el Congreso va á dar el paso decisivo y á sancionar la ley de la independencia nacional que ha consagrado su nombre en la historia de los pueblos argentinos. Fijaremos los antecedentes.

La revolución del 25 de Mayo se consumó al amparo del nombre de Fernando VII; pero, conocidas las causas sustanciales que la produjeron, no puede caber la menor duda de que su objeto final fue llegar á la independencia.

Walton, en su libro *Present state of the spanish*



colonies, citado por el general Mitre, supone que la revolución sud-americana de que fue testigo, correspondió al determinado propósito de organizar un gobierno propio *sobre la base de los principios de la soberanía feudal*, que consideraba á las colonias como posesiones *in partibus exteris*, pertenecientes á la Corona, y no como partes integrantes del reino; pero este supuesto carece absolutamente de verdad. El error proviene, acaso, de la discusión del Cabildo abierto del 22 de Mayo y del manifiesto de la Junta revolucionaria, que tanta resonancia tuvieron en su época.

Los principios afirmados en una y otra oportunidad sobre la lealtad y obediencia en que protestaban mantenerse los pueblos revolucionados respecto de la legítima soberanía de Fernando VII fueron, sin duda, causa de error, al cual no sería tal vez extraño el recuerdo de la antigua organización colonial de Norte-América, donde las primitivas colonias se asentaron y desarrollaron, según lo hemos visto, sobre la base de la soberanía feudal. Pero el feudalismo no había trabado el desenvolvimiento de las comunidades libres del norte, porque, limitado á un tributo puramente nominal y á la subordinación en los negocios de alto gobierno, les había permitido crecer y vigorizarse bajo el amparo de las leyes y costumbres que constituían el patrimonio de todos los súbditos de la Gran Bretaña. El vasallaje no fue nunca para ellas la esclavitud y la servidumbre.

Otra cosa sucedió en la América del Sud, donde los pueblos, estrechados por la autoridad del soberano, no tenían ninguna de las facultades del go-



bierno propio; motivo por el cual surgió en esta parte del continente el antagonismo de razas que antes hemos explicado entre el español que, trasladado á América, se conservaba español para monopolizar ventajas y privilegios, y el americano, á quién se colocaba en las condiciones de una clase inferior y subalterna.

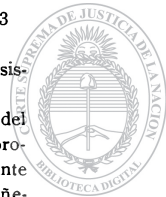
Por poco que se profundice el estudio de nuestros antecedentes históricos, se ve con claridad que la idea de mantener el vínculo feudal con la Corona de España no fue nunca un propósito serio de los iniciadores de la revolución, ni mucho menos de la masa del pueblo, que desde el primer momento se sometió á su dirección.

La idea teórica que predominaba en el espíritu de los hombres dirigentes de la época era la de la soberanía del pueblo, propagada por Rousseau y sancionada por la Revolución Francesa. Eran esas las doctrinas que se conocían y enseñaban y las únicas que prosperaron en el pueblo revuelto con el cambio de autoridad y de gobierno.

—

IV—Bastaría, para demostrar que la revolución tuvo desde el primer día el fin deliberado de la independencia, recordar sus primeros pasos.

Levantó la bandera de guerra á muerte contra la autoridad colonial. Su primera resolución, en la plaza pública, fue enviar al interior fuerzas armadas para que ayudasen la libertad de los pueblos, y el delegado de la Junta que llevase su pensamiento político, iría con la orden perentoria de pasar por las armas á Liniers, el jefe glorioso de la reconquista, el virrey más prestigioso de los últimos tiem-



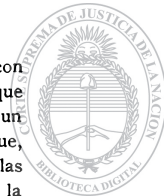
pos coloniales, y á todos los que le prestaban asistencia.

Vieytes vaciló cuando llegó la oportunidad del cruento sacrificio; pero la Junta insistió en sus propósitos y envió á Castelli, que no retrocedió ante ninguna responsabilidad, y Liniers y sus compañeros sufrieron su triste destino escapando solamente el obispo Orellana, gracias á su sagrada investidura; Sanz, Nieto y Córdoba tuvieron la misma suerte después de la batalla de Suipacha, porque la inflexible junta revolucionaria así lo dispuso y fué el mismo Castelli el encargado de hacer cumplir sus decretos.

Los miembros de la Junta, que no cubrían su responsabilidad para el futuro, quemaron sus naves desde el primer día, suscribieron y firmaron las instrucciones que Castelli llevó como actos deliberados del gobierno; sabían, sin embargo, que si fueran vencidos les esperaba idéntico destino al de los revolucionarios de la Paz en 1809 y no pudieron pensar que la más estricta fidelidad á Fernando VII había de pagar la ejecución de tales personajes, si llegaba el caso eventual de que el rey cautivo recobrara su libertad y su corona.

Moreno, desocupado de las primeras exigencias de la revolución, comenzó la enseñanza doctrinaria en la *Gazeta* del mes de Noviembre de 1810, trazándole el camino al futuro congreso y señalando las bases de la nueva constitución del Estado.

Con profunda sabiduría decía... «La América «presenta un terreno limpio y bien preparado, donde «de producirán frutos prodigiosos las sanas doctrinas que siembren diestramente los legisladores...



«Sin embargo, el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien: él debe aspirar á que no puedan obrar mal; que sus pasos tengan un dique más fuerte que el de su propia virtud y que, delineado el camino de sus operaciones por reglas que no esté en sus manos trastornar, se derive la bondad del gobierno, no de las personas que lo ejercen, sino de una constitución firme que obligue á sus sucesores á ser igualmente buenos que los primeros, sin que en ningún caso deje á estos la libertad de hacerse malos impunemente.... Hay muchos que, fijando sus miradas en la justa *emanación* de la América, á que conduce la inevitable pérdida de España, no espiran á otro bien que haber roto los vínculos de una dependencia colonial, y creen completa nuestra felicidad desde que, llegados estos países á la *dignidad de Estado*, salgan de la degradante condición de un fundo usufructuario.... Es muy glorioso á los habitantes de la América verse *inscritos en el rango de las naciones* y que no se describan sus posesiones como patrimonio de los españoles europeos; pero quizá no presenta situación más crítica para los pueblos que el momento de su emancipación.... Resuelta la magnánima empresa que hemos empezado, nada debe retraernos de su continuación: nuestra divisa debe ser la de un célebre republicano que decía: *malum periculosam libertatem quam servitium quietum*: prefiero una libertad peligrosa á una servidumbre tranquila.»

Y más adelante agrega: «..... Si el Congreso se redujese al único empeño de elegir personas que subrogasen al gobierno antiguo, habría puesto un



«término muy estrecho á las esperanzas que justamente se han formado de su convocación. La ratificación de la Junta provisional pudo conseguirse por el conocimiento tácito de las provincias que le siguiese; y también por actos positivos, con que cada pueblo pudo manifestar su voluntad sin las dificultades consiguientes al nombramiento y remisión de sus diputados; la reunión de éstos concentra una representación legítima de todos los pueblos, constituye un órgano seguro de su voluntad y sus decisiones, en cuanto no desmientan la intención de sus representantes, llevan el sello sagrado de la verdadera soberanía de estas regiones. Así, pues, revestida esta respetable asamblea de un poder á todas luces soberano, dejaría defectuosa su obra si se redujese á elegir gobernantes sin fijarles la constitución y forma de gobierno. La absoluta ignorancia del derecho público en que hemos vivido ha hecho nacer ideas equivocadas acerca de los sublimes principios del gobierno, y graduando las cosas por su brillo, se ha creído generalmente el soberano de una nación tal que la gobernaba á su arbitrio. Yo me lisongeo que dentro de poco tiempo serán familiares á todos los paisanos ciertos conocimientos que la tiranía había desterrado; entre tanto, debo reglar por ellos mis exposiciones y decir francamente que la verdadera soberanía de un pueblo nunca ha consistido sino en la voluntad general del mismo; que siendo la soberanía indivisible é inalienable, nunca ha podido ser propiedad de un hombre sólo; y que mientras los gobernadores no revistan el carácter de un grupo de esclavos ó de una majada de carneros, los gobernantes no pueden tener otro que el de ejecutores y



«ministros de las leyes que la voluntad general ha establecido. De aquí es que siempre que los pueblos han logrado manifestar su voluntad general, han quedado en suspenso todos los poderes que antes los regían.»

Todavía iba más lejos, y decía: «Las leyes de Indias no se hicieron para un Estado, y nosotros ya lo formamos; el poder supremo que se erija debe tratar con las potencias, y los pueblos de indias cometían un crimen si antes lo ejecutaban.»

Atenúa esas audaces declaraciones recordando que son consecuencias del cautiverio de Fernando VII, pero llega á la extremidad de suponer que Fernando VII estuviera en libertad y quisiera oponerse á la sanción de la constitución, y dice entonces:

«Si el amor á nuestro rey cautivo no produjese en los pueblos una visible propensión á inclinar la balanza en favor suyo, no faltarían principios sublimes en la política que autorizasen al Congreso para una absoluta prescindencia de nuestro adorado Fernando.»

«Las Américas no se ven unidas á los monarcas españoles por el pacto social, que únicamente puede sostener la legitimidad y decoro de una dominación. Los pueblos de España consérvense en hora buena dependientes del rey cautivo, esperando su libertad y regreso; ellos establecieron la monarquía, y envuelto el príncipe actual en la línea que por expreso pacto de la nación española debía reinar sobre ella, tiene derecho á reclamar la observancia del contrato social en el momento de quedar exedito para cumplir por sí mismo la parte que le compete.»



«La América en ningún caso puede considerarse «sujeta á aquella obligación; ella no ha concurrido «á la celebración del pacto nacional, de que derivan «los monarcas españoles los únicos títulos de lejitimidad de su imperio; la fuerza y la violencia son «la única base de la conquista que agregó estas regiones al trono español, conquista que en 300 años no «ha podido borrar de la memoria de los hombres las «atrocidades y horrores con que fue ejecutada y que «no habiéndose ratificado jamás por el consentimiento libre y unánime de estos pueblos, no ha añadido «en su abono título alguno al primitivo de la fuerza «y violencia que la produjeron. Ahora, pues, la fuerza no induce derecho ni puede nacer de ella una «verdadera obligación que nos impida resistirla, apenas podemos hacerlo impunemente, pues como dice «J. J. Rousseau, una vez que recupera el pueblo su «libertad por el mismo derecho que hubo para despojarlo de ella, ó tiene razón para recobrarla, ó no la «había para quitársela.»

Y más adelante continúa:

«¿Pretendería el Rey que continuásemos en nuestra «antigua constitución? Le responderíamos justamente «que no conocemos ninguna; y que las leyes arbitrarias dictadas por la codicia para esclavos y colonos «no pueden reglar la suerte de unos hombres que «desean ser libres y á los cuales ninguna potestad de «la tierra puede privar de aquel derecho.»

«¿Aspiraría el Rey á que viviésemos en la misma «miseria que antes? El cuerpo de dos millones «de hombres debería responderle: Hombre imprudente. ¿Qué descubres en tu persona que te haga superior á las nuestras? ¿Cuál sería tu imperio si no



«te lo hubiésemos dado?..... Tenías obligación de
«formar tú mismo nuestra felicidad.....; si te opo-
«nes á nuestro bien no mereces reinar sobre noso-
«tros; y si quieres manifestarte acreedor á la eleva-
«da dignidad que te hemos conferido, debes congra-
«tularte de verte colocado á la cabeza de una nación
«libre, que en la firmeza de su arreglada constitución
«presenta una barrera á la corrupción de tus hijos,
«para que no se precipiten á los desórdenes que con-
«ruina tuya y del reino deshonraron el gobierno de
«tus padres. He aquí las justas reconvenciones que
«sufriría nuestro actual monarca si resistiese la cons-
«titución que el Congreso nacional debe establecer..»

Muchas otras circunstancias concurren á demostrar el propósito de la independencia, que se tuvo y se mantuvo desde el 25 de Mayo de 1810 hasta el 9 de Julio de 1816, en que fue solemnemente declarada.

—

V—Moreno fue nombrado el 24 de Diciembre del año 10 ministro plenipotenciario para que procurara en Inglaterra el reconocimiento de la independencia nacional; y basta recordar los documentos relativos á la escarapela y á la bandera nacional que ha divulgado el ilustre y paciente historiador de Belgrano, para mostrar el proceso de las ideas en los hombres que dirigían la revolución, que cubrían su propósito ante las naciones extranjeras con las protestas de acatamiento á la soberanía del rey cautivo.

El 13 de Febrero de 1812 Belgrano se dirigió al Triunvirato diciéndole: «Parece llegado el caso de «que V. E. se sirva declarar la escarapela nacional «que debemos usar, para que no se equivoque con «la de nuestros enemigos».



Y el Triunvirato contestó con este decreto el 18 del mismo mes: «*Sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de color blanco y celeste*».

Creía Belgrano que ya había pasado la época de mantener encubierto el propósito político de la independencia, y al establecer una batería sobre las costas del Paraná, donde tenía su campo, la bendijo con el nombre del santo anhelo que lo animaba: la llamó «*Independencia*», y comunicó al Triunvirato que en aquel acto «siendo preciso enarbolar bandera y no «teniéndola, la mandé hacer celeste y blanca, conforme á los colores de la escarapela nacional».

El gobierno contestó el 3 de Marzo en los siguientes términos: «Se ha impuesto esta superioridad por «el oficio de V. S. del 27 del pasado, de haber quedado expedita la batería que nombró de la Independencia y de lo demás que ha practicado con el objeto de entusiasmar la tropa de su mando. Así la «situación presente como el orden y consecuencias «de principios á que estamos ligados, exige por nuestra parte en materias de la primera entidad del Estado, que nos conduzcamos con la mayor circunspección y medida; por eso es que las demostraciones «con que V. S. inflamó á la tropa de su mando, esto «es, enarbolando la bandera blanca y celeste como «indicante de que debe ser nuestra divisa sucesiva, «las cree este Gobierno de una influencia capaz de «destruir los fundamentos con que se justifican nuestras operaciones y protestas que hemos sancionado «con tanta repetición, y que en nuestras comunicaciones exteriores constituyen las principales máximas políticas que hemos adoptado. Con presencia



«de esto y de todo lo demás que se tiene presente
«en este grave asunto, ha dispuesto este Gobierno
«que, sujetando V. S. sus conceptos á las miras que
«reglan las determinaciones con que él se conduce,
«haga pasar como un rasgo de entusiasmo el suceso
«de la bandera blanca y celeste enarbolada, ocultán-
«dola disimuladamente y subrogándola con la que se
«le envía, que es la que hasta ahora se usa en esta
«Fortaleza, y que hace el centro del Estado; procu-
«rando en adelante no prevenir las deliberaciones del
«Gobierno en materia de tanta importancia y en cual-
«quiera otra que, una vez ejecutada, no deja libertad
«para su aprobación, y cuando menos, produce ma-
«les inevitables, difíciles de reparar con buen suceso».

Esta nota no llegó á manos de Belgrano, porque, apenas había establecido la batería «Independencia», había recibido orden de ir á ponerse al frente del ejército del norte.

El 25 de Mayo de ese mismo año se encontraba en Jujuy, y queriendo celebrar el aniversario del gran día, pensó que no podía hacerlo de mejor modo que entregando al ejército la bandera nacional, con todas las pompas y solemnidades de la religión y de la milicia. Llevó la bandera á la iglesia, donde fue bendecida por el doctor don Juan Ignacio Gorriti, y haciendo formar la tropa en cuadro noble, la proclamó diciendo: «....El 25 de Mayo será para siempre memorable en los anales de nuestra historia, y «vosotros tendreis un motivo más de recordarlo, cuando en él, por primera vez, veis la Bandera Nacional en mis manos, *que ya os distingue de las demás naciones del globo*, sin embargo de los esfuerzos «que han hecho los enemigos de la sagrada causa



«que defendemos para echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargábais.....»

El 29 de Mayo da cuenta al gobierno de la patriótica ceremonia, y dice: «....En seguida, formados en columna me acompañaron á depositar la bandera en mi casa, que yo mismo llevaba en medio de aclamaciones y vivas del pueblo, que se complacía de la señal *que ya los distingue de las demás naciones*, no confundiéndonos igualmente con los que, á pretexto de Fernando VII, tratan de privar á la América de sus derechos y usan las mismas señales que los españoles subyugados por Napoleón....»

Esta comunicación causó tanta sorpresa como enojo en el Triunvirato que creía definitivamente concluido el incidente de la bandera, y si no hubiera sido por la consideración personal que debía al virtuoso general, su destitución habría sido inmediata. Déjalo ver al final de la nota que se le dirigió en respuesta, después de transcribirle la de 3 de Marzo. Dice así: «....Los que constituyen esta superioridad, que hace el centro ó punto en que gravitan los grandes negocios que el sistema de las relaciones que han de formar ó aproximar á la dignidad de un estado á unos pueblos informes y derramados á distancias inordinadas, pero que, con sobrada justicia y oportunidad, se han avanzado y esfuerzan en constituirlo, no pueden contenerse sino en el punto de un celo *enérgico pero prudente*. A V. S. le sobra penetración para llegar con ella al cabo de la trascendencia de tal proceder; el gobierno, pues, consecuente á la confianza que ha depositado en V. S., no puede hacer más que dejar á la prudencia de V. S. mismo la reparación de tamaño desor-



«den; pero debe igualmente prevenirle que esta será
«la última vez que sacrificará hasta tan alto punto
«los respetos de su autoridad y los intereses de la
«nación que preside y forma, los que jamás podrán
«estar en oposición á la uniformidad y orden.»

«V. S., á vuelta de correo, dará cuenta exacta de
«lo que haya hecho en cumplimiento de esta supe-
«rior resolución.

«Dios guarde á V. S. muchos años—Buenos Ai-
«res 27 de Junio de 1812—Al general en jefe Ma-
«nuel Belgrano.»

Si sorpresa y disgusto había causado en el Triun-
virato la nota de Belgrano en que le comunicaba
la fiesta patriótica de Jujuy, no fue menor la sor-
presa y el dolor del ilustre patricio cuando recibió
la respuesta. Su contestación lleva el sello de su
sinceridad, que no en vano invocaba al comenzar.
Dice así: «Excmo. Señor: Debo hablar á V. E. con
«la ingenuidad propia de mi carácter, y decirle con
«todo respeto que me ha sido sensible la represen-
«tación que me da en su oficio de 27 del pasado, y
«el asomo que hace de poner en ejecución su auto-
«ridad contra mí, si no cumplo con lo que se man-
«da relativo á la bandera nacional, acusándome de
«haber faltado á la prevención de 3 de Marzo, por
«otro tanto que hice en el Rosario.»

«V. E. mismo sabe que, sin embargo de que ha-
«bía en el ejército de la patria cuerpos que lleva-
«ban la escarapela celeste y blanca, jamás la per-
«mití en el que se me puso á mandar, hasta que,
«viendo las consecuencias de una diversidad tan
«grande, exigí de V. E. la declaración respectiva.»

«En seguida se circuló la orden, llegó á mis ma-



«nos; la batería se iba á guarnecer, no había bandera, y juzgué que sería la blanca y celeste la que nos distinguiría, como la escarapela, y esto, con mi deseo de que estas Provincias se cuenten como una de las naciones del globo, me estimuló á ponerla.»

«Vengo á estos puntos; ignoro, como he dicho, aquella determinación, los encuentro fríos, indiferentes y tal vez enemigos; tengo la ocasión del 25 de Mayo y dispongo la bandera para acalorarlos y entusiasmarlos; ¿y habré, por esto, cometido un delito? lo sería, Exmo. Señor, si á pesar de aquella orden, yo hubiese querido hacer frente á las disposiciones de V. E.; no así estando enteramente ignorante de ella, la que se remitiría al comandante de Rosario, y la obedecería como yo lo hubiera hecho, si la hubiese recibido.»

«La bandera la he recogido y la desharé para que no haya ni memoria de ella; y se harán las banderas del regimiento número 6, sin necesidad de que aquella se note por persona alguna; pues si acaso me preguntaren por ella, responderé que se reserva para el día de una gran victoria por el ejército y como ésta está tan lejos, todos los habrán olvidado y se contentarán con la que se les presente.»

«En esta parte V. E. tendrá su sistema; pero diré también, con verdad, que hasta los indios sufren por el Rey Fernando VII, y les hacen padecer con los mismos aparatos que nosotros proclamamos la libertad, ni gustan oír nombre de rey, ni se complacen con las mismas insignias con que los tiranizan »



«Puede V. E. hacer de mí lo que quiera, en el firme supuesto de que, hallándose mi conciencia tranquila y no conduciéndome á esa, ni otras demostraciones de mis deseos por la felicidad y glorias de la patria, otro interés que el de esta misma, recibiré con resignación cualquier padecimiento; pues no será el primero que he tenido por proceder con honradez y entusiasmo patriótico.»

«Mi corazón está lleno de sensibilidad, y quiera V. E. no extrañar mis expresiones, cuando veo mi inocencia y mi patriotismo apercibido en el supuesto de haber querido afrontar sus superiores órdenes, cuando no se hallará una sola de que se me pueda acusar, ni en el antiguo sistema de gobierno, y mucho menos en el que estamos y que á V. E. no se le oculta cuanta especie de sacrificios he hecho por él. Dios guarde á V. E. muchos años—Jujuy, Julio 18 de 1812—*Manuel Belgrano.*»

VI—El horizonte se aclara después de la batalla de Tucumán, y cuando el segundo Triunvirato convoca la asamblea para el año 13 no disimula el propósito trascendente de la independencia nacional. En los considerandos del decreto del 24 de Octubre de 1812 decía: «Después de haber afianzado el primer paso á la libertad con un esfuerzo y una resistencia tan general como sublime; después de sostener por espacio de tres años una lucha de ferocidad y de barbarie peninsular por una parte y de virtud y constancia americana de otra; cuando la España no puede justificar su conducta en constituirse ante el tribunal de las naciones imparciales, sin confesar, á pesar suyo, la justicia y santidad de nuestra causa;



«cuando el eterno cautiverio del Sr. D. Fernando
«VII ha hecho desaparecer sus últimos derechos
«con los postreros deberes y esperanzas las más in-
«genuas; cuando el estado de nulidad é incertidum-
«bre política no nos ha ofrecido y prepara sino ter-
«ribles contrastes que pongan á una difícil prueba
«la moderación, la firmeza y el valor; cuando una
«serie desgraciadamente necesaria de movimientos
«nos ha precisado á flotar de un gobierno en otro
«provisorio, excitando á su vez nuevas pasiones,
«odios y desconfianzas que privan á la república de
«aquella preciosa fuerza que sólo puede ser el re-
«sultado y fruto de la unión.... ¿qué otro tiempo
«puede esperarse para reunir en un punto la ma-
«gestad y fuerza nacional? Esta, sin duda, debe ser
«la memorable época en que el pueblo de las Provin-
«cias Unidas del Rto de la Plata, abriendo con dig-
«nidad el sagrado libro de sus eternos derechos,
«por medio de libres y legítimos representantes,
«vote y decrete la figura con que debe aparecer en el
«gran teatro de las naciones. Elevados sus diputados
«á la altura de su noble ministerio y elevada la pa-
«tria á su brillante destino, saldrán entónces los
«grandes medios, la energía y la fortuna. La cons-
«titución que se sancione alentará la timidez de
«unos, contendrá la ambición de otros, acabará con
«la vanidad importuna, atajará pretensiones atrevi-
«das, destruirá pasiones insensatas y dará, en fin, á
«los pueblos la carta de sus derechos y al gobier-
«no la de sus obligaciones.»

El pensamiento del Triunvirato se acentúa en el proyecto de constitución formulado por la comisión designada para ese fin, cuyo primer artículo era el



siguiente: «Las Provincias Unidas del Río de la Plata forman una república libre é independiente».

Instalóse la Asamblea, y el primer decreto que sancionó declara que reside en ella la representación y ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que su tratamiento será el de Soberano Señor. No caben dos soberanías dentro de una misma nación, y cuando la Asamblea la reclama para sí desaloja á la corona de España y aleja para siempre la soberanía de Fernando VII, que no vuelve á aparecer en los documentos oficiales del futuro. El juramento que se estableció el mismo día y que prestaron todos los diputados eliminó, por primera vez, la protesta de fidelidad al rey cautivo, proclamó la soberanía de las Provincias Unidas y obligó á no reconocer otra autoridad que la que de ella emanase.

Sucesivamente dictó resoluciones, decretos y leyes que marcaron el mismo rumbo. El 6 de Febrero ordenó que el español europeo empleado debía solicitar la ciudadanía del Estado, acreditando su decidida adhesión á la causa de la América. El 3 de Abril decidió que los escribanos públicos se hallaban comprendidos en el decreto del 6 de Febrero. El 13 de Abril dispuso la acuñación de monedas de oro y plata y determinó que, en lugar de las armas de España y del busto de sus reyes, llevasen, de un lado, el sello de la Asamblea circundado por el letrero: *Provincias del Río de la Plata*, y en el otro un sol, el sol de Mayo, que ocupara todo el centro, con la inscripción: *En unión y libertad*. El redactor de la Asamblea, explicando la ley y peso de la antigua moneda, agrega: «La única alteración que han he-



«cho en nuestra moneda es la del sello, sustituyendo
«bajo la misma ley, peso y valor, el augusto emble-
«ma de la libertad á la execrable imagen de los des-
«potas antiguos. De aquí es que su crédito debe ser
«el mismo, á pesar de la variación accidental del
«sello, variación que ha sido reclamada por la poli-
«tica y por la necesidad; pues ya era ofender los
«ojos del pueblo el permitir que por más tiempo se
«le presentara esculpido en énfasis sobre la moneda
«el ominoso busto de la usurpación personificada; ya
«era tiempo de que se elevasen por todas partes, so-
«bre las cenizas de esos ídolos de sangre, monumen-
«tos expresivos de la voluntad del pueblo; y ya era,
«en fin, tiempo de que la misma codicia europea tras-
«mitiera á espensas suyas, por toda la circunferencia
«del globo, un símbolo que publica los grandes debe-
«res que impone el juramento americano».

El 27 de Abril mandó que las armas del rey que se hallaban fijadas en lugares públicos ó que usaban algunas corporaciones fueron sustituidas por las armas de la Asamblea; pero todavía no decidió que se eliminaran de los estandartes y banderas.

Et 11 de Mayo decretó que en adelante se cantara, como himno nacional, la marcha patriótica que anunciaba al mundo el nacimiento de las *Provincias Unidas del Sud*, y cuya primera estrofa termina con las palabras soberbias inspiradas por el sentimiento guerrero y el orgullo del vencedor. El 21 de Mayo decretó la abolición de todos los títulos de condes, marqueses y barones en el territorio de las Provincias Unidas y mandó inutilizar en la plaza mayor, por mano del verdugo, los instrumentos de tortura que correspondían á las antiguas prácticas judiciales.



El 4 de Junio declaró que el Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata era independiente de toda autoridad eclesiástica que existiera fuera de su territorio; el 16 del mismo mes dispuso que las comunidades religiosas quedaban igualmente en absoluta independencia de todo prelado que no existiera dentro de su jurisdicción, y prohibió que el nuncio apostólico residente en España ejerciera acto alguno de jurisdicción en el Río de la Plata.

VII—Con estos antecedentes reunióse el congreso de Tucumán en 1816 y en circunstancias en que los españoles, vencedores en Rancagua y Sipe-Sipe, amenazaban á las Provincias por el oeste y por el norte, cuando se anunciaba ya la formidable expedición que se preparaba en la península; cuando el litoral estaba sublevado por el caudillaje anárquico que seguía las inspiraciones de Artigas; cuando la tendencia localista encontraba defensores en el gobierno mismo de Buenos Aires; cuando la disgregación política hubiera hecho pensar que ya no había nación, si la raza, la lengua, las costumbres, la religión, los sufrimientos del pasado, el himno de la patria y la bandera azul celeste, no hubieran recordado la unidad nacional, fue precisamente cuando el congreso, colocándose á la mayor altura á que haya llegado jamás una asamblea argentida, proclamó el 9 de Julio á la faz del mundo la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era la única ley que podía sancionar con la seguridad plena de que sería obedecida en todo el territorio. (1)

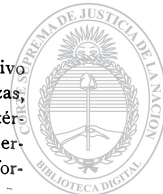
(1) He aquí el "Acta de Independencia de las Provincias Unidas en Sud América":



El 25 de Julio sancionó el decreto siguiente: «Elas Provincias Unidas en Sud América al rango de una nación, después de la declaratoria solemne de su independencia, será su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca de que se ha usa-

“En la benemérita y muy digna Ciudad de San Miguel de Tucumán, á nueve días del mes de Julio de mil ochocientos diez y seis, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España; los Representantes, sin embargo, consagraron á tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones é intereses que demanda la sanción de la suerte suya, pueblos representados y posteridad; á su término fueron preguntados:—¿Si querían que las Provincias de la Unión fuesen una Nación libre é independiente de los reyes de España y su metrópoli? Aclamaron primero llenos del santo ardor de la justicia, y uno á uno reiteraron consecutivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del País, fijando en su virtud la determinación siguiente:—

“Nos los Representantes de las Provincias Unidas en Sud América reunidos en Congreso General, invocando el Eterno que preside el Universo, en el nombre y por la autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, á las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente á la faz de la tierra, que es voluntad unánime é indiscutible de estas Provincias, romper los violentos vínculos que las ligaban á los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados é investirse del alto carácter de una Nación libre é independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, é impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una



«do hasta el presente y se usará en lo sucesivo
«exclusivamente en los ejércitos, buques y fortalezas,
«en clase de bandera menor, interin decrete al tér-
«mino de las presentes discusiones, la forma de gobier-
«no más conveniente al territorio y se fijen confor-

“de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantías de sus vidas, haberes y fama—Comuníquese á quienes corresponda para su publicación, y en obsequio del respeto que se debe á las naciones detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.—Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y referendada por nuestros Diputados Secretarios.—Francisco Narciso de Laprida, *Diputado por San Juan*, Prsidente—Mariano Boedo, Vice-Presidente, *Diputado por Salta*—Doctor Antonio Saenz, *Diputado por Buenos Aires*—Fray Cayetano José Rodríguez, *Diputado por Buenos Aires*—Doctor Pedro Medrano, *Diputado por Buenos Aires*—Doctor Manuel Antonio Acevedo, *Diputado por Catamarca*—Doctor José Ignacio de Gorriti, *Diputado por Salta*—Doctor José Andrés Pacheco de Melo, *Diputado por Chichas*—Doctor Teodoro Sánchez de Bustamante, *Diputado por la ciudad de Jujuy y su territorio*—Eduardo Pérez Bulnes, *Diputado por Córdoba*—Tomás Godoy Cruz, *Diputado por Mendoza*—Doctor Pedro Miguel Araoz, *Diputado por la Capital del Tucumán*—Doctor Esteban Agustín Gazcón, *Diputado por la Provincia de Buenos Aires*—Pedro Francisco de Uriarte, *Diputado por Santiago del Estero*—Pedro Lérú Gayo, *Diputado por Santiago del Estero*—Pedro Ignacio Rivera, *Diputado de Mixque*—Doctor Mariano Sanchez de Soria, *Diputado por Charcas*—Doctor José Severo Malabia, *Diputado por Charcas*—Doctor Pedro Ignacio de Castro Barros, *Diputado por La Rioja*—Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Carrera, *Diputado por Córdoba*—Dr. José Colombres, *Diputado por Catamarca*—Doctor Ignacio Thames, *Diputado por Tucumán*—Fray Justo de Santa María de Oro, *Diputado por San Juan*—José Antonio Cabre-



«me á ella los geroglíficos de la bandera nacional «mayor.» Por fin, la bandera de Belgrano, levantada en la batería *Independencia* en 1812, alcanzaba el rango que le correspondía como bandera nacional. Falta ahora saber cuales serán los emblemas de la bandera mayor: las resoluciones futuras del congreso decidirán si han de representar los atributos reales, ó reproducir el sol de Mayo decretado para su escudo por la asamblea de 1813.

e.

“*ra Diputado por Córdoba—Doctor Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza—Tomás Manuel de Anchorena, Diputado de Buenos Aires—José Mariano Serrano, Diputado por Charcas. Secretarios—Juan José Passo, Diputado por Buenos Aires, Secretario.*”—



CAPITULO IX



SUMARIO—I. (Congreso de Tucumán) Discusión de la forma de gobierno—El sistema monárquico y la legitimidad—Exposición del general Belgrano ante el Congreso.—II. La monarquía Incaica—Debates—Adhesión de San Martín y de Güemes—Fracaso del proyecto.—III. Traslación del Congreso á Buenos Aires—Motivos—El manifiesto á los pueblos.—IV. Reglamento Provisorio de 1817—Paralelo con el Estatuto de la Junta de Observación (1815)—Departamento Legislativo y Ejecutivo—Elección de empleos Consejiles y de Diputados.—V. Trabajos legislativos de 1818—El Congreso niega á los Cabildos la facultad para crear impuestos ó contraer empréstitos—El Gobernador de Córdoba suspende las garantías individuales y el Congreso aprueba.—VI. Constitución unitaria de 1819—Sistema bi-cammarista—Base para la representación en la Cámara de Diputados—Carácter de la representación en la misma Cámara.—VII. Exposición sobre todo el sistema de la Constitución (á propósito del artículo 5)—Elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos—El caso de lord Wolmer—Facultades privativas de la Cámara de Diputados.—VIII. El Senado: su composición y su elección—Sus facultades exclusivas.—IX. Atribuciones comunes á ambas cámaras—Atribuciones del Congreso.—X. Formación y sanción de las leyes.—XI. El Poder Ejecutivo—Calidades, modos de elección y duración del Director—Atribuciones.—XII. Poder Judicial—Derechos de la Nación—Derechos particulares—Reforma de la Constitución—Apéndice.

I.—Al mismo tiempo que preparaba el Congreso la declaración de la independencia, se ocupaba de la forma de gobierno que convenía adoptar para asegurar la tranquilidad interna y presentarse ante el



mundo como nación constituida. La idea republicana, que el ejemplo de los Estados Unidos y las armas de la revolución francesa habían propagado, sufría en esos momentos un verdadero eclipse. Los excesos del terror y la inevitable reacción produjeron la laxisitud y descomposición del directorio, en pos del cual vino el consulado y en seguida el imperio de un hombre de guerra que tenía la voracidad de los grandes conquistadores. Durante quince años toda la Europa había sido un campo de batalla; se había combatido en Bélgica, en Holanda, en Italia, sobre el Danubio y sobre el Rhin, en las planicies de la Rusia y en las montañas de Andalucía, sobre todo el continente y sobre los mares que lo circundan. Por fin, los soberanos coaligados cayeron sobre el conquistador y lo vencieron, prometiendo la quietud y los beneficios de la paz bajo la autoridad paternal de las dinastías regeneradas por la dura lección de tan grandes trastornos á los pueblos fatigados, empobrecidos, casi aniquilados. El Congreso de Viena, gestionado por Talleyrand, proclamó el principio de la legitimidad como fuente de todo derecho, y en los primeros tiempos no se habló de otra cosa que de restituir los reinos á sus antiguos soberanos, sin perjuicio de que una vez declarada la doctrina, los más fuertes se apoderaran de lo que les convenía, *quo nominor lco.* (1)

(1) Talleyrand, en quien personifica Lytton Bulwer al hombre político por excelencia, ha sido definitivamente juzgado por la posteridad como el más diestro é ingenioso diplomático de los tiempos modernos, á la vez que como un político sin escrúpulos de ninguna naturaleza, regida en la convención, imperialista más tarde, legitimista al siguiente día. El se vanaglorió siempre de haber inventado «la legitimidad» en



El general Belgrano había asistido á la evolución de la opinión pública en Europa, é, ingénuo como era, creyó que no había mejor camino para ganar la voluntad de la santa alianza y asegurar la independencia, que constituir el país con la forma monárquica sobre la base de la legitimidad. Y así decía en *El Censor*, en un artículo que publicó bajo iniciales: «¿Habrá gobierno en el mundo que se nos «oponga cuando fijemos el monarquismo constitucional y pongamos en el trono á un sucesor legítimo «de los Incas? Nuestra justicia hallará apoyo, si es «que no quieren caer en la contradicción como Fernando, y se deciden por la legitimidad para la Europa y la ilegitimidad para la América.» El 6 de Julio, tres días antes de declarada la Independencia, el Congreso le oyó en sesión secreta sobre la delicada cuestión de la forma de gobierno. En esa conferencia el general Belgrano expuso: «primero: que aunque «la revolución de América en sus principios, con la «marcha majestuosa con que empezó, había merecido «un alto concepto entre los poderes de Europa, su declinación por el desorden y anarquía continuada por «tan dilatado tiempo había servido de obstáculo á la «protección que sin ella se habría logrado de dichos «poderes, diciéndonos en el día estar reducidos á nuestras propias fuerzas. Segundo: que había acaecido «una mutación completa de ideas en Europa, en lo

1814, y en sus memorias cuenta que una vez que otro ministro le propuso reparto de territorios, cerró el debate con estas palabras: las otras naciones pueden pactar en el terreno de las conveniencias; pero yo represento principios y los principios no transigen. Hermosas palabras que recordaríamos con respecto si hubieran sido pronunciadas por labios más puros.



«respectivo á la forma de gobierno; que como el espíritu general de las naciones en años anteriores era republicano todo, en el día se trataba de monarquizarlo todo; que la nación inglesa, con el grandor y majestad á que se había elevado, no por sus armas y riquezas, sino por una constitución de monarquía temperada, había estimulado las demás á seguir su ejemplo; que la Francia la había adoptado; que el rey de Prusia por sí mismo y estando en el goce de un poder despótico, había hecho una revolución en su reinado y sujetándose á bases constitucionales iguales á las de la nación inglesa, y que esto mismo habían practicado otras naciones, Tercero: que conforme á estos principios, en su concepto, la forma de gobierno más conveniente á estas Provincias sería la de una monarquía temperada, llamando la dinastía de los Incas, por la justicia que envuelve la restitución de esta casa, tan inicuaamente despojada del trono por una sangrienta revolución que se evitaría en lo sucesivo con esta declaración y el entusiasmo general de que se poseerían los habitantes del interior, con sólo la noticia de un paso para ellos tan lisonjero.»

Durante la guerra de la independendia todos los americanos del sud se consideraban miembros de una misma familia, nacidos del mismo tronco, desde Nueva Granada hasta el Río de la Plata, y en su odio á los peninsulares reivindicaban, como titulo de honor, sus conexiones con la raza autóctona. De ahí Belgrano derivó su proyecto dinástico, sin maliciar que tras de su quimérica monarquía asomaba la cabeza de un indio viejo que provocaba al ridículo.

Pero, si extraño parece que semejante idea cupiera



en la cabeza de un hombre sensato, como lo era el general Belgrano, á pesar de su candor, es todavía más sorprendente que su plan hiciera camino en el ánimo del Congreso y que hasta San Martín lo aceptara. San Martín le escribía á Rondeau «... ya digo «á Laprida lo admirable que me parece el plan de «un Inca á la cabeza; las ventajas son geométricas; «pero por la patria, no metan una regencia de varias «personas; en el momento que pase de una, todo se «paraliza y nos lleva el diablo.» El señor general Mitre cree que San Martín aprobaba el plan irónicamente; pero si tal es el caso, la ironía está demasiado velada para percibirla á primera vista.

II.—El día 12 de Julio el diputado Acevedo hizo moción para que el Congreso se ocupara de la forma de gobierno y se anticipó á declarar que, por su parte, era partidario de la monarquía incásica. Tres días después se hizo moción de preferencia para que el Congreso tratara el asunto, y fue entonces cuando se levantó Fray Justo Santa María de Oro y dijo, «que para «proceder á declarar la forma de gobierno era preciso «consultar previamente á los pueblos... y que en «caso de procederse sin aquel requisito á adoptar la «forma Monárquica Constitucional á que veía inclinados «los votos de los representantes, se le permitiera retirarse del Congreso, declarando ante quién debía «verificar la renuncia de su empleado.» (1).

En las sesiones del 19, 20 y 31 de Julio y en las de 5 y 6 de Agosto continuó el debate. El diputado Serra-

(1) El Congreso no tenía taquígrafos y esa es la única versión que se ha conservado en el Redactor de la Asamblea.



no declaró que, habiendo analizado las ventajas e inconvenientes del gobierno federal que en un principio había deseado, «después de una seria reflexión sobre «las circunstancias del país, la necesidad del orden y la unión, la rápida ejecución de las providencias y «otras consideraciones, creía conveniente la monarquía «temperada».

Los diputados Acevedo y Pacheco apoyaron la indicación, ampliándola en el sentido de que se estableciera la dinastía de los Incas. «Se trató de la materia con «ardor, dice el Redactor, y quedó en suspenso para «continuarla en las «ulteriores sesiones. Ella es de las «mayores que puedan presentarse á discusión y de que «depende radicalmente la «felicidad del país. No debe «extrañarse la atención circunspecta en un punto de tanta «gravedad».

El 20 de Julio el Presidente dió cuenta al Congreso de que Fray Justo Santa María de Oro no asistiría á las sesiones, mientras se discutiera la forma de gobierno, á menos que la Asamblea se lo ordenara y el Presidente se lo comunicara por escrito. Así se decidió.

El Dr. Castro Barros, en la sesión del 31, «pronunció un prolijo razonamiento en favor del monarquismo constitucional por haber sido el que dió el «Señor á su antiguo pueblo, el «más favorable «á la conservación y progreso de la religión católica y el «menos sujeto á los males políticos que «afectan ordinariamente á los otros; sostuvo las ventajas del hereditario sobre el electivo y las razones «políticas que habían para llamar á los Incas al trono «de sus mayores despojados de él por la usurpación «de los reyes de España...»

Otros cuatro diputados le secundaron, y el último



pidió que se diera el punto por suficientemente discutido y que se votara; pero el presidente observó que hasta ese instante únicamente podía considerarse discutido si la forma de gobierno había de ser ó nó monárquica, pero que no lo estaban todavía las otras dos cuestiones correlativas sobre la dinastía incásica y sobre asiento del nuevo gobierno en el Cuzco.

El debate continuó el 5 de Agosto, iniciándolo el presidente del Congreso, que bajó de su asiento para pronunciarse también en favor de la monarquía incásica. En análogo sentido habló el vice-presidente. Adhirieron á la forma monárquica, pero objetaron la dinastía de los Incas, los diputados Araoz y Serrano, á los que replicaron Soria y Malabía.

El 6 de Agosto fundó su voto el diputado Anchorena en un discurso político en que expuso los inconvenientes del gobierno monárquico «haciendo observar las diferencias que caracterizan los llanos y altos del territorio, y el genio, hábitos y costumbres de unos y otros habitantes, decidiéndose por la mayor resistencia de los llanos á la forma monárquica de gobierno, y por la imposibilidad moral de conformar á unos y otros bajo la misma forma de gobierno que se adoptase para los de la montañas, concluyendo con que á vista de las dificultades que estas diferencias ofrecen, el único medio capaz de conciliarlas era el de la confederación de provincias.» Fue éste el último discurso pronunciado en el Congreso sobre el trascendental asunto de la forma de gobierno; pero la monarquía incásica fue apoyada en seguida por el general Belgrano y por el general Güemes en las proclamas que dirigieron á las milicias bajo su mando y continuó siendo debatida en la prensa de la Capital,



donde el buen sentido público dió término á esta fantasía política.

—

III.—En la sesión del 23 de Setiembre el Congreso tomó en consideración una comunicación del general Güemes y otra del coronel Campero sobre marcha de los ejércitos españoles, y el presidente invitó á la asamblea «á tratar de poner en seguridad su existencia como la única capaz de salvar al presente «las provincias en medio de los peligros que la amenazan, é indicando como necesaria al efecto la traslación del Congreso, expuso la imposibilidad de verificaria con orden y sin exponerlo á su disolución, «en caso que se retardase hasta tener noticias de la continuación del enemigo en sus marchas».

Dos días más tarde el Congreso resolvió trasladarse á Buenos Aires, encargando al diputado Iriarte la redacción de un manifiesto que fue sancionado el 2 de Octubre, del cual tomamos los párrafos más significativos, concebidos así:

«Ya está sancionada la traslación provisional del «Superior Congreso á la ciudad de Buenos Aires. No «ignoramos la aspiración general de las Provincias en «esta parte. Los diputados repetidamente la han signifi- «cado, apuntando que tal vez la traslación del Congreso «á Buenos Aires excitaría un sentimiento desagradable «en los ánimos, ó muy delicados ó demasiado celosos «de la inviolabilidad de sus derechos. Pero la necesidad «insta, los recursos se agotan y la preferente salvación «del país, levantando un eco descompasado, reclama «el remedio á costa de los más grandes sacrificios».

..... «La expedición portuguesa se aproxima á «Maldonado. La Banda Oriental procede por sí, é in-

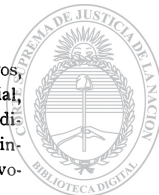


«sistiendo en su separación, se priva de las ventajas
«que podría proporcionarle la unidad con los demás
«pueblos. Santa Fé se obstina en sus pretensiones y
«sus convulsiones intestinas le hacen sentir la falta de
«una autoridad central. El Paraguay se aísla, y redu-
«cido al círculo de su territorio, se presenta como
«un simple espectador de la suerte de las provincias
«hermanas.

«Por otra parte, Buenos Aires es el pueblo de los
«recursos. Nuestra actual constitución apura con exi-
«gencia por una viva y pronta actividad en propor-
«cionarlos. La infernal conspiración del tirano entre-
«tiene uno de nuestros ejércitos en Mendoza. Es de
«necesidad auxiliarle. El valeroso que tenemos á la
«vista en el mejor orden y subordinación, clama por
«vestuario, dinero y demás artículos que necesita para
«sostenerse, equiparse y ponerse en estado de pro-
«seguir *hasta las mismas puertas del infierno* á esa
«confederación fanática de viles esclavos. El agresor
«del Perú se halla á las puertas del Jujuy.»

El Congreso se trasladó á Buenos Aires, reanudó sus trabajos el 19 de Abril de 1817 y sancionó el 3 de Diciembre el estatuto conocido con el nombre de «Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado», cuya base fue el Estatuto Provisional de 1815 con modificaciones sustanciales en los departamentos del Poder Legislativo y Ejecutivo.

IV.—En la sesión del Poder Legislativo declaró que éste residía originariamente en la Nación; que su ejercicio permanente lo fijaría la Constitución del Estado, el cual se gobernaría por el reglamento y por las leyes que, para reformarlo, interpretarlo ó adicionarlo, dic-



tara el Congreso, declarando subsistentes los códigos, cédulas y disposiciones generales del gobierno colonial, en cuanto no estuvieran en oposición directa ó indirecta con la libertad é independencia de las provincias ó con las leyes sancionadas después de la revolución de 1810.

En la sección del Poder Ejecutivo estableció que éste sería ejercido por un director del Estado nombrado por el Congreso, requiriéndose para el desempeño del cargo ciudadanía natural, residencia en el país de cinco años á lo menos, inmediatos á la elección, y treinta y cinco de edad. Eliminó las trabas que el Estatuto de 1815 había establecido para el ejercicio de la autoridad y atribuyó al Ejecutivo las facultades propias de ese departamento, acordándole iniciativa para los proyectos que considerase convenientes á la fealdad del territorio. Le confió el comando en jefe de todas las fuerzas del Estado: armada, ejércitos de línea, milicias nacionales y cívicas; le atribuyó el nombramiento de todos los empleos y cargos militares, la superintendencia general en los ramos de hacienda y la provisión de los beneficios eclesiásticos; puso bajo su cuidado los fondos del Estado, autorizándole para disponer de ellos en defensa del país, etc. Los límites que fijaba á su autoridad están enumerados en el capítulo segundo de la sección tercera, y se refieren, desde luego, á las expediciones contra alguna de las Provincias Unidas ú otras de este continente, para establecer el orden, medida que no podía adoptar sin acuerdo del Congreso, salvo los casos de urgencia. Le vedaba al Director ejercer jurisdicción civil ó criminal, compulsar, avocarse ó suspender las causas pendientes. ó sentenciadas en los tribuna-



les de justicia, y le imponía la obligación, en el caso de arresto de algún ciudadano, de someterlo á los jueces dentro del tercero día, á no ser que la causa del arresto fuera de tal naturaleza que comprometiera la seguridad del país ó el orden público, en cuyo evento podía prolongar el arresto de acuerdo con su asesor y el fiscal de la cámara. No podía imponer pechos, contribuciones, ni empréstitos sin autorización previa del Congreso, ni conceder á persona alguna del Estado privilegios exclusivos, excepto á los inventores de artes; ni conferir grados de brigadier ni de coronel mayor sin aprobación del Congreso, salvo cuando por alguna brillante acción de guerra ú otro servicio extraordinario de armas, convenga premiar sin demora el mérito de algún jefe. El Regimiento elevó la categoría de los secretarios del Estado al rango de verdaderos ministros, sometiéndolos al juicio político ante una comisión nombrada por el Congreso. Se atribuía al Superior Director del Estado la elección de los gobernadores, tenientes gobernadores y sub-delegados de partidos, de la lista de personas elegibles que debían formar los cabildos, volviendo así á la tradición unitaria.

También dispuso que las elecciones de empleos consejos se hicieran popularmente en las ciudades y villas donde hubiera cabildos establecidos, y fijó las bases de la elección. Respecto de la provisión de empleos dispuso que los que debían tener la calidad de letrados, excepto los asesores de cabildo y de intendencia, fueran nombrados por el director del Estado á propuestas en terna de las cámaras de apelaciones de cada distrito; que las propuestas militares se hicieran estrictamente por el orden y escala que pre-



viene la ordenanza, y los demás de la administración pública á propuesta de los jefes respectivos por escala de antigüedad, en igualdad de aptitud y buenos servicios.

Para la elección de diputados mantenía el régimen del Estatuto de 1815, lo mismo que para la organización del ejército y de las milicias.

—

V.—El 19 de Enero de 1817 el general San Martín salió de Mendoza para salvar los Andes, y el 12 de Febrero del mismo año libró la batalla de Chacabuco, de la cual dió cuenta al Gobierno diciéndole:

«Al ejército de los Andes le queda siempre la gloria «de decir: en 24 días hemos hecho la campaña, «pasamos la cordillera más alta del globo, concluimos «con los tiranos y dimos libertad á Chile»; la campaña de los Andes puede compararse con la de Anibal y con el pasaje de los Alpes por Napoleón I. El ejército argentino-chileno sufrió el desastre de Cancha-Rayada el 19 de Marzo de 1818, y 5 de Abril del mismo año obtuvo la victoria decisiva de Maipú. San Martín bajó á Buenos Aires en el mes de Mayo, y el Congreso celebró sesión especial para recibirle y felicitarle por sus triunfos. La guerra de la independencia podía considerarse terminada en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de manera que, para seguir nuestros estudios políticos, no nos ocuparemos ya sino de las evoluciones internas del país.

El Reglamento para el gobierno y administración de las Provincias Unidas del Río de la Plata del año 17 fue un instrumento provisorio, y el Congreso continuó sus trabajos de legislación al mismo tiempo que preparaba la constitución definitiva. Recordaremos



entre aquellos, la ley que declaró que en adelante la bandera de guerra de la nación llevaría un sol en el centro, terminado así la cuestión que quedó pendiente en 1816, mientras se sancionaba la forma de gobierno. También merecen recordarse las disposiciones diversas que redujeron los cabildos al papel subalterno que habían tenido durante la colonia. La providencia 7ª del Reglamento del año 17 declaraba que todas las provincias de la Unión, ciudades y villas con ayuntamiento, podían, sin necesidad de licencia y con solo aviso instruido al Director, hacer todos los establecimientos que creyeran útiles para promover su industria, prosperidad, artes y ciencias, sin perjudicar los fondos del Estado. El Cabildo de Tucumán consultó al Congreso en el mes de Febrero de 1818 si podía establecer un impuesto local para atender necesidades internas, de acuerdo con aquella providencia, y el Congreso resolvió el 31 de Marzo que, según el espíritu del artículo citado, los Cabildos no tenían facultad para aumentar por sí solos sus propios, imponiendo pechos y contribuciones.

El mismo día aprobó un arbitrio propuesto por el Cabildo de San Luis para aumentar sus fondos municipales y otro del Cabildo de Córdoba.

El 2 de Octubre tomó en consideración otra representación de Córdoba en que expresaba los graves motivos que le habían impulsado á exigir del vecindario un empréstito de 1000 pesos, sin aprobación previa de las autoridades supremas, para evitar los perjuicios que ocasionaban las avenidas del Río, y decidió «aprobar la medida, con prevención de que, en lo sucesivo, no exija el Ayuntamiento empréstitos, sin previo aviso al Congreso».



En el mes de Noviembre tomó en consideración una nota del gobernador de Córdoba, en que daba cuenta de que había suspendido el decreto sobre seguridad individual, por haberse empezado á difundir especies perjudiciales á la quietud pública, procurando propagar el espíritu de anarquía, y sancionó que el referido gobernador continuase tomando las medidas necesarias para mantener el orden público, con cargo de dar cuenta; antecedente que debemos recordar cuando estudiamos si reside en los gobiernos de provincia la facultad de declarar el estado de sitio, ó si es este un poder privativo del gobierno federal.

Dedicó también su atención á las cuestiones económicas, y fundó la Caja Nacional de fondos, el Banco de Rescate y la casa de Moneda.

En el mismo período el Director supremo rehabilitó á los generales Rondeau, Martín Rodríguez y Fernando Cruz y al antiguo presidente de la Junta, don Cornelio Saavedra.

—

VI.—La constitución unitaria sancionada definitivamente el 22 de Abril de 1819 comenzó á discutirse el 31 de Julio de 1817. Analicemos sus preceptos.

La sección primera declara que la religión católica apostólica romana es la religión del Estado; que el gobierno le debe la más eficaz y poderosa protección, y los habitantes del territorio todo respeto.

La sección segunda se ocupa del Poder Legislativo y es ésta la primera constitución que establece el sistema bi-camarista en la República, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de la Inglaterra y de los Estados Unidos, cuya experiencia entonces se invoca. La comisión decía en su informe el 7 de Agosto: «al



«desempeñar el difícil trabajo de preparar el proyecto de constitución que se examina, la comisión se propuso usar de la circunspección necesaria para no sacrificar á meras teorías ó al prurito de ideas originales, aquellos principios de organización social que concibièse fundados en las sólidas lecciones de la experiencia combinada con los cálculos más profundos sobre las pasiones humanas y los medios más capaces para precaver sus efectos. No pudiendo desconocerse este mérito en las célebres constituciones que nos han precedido, la de Inglaterra y la de Estados Unidos, modelos verdaderamente dignos de imitarse en todo pueblo libre, no ha trepidado en adoptar de una y otra lo que ha creído mejor y más consistente con la diferencia de nuestras circunstancias nacionales. En ambas se ha establecido la división del Poder Legislativo, y estribando este sistema en tan buenos fundamentos, que ya pasa por un axioma en la política, no ha podido menos de preferir lo al sistema de unidad.»

La comisión robustecía esta afirmación fundada en la autoridad de tan grandes ejemplos, con vigorosos razonamientos insistiendo en que la división del cuerpo legislativo garantizaba la permanencia de la constitución, desde que hay más dificultad para que un partido obtenga mayoría en las dos cámaras á fin de introducir alteraciones constitucionales; tanto más, cuanto que, no existiendo sino una cámara, basta un momento de error ó de ilusión para que la mayoría pueda ser arrastrada por la elocuencia de un orador, ó por los artificios y destreza de un político; mientras que al pasar la proposición de una cámara á la otra se le sujeta á un doble examen, hecho con distintas



miras, por distintos ojos, bajo la influencia de diversas pasiones y hasta con el sentimiento de emulación y rivalidad que crea entre ambos cuerpos su diferente composición y el origen diverso de su elección; de tal modo que puede asegurarse que una alteración constitucional no pasará si no lleva el sello inalterable del interés general. A lo que agregaba que con la doble cámara se precaba la inestabilidad de las leyes y éstas adquieren mayor respetabilidad, porque si la cámara de diputados las rodea con el prestigio de su popularidad, el senado les presta el concurso de las clases conservadoras que representa.

La cámara de Representantes debía componerse de diputados elegidos en proporción de uno por cada 25,000 habitantes ó una fracción de 16,000, y la regla primera del apéndice agregaba que mientras la legislatura no arreglase el método por el que pudiera verificarse cómodamente la elección, se observaría el Reglamento Provisorio.

Este punto fue motivo de un extenso debate. La comisión dijo: que la cámara de Representantes no debía ser tan pequeña que presentara fácil acceso á cualquier complot ó careciese de la consideración correspondiente, ni tan numerosa que las deliberaciones se dificultasen ó fuesen tumultuarias, infiriendo al mismo tiempo á los fondos nacionales un gravamen innecesario, consideraciones que son dignas de tenerse en cuenta en todos los tiempos, y el Congreso aceptó sin dificultad que la base de la representación fuera de 25,000 habitantes ó una fracción de 16,000 calculando que sobre ella la cámara de diputados llegaría á 50 miembros, más ó menos. Pero surgió una cuestión delicada y del más alto interés, y

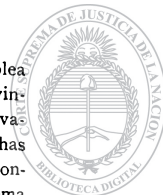


era la de saber si para los efectos de la distribución de asientos se debía tomar por punto de partida las provincias como distrito general, ó cada una de las ciudades que entraban en su jurisdicción. Los antecedentes del país eran diversos. En 1810 la designación de los diputados la habían hecho las ciudades cabeza de partido ó de departamento, de acuerdo con las resoluciones adoptadas en los días de la revolución y con la circular de la Junta Provisoria de 27 de Mayo.

Del mismo modo se eligieron los de la Asamblea disuelta el 8 de Octubre de 1812, los de la Asamblea Constituyente de 1812 y los que formaban el Congreso que en ese momento debatía la constitución. Pero el Estatuto de 1815 atribuía la representación, no á las ciudades, sino á las Provincias, que eran las que formaban el verdadero distrito electoral, porque las subdivisiones de ellas únicamente servían para elegir los electores que en la Asamblea provincial designaban los diputados al Congreso.

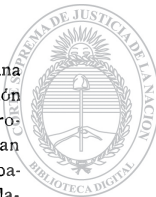
No hay para qué decir que los partidarios de la representación de las ciudades encarnaban las tendencias particularistas de cada localidad, mientras que la tendencia unitaria se manifestaba en favor del distrito provincial.

Sostenían los primeros que debía respetarse los precedentes establecidos desde 1810, excluyendo el Estatuto Provisorio que no fue aceptado por las provincias, no sólo porque esa era la tradición argentina, sino también porque con ese sistema se compensaba los inconvenientes del centralismo unitario de toda la constitución. Alegaban que las ciudades de una misma provincia tenían muchas veces intereses contradictorios y que había conveniencia en que esos inte-



reses tuvieran representación propia en la asamblea nacional, lo que no sucedería con el distrito provincial, porque la influencia de la ciudad capital prevalecería, con exclusión de las subalternas, por muchas circunstancias, y entre otras, por la dificultad de congregarse en las asambleas generales que tal sistema requería.

Los adversarios de estas ideas contestaban que los antecedentes no debían invocarse contra las ventajas de un mejor sistema, porque con semejante doctrina se impedía el progreso de las instituciones. Que las ciudades, como tales, no tenían derecho alguno para exigir representación propia, porque no eran entidades políticas, sino centros de vida social. El sistema de representación, decían, pertenece exclusivamente á los pueblos libres y no es otra cosa que una sustitución, en lugar de las reuniones en masa que hacían los pueblos libres de la antigüedad, para deliberar sobre los asuntos de utilidad común, las cuales es imposible practicar en el estado actual de nuestras sociedades; lo que antes se hacía por todos los ciudadanos personalmente, ahora se hace por representantes; de manera que la representación estriba en el derecho inherente á cada ciudadano de concurrir á la formación de las leyes bajo cuyo imperio ha de vivir: ella, pues, debe calcularse únicamente por el número de ciudadanos que encierra la nación, y así la población es la base y elemento único que debe tenerse en cuenta. La Nación establece la proporción que ha de haber entre el número de representantes y el total de ciudadanos, y este cálculo es obra de la conveniencia social. Mas las secciones que se establezcan no

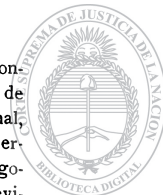


deben ser otras que las provincias tomadas cada una por entero, porque sólo así presentan una población capaz de tener por división común el número propuesto de 25,000. Si las ciudades ó villas hicieran el nombramiento de diputados separadamente, la base de la representación ya no podría ser la población y todo el sistema se desquiciaría, porque habría diputados que no representarían sino 20, 15 ó 10,000. El inconveniente de que cada ciudad no tenga representantes propios está compensado con la ventaja de que el concurso de todas ellas sea requerido para la representación de la provincia; y si los electores sacrificasen sus deberes al ascendiente de las capitales, esta no sería la consecuencia del sistema, sino de la falta de firmeza y del espíritu público, sin que fuera un mal sino, al contrario, un bien que quedaran excluidas del Congreso las pequeñas rivalidades locales por los intereses más altos de carácter general.

La discusión se prolongó desde el 11 hasta el 26 de Agosto, y concluyó por la transacción del artículo constitucional ya citado que se limita á fijar la base de la representación, y por la cláusula final que libra al Congreso la decisión sobre el sistema que se debe adoptar en lo futuro, manteniendo en el intervalo la representación por ciudades, del Reglamento del año 17.

—

VII—El artículo quinto fijó las calidades de los representantes, y entre ellas, que debían ser del *fuc-ro común*, en contraposición á los miembros del Senado, que investían dignidades eclesiásticas, civiles y militares.



Con motivo de este artículo el redactor del Congreso, correspondiente á las sesiones del 29 y 31 de Agosto, hizo la exposición del plan constitucional, en el cual se intentaba apropiar al sistema gubernativo del país las principales ventajas de los gobiernos monárquico, aristocrático y democrático evitando sus abusos, con el doble propósito de salvar las agitaciones de la simple democracia y la arbitrariedad y despotismo de los otros sistemas.

El gobierno monárquico, decía el redactor, es ventajoso por la unidad de los planes, por la celeridad de la ejecución y por el secreto indispensable para la eficacia de las resoluciones que se adoptan en momentos difíciles; el gobierno aristocrático, porque los negocios públicos son dirigidos por hombres eminentes, preparados y educados para el gobierno, y el democrático, por la elevación y seguridad que inspira á los ciudadanos su participación en las leyes que han de obedecer, en las elecciones y demás transacciones públicas en que el pueblo está interesado.

El Poder Ejecutivo unipersonal correspondía á la unidad monárquica; el senado, compuesto de las altas gerarquías de la clase militar, eclesiástica y civil, representaba bien el elemento aristocrático, y para que la Cámara de Diputados fuera fiel expresión de la tendencia democrática, el artículo que nos ocupa exigía que los representantes fueran miembros de la clase común, sin goce de fuero de ninguna naturaleza.

Un sistema concebido así debía responder, según la opinión de sus autores, á la situación y condiciones del país, á la extensión del territorio y á las



habitudes de los pueblos. El vasto territorio del Estado reclamaba de parte del gobierno rapidez de acción proporcionada á la variedad de los peligros que podían amenazarlo, y por consiguiente, un Poder Ejecutivo concentrado y fuerte. Este vasto territorio, decían los constituyentes, es tan fértil como extenso y está llamado á un comercio floreciente, al adelanto de las artes y de las ciencias y á las grandes empresas. Había en el país clases cuyas inmunidades y fueros estaban los pueblos habituados á respetar y, para no trabajar una constitución efímera, convenía interesar en el sostén de la constitución á las clases que han sido ó que deben ser de grande influjo ó de respetabilidad en el país: y para que su autoridad no se convirtiese en instrumento de opresión y sofocara la libertad política, se buscaba el contrapeso en la Cámara de Representantes, á la cual se atribuía el carácter de sencilla democracia, componiéndola de miembros de la clase común. Se objetó que la ciudadanía de los individuos que pertenecían á las clases aforadas los habilitaba para el puesto de representantes y que su exclusión era ofensiva á su derecho y á la libertad de los electores para designar, como diputados, las personas más dignas de su confianza. Pero la objeción fue contestada con el argumento de que las clases aforadas gozaban de privilegios ó rentas que gravaban la clase común y que, además, dependían del Poder Ejecutivo por sus ascensos, circunstancias que determinaban divergencia de intereses con el elemento popular y las inclinaba hacia la autoridad, haciéndolas, por lo tanto, más propias para balancear y contener la cámara popular que para fomen-

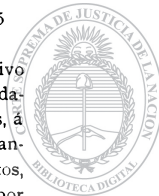


tarla como miembros de ella; se agregaba también que su exclusión estaba tan justificada como condición análoga en sus efectos á los otros requisitos que se exigían para el cargo, la edad, la renta, etc., requisitos establecidos con el concepto de que el nombramiento de los diputados interesa á la nación entera, y, por lo tanto, ésta debe dictar las reglas que la prudencia aconseje, para que no originen daño público, resultando así que no era esta una restricción, sino más bien una norma para el buen uso del derecho político.

Por una verdadera coincidencia, en estos mismos momentos se discute en el Parlamento inglés el derecho de la nobleza hereditaria para formar parte de la Cámara de los Comunes. Lord Wollmer acaba de heredar un asiento en la Cámara de los Pares, y, sin embargo, pretende continuar formando parte de la de los Comunes, de la que era miembro, y que ofrece campo más ancho á los talentos de un hombre político. Algunos miembros de la Cámara de los Comunes han reclamado contra la subsistencia del noble Lord en la Cámara popular y el Presidente le ha hecho levantar de su asiento, mientras se resuelva la cuestión promovida.

Lord Wollmer sostiene que no hay ley ni antecedente que le inhiba de formar parte de la Cámara baja, mientras no se incorpore á la de los Lores, y la cuestión está pendiente.

La duración de los diputados era de cuatro años, renovándose la Cámara por mitad cada dos años (art. 6º). A la Cámara de Diputados correspondía la iniciativa en materia de contribuciones, tasas é impuestos, dejándole al Senado la facultad de admitirlas, re-



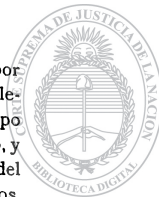
husarlas ú objetarlas (art. 7°), y el derecho exclusivo de acusar de oficio ó á instancia de cualquier ciudadano, á los miembros de los tres grandes poderes, á los ministros de Estado, enviados á las Cortes extranjeras, arzobispos ú obispos, generales de los ejércitos, gobernadores y jueces superiores de provincia, por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, infracción de la Constitución ú otras que merecieran la pena de muerte ó de infamia.

Es digno de llamar la atención que se incluyeran entre los funcionarios sujetos al juicio político á los miembros del Poder Legislativo y á los altos prelados de la Iglesia (art. 8°).

La constitución no provee la forma de elección.

VIII—El Senado debía formarse con un senador por cada provincia, tres senadores militares, cuya graduación no bajase de coronel mayor, un obispo y tres eclesiásticos, un senador por cada Universidad y el Director del Estado cesante (art. 10). La duración del cargo de senador era de doce años, pero el Senado se renovaba por terceras partes cada cuatro años; hubo quien sostuvo en el Congreso que el cargo de senador debía ser perpetuo.

Los senadores por las provincias se elejían del modo siguiente: cada municipalidad nombraba un capitular y un propietario para electores; reunidos los electores elejían tres sujetos de la clase civil, de los cuales uno al menos debía no ser de la provincia, y la terna se remitía al Senado; declarábase electos á los que tenían mayor número de sufragios computados por Provincia. Si no resultaba pluralidad por ninguno de ellos, el Senado debía elegir entre los propuestos.



Los senadores militares debían ser nombrados por el Director del Estado. Para la representación eclesiástica se designaba, por la primera vez, al Obispo de la Diócesis donde residiera el cuerpo legislativo, y en lo sucesivo, al que eligieran los otros obispos del territorio, decidiendo el Senado entre los propuestos, si ninguno tenía pluralidad de sufragios. Los otros tres senadores eclesiásticos se nombraban así: los Cabildos eclesiásticos reunidos con el prelado diocesano, curas rectores de la Catedral y rectores de los colegios eclesiásticos debían elegir tres individuos del mismo estado, de los cuales uno, al menos, debía ser de otra Diócesis, considerándose nombrados á los que obtuvieran mayor número de sufragios computados por iglesias. Si todos tenían el mismo número de votos, decidía el Senado.

Al Senado correspondía juzgar en juicio público á los acusados por la Cámara de Representantes; se requería dos terceras partes para la sentencia contra el acusado, y el único efecto de ésta era separarlo del empleo ó declararlo inhábil para obtener otro, quedando sujeto á acusación, juicio y castigo conforme á la ley.

—

IX—Eran atribuciones comunes de ambas cámaras: juzgar privativamente sobre la validez de la elección de sus miembros, nombrar su presidente, vice-presidente y oficiales señalarles tiempo de duración y prescribir el orden para los debates. Ninguna de las salas podía deliberar mientras no se hallaran reunidos, en el lugar de las sesiones dos terceras partes de sus miembros; pero un número menor podía compeler á los inasistentes en los términos y bajo los apremios



que cada sala proveyere. Las inmunidades de los senadores y representantes subsistían mientras duraban las sesiones de la legislatura, iban y volvían: «*cundo, morando et redeundo.*»

Ningún senador ó representante podía ser empleado por el Poder Ejecutivo sin consentimiento de la Cámara, y nadie podía molestarle por sus opiniones. Cada Cámara podía hacer comparecer á su sala á los ministros del Poder Ejecutivo para que le suministrara los informes necesarios.

Eran atribuciones del Congreso: dictar leyes, decretar la guerra y la paz, establecer derechos é imponer contribuciones por tiempo que no excediera de dos años; fijar la fuerza de mar y tierra y determinar el número de tropa que podía existir en el lugar de sus sesiones; reglar la forma de los juicios, crear y suprimir empleos, reglar el comercio interior y exterior, demarcar el territorio del Estado y fijar los límites de las provincias, formar planes uniformes de instrucción pública, examinar y juzgar las cuentas de la administración, acordar privilegios por tiempo determinado, reglar las monedas, pesas y medidas.

—

X—Las leyes podían tener origen en cualquiera de las Cámaras, con la excepción establecida respecto de los impuestos; todo proyecto de ley debía leerse en tres sesiones distintas, mediando tres días entre cada una de ellas; aprobado el proyecto en una Cámara pasaba á la otra, y con su aprobación, al Poder Ejecutivo, quién tenía quince días para observarlo, pudiendo insistir las Cámaras por dos tercios de votos en cada una; ningún proyecto desechado por una de las Cámaras, podía repetirse en las sesiones del año.

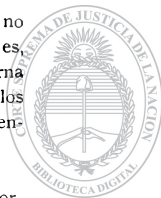


XI—El Poder Ejecutivo de la Nación estaba á cargo de un Director que debía tener ciudadanía natural, seis años de residencia inmediata y 35 de edad. No podía ser elegido ningún miembro de las Cámaras de Diputados ó Senadores; el cargo de Director duraba cinco años; la elección la verificaban las dos Cámaras reunidas, por mayoría de votos; si después de tres votaciones ninguno la obtenía, la votación se reducía á los tres que hubieran obtenido mayor número de sufragios; si por este medio no se llegaba á la mayoría, se excluía al que tuviera menor número de votos de los tres, quedando reducida la votación á los otros dos, que se votaban sucesivamente; si repetida tres veces la votación ninguno de los dos obtenía la mayoría requerida, se designaba por la suerte entre ellos.

Mientras no se posesionaba del cargo el nuevo director, subsistía en el gobierno el que lo estaba ejerciendo; pero al electo se le contaban los cinco años desde el día en que el anterior había cumplido su término. El Director del Estado podía ser reelecto una vez, con dos terceras partes de votos de cada Cámara.

El Director del Estado era el gefe supremo de los ejércitos de mar y tierra y el encargado de hacer ejecutar las leyes; abría el Congreso y lo convocaba extraordinariamente; tenía iniciativa legislativa; nombraba por sí sólo los generales de los ejércitos, los embajadores, enviados y cónsules, y podía, con el consentimiento de los dos tercios del Senado, concluir tratados con las naciones extranjeras, requiriéndose, además, dos tercios de la Cámara de Diputados cuando por el tratado se desmembrara alguna

parte del territorio; nombraba los empleados que no fueran exceptuados por la constitución ó las leyes, y los arzobispos y obispos, á propuesta en terna del Senado; tenía el derecho de gracia, y todos los objetos y ramos de hacienda estaban bajo su dependencia.



XII—La sección del poder judicial únicamente organizaba la alta Corte de justicia, compuesta de siete jueces y dos fiscales, nombrados por el Director del Estado con acuerdo del Senado. Era materia de su competencia exclusiva las causas concernientes á enviados y cónsules de las naciones extranjeras, aquellas en que una provincia fuera parte, las que se suscitasen entre provincia y provincia ó pueblos de una misma provincia, sobre límites ú otros derechos contenciosos, las que tuvieran su origen en los contratos celebrados por el gobierno con los particulares y las de los funcionarios públicos sujetos al juicio político. Debía conocer en último recurso de los asuntos provenientes de tratados, de los crímenes cometidos contra el derecho público de las naciones, y sus miembros eran inmovibles durante el tiempo de su buena conducta; la compensación de sus servicios no podía ser disminuida mientras permaneciesen en su oficio.

La sección quinta trataba de los derechos de la Nación y de los particulares. Declaraba que la Nación tenía derecho para reformar su constitución; que en ella residía originariamente la soberanía; que los magistrados investidos de la autoridad ejecutiva, legislativa y judicial eran apoderados de la Nación y responsables ante ella; que ninguna autoridad del país era



superior á la ley, y que la Nación se reservaba la facultad de nombrar sus representantes y la de ejercer el poder censorio por medio de la prensa

Con relación á los particulares repetía, ampliándolas, todas las declaraciones sobre garantías individuales que habían figurado en los estatutos anteriores.

En la sección sexta se determinaba el procedimiento para reformar la constitución cuando fuere necesario; la necesidad de la reforma debía ser declarada por dos tercios de votos de cada Cámara, el Poder Ejecutivo podía vetarla, y el Congreso insistir por tres cuartas partes de cada una de las Salas. El mismo Congreso era el encargado de efectuar la reforma con idénticos procedimientos.

En el capítulo final se mandaba jurar la constitución en todo el territorio del Estado (art. 136).

Como anexo de la Constitución se sancionó un apéndice de disposiciones transitorias para su inmediata ejecución, del cual sólo merece recordarse la regla primera, en virtud de la cual se mantenía la elección de los diputados por las ciudades, mientras el Congreso no fijara otra base á la representación; la segunda, que determinaba cómo habían de elegirse los electores de senador cuando en una provincia hubiera menos de tres cabildos, y la cuarta, que señalaba un procedimiento especial para que pudieran promover reformas de la constitución las provincias que en ese momento no estaban representadas en el Congreso.

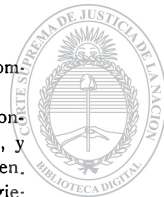
CAPÍTULO X



SUMARIO —I. Renuncia del Director Pueyrredón—Nombramiento de Rondeau—Negociaciones en Europa—Proyecto del ministerio de Francia en favor de la monarquía del príncipe de Luca—Discusión en el Congreso—Bases proyectadas para la organización de dicha monarquía—II. Las provincias del litoral contra Buenos Aires—Expatriación de Pueyrredón—Derrota de Rondeau—III. Preparativos de defensa de Buenos Aires—El director sustituto don Juan Pedro Aguirre—Bando del 3 de Febrero—Nota de Artigas al Congreso—Discusión del Congreso—Renuncia de Rondeau—El Cabildo asume el mando—Disolución nacional—IV. Bando del 12 de Febrero—Cabildo abierto del 16 de Febrero—Junta electoral y representativa—Nombramiento de Sarratea—Armisticio celebrado por el general Soler con Ramírez y López—Tratado del Pilar: sus estipulaciones—V. Después del tratado del Pilar; Sarratea, Balcarce, Soler, Alvear y Dorrego en el gobierno de Buenos Aires—El gobierno del general don Martín Rodríguez—Revolución del 1º de Octubre—Rosas y las campañas—Bustos interviene en favor de Buenos Aires—Negociaciones—Exigencias de Santa Fé—Exigencias de Buenos Aires—Entrevista del Gobernador de Santa Fé y del Gobernador de Buenos Aires con asistencia de Rosas—VI. Tratado de 24 de Noviembre de 1820: sus cláusulas—1921—El Congreso en Córdoba—Instrucciones á los diputados de Buenos Aires—Tratados entre Tucumán y Santiago del Estero—Disolución del Congreso de Córdoba.

I—La Constitución de 1819 fue jurada en la Capital de la República el 25 de Mayo y pocos días después en las demás provincias argentinas.

El 9 de junio presentó su renuncia el Director de



las Provincias Unidas, General Pueyrredón, y fue nombrado en su reemplazo el General Rondeau.

Debía procederse á la organización del nuevo Congreso con arreglo á las bases de la Constitución, y Buenos Aires, Cuyo, Córdoba, Tucumán y Salta enviaron al Congreso las ternas de senadores y eligieron sus diputados. Las provincias del Alto Perú no pudieron hacer otro tanto, porque estaban en poder del enemigo, y tampoco lo hicieron la Banda Oriental, Santa Fé, Entre Ríos y Corrientes, porque ya habían caído bajo la influencia de los anarquistas del litoral y resistían el gobierno unitario creado por la constitución.

En la sesión del 27 de Octubre se leyó una nota del Supremo Director del Estado, que llevaba la calidad de reservadísima, incluyendo una comunicación dirigida desde París por el enviado extraordinario cerca de los gobiernos europeos, D. José Valentín Gómez, datada el 18 de Junio del mismo año.

El doctor Gómez daba cuenta al Director General de una conferencia que había celebrado con el ministro de negocios extranjeros del gobierno de Francia, en la que éste le había manifestado que el ministerio, ocupado de los verdaderos intereses de las Provincias Unidas, pensaba que su destino estaba ligado á la forma de gobierno que adoptasen, y que, en su concepto, no debía ser otra que la de una monarquía constitucional, fijándola en un príncipe europeo, cuyo establecimiento facilitase el reconocimiento de la independencia nacional, agregando que el gobierno francés se había fijado en el duque de Luca, antiguo heredero del reino de Etruria, entroncado por la línea materna con la dinastía de los Bor-



bones, porque ese candidato contaría con la adhesión de los emperadores de Austria y Rusia, y con el apoyo de la Francia; el Rey de España no miraría con desagrado un sobrino suyo en el trono de las Provincias Unidas, y la Inglaterra no tendría motivos justos para resistirlo.

El enviado argentino decía que al escuchar la indicación de un príncipe sin respetabilidad, sin poder y sin fuerza para presidir los destinos del país, había quedado sorprendido, pero que había procurado eludir todo compromiso sin lastimar la susceptibilidad del ministro francés, y que, con ese propósito, le contestó que no estaba autorizado para aceptar la indicación, pero que estaba persuadido que el gobierno de las Provincias Unidas no aceptaría una solución que no tuviera por base la terminación de la guerra con España, el reconocimiento de la integridad del territorio del antiguo virreynato, incluso la Banda Oriental, y la prestación de los auxilios necesarios para mantener el nuevo gobierno que se estableciera.

El ministro francés le contestó que sería de cuenta de su gobierno recabar del Rey de España la terminación de la guerra y el reconocimiento de las Provincias Unidas; que el príncipe de Luca podía contraer matrimonio con alguna de las princesas del Brasil, bajo la expresa condición de que el Imperio evacuara la Banda Oriental, y que la Francia contribuiría con auxilios de toda especie para establecer sobre bases sólidas la nueva dinastía; aceptó, además, que el enviado diera cuenta á su gobierno de estas proposiciones. El doctor Gómez adelantaba algunas observaciones sobre ellas, y recordaba que ya había informado al gobierno que una de las bases de la po-



lítica de la Santa Alianza era disminuir los gobiernos republicanos, en cuya virtud habían desaparecido los de Holanda, Venecia y Génova, y que, en su concepto, á ese propósito respondía la proposición que transmitía á su gobierno.

La consideración de este grave asunto fue postergada en el Congreso hasta la sesión del 3 de Noviembre. Algunos diputados objetaron la incompatibilidad que envolvía la propuesta con la forma de gobierno adoptada en la Constitución que se acababa de sancionar, y la falta de facultad en el Congreso para variarla con otros procedimientos que los que ella misma establecía. Mas esta objeción fué contestada observando que no se trataba de aceptar ni ratificar un tratado definitivo que alterase la Constitución sancionada, sino de dar curso á un proyecto de negociación que interesaba al país y á la política del momento, por las circunstancias extraordinarias que la rodeaban, para sacar de aquella propuesta el mejor partido posible en beneficio de la independencia, ya fuera interesando á la Corte de Francia para que influyera con el Gabinete de Madrid á fin de que suspendiera la expedición destinada á subyugar las provincias, ya para inducir al ministro de Francia á que, por ese motivo, empezara á tratar con el Gobierno Argentino y entrara en relaciones diplomáticas con las repúblicas nacientes, á las que, por todo favor, se las consideraba apenas como existentes de hecho, ya fuera para usar del arbitrio de hacer entretener á la Gran Bretaña la propuesta de la Francia, á fin de inducirla al reconocimiento de la independencia, y por último, aprovechando el tiempo para preparar la defensa, adquirir crédito en el exterior,



y poner al país en un pie de respetabilidad que le proporcionara ventajas en ese mismo ó en otro tratado, que al fin vendría á quedar sujeto á la aprobación del Senado, con dos tercios de votos, según lo prescrito en la nueva Constitución; Constitución que no podría ser variada en ninguno de sus artículos, y mucho menos en los que constituían la forma esencial del gobierno, sino con el consentimiento de las dos Cámaras.

Con estas y otras observaciones dirigidas á consultar el bien del Estado, sostener la Constitución y dejar ilesas las facultades del próximo Congreso para que obrase en este grave negocio del modo más conveniente cuando llegara la oportunidad de decidirlo definitivamente, se sujetó á votación la proposición siguiente: *si se acepta ó no condicionalmente el proyecto de que se trata*; proposición que fue aceptada, salvando su voto los diputados Sudañez y Villegas.

Se procedió en seguida á nombrar una comisión para que proyectara las condiciones bajo las cuales se había de seguir la negociación.

La comisión se expidió en la sesión del 12 de Octubre aconsejando las nueve bases que el Congreso sancionó, á saber:

1° Que el gobierno francés se encargase de obtener el asentimiento de las cinco grandes potencias europeas, especialmente el de Inglaterra y el de España;

2° Que después de obtenido ese consentimiento, se encargara de arreglar la unión del príncipe de Luca con una princesa del Brasil, bajo la condición de que Su Majestad Fidelísima renunciara á



toda pretensión sobre el territorio que había pertenecido á la España, y á las indemnizaciones que pudiera pretender con motivo de la guerra de la Banda Oriental;

3° Que la Francia prestara al príncipe de Luca el auxilio necesario para establecerse, debiendo la nueva monarquía comprender, cuando menos, el territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata, incluso la Banda Oriental;

4° Que las Provincias Unidas conservaran la Constitución que acababan de jurar, modificada solamente en los artículos indispensables para adaptarla al gobierno monárquico hereditario;

5° Que el proyecto se llevaría á efecto, aún cuando la España se opusiera, una vez obtenido el consentimiento de las grandes potencias europeas;

6° Que á ese fin la Francia aceleraría la partida del Duque de Luca con las fuerzas necesarias para semejante empresa y para que pudiera rechazar las expediciones españolas, facilitando tropas, armas, municiones de guerra y tres millones de pesos fuertes, que le serían devueltos después de terminada la guerra y de restablecida la tranquilidad del país;

7° Que se debía considerar esta empresa desde el punto de vista de que la Inglaterra se opondría á ella y se esforzaría por frustrarla;

9° Que á ese fin el enviado argentino exigiría el tiempo necesario para que pudiera terminarse satisfactoriamente, manejándose con la circunspección, reserva y precaución consiguientes á una posición delicada, tanto para asegurar el buen éxito del proyecto, cuanto para prevenir las consecuencias funes-



tas que sobrevendrían y las interpretaciones malignas que podrían darle los enemigos del gobierno si se llegaba á descubrir antes de tiempo.

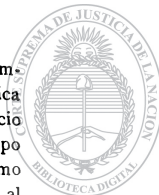
Este proyecto trascendió fuera del Congreso, á pesar de la reserva decretada; contribuyó á aumentar el desprestigio en que ya caía el gobierno directorial, y no tuvo consecuencias ulteriores.

—

· II—Santa Fé se había alzado en guerra contra el gobierno general el mes de Octubre contando con la cooperación de Entre Ríos, Corrientes y de la Banda Oriental, y el Director Rondeau se vió obligado á salir inmediatamente á campaña y á llamar en auxilio de su autoridad el ejército del Norte y el de los Andes.

San Martín desoyó el reclamo para realizar la empresa que proyectaba sobre Lima, y el ejército del Norte se sublevó en Arequito el 9 de Enero de 1820, bajo la dirección de Bustos y del comandante don José María Paz, iniciándose así el año tormentoso de la anarquía política más extraordinaria que hayan conocido las provincias argentinas.

El 31 de Enero el Congreso encomendó el gobierno provisorio de la ciudad y provincia de Buenos Aires al alcalde de primer voto don Juan Pedro Aguirre, mientras durase la ausencia del general Rondeau, y ese mismo día el ex-director Pueyrredón pidió permiso para expatriarse, en bien de la república. «Los altos destinos que he ocupado,» le decía al Congreso, «han dejado sobre mí rencores y «venganzas, y las consideraciones públicas que se me «tributan infunden sobresalto y recelo de un porvenir desgraciado á los que me odian ó me temen...



«Está visto que mi presencia irrita y está visto tam-
 «bién que mi separación es necesaria á la política
 «interior del Estado; débame el país este sacrificio
 «más. Yo he resuelto, pues, dejarlo por el tiempo
 «que sea necesario á la quietud pública. Pero como
 «no me aleja el crimen sino el exceso de amor al
 «orden, debo esperar que V. E. autorice mi salida de
 «un modo decoroso»
 «No trepide V. E. en tomar en esta medida, pues yo
 «mismo le presento la ocasión para salvar el conflicto
 «en que advierto el recto ánimo de V. E., ni tema
 «V. E. la crítica exterior, pues todos los imperios ha-
 «cen sacrificios á su conveniencia.....»

El Congreso resolvió acceder á la petición, de-
 clarando «que conviene á la tranquilidad pública sal-
 «gan fuera del país el ministro de estado en el de-
 «partamento de gobierno, señor don Gregorio Tagle
 «y el brigadier general señor don Martín Pueyrredón
 «hasta que, mejoradas las circunstancias, puedan ó
 «libremente restituirse al seno de su hogar, ó, llama-
 «dos que sean, vengan á responder de los cargos que
 «se les tengan de hacer».

El 1° de Febrero Rondeau fue derrotado por las
 fuerzas de Santa Fé, Entre Ríos y Corrientes. El día
 3 el Congreso autorizó al director provisorio don Juan
 Pedro de Aguirre para poner en un pie respetable de
 defensa la ciudad y provincia proporcionándose ó
 sacando al efecto el dinero necesario, por todos los
 medios que le dictase la suprema ley de la salvación
 de la patria.

—

III—El Director sustituido, don Juan Pedro Aguirre,
 publicó un bando el mismo día provocando la ener-



gía del espíritu porteño para resistir á los caudillos del litoral. «Un peligro inminente nos amenaza, decía. Las fuerzas que comandaba en persona el supremo director propietario, inferiores en número á las de los disidentes, acaban de ser batidas por éstas. Conoceis su orgullo y aspiraciones, y debeis estar ciertos que en breves días los tendreis á las inmediaciones de esta ciudad, objeto de sus venganzas, víctima decretada en los consejos de su irritación. Los pretendidos federales, no lo dudeis, lo que solicitan es humillarlos. Ninguna otra gloria los satisface que imponer su planta osada sobre vuestra noble cerviz. ¿Consentirán en este oprobio los hijos de Buenos Aires? Nó, compatriotas. Es preciso hacer esfuerzos para conservar ileso nuestro honor. Muerte con gloria es preferible á vida con ignominia.....» Con este preámbulo encabezaba la serie de resoluciones que debían poner á la ciudad en estado de defensa: las tropas veteranas debían salir de la Capital á formar un campo volante bajo el mando del brigadier general Soler, al que se agregarían las milicias que se habían mandado movilizar. Se convocaba á los tercios cívicos para el mismo día á las cuatro de la tarde, y con ellos los batallones argentinos, nombre con que se designaban los cuerpos formados por los esclavos y libertos. Los alcaldes de barrio debían tomar en el día razón circunstanciada de los caballos y monturas que existiesen en sus respectivos cuarteles, y el Cabildo se encargaba del acopio de víveres.

El pueblo secundó la iniciativa de su enérgico magistrado, y en dos ó tres días se reunieron 4.000 hombres que, si fueron ineficaces para mantener la



autoridad del Congreso y contener el bandolaje anárquico, mostraron, por lo menos, el ánimo audaz de la resistencia.

El 7 de Febrero se escuchó en el Congreso Argentino la palabra de Artigas: la civilización argentina estaba amenazada. Ese día, después de habierla la sesión, se dió lectura á la nota siguiente, que llegaba retardada al Congreso: «Soberano Señor: «merezca ó no vuestra soberanía la confianza de los «pueblos que representa, es al menos indudable que «vuestra soberanía debe celar por los intereses de la «Nación. Esta representa contra la pérfida coalición «de la corte del Brazil y la administración directo-
«rial. Los pueblos revestidos de dignidad están «alarmados por la seguridad de sus intereses y los de «América. V. S. decida con presteza. Yo, por mi «parte, estoy resuelto á proteger la justicia de aque-
«llos esfuerzos. La sangre americana en cuatro años «ha corrido sin la menor consideración; al presente «V. S. debe economizarla, si no quiere ser responsa-
«ble de sus consecuencias ante la soberanía de los «pueblos. Tengo el honor de comunicarlo á V. S. y «saludarle con mi más respetuosa consideración. Cuar-
«tel general de Santa María, 27 de Diciembre de «1819—*José Artigas.*»

El torpe lenguaje correspondía á la torpe intención de disolver la unidad nacional.

El Congreso, bajo la presión de la fuerza que ya sentía encima, se dirigió al Cabildo de Buenos Aires en estos términos: «Instruido el Congreso del «tenor de las comunicaciones del comandante gene-
«ral de Relaciones Exteriores, don Francisco Ramirez, «de 8 de Enero anterior y de 4 de éste, que acaba

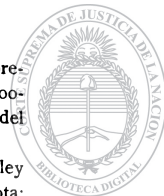


«de hacer presente en la sala la diputación de V. E.
«del objeto de ellas y de los deseos que por con-
«ducto de la misma manifiesta V. E., de que se adop-
«ten medidas extraordinarias, sino para que cesen en
«el todo, al menos para que se disminuyan los males
«de la guerra que nos aflige, ha tenido la satisfac-
«ción de que ellos sean conformes á los sentimien-
«tos del Congreso, y aún á las medidas de que á la
«sazón se hallaba ocupado, en consecuencia de la
«nota oficial del gefe de los Orientales, don José Ar-
«tigas, de 27 de Diciembre último, que acababan de
«recibir y de que se acompañaba una copia auto-
«rizada.

«El Congreso espera que esa ilustre corporación
«que ha tenido tanta parte en el brillante nacimien-
«to y progreso glorioso de la causa del país, secun-
«dará las miras pacíficas que le animan decididamente
«por la más pronta terminación de la funesta guerra
«civil, como así el excelentísimo Cabildo puede es-
«tar altamente persuadido que tendrán la mejor aco-
«gida en el Congreso, cuantas medidas quiera pro-
«poner en obsequio de tan sagrado é interesante ob-
«jeto.»

El Cabildo, bajo la misma influencia, contestó el día 11 de Febrero:

«La salud pública, cuyos peligros no es posible
«detallar en el momento y de que se instruirá opor-
«tunamente á los demás pueblos del interior, exige
«imperiosamente que cese el ejercicio de sus repre-
«sentaciones. La penetración y sabiduría de V. S.
«debe consultar aquel primer objeto de la República
«y decidirse por tan interesantes miras á la responsa-
«bilidad de incalculables males que pudieran suceder.



«El público está en espectación y V. S. podrá pre-
«ver lo que puede ocasionar la tardanza á una coo-
«peración de ideas con el supremo poder y voto del
«ejército exterior».

El mismo día el Congreso se sometió á la fatal ley
de la necesidad y dirigió al Cabildo la siguiente nota:
«Excelentísimo Señor :En vista de la exposición que
«en nombre de V. E. ha hecho la comisión en la sa-
«la de sesiones, el Congreso ha resuelto que, sin em-
«bargo que los representantes de los pueblos ce'e-
«braron el pacto de unión con la representación le-
«gítima del gran pueblo de Buenos Aires, y por lo
«tanto desearía saber la voluntad de éste, manifesta-
«da del mismo modo, ceden á la intimación que se
«les hace por medio de V.E., sin que se entienda que
«en este acto obran autoritativamente.»

El Director Rondeau, á quién el Cabildo dirigió
una nota análoga á la que había pasado al Congre-
so, contestó: «Excelentísimo Señor: Adhiriendo á la
«voluntad que me ha sido manifestada en este ins-
«tante por el Excelentísimo Cabildo, deseoso de pro-
«pender, en cuanto esté de mi parte, al bien de mis
«conciudadanos, deposito la suprema dirección del
«Estado que he desempeñado hasta ahora, en manos
«de V. E.»

Así terminó el glorioso Congreso que habí decla-
rado la independencia nacional: desapareció con él la
autoridad que representaba la tradición del gobierno
general, pero no desapareció la nación, como vamos
á verlo en seguida. Por tenebrosa que haya sido
esta época de nuestra historia, vive todavía en ella
el sentimiento y la esperanza de la vida nacional pa-
ra el futuro.



El Cabildo asumió el mando en los términos que expresa el decreto publicado por bando el día once, cuyo texto es el siguiente: «El Excelentísimo Cabildo, justicia y regimiento de esta muy noble y benemérita ciudad de Buenos Aires, á todos sus dignos habitantes no menos que á los de la provincia y campaña, hace saber: que habiendo, por un cúmulo de desgraciadas circunstancias ocasionadas de las intestinas desavenencias con la provincia hermana y limítrofe de la Banda Oriental y Santa-Fé, llegado á entender que sus aspiraciones y deseos en orden al sistema general gubernativo con las demás no estaba limitada solo á aquellas sino que han sido trascendentales á las otras que hasta hoy han compuesto la unión, manifestándose de un modo inequívoco por comunicaciones que ha recibido este Excelentísimo Ayuntamiento y por actos recientes que son bien públicos, á que ha coadyuvado el ejército de observación situado sobre el puente de Marquez en la suya dirigida con fecha del día de ayer, suscrita por todos los jefes que lo componen, habiendo también el soberano Congreso y supremo Director del Estado penetrádose de los deseos generales de las provincias sobre las nuevas formas de asociación que apetecen en las ambas autoridades, están muy distantes de contradecir ó violentar la voluntad general de los pueblos, con cuyo objeto es que en este mismo día el soberano Congreso ha cesado y el supremo Director ha dimitido en mano de este Excelentísimo Ayuntamiento el mando que le estaba cometido; por lo tanto y mientras se explora por unánime concurrencia de todas las provincias, la voluntad general, con respecto al modo y forma



«de la unión que deben conservar y sin perjuicio de
«la diputación y medidas que tiene acordadas este
«Ayuntamiento por hacer cesar las hostilidades y guerra
«civil actual con la provincia de Santa-Fé, ha venido
«en declarar reasumido el mando universal de esta
«ciudad y su provincia, en esta Excelentísima Corpo-
«ración, que por su parte, en correspondencia á la
«confianza que ha merecido á los ilustres y dignos
«habitantes, cuidará de mantener el orden en todos
«sus ramos y administración, expidiendo al efecto
«todas las órdenes que, según las delicadas circuns-
«tancias presentes, conduzcan al mayor bien, feli-
«cidad y tranquilidad de esta provincia, *interin* que
«en unión con las demás, se establecen las mejores
«bases de asociación conforme á su decidida y ma-
«nifestada intención; y para que llegue á noticia de
«todos, publíquese por bando solemne, fijándose en los
«lugares públicos acostumbrados y circulándose á to-
«dos á quienes corresponda.»

IV—El día 12 dirigió al Cabildo gobernador de la provincia de Cuyo, una comunicación con la que adjuntaba los decretos relativos á los últimos sucesos, diciéndole: «Por los adjuntos documentos, se ins-
«truirá V. S. de la situación á que los últimos acon-
«tecimientos políticos han reducido á esta Provincia.
«Todas las de la unión están en estado de hacer por
«sí mismas lo que más convenga á sus intereses y
«régimen interior. Esto es lo que, por toda respuesta,
«puedo decirse á V. S. en contestación á su nota de
«19 de Enero último, en que dió cuenta de haber
«asumido el mando de esta provincia, á consecuen-
«cia de la dimisión del coronel don Toribio de Luzu-



«riaga. Dios guarde á V. S. muchos años. Sala ca-
«pitular de Buenos Aires, Febrero 12 de 1820.»

En la misma fecha encargó del gobierno político de la ciudad y provincia al ciudadano don Miguel Irigoyen, designándole como asesor al doctor don Juan José Passo; nombró comandante general de las fuerzas de mar y tierra al brigadier general don Estanislao Soler; se reservó reglamentar el sistema de la administración pública de la provincia; y convocó el pueblo á la elección de electores para la designación del gobernador provincial propietario.

La elección debía tener lugar el 18 y 19 de Febrero en la ciudad y el 1° de Marzo en la campaña; pero quedó ésta sin efecto por un movimiento popular que tomó la forma de un cabildo abierto, reunido el 18, en el cual se nombró una junta electoral compuesta del doctor don Juan José Passo, don Vicente Anastasio de Echavarría, don Juan Pedro Aguirre, don Victorio García de Zúñiga, don Tomás de Anchorena, don José de Anchorena, don Antonio José Escalada, don Vicente López, don Manuel de Sarreatea, don Agustín Lezica, don Manuel Luis de Olin-den y don Manuel Obligado, para que designara el gobernador de la provincia y pusiera á ésta en estado de defensa y ofensa.

Esta junta tenía además carácter representativo, y fue facultada para resolver el cese ó continuación del Ayuntamiento, nombrando, en el primer caso, otro que le sustituyera, y prevenir todas las medidas que considerase conducentes al logro de una pacificación honrosa y estable con toda la amplitud de facultades para expedirse libremente en cuantas ocurrencias se interesase la salud pública: de ahí data la



Junta de Representantes que desempeñó desde entonces el poder legislativo de la provincia.

La junta representativa en uso de sus facultades, designó Gobernador del Estado á don Manuel de Sarrautea con calidad de provisorio, mientras se reunía el voto de la campaña, é interinamente, mientras el electo tomaba posesión del cargo, lo encomendó al alcalde de primervoto don Juan Pedro Aguirre.

El general Soler celebró el mismo día un armisticio de tres días con los gobernadores de Santa Fé y Entre Ríos, don Estanislao López y don Francisco Ramírez en la Villa de Luján, para concluir un convenio definitivo que restableciera la paz y alejara las probabilidades de nuevos conflictos, aceptando como condición, que no se dejaría en su puesto á ningún individuo de la administración depuesta en Buenos Aires que hubiera «ayudado ó intentado sostenerla en sus proyectos de opresión, ó cooperado á la ejecución de sus crímenes». Esta exigencia se formuló á nombre de los pueblos libres, tras de los cuales se trasparentaba su caudillo.

Por fin, el 23 del mismo mes se firmó el conocido tratado del Pilar, entre los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fé y Buenos Aires, en el cual se declaró:

1º que el voto de la Nación y en particular el de las provincias contratantes, se había pronunciado respecto del sistema de gobierno que debía regirlo, en favor de la federación, que de hecho admitían; pero que debiendo declararse por diputados libremente electos de los pueblos, se sometían á sus deliberaciones, á cuyo fin cada provincia debía designar un representante para que se reunieran en el convento



de San Lorenzo en la Provincia de Santa Fé, á los sesenta días de ratificado el tratado. Agregaba el mismo artículo que como las partes contratantes estaban persuadidas de que todas las provincias de la Nación aspiraban á la organización de un gobierno central, se comprometían á invitarlas y suplicarlas para que concurrieran con sus respectivos diputados para acordar cuanto pudiera convenir al bien general;

2° que cesarian las hostilidades desde esa fecha, entre las tres provincias, por haber sido terminadas las dificultades que se oponían á su buena armonía con la supresión de los hombres que habían usurpado el mando de la nación ó burlado las instrucciones de los pueblos que representaban en el Congreso;

3° que los gobiernos de Santa Fé y Entre Ríos recordaban á la heroica ciudad de Buenos Aires, cuna de la libertad de la Nación, el estado difícil y peligroso á que se veían reducidos sus pueblos por la invasión que ya comenzaba en la Banda Oriental.

4° que en los ríos Uruguay y Paraná navegarían únicamente los barcos de las provincias amigas cuyas costas son bañadas por dichos ríos, y que el comercio continuaría en los mismos términos hasta que el Congreso resolviera las reformas convenientes;

5° que podrían volver libremente á sus respectivas provincias los ciudadanos que, con motivo de la guerra, se hubieran expatriado;

6° que el deslinde del territorio entre las provincias quedaba librado á las resoluciones del Congreso futuro;

7° que los miembros de la administración depues-



ta serían sometidos á juicio ante el tribunal que al efecto se nombrase;

8° que sería libre el comercio de armas y municiones de guerra entre las provincias federadas;

9° que los prisioneros de guerra serían puestos en libertad;

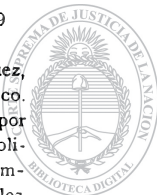
10° que aunque las partes contratantes estaban convencidas de que los artículos arriba expresados eran conformes con los deseos del capitán general de la Banda Oriental, don José Artigas, según lo había expuesto el gobernador de Entre Ríos, afirmando que tenía instrucciones privadas para este caso, se le remitiría copia de esta acta para que, siendo de su agrado, entablase las relaciones que pudieran convenir á los intereses de la provincia de su mando

11° que el ejército federal se retiraría dentro de las cuarenta y ocho horas de ratificado el tratado, hasta pasar el arroyo del medio, y 12° que el tratado se ratificaría dentro de las cuarenta y ocho horas, como se verificó en efecto.

—

V—Después de celebrado el tratado del Pilar, Ramírez volvióse á Entre Ríos. En el gobierno de Buenos Aires se sucedieron Sarratea, Balcarce y Soler. Reaparece Alvear al lado de Carreras, protegido por López. Llega Dorrego y pone su espada al servicio de Buenos Aires. Alvear y Carreras derrotan á Soler en la Cañada de la Cruz, y en un mismo día Alvear es elegido gobernador por el Cabildo de Luján, y Dorrego por el Cabildo de Buenos Aires. López vuelve á Santa Fé, y Carreras y Alvear se ven obligados á retirarse con él.

Por fin, el 20 de Setiembre de este año turbulen-



to, sube al gobierno el general don Martín Rodríguez, á quien el destino le reservaba un período histórico.

El 1° de Octubre estalla la revolución dirigida por el coronel Pagola. El general Rodríguez se vió obligado á abandonar la ciudad, y organizó en la campaña las milicias que reunió Rosas y con las cuales recobró el poder cuatro días más tarde. El gobierno se afianzó con el apoyo de las campañas y con el concurso del partido unitario que se agrupó en torno de la nueva administración.

En ese momento intervino el gobernador de Córdoba en las cuestiones de Buenos Aires con Santa Fé.

El 7 de Octubre dirigió Bustos una nota á don Estanislao López, en la que le decía:

«Que los males habían llegado ya al extremo de ser insoportables, y que, por consiguiente, era necesario que la situación se definiese para evitar que se consumase la ruina general de las Provincias. «El gobierno de Córdoba quiere saber donde está el estorbo para que Buenos Aires y Santa Fé vivan en paz, y se ha puesto de acuerdo con el señor gobernador de Salta, que tan interesado está en lo mismo, para que los doctores don José Saturnino Allende y don Lorenzo Villegas vayan al litoral como diputados á entablar negociaciones y restablecer la buena inteligencia entre las provincias, *no sólo para que queden libres y espeditas las vías respectivas de comunicación, sino para poder reorganizar la «nación.»*

López aceptó la intervención amistosa del gobernador de Córdoba y entró en negociaciones con el gobierno de Buenos Aires, exigiendo una subvención de 12.000 pesos al año y 30.000 cabezas de ganado



para indemnizar á los hacendados de su provincia de los perjuicios que la guerra civil les había ocasionado. El gobierno de Buenos Aires, á su turno, exigió la entrega de Carreras, que López resistió hasta el último momento.

Los gobernadores Rodríguez y López celebraron una conferencia con asistencia de Rosas, y en ella Rosas se obligó á entregar á López 26.000 cabezas de ganado una vez celebrada la paz.

—

VI—El 24 de Noviembre se celebró un tratado, en el cual se estipuló: 1° Que habría paz, armonía y buena correspondencia entre Buenos Aires y Santa Fé, salvando ambas provincias sus reclamaciones y derechos para que fueran resueltos en el próximo Congreso nacional;—2° Se obligó uno y otro gobierno á promover la reunión del Congreso en el término de dos meses, remitiéndose sus diputados á la ciudad de Córdoba, sin perjuicio de que, una vez constituido el Congreso, éste decidiera cual debía ser su residencia permanente. Se estipuló el libre comercio de armas (art. 3°), la libertad de los prisioneros recíprocos (artículo 4°), y los dos gobiernos se obligaron á «remover, cada uno en su territorio, todos los obstáculos que pudieran hacer infructuosa la paz celebrada, «cumpliendo exactamente las medidas de precaución «con que deben estrechar los vínculos de su reconciliación y eterna amistad». Esta cláusula se refiere á la entrega de Carreras, compromiso que aceptó López en el último momento, reservándose dar aviso al caudillo chileno para que se pusiera en salvo antes de que pudiera ser capturado.



La provincia mediadora de Córdoba garantizó el cumplimiento del convenio.

La reunión del congreso en Córdoba fue sugerida por los agentes de Bustos, quien tenía la esperanza de que, si se constituía y funcionaba bajo su inmediata autoridad, le entregaría el mando superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En el mes de Marzo de 1821 encontráronse reunidos en la ciudad de Córdoba los diputados de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos, Mendoza, San Luis y Jujuy, y pasaron circular á los de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, incitándolas á poner término á la guerra civil en que se encontraban empeñadas y á nombrar sus diputados al Congreso para reorganizar definitivamente el país. En esa circular decían: «las amigables insinuaciones de la cordialidad y del buen deseo de restituir la paz, la tranquilidad y el orden á unos pueblos entre quienes la desgracia en lucha con la naturaleza ha ocasionado desastres incalculables, producen á veces mejor efecto que los mandatos de la autoridad cuando pretenden remediar aquellos males. Los que tenemos el honor de suscribir esta nota, sin abrogarnos atribuciones que aún no nos competen, hemos creído un deber interponer la mediación de las provincias y pueblos que representamos y la nuestra propia, á fin de allanar los obstáculos que están retardando la felicidad general del país y la particular de cada pueblo. Nombrados diputados para el próximo Congreso general, nos hallamos reunidos en el punto convenido, animados de las intenciones más puras, aprovechando las lecciones de la amarga experiencia pasada, precabiendo en lo posible las desgracias ulteriores, an-



«helando por dar á la patria nuevos días de gloria y
«de paz. Conocemos y debemos decir con dolor que
«la guerra sangrienta en que se ven empeñados esos
«pueblos es el obstáculo fatal que les impide enviar
«sus diputados que debían integrar la representación
«general, para, en unión con los que nos hallamos en
«este destino, empezar las augustas funciones de re-
«presentantes del pueblo. V. S. sabe muy bien que
«es un principio incontestable en política que sin
«un centro de operaciones, sin una autoridad ema-
«nada de la voluntad general, bien pronto se con-
«vierten los Estados en un caos de desorden, de
«disolución y anarquía. Es muy triste para recordar
«la lección que hemos recibid) en todo el año an-
«terior por habernos separado de aquel principio in-
«variable Hemos visto despedazada (por decirlo así)
«las entrañas de la patria; descuidada y olvidada la
«sagrada causa de nuestra independencia, y cubrién-
«dola de vilipendio y oprobio para con las naciones
«á cuyo reconocimiento aspiramos. Por fin, parece
«que ha llegado el tiempo de poner un dique á este
«torrente de males. Algunos de nosotros representa-
«mos unos pueblos que han sostenido años enteros
«una guerra ominosa; pero han hecho cesar sus efec-
«tos terribles despues que sus gobiernos oyeron la
«voz de la patria que los llamaba á la concordia y
«á la unión. Buenos Aires y Santa Fé depusieron
«las armas desde el momento mismo en que se pen-
«só, de buena fe, en la reunión de un Congreso;
«nombraron sus diputados en el seno de la paz; los
«demás pueblos quieren igual cosa con igual empe-
«ño; y cuando esperábamos que ya no fuera la san-
«gre, la odiosidad y los rencores los que entorpecie-



«ran la marcha de los pocos diputados que faltaban, «observamos con dolor que una nueva guerra se ha «entronizado en esos pueblos y que está causando «cabalmente los mismos desastres que se pretenden «evitar. Nosotros nos atrevemos á esperar que V. S. «por su parte, desista de las diferencias que se están «hoy ventilando por la vía de las armas. El Con- «greso general, cuando pese con madurez los desti- «nos de la patria, reglará también las pretensiones, «prerogativas y derechos de los pueblos. Entre tanto, «es preciso que cada uno de estos ceda una parte «de aquellos para obrar de acuerdo con la felicidad «general»

El 5 de Junio las provincias de Tucumán y Santiago, bajo los auspicios de la mediación de Córdoba, celebraron un tratado de paz sobre las bases siguientes: cesación de la guerra; devolución de los prisioneros; derecho de los habitantes de las dos provincias que hubieran emigrado con motivo de la guerra, para volver á sus domicilios sin que se les siguiera perjuicio por sus disensiones anteriores; compromiso de ayuda para el caso de invasión de los salvajes; sometimiento al Congreso del derecho que una ú otra provincia considerase lesionado; nombramiento de diputados al futuro Congreso; mantenimiento del impuesto de tráfico en la provincia de Santiago del Estero hasta la resolución del Congreso; restablecimiento del comercio entre las dos provincias; compromiso recíproco de hacer respetar por los respectivos ciudadanos, las propiedades fronterizas, y obligación de secundar á la provincia de Salta en la guerra contra los españoles.

Santiago nombró sus diputados de acuerdo con las



estipulaciones de este convenio; pero Tucumán no hizo lo mismo, y en el mes de Julio fue necesaria una nueva circular con idéntico objeto.

Corrieron los meses sin que el Congreso consiguiera el *quorum* necesario para instalarse. Por fin, se creyó en el mes de Setiembre que la reunión iba á tener lugar, y la Junta de Buenos Aires sancionó una serie de instrucciones para sus diputados, con el señalado propósito de que redujeran las funciones del Congreso á los siguientes puntos:

1° Fijar la proporción de la población con arreglo á la cual las provincias debían nombrar sus representantes en el Congreso;

2° Dictar un método general de elección para todas las provincias;

3° Designar el lugar en que el Congreso debiera reunirse;

4° Confiar á uno de los gobernadores el encargo de que, cuando las provincias del Alto Perú estuviesen en situación de concurrir, las invitasen á que asistieran con sus diputados al Congreso, y para que, llegado aquel caso, convocara éste para los fines propuestos.

Celebróse nuevo tratado, bajo los auspicios del gobernador de Córdoba, entre las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, y entre Tucumán y Catamarca, declarando en el primero que las provincias contratantes quedaban firmemente unidas y que llevaban por principal norte el adoptar todas las medidas que fuesen concernientes á la más pronta reunión de un Congreso nacional, protestando de antemano hacer firme y estable dicha corporación, prestar obediencia á sus resoluciones y remover los obs-



táculos que pudieran impedir la realización de tan sagrado como interesante objeto. Las dos provincias se obligaban á mirar como contrario á la nación cualquiera de los gobiernos que se desviase de aquel objeto y obediencia. (art. 2°).

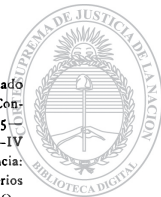
El artículo 3° decia: que siendo demasiado conocidos los medios que han favorecido el desorden y dislocación de las provincias, quedaban comprometidas á perseguir toda facción ó movimiento convulsivo que pudiese hacerse en cualquiera de los dos pueblos, sin despreciar medio alguno, sin considerar calidad y condición, para castigarlo según merecieran sus crímenes, satisfaciendo los gastos que se hagan á costa de los bienes de los delincuentes.

El artículo cuarto dejaba expedita la vía de reclamaciones «no clamorosas ó tumultuarias» ante las autoridades nacionales. Uno y otro territorio debían mantener sus límites, conservándose independientes el uno del otro, hasta la resolución que el Congreso dictase. Se obligaban ambos gobiernos á prestarse mutua ayuda en los casos de invasión enemiga ó movimientos interiores y se prometían auxilios para el caso de expedición contra los indios. El tratado entre Tucumán y Catamarca estaba calcado sobre el anterior.

Pero todos los esfuerzos de Bustos fueron vanos: el Congreso no se reunió y las provincias que habían concurrido retiraron sus diputados, poco á poco, volviendo los pueblos á su aislamiento.



CAPITULO XI



SUMARIO:—I Los cabildos, desde 1810 hasta 1821—II El tratado cuadrilátero de 25 de Enero de 1822—III Reunión del Congreso en 1824—Ley fundamental de 23 de Enero de 1825—Consulta á las provincias sobre la forma de Gobierno—IV Aumento de la Representación Nacional—Ley de Presidencia: su discusión y su sanción—V Distribución de los ministerios—Nombramiento de Rivadavia—Discurso de recepción—Organización del ministerio—VI Ley de capital: su discusión y su sanción.

I—Antes de entrar á ocuparnos de los sucesos políticos del año 22, echaremos una mirada retrospectiva sobre la institución de los Cabildos, desde el año 1810, en que los dejamos, hasta el año 1821, en que fueron disueltos en la capital de las Provincias Unidas, por resolución del gobierno del general Rodríguez.

Vamos á ver cómo aquella institución subalterna y estrecha de la colonia se convirtió de órgano activo de vida política de las ciudades y llegó, en ciertos momentos, á dirigir la marcha del Estado.

Los patriotas ocurrieron al Cabildo de 1810 que dió formas á la idea revolucionaria, porque era aquella, según lo hemos recordado, la única entidad administrativa de la colonia en la que tenía representación el elemento americano, siquiera esa represen-



dolos, sin embargo, del derecho de intervenir en la elección de los que debían sucederles el año siguiente.

El 18 de Agosto de 1812 el Triunvirato abolió la perpetuidad de los oficios concejiles en un decreto que decía así: «siendo la perpetuidad de los oficios «concejiles un abuso introducido por la tiranía, con «manifiesta supresión del derecho de los pueblos, «opuesta directamente á los principios del sistema liberal que han proclamado las Provincias Unidas del «Río de la Plata, ha determinado el gobierno, en el «desempeño de la más sagrada de sus funciones, abolir la perpetuidad de los oficios de consejo, restituyéndolos á su primitivo estado de electivos, sin «perjuicio del interés respectivo de los propietarios.» Este decreto fué aprobado por la Asamblea de 1813.

El 13 de Octubre de 1814 el Director Posadas dictó una ordenanza provisional del Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Buenos Aires, en cuyo artículo primero se declaraba que la naturaleza del cuerpo capitular y sus facultades serían en adelante las mismas que hasta entonces, según la ordenanza de intendentes y las demás leyes publicadas con posterioridad. La elección de los capitulares debía continuar en la forma anterior, designando el cabildo cesante al que debía sustituirlo; sus funciones eran de carácter puramente administrativo y de orden subalterno, con excepción de las judiciales, que continuaban á cargo de los alcaldes de primer voto.

El precedente establecido en la revolución de 1810 sirvió en el movimiento interno de 6 de Octubre de 1812, y después para consumir la revolución de 1815, que derrocó al Director Alvear; en esta oportunidad



el Cabildo asumió el mando, convocó á elecciones para constituir un gobierno provisorio que se encargara de la dirección del Estado y concurrió con los mismos electores á designar la Junta de Observación, que proyectó el estatuto de aquel año. En el estatuto se modificó sustancialmente el sistema electoral de los cabildos, declarando, en la sección 4ª del capítulo 5º, que los cabildos de las ciudades y villas donde existiesen esas corporaciones se designarían en adelante por elección popular.

El Estatuto Provisional de la Junta de Observación dió al Cabildo de la Capital intervención en la sanción de las leyes. En el artículo 8º decía: que toda adición ó corrección de las leyes que hasta ese momento hubieran regido se consultaría con el gobierno antes de publicarse, igualmente que con el excelentísimo cabildo, quienes, en el término de ocho días, á más tardar, debían expresar su consentimiento ó disenso. Si el gobierno disintiere con la publicación de la nueva ley ó estatuto, la debía devolver con las razones de la oposición para que pasara al cabildo, y convenido éste en la publicación, se ejecutaría inmediatamente, quedando la ley sin efecto si el cabildo también disintiere.

El Estatuto del año 15 no rigió sino en la capital y por un brevísimo tiempo; las atribuciones legislativas del cabildo no echaron raíces, ni volvieron á aparecer en las leyes posteriores.

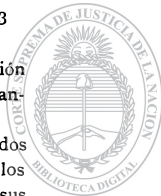
El reglamento del año 17, sancionado por el Congreso, mantuvo la elección popular de los cabildos, según lo establecido en el Estatuto de 1815, y en las providencias finales de ese reglamento figura una que pudiera hacer creer que se les reconocía algunas fa-



cultades de gobierno, porque dice: «todas las provincias de la unión, ciudades y villas con ayuntamientos, pueden, sin necesidad de licencia y con sólo aviso instruido al director, hacer todos los establecimientos que crean ser útiles y promuevan su industria, artes y ciencias, sin perjudicar los fondos del «Estado»; pero el mismo Congreso interpretó esa cláusula en 1818 en una forma tan restrictiva que no permite pensar que su alcance fuera darles autonomía ni recursos para el propio gobierno.

El 31 de Marzo de 1818 el Congreso dictó la siguiente resolución: «Considerada la consulta del cabildo de Tucumán de 21 de Febrero último, sobre «si, por el artículo séptimo capítulo final del reglamento, en que se faculta á los cabildos para formar «establecimientos útiles, promover la industria, artes «y ciencias sin perjudicar los fondos del Estado, queda autorizado para aumentar sus propios sobre los «ramos más susceptibles de pechos; el congreso nacional resuelve: que según el espíritu del artículo «citado, los cabildos no tienen facultad para aumentar por sí solos sus propios imponiendo pechos y «contribuciones».

El día 2 de Octubre, tomada en consideración la representación del Cabildo de Córdoba en que expresaba los graves motivos que le habían impulsado á exigir del vecindario un empréstito de 1.000 pesos sin consulta ni autorización previa de las autoridades supremas, para contener los grandes perjuicios con que incesantemente amenazaban á aquella ciudad las avenidas del río, acordó: «aprobar la medida, con «prevención de que en adelante no exija el ayuntamiento empréstitos sin previo aviso al Congreso,



«como dispone el Reglamento Provisorio, á excepción de los casos urgentes, en que dará cuenta justificando los motivos.»

La Constitución de 1819 atribuyó á los cabildos una importante participación en la elección de los senadores, porque ellos debían designar uno de sus miembros y un representante para formar la Junta electoral de la provincia, á quien competía elegir los senadores al Congreso. El Congreso de 1819, apremiado por la necesidad, entregó el gobierno provisorio de la provincia al alcalde de primer voto, y en 1820 delegó el mando en el cabildo, según lo hemos visto en su lugar. El director Rondeau hizo otro tanto, y el Cabildo de la Capital asumió otra vez el gobierno de la provincia, mientras se constituía otra nueva autoridad.

De todos estos antecedentes resulta que, aún cuando los Cabildos no tuvieron nunca atribución legal para entender en el gobierno político, las necesidades de la revolución y las circunstancias pusieron en sus manos los más amplios poderes desde los primeros días de la revolución hasta fines del año 1821, en que el gobernador Rodríguez, ó más bien dicho, su ministro Rivadavia, los suprimió en estos términos: *«Quedan suprimidos los cabildos, hasta que la representación crea oportuno establecer la ley general de las municipalidades».*

Este decreto correspondía á las ideas centralistas del gefe futuro de la política unitaria, que quería vigorizar el Poder Ejecutivo y consideraba innecesaria la representación del pueblo en los cabildos, después de organizada la Junta Representativa en 1820.



II—Continuemos ahora con los sucesos políticos, reanudando el estudio de los tratados interprovinciales que suspendimos para dar su colocación cronológica a la desaparición de la institución municipal en la ciudad de Buenos Aires.

En el año 1822 habían desaparecido del escenario político argentino los caudillos que mayor papel habían desempeñado en las convulsiones del año 20. Artigas, vencido por Ramírez, se había refugiado en el Paraguay. Ramírez había sucumbido el año 21 en una de sus correrías de este lado del Paraná. El mismo año murió Güemes, el único de los caudillos argentinos cuyo nombre ha recogido con respeto la posteridad, porque puso su prepotencia y su prestigio al servicio de la causa nacional; sólo quedaban en pie Bustos y López. Las buenas relaciones se habían restablecido entre Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos y Corrientes, y el interés común, frente a los peligros que amenazaban del lado de la provincia oriental, incorporada al imperio del Brasil en virtud de las resoluciones del congreso cisplatino, indujo a las cuatro provincias del litoral a suscribir el célebre tratado cuadrilátero de 25 de Enero de 1822. Concurrieron a su celebración el general Cruz, en representación del gobierno de Buenos Aires, el doctor Juan Francisco Seguí, en representación del gobierno de Santa Fé, don Casiano Calderón, como comisionado de Entre Ríos, y el doctor Juan Nepomuceno de Goitia, como representante de Corrientes.

En este tratado se estipuló una paz firme, verdadera amistad y unión permanente entre las cuatro provincias, cuya libertad, independencia, representación y derechos se reconocían recíprocamente, re-



servando al Congreso de todas las provincias, que debía reunirse en oportunidad más favorable y cuyas resoluciones serían obedecidas como emanadas de la soberanía nacional, las cuestiones de límites que existían entre las de Entre Ríos y Santa Fé, (artículo 1°). Si los españoles, portugueses ó cualquier otro poder extranjero amenazaba la integridad del territorio nacional, todos pondrían en ejercicio su poder para rechazarlo (artículo 2°); esta obligación era extensiva al caso en que el territorio amenazado fuera el de cualquiera de las provincias contratantes (artículo 3°). Análogo compromiso subsistió para el caso en que cualquiera de las provincias confederadas fuera amenazada por otra de las provincias argentinas, (artículo 4°). Si provincia invadida ó amenazada hubiera dado motivo para ello, á juicio de las otras tres, éstas debían interponer su mediación para con la agresora, á fin de evitar la guerra, y si esto sucediere con su mediación, aquella debía darle la satisfacción necesaria ó correr la suerte que ella misma hubiera provocado; mas, si sucediere lo contrario, las tres provincias concurrirían en defensa de la agredida, (artículo 5°): Se convenía, además, que ninguna de las provincias contratantes podía declarar guerra ú hostilidades á otra del territorio de la nación, sin acuerdo ó consentimiento de las otras, las que tenían el derecho de examinar las causas que la motivaban (artículo 6°); se consagró también el libre comercio de armas (artículo 7°), la libre navegación para las cuatro provincias (artículo 8°). Buenos Aires renunciaba á todo reclamo por indemnizaciones que tuvieron origen en las invasiones de Ramírez, (artículo 9°); la provincia de Entre Ríos se comprometía á de-



volver á Corrientes las propiedades de ésta ó de particulares, sacadas por Ramírez, (artículo 10), y á poner en libertad los prisioneros correntinos que figuraban en el ejército (artículo 11). Se obligaron recíprocamente á entregarse los desertores (artículo 12,) y finalmente, no considerando posible, dado el estado de indigencia en que se hallaban envueltas las provincias de Santa Fé, Entre Ríos y Corrientes, su concurrencia al diminuto congreso reunido en Córdoba, y menos conveniente á las circunstancias presentes nacionales, después de separarse de Buenos Aires, única en regular autoridad representativa, para sostener los enormes gastos, empresas marciales y su nascente autoridad, se obligaban á no entrar en Congreso por ahora sin previamente arreglarse entre sí, debiendo, en consecuencia, la de Santa Fé retirar sus diputados de Córdoba (artículo 13); si, como consecuencia de la política que se adoptaba, alguna de las provincias contratantes creía después haber llegado la oportunidad de que se instalara el Congreso Nacional, debían hacerse, entre sí, las invitaciones correspondientes (artículo 14). El territorio de Misiones quedaba libre para formar su gobierno y reclamar la protección de todas las provincias contratantes, (artículo 15); llegado ese caso, el gobierno de Entre Ríos, debía devolver todas sus propiedades, como á la de Corrientes, (artículo 16).

Este tratado debía ser ratificado por los gobiernos de Santa Fé y Entre Ríos en el término de dos días, y por los de Buenos Aires y Corrientes en el término de veinte, y así se efectuó.

En el documento se consagró, pues, la federación de las cuatro provincias, y se reconoció el vínculo



nacional que había unido en el pasado y debía unir en el futuro á todos los pueblos argentinos; declaraciones fundamentales que no debemos perder de vista en nuestro estudio.

III—La Junta de Representantes, organizada en Buenos Aires en plena anarquía durante el año 20, se salvó como institución permanente y fué el punto de partida del poder legislativo independiente en el sistema constitucional argentino.

Esa Junta, que tanto lustre adquirió durante el período de la administración Rodríguez, tomó la iniciativa bajo la influencia de Rivadavia, para reorganizar el gobierno general en 1824, sancionando la ley de 27 de Febrero, en la cual autorizó al Poder Ejecutivo «para invitar á los pueblos de la unión á fin «de reunir, lo más pronto posible, la representación «nacional», y para tomar las medidas que condujeran á la realización de acto tan importante. Debía ser la base de la representación de las provincias en el Congreso Nacional la misma que estableció el Reglamento Provisorio de 3 de Diciembre de 1817, es decir, un diputado por cada 15.000 habitantes, nombrado por elección directa del pueblo. El lugar de la reunión debía ser designado según la opinión de la mayoría de los pueblos, expresadas por sus respectivos gobiernos.

La iniciativa de Buenos Aires fué bien acogida por todas las provincias argentinas, y el 6 de Diciembre del mismo año se reunieron en sesión preparatoria en la ciudad de Buenos Aires 23 diputados que representaban á las provincias de Entre Ríos, Santa Fé, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán,



Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy y Misiones.

Diez días después se instaló el Congreso solemnemente, y el 22 de Diciembre el diputado Francisco Acosta presentó un proyecto de ley fundamental que fué tomado en consideración por el Congreso en la sesión del 18 de Enero de 1825, previo informe escrito de la comisión designada para su estudio, y en la que figuraban el Dr. Funes, el Dr. Passo y el Dr. Dalmacio Vélez Sársfield.

Este célebre proyecto sirvió de base á todos los procedimientos del Congreso y merece una atención especial. Los términos en que fué definitivamente sancionado decían: «El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata «ha acordado y decreta lo siguiente:

«Art. 1°. Las Provincias del Río de la Plata, «reunidas en Congreso, reproducen por medio de «sus diputados y del modo más solemne el pacto «con que se ligaron desde el momento en que, sacudiendo el yugo de la antigua dominación española, se constituyeron en nación independiente, y «protestan de nuevo emplear todas sus fuerzas y «todos sus recursos por afianzar su independencia nacional y cuanto pueda contribuir á la felicidad general;

«Art. 2°. El Congreso general de las Provincias «Unidas del Río de la Plata es y se declara constituyente;

«Art. 3°. Por ahora, y hasta la promulgación «de la Constitución que ha de reorganizar el Estado, «las provincias se regirán interiormente por sus propias instituciones;



«Art. 4°. Cuanto concierne á los objetos de la independencia, integridad, seguridad, defensa y prosperidad nacional, es del resorte privativo del Congreso General;

«Art 5°. El Congreso expedirá progresivamente las disposiciones que se hicieren indispensables sobre los objetos mencionados en el artículo anterior;

«Art. 6°. La constitución que sancionare el Congreso será ofrecida á la consideración de las provincias y no será promulgada, ni establecida en ellas hasta que haya sido aceptada;

«Art 7°. Por ahora y hasta la elección del Poder Ejecutivo Nacional, queda éste provisoriamente encomendado al gobierno de Buenos Aires con las facultades siguientes: 1°. desempeñar todo lo concerniente á negocios extranjeros; nombramiento y remoción de ministros y autorización de los nombrados; 2°. celebrar tratados, los que no podrá ratificar sin tener previamente especial autorización del Congreso; 3°. ejecutar y comunicar á los demás gobiernos todas las resoluciones que el Congreso expida en orden á los objetos mencionados en el artículo 4°; 4°. llevar á la consideración del Congreso las medidas que considere convenientes para la mejor expedición de los negocios del Estado».

El Congreso ratificó una vez más la idea tantas veces enunciada de la unidad nacional, é hizo remontar esa unidad al día mismo en que los pueblos argentinos se desprendieron de la antigua dominación española, para constituirse en nación independiente. Declarándose constituyente quedaba habilitado para dar forma orgánica y permanente al go-



bierno de la Nación, y tranquilizaba la desconfianza de las provincias, resolviendo que se regirían en su orden interno por las propias instituciones, hasta que, promulgada la constitución, fuera ésta aceptada por todas y cada una de ellas; mientras que, por otra parte, anticipaba que era objeto nacional todo lo que tocaba á la independencia, integridad, seguridad, defensa y prosperidad de la república; puntos respecto de los cuales se reservaba legislar progresivamente, á medida que las circunstancias se lo aconsejaran.

La comisión explicaba los puntos fundamentales del proyecto en términos breves, pero sustanciales. Refiriéndose, sin duda, á la provincia de Buenos Aires, que había afianzado su libertad política y su tranquilidad interna y no quería comprometerla en las eventualidades de la política futura hasta que el Congreso promulgara la constitución, decía: «En el «tiempo de su separación, más ó ménos, todas (las «provincias) han trabajado para mejorar su organiza- «ción interior; han hecho en esto todas, mayores ó «menores progresos, tal vez los esperan ulteriores, y «no parece justo que abandonen las buenas institu- «ciones que se han dado y pueden mejorar guiados «por la experiencia, y esperen extenuadas la consti- «tución que no puede ser sino obra del tiempo y con- «secuencia de una organización general lentamente «introducida. Es, por lo mismo, preciso, á juicio de «la comisión, conservarles sus instituciones por ahora «y hasta la promulgación del código constitucional.»

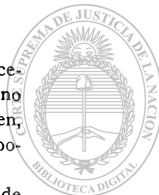
Pero, para que no se entendiera que el Congreso quedaba reatado é impedido de entender sobre los objetos de carácter nacional, determinaba de antema-



no en el artículo cuarto de la ley que eran de su exclusiva competencia los asuntos que indicaba, sobre los cuales la comisión se expresaba así: «Aún más; «cree conveniente fijar los objetos cuyo arreglo es de «su exclusiva atribución: objetos generales y de una «trascendencia nacional;» agregando, después de enumerarlos: «con todo esto y conforme á la constitución del Estado, cree la comisión que el Congreso «debe contraer exclusivamente sus trabajos expidiendo *progresivamente* las leyes y decretos que sean «indispensables, sobre aquellos objetos, y empeñando «sus luces y su celo en perfeccionar el código que «debe asegurar á los pueblos el pleno goce de sus «libertades.»

Llamamos desde ahora la atención sobre el propósito anunciado de dictar *progresivamente* las leyes de carácter nacional que las circunstancias reclamaran, porque en esta declaración se fundó la ley de presidencia y la ley de capital que se anticiparon á la constitución, como más adelante veremos.

Para ganar la voluntad de los pueblos y predisponerlos á colaborar en la obra nacional, se garantizaba, por el artículo 6°, que la constitución que el Congreso sancionara sería sometida á la aprobación de las Provincias antes de ser promulgada; resolución que la comisión motivaba así: «Es conveniente que el «Congreso desde sus primeros pasos, manifieste su «decidida voluntad de garantizelas (su libertad), y «que, á este efecto, sancione que la constitución que «dictará la ofrecerá en oportunidad á ellas mismas «para que la examinen, adopten ó desechen, pero en «la forma que en ella se prevendrá, á efecto de que «todas procedan en este acto importantísimo de un



«un modo legal y uniforme. Podría muy bien suceder que no todos la aceptasen, agregaba; pero no sería racional que, porque algunas la desechasen, quedasen privadas las más de los bienes que podrían recibir de su establecimiento».

La ley fundamental proveía que el Gobierno de Buenos Aires tomara á su cargo las funciones ejecutivas, mientras no se eligiera Poder Ejecutivo nacional, y para justificar esa medida, la comisión decía en su informe: «sería de desear que al Congreso le fuera posible desentenderse y proveer á la necesidad de un Poder Ejecutivo, y á la comisión escusarse de proponer los medios de hacerlo. Esto está convenido con el autor del proyecto presentado, en el que, antes que el Congreso nacional firme la constitución, debe nombrarse un Poder Ejecutivo que rijá el Estado, conforme á la ley que dictará el mismo actual Congreso; mas ¿sería distinto y separado de todos los demás gobiernos particulares de las provincias? Es, sin duda, lo más justo y también lo más conveniente; sería, tal vez, éste el único arbitrio para que cesasen los celos que tanto han influido, por un concepto errado, en nuestras desgracias pasadas. Pero ¿cómo hacerlo? ¿cuáles son los fondos con que puede contar el Congreso, y de que pueda disponer para ocurrir á los gastos que demanda la nueva creación de aquella suprema autoridad? El autor del proyecto propone que estas expensas sean costeadas por una tesorería común que será suplida por las diversas provincias, en proporción á su población y recursos; pero ¿dónde existe hoy esa tesorería común? ¿cuándo se podrá formar? ¿cómo? Sin un asiento exacto de la población de



«cada una; sin un registro público de sus propiedades territoriales; sin un sistema organizado de hacienda; todo esto ¿cuándo podría organizarse? Ante todo, urge la necesidad de que continúen las relaciones exteriores que desde el día de la instalación del Congreso están paralizadas, con perjuicio de la causa general del país, y que se tomen las medidas que muy luego tendrá que dictar el nuevo Congreso para la defensa común. El conocimiento de estas necesidades que ejecuta, repite la comisión, momentáneamente, unido á la imposibilidad de nombrar en el interin un ejecutivo en el modo que propone el autor del proyecto de ley presentado, la ha determinado á adoptar el único arbitrio que cree realizable, y es el de encargar á uno de los gobiernos particulares, que por razones especiales cree debe ser el de Buenos Aires, la expedición de estos negocios, con las atribuciones y limitaciones que expresa el artículo 8° del proyecto.»

Esta ley ocasionó, antes de su sanción, una interesante discusión, en la cual los miembros más conspicuos del Congreso hicieron declaraciones que explican bien el alcance de sus preceptos.

Hablando de la unión nacional, el Deán Funes decía en la sesión del 19 de Enero: «Equivocadamente se pone nuestro Estado en el estado comparativo con el de los Estados Unidos. En los Estados Unidos primero se reunieron para hacer un pacto; después ya se formaron en Congreso para establecer la constitución. Nuestros Estados tienen hecho ese pacto de unión desde que se puede decir que dieron el primer grito de libertad; pero este pacto de unión ha sido cada vez más restablecido ó ra-



«tificado en los congresos que ha habido, en los actos
«mismos perfectos y constantes de nuestros sacrifici-
«cios, pues que cada uno de ellos ha sido una ratifi-
«cación del mismo pacto y de la misma constitución
«que nos dió el Congreso: todas estas son pruebas de
«que el pacto está establecido. Decir que este pacto
«se anuló ó se rompió en el año 20 es decir una
«cosa que no tiene apoyo ni en la historia ni en la
«razón; nó en la historia, porque en el manifiesto que
«dió el gobierno de Buenos Aires excitando á los di-
«putados que estaban en Córdoba para que fueran al
«Congreso, en ese mismo momento decía que esas
«supresiones no son supresiones ni roturas del pacto,
«que era como una embarcación que se acerca á la
«costa donde podría haber zozobrado, y después
«vuelve á salir á alta mar.

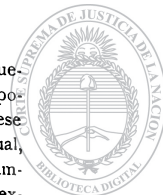
«Esta semejanza tiene una oposición absoluta con
«la rotura del pacto. Después del año 20, cuando
«las provincias se separaron, tan lejos han estado de
«querer romper el pacto, que han manifestado mucho
«sentimiento en su supresión, y la de Córdoba la mi-
«ró con el mayor disgusto: en mi opinión fué lícita y
«oportuna por un año, como se expresó en el mismo
«manifiesto. De esta historia sacamos que, desde el
«momento en que las provincias vuelven á reunirse
«en el Congreso, vienen al Congreso y á la Nación
«todos los derechos que les correspondían antes del
«año 20, sin que sea preciso formar una nueva ley».

El diputado José Valentín Gómez, discutiendo el artículo 3º, decía:

«Este artículo está concebido, á mi juicio, con tal
«pccerfeión y con tal oportunidad, que casi me atrevo
«á decir que la comisión ha procedido punto menos



«que inspirada. Pero es preciso contemplarle en «conexión y cotejo con el artículo que sigue, porque «ambos hacen desaparecer las dificultades que han «asomado y porque ellos contribuyen de un modo «distinguido, tanto á señalar la marcha que debe seguir el Congreso, como á conservar la confianza de «los pueblos respecto de las deliberaciones particulares que esta corporación debe adoptar. . . . Dos «cosas se anuncian en este artículo: la primera, que «el resolver respecto de estos puntos es del resorte «privativo del Congreso general; la segunda, que el «Congreso debe contraer preferentemente su atención «é ilustración á estos objetos de primera importancia, «que afectan, como dije antes, esencialmente á la «existencia del Estado. Pero entretanto, señores, que «el Congreso pueda proceder con toda esta prudencia; mientras que sucesivamente ha de ir adoptando «resoluciones respecto de todos esos negocios; mientras que al fin llegue, porque yo creo que probablemente ha de llegar, el caso de dar el proyecto de «la constitución ¿cómo han de permanecer estas provincias? Ellas no han podido tomar absolutamente «una disposición de régimen general. . . . Es preciso «que ellas sigan, ó sobre las instituciones que se han «dado, ó sobre las que crean conveniente darse, y «por eso había dicho la comisión muy oportunamente, *las instituciones propias y no las instituciones actuales*, como decía el primer proyecto». Con lo cual «se proporciona á aquellas provincias que no tienen «instituciones ó que no las tienen suficientes, que pueden ponerse en esa actitud consiguiente para regirse «por sí mismas, hasta que llegue el caso de resolverse sobre una dirección general. Este artículo,



«además, se anticipa á satisfacer inquietudes que pueden nacer respecto de algunas provincias que podrían preguntarse: si ya en el momento, si en ese estado, si en la continuación de nuestra crisis actual, si en la combinación de nuestras afecciones y también de nuestras pasiones, el Congreso querrá expedir providencias que forman otros tantos ramos, para deshacer lo que existe y comprometernos internamente. . . .»

El doctor don Julián Segundo de Agüero agregaba, discutiendo la cuestión política: que interesaba la sanción del artículo 3°, por cuanto mantenía el régimen anterior de las provincias mientras no se dictara una constitución: «El Congreso conoce hoy todo el mal que causa á las provincias el que los que están á su cabeza no se hayan puesto allí con el voto espontáneo y libre de los pueblos, y que en vez de trabajar por el bien de los mismos pueblos, sólo se ocupan de sus intereses personales; este es un mal que gravita sobre los pueblos, que el Congreso siente, y que no hay un ciudadano que no desee, el que ese mal se acabe: pero, señores, ese mal ¿quién ha de curarlo? Es necesario hacerse cargo de las cosas ¿ha de remediarlo hoy el Congreso? Se cree que éste ha de empezar su marcha constituyéndose redentor de estos pueblos á quienes la audacia de algunos hombres tengan en un estado de abatimiento? Yo creo que sería la mayor de todas las imprudencias que el Congreso marchase en ese sentido. El sacar ese yugo debe ser obra de los pueblos mismos, y es necesario desengañarse, que mientras en los pueblos no haya energía para esto, todo lo que podrá la autoridad del Congreso á nada basta. Al con-



«trario, la historia de nuestra revolución nos enseña que el empeño, el interés que la primera autoridad ha tomado algunas veces en contener dentro de sus deberes los hombres que se han puesto á la cabeza de los pueblos, no ha hecho otra cosa que corroborar su autoridad, que se trataba de destruir, y al fin ha venido á suceder que la primera autoridad del Estado ha tenido que capitular en esas mismas disputas para evitar mayores males.»

«Pero se dice que el Congreso se ata las manos dando esta ley, porque si mañana se le presenta el caso de proveer á la organización interior de las provincias, se verá imposibilitado de hacerlo y les privará de los bienes y ventajas que les resultarían. Pero pregunto: El Congreso ¿cuando podrá entrar de un modo legal á la organización interior de las provincias? No puede ser antes que haya dado la forma de gobierno que ha de regir el Estado, porque sin establecer ésta, debe respetar la independencia de hecho en que se hallan las provincias.»

El artículo que encomendaba las funciones ejecutivas al gobierno de Buenos Aires fué también motivo de extensos debates, proponiendo algunos que dicho gobierno debiera proceder de acuerdo con una comisión del Congreso, y otros que se limitaran sus atribuciones á las relaciones exteriores del país; pero al fin quedó definitivamente sancionado en la forma expresada en la ley que hemos transcrito.

Causa extrañeza que en sus primeras sesiones el Congreso tuviera la clara visión de la situación general del país y de la manera de constituirlo provisoriamente, y que en seguida perdiera de vista los



propios antecedentes y lo arrojará en las aventuras de un ensayo político que debía concluir con su autoridad.

Los artículos 3° y 4° de la ley fundamental fijaban los verdaderos términos de una federación nacional, y en el curso de los debates se demostró que no era posible aspirar á constituir el país si se prescindía de la situación actual de los pueblos ó se renunciaba á los grandes objetos de la vida nacional. No se comprende cómo, declarados esos principios y reconocidas tales exigencias para la organización provisoria del país, se prescindió de todo para darle su constitución definitiva. Sin embargo, así sucedió. El Congreso abundó en medidas de circunspección y de prudencia durante los primeros meses del año 1825; demostró entonces que se proponía no avanzar un paso sin examinar detenidamente las probables consecuencias de sus resoluciones; pero en seguida, impulsado por fuerzas que tal vez el éxito mismo desenvolvía, prescindió de las reglas que anticipadamente se había fijado é inició la organización del gobierno con un propósito manifestamente contrario á las influencias políticas que gobernaban los pueblos y con las cuales era necesario contemporizar, como lo había reconocido en sus comienzos.

El 21 de Junio de 1825 el Congreso sancionó un decreto por el cual se ordenaba consultar á las provincias antes de proceder á redactar la constitución sobre la forma de gobierno más conveniente para el país, con el fin de afianzar el orden, la libertad y la prosperidad nacional. La opinión de las provincias debía manifestarse, sobre materia tan importante, por medio de sus juntas ó asambleas representativas, eligiéndose



las especialmente con ese objeto, donde no las hubiese. El artículo 3° salvaba, sin embargo, en términos expresos, el derecho del Congreso para adoptar en seguida el sistema que, en su concepto, fuera más conveniente. Decía textualmente: «Las opiniones que expresaren las representaciones provinciales dejarán expedita la autoridad consignada por los pueblos al Congreso, para sancionar la constitución más conforme á los intereses nacionales, y salvo el derecho de aquellas para aceptarla, que les reservó el artículo 6° de la ley de 22 de Enero». Más adelante veremos que la consulta no fué evacuada por todas las provincias, y que entre las que la contestaron se manifestó una divergencia radical.

Hasta ese momento el gobernador de Buenos Aires, que desempeñaba el Ejecutivo Nacional, gozaba de la confianza del Congreso y contaba con la adhesión más ó menos calorosa de los gobiernos de provincia; basta para acreditar lo primero, la renuncia presentada por el general Las Heras el 11 de Julio y la resolución del Congreso desechándola por unanimidad de votos, y para demostrar lo segundo, la cooperación que encontró cuando llegó el momento de organizar el ejército del Brasil (1).

(1) La renuncia del general Las Heras fue motivada por una minuta de comunicación que le dirigió el Congreso con motivo de las cuestiones del Brasil, y decía así: «El gobierno de Buenos Aires, que por el art. 7° de la ley fundamental se encargó provisoriamente de las funciones del Ejecutivo Nacional, cedió á las circunstancias del momento y las ha desempeñado hasta ahora dando cuenta á la H. Sala de Representantes de su provincia, bajo cuya consideración se halla aquella ley; pero la experiencia que ha adquirido en el tiempo transcurrido, así como las atenciones que se multiplican hacen evidente que aquel encargo es incompatible con los intereses primeros de la Nación y con los intereses más caros de la Provin-



Los sucesos de la provincia oriental tuvieron una influencia decisiva en los destinos del gobierno nacional que se constituyó en este período de nuestra historia, y no estará de más recordar sus antecedentes, á medida que se vayan presentando en la sucesión de los tiempos. El 11 de Abril de 1825 salió de Buenos Aires el general Lavalleja con su célebre expedición de los treinta y tres, en dirección á San Isidro. El 12 se embarcó y el 20 arribó á la costa oriental en el sitio conocido con el nombre de Arenal Grande. Inútil es decir que la invasión se hizo, si no con el apoyo del gobierno, con la cooperación espontánea del pueblo argentino, que la secundó desde el primer momento con pertrechos de guerra y con la enérgica propaganda de la prensa de la capital.

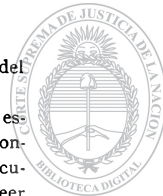
La protección que los revolucionarios encontraron en tierra argentina motivó una reclamación del vice-almirante de la armada imperial, Sr. Ferreyra de Lobo, reclamación que fué desatendida por el ministro García, contestándole que no tenía conocimiento del carácter diplomático que debía investir para tratar asuntos de esa naturaleza. El vice-almirante replicó que procedía en virtud de órdenes del Emperador, á

cía de Buenos Aires. Esta, Señor, necesita de toda la contracción de su gobierno á la seguridad de su territorio, al arreglo de sus negocios interiores y al fomento de todos sus medios de prosperidad que la pongan en aptitud para rendir mayores servicios á la causa nacional. En su consecuencia, cree de su deber pedir al Congreso General se digne relevarlo de este cargo y proceder al nombramiento de un Poder Ejecutivo que se consagre exclusivamente á los negocios nacionales. Esta resolución es urgente y por ella interpele todo el celo de los representantes de la Nación para que la adopten sin pérdida de momento. El gobierno de Buenos Aires saluda respetuosamente á los representantes de la Nación—*Juán Gregorio de Las Heras—Manuel García.*



lo cual el ministro respondió que insistía en sus declaraciones anteriores y que el gobierno de las Provincias Unidas no discutía las cuestiones diplomáticas con los jefes de fuerza armada de naciones extranjeras que se presentaban en actitud hostil. Sin embargo, agregaba el ministro que convenía á la dignidad de su gobierno negar solemnemente la participación que se le atribuía en la revolución de la Banda Oriental, obra exclusiva de sus habitantes; que si los revolucionarios habían obtenido socorros de Buenos Aires, habrían sido comprados con dinero ó crédito de los particulares en almacenes abiertos á todos, sin excluir á los enemigos naturales del país. Por fin, concluía que, para marcar en esta delicada ocasión su política internacional, el gobierno de las Provincias Unidas había determinado enviar una misión especial al Brasil, que mostraría á éste su amistosa disposición, y al mundo los principios que lo regían en sus relaciones con los demás estados. El vice-almirante brasileiro se apresuró á declarar que la presencia de su escuadra en el Río de La Plata no importaba amenaza de ninguna naturaleza al gobierno de las Provincias Unidas.

Los revolucionarios orientales batieron á los imperialistas y reunieron un Congreso que declaró nula el acta de incorporación al Brasil sancionada por el Cisplatino, y el 25 de Agosto la provincia disgregada volvió de nuevo á la familia argentina, eligiendo representante al Congreso al señor don Tomás Javier de Gomensoro, cuyo diploma fué aprobado el 25 de Octubre, al mismo tiempo que se sancionó la ley de reincorporación que imponía á las Provincias Unidas



la obligación sagrada de defenderla como parte del territorio nacional. (1)

Afortunadamente los elementos para la defensa estaban en vías de preparación. El 11 de Mayo el Congreso había sancionado la ley de defensa nacional, cuyo art. 1° autorizaba al Poder Ejecutivo para proveer á la defensa y seguridad del Estado, recomendándole especialmente reforzar la línea del Uruguay, en precaución de la guerra de la Banda Oriental. Con tal objeto, decía el art. 2°: en consideración á la urgencia é interés nacionales de esta medida é interin se provee lo conveniente á la más pronta organización del ejército de la nación, el P. Ejecutivo, á nombre del Congreso, estimulará el celo y patriotismo de los gobernadores de las provincias, para que, á la mayor brevedad, pongan á su disposición toda la fuerza de línea que no sea absolutamente necesaria para su seguridad interior. Al mismo tiempo se les invitaba á facilitar milicias y apresurar el envío de la recluta, que debía serles contado como parte de su contingente para la formación del ejército nacional. El artículo 6° de la ley declaraba que el jefe ó jefes bajo cuya dirección se pusiera esta fuerza no tendrían la menor intervención en el régimen interior de la provincia de Entre-Ríos ú otra donde llegara á acantonarse.

(1) La ley decía: «Art. 1° De conformidad con el voto uniforme de las provincias del estado y con el que deliberadamente ha reproducido la provincia Oriental por el órgano de sus representantes en la ley del 25 de Agosto del presente año, el Congreso General Constituyente, á nombre de los pueblos que representa, la reconoce de hecho reincorporada á las Provincias Unidas del Río de la Plata, á que por derecho ha pertenecido y ha querido pertenecer; artículo 2° en consecuencia, el gobierno encargado del Poder Ejecutivo Nacional proveerá á su defensa y seguridad.»



No teniendo fondos el Congreso para ese fin, se autorizaba al Ejecutivo para que los solicitara de la Legislatura de Buenos Aires. Quince días más tarde sancionó la ley de organización del ejército nacional, en la cual, después de declarar la fuerza de que se compondría, fijaba el sistema de reclutamiento, distribuyendo el contingente en proporción á la población de cada provincia. Anticipándonos á los sucesos del año 26, agregaremos que el 2 de Enero sancionó el Congreso una ley en los siguientes términos: «Ha-
«biéndose declarado nacionales todas las tropas exis-
«tentes en las Provincias Unidas del Río de la Plata,
«y puesto á disposición del Poder Ejecutivo Nacional
«tanto éstas como las milicias, se declara que, de con-
«formidad con el artículo primero de la ley de 11 de
«Mayo, queda á cargo del mismo Poder Ejecutivo la
«seguridad y defensa de todos y cada uno de los puntos
«del territorio, contra cualquier clase de enemigos.»

—
IV—Por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso modificó la base de la representación nacional el 21 de Noviembre de 1825, sancionando, que en lo sucesivo se nombraría un diputado por cada 7.500 habitantes ó por una fracción igual á la mitad de esa cifra. La elección debía efectuarse según las leyes y prácticas establecidas en cada provincia, y cada diputado recibiría una compensación de 2.500 pesos anuales.

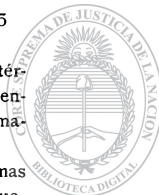
En la sesión de 28 de Enero de 1826 el diputado por Córdoba, don Luis de Bedoya, adversario decidido del gobierno personal de Bustos, formuló en el Congreso una moción en los siguientes términos: «Siendo en
«el día llenados los inconvenientes que determinaron
«al Congreso á suspender la creación del Poder Eje-



«cutivo Nacional, y urgiendo los más graves motivos para esta medida, la comisión de negocios constitucionales presentará, á la posible brevedad, las bases para la creación de esta magistratura, con las calidades que corresponden.»

El objeto de esta moción era crear un Poder Ejecutivo Nacional con fuerza bastante para subordinar al gobernador de Córdoba, á Ibarra, que le secundaba, á Quiroga, que dominaba ya la Rioja y amenazaba á Catamarca, y que, agrupados, podían poner en jaque á Salta y Tucumán, gobernadas en ese momento por Arenales y Lamadrid, que representaban en el norte la tendencia política de la mayoría liberal del Congreso, contra los caudillos personales que aspiraban á convertirse en gobiernos vitalicios, y que no ocultaban su naciente mala voluntad hacia los poderes nacionales.

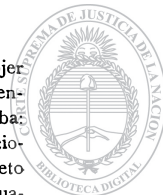
La moción fué sancionada y la comisión de negocios constitucionales presentó su despacho el 1° de Febrero, creando la presidencia nacional; declaraba oportuna y urgente la instalación del Poder Ejecutivo Nacional de un modo permanente, y establecía que la elección la haría el mismo Congreso en la forma siguiente: la mayoría de un voto sobre la mitad de los diputados bastaría para la elección. Si después de tres votaciones, ninguno obtuviese la expresada mayoría, se votaría entre los tres que hubieran tenido mayor número de sufragios; si reiterada la votación hasta tres veces, ninguno de los tres propuestos reunía la mitad más uno de los votos, se excluiría al que hubiera tenido número menor; si repetida tres veces la votación entre los dos, no resultase la mayoría expresada, decidiría el presidente del Congreso.



El Presidente debía durar en sus funciones el término que fijara ulteriormente la constitución, debiendo computarse ese término desde el día en que tomara posesión del cargo.

Las facultades del presidente debían ser las mismas transferidas por leyes anteriores al gobierno de Buenos Aires como encargado del Poder Ejecutivo Nacional y las que posteriormente pudieran acordársele. El presidente debía gozar de una compensación anual de 20.000 pesos, que no podría ser aumentada ni disminuida durante el tiempo de su administración.

El 3 de Febrero comenzó la discusión, informando á nombre de la comisión el Dr. D. José Valentín Gómez, quién estableció como base del debate, la urgencia y oportunidad de crear un Poder Ejecutivo Nacional permanente. La urgencia, en su concepto, apareció el día mismo en que se dictó la ley fundamental, porque desde el momento en que la nación se presentaba como cuerpo político, le correspondía un Poder Ejecutivo propio. Pero circunstancias insuperables indujeron al Congreso á confiar aquellas funciones al gobierno de Buenos Aires. El 11 de Julio del año 25 el mismo gobierno de Buenos Aires había manifestado que eran incompatibles las funciones de su cargo con el desempeño de la autoridad nacional, y esta manifestación había hecho más imperiosa la urgencia; pero faltaban absolutamente los elementos necesarios para que tal autoridad pudiera subsistir, y el Congreso no tuvo más arbitrio que rechazar la renuncia del gobernador de Buenos Aires y mantener la situación creada. La guerra de la Banda Oriental reclamaba acción enérgica, y aunque la batalla de Sarandí había colocado al país en con-



diciones ventajosos, no había sido posible recoger todos los frutos del triunfo por causa de la deficiencia de poderes del gobierno nacional. Y agregaba: en el momento en que deben emprenderse operaciones militares de mayor trascendencia, no es discreto esperar que corresponda á las exigencias de la situación un poder público que ha manifestado ya que no tenía el poder y la fuerza necesarios, y que desempeña transitoriamente una autoridad precaria. La urgencia había crecido después de presentada la moción en el seno del Congreso, no siendo de desentender la circunstancia de que el diputado mocionante fuera representante de una de las provincias del interior, porque había motivos fundados para temer las prevenciones que se levantaban contra la autoridad nacional confiada al gobierno local de Buenos Aires.

En cuanto á la oportunidad, creía que había llegado el momento de que la Nación tuviera su organización propia. Ya existe un ejército, decía; el Poder Ejecutivo ha sido autorizado, no sólo para la defensa del país, sino para la dirección y mando del ejército. Se han declarado nacionales todas las tropas veteranas de las provincias; se ha puesto á disposición del Poder Ejecutivo, no sólo las milicias de las provincias, sino todos los oficiales con despacho de la autoridad general y de los gobiernos particulares. Se ha decretado un empréstito; se ha establecido un banco nacional, y de consiguiente, el cuerpo político del estado tiene ya fuerza y puede aparecer con representación propia, si no de un modo tan completo como sería de desear, de un modo suficiente para sus fines y de manera que por leyes ulteriores y por la misma constitución, se pueda ir robuste-



ciendo. Importa que el Poder Ejecutivo se constituya de un modo permanente, porque si apareciera con carácter provisorio, esa sola circunstancia destruiría toda su fuerza moral, desalentaría á la persona que se designara para su desempeño y daría curso para que los que hubieran de obedecerlo no lo hicieran con la sumisión necesaria.

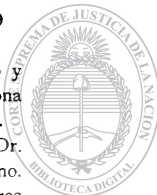
Inició la oposición al proyecto el diputado Mena, fundándose en que los diputados incorporados apenas excedían de la tercera parte de los que debían constituir el Congreso, según las leyes sancionadas, llegando á decir que, si le fuera posible, protestaría de la elección ante el Congreso pleno, ó renunciaría el derecho de votar.

Don Julián Segundo de Agüero, dominando la situación con su clarísimo ingenio, declaró que, en su concepto, habría sido preferible postergar la organización del Poder Ejecutivo nacional permanente por algún tiempo más; pero que después de formulada la moción, el Congreso no llenaría su deber y comprometería la seguridad, defensa é integridad del territorio, si no dictaba una medida decisiva para el momento. Fundada la moción en prevenciones de los pueblos del interior contra el gobierno de Buenos Aires y en los reclamos que se han hecho, para vigorizar la defensa nacional, reclamos que se han manifestado con vehemencia dentro del mismo Congreso ¿cuál sería el resultado si la moción se desechara y el Poder Ejecutivo continuara á cargo del gobierno de Buenos Aires? Desde luego, éste no podría desempeñar la alta, delicada y difícil misión que se le ha confiado. Su posición, comprometida desde el primer día, sería insostenible después de



formulada una moción semejante en el seno del Congreso, con el apoyo de un número considerable de diputados de las provincias. Desde ese momento, el gobierno de Buenos Aires estaba privado de toda fuerza moral, quedaba sin acción, incapaz de obrar y de preparar los medios de salvar la situación actual del país. No podía contar con el apoyo de los pueblos y no tendría ya voluntad propia para mandar; la moción le había quitado su fuerza moral, la posibilidad y la voluntad de obrar.

Se necesita, decía, un poder capaz de obrar, y ¿se puede mantener hoy el depósito de la autoridad general en manos de un gobierno que por la moción ha quedado sin posibilidad de ejecutar y sin fuerza moral? Desde este momento, toda la responsabilidad de la guerra gravita sobre el Congreso, y no sobre el gobierno de Buenos Aires. Y concluía así: ¡Oh señores! cuánto desearía que el ministerio se hallase presente para que hiciera sentir, como creo que lo haría, la imposibilidad en que está de poder hacer nada y cuán comprometida está la suerte de la Nación en sus manos, desde que ha asomado la moción! Considero tan grave, tan urgente, tan comprometida la suerte del país, su defensa y la integridad de su territorio, que, en mi opinión, el Congreso debía proveer, si fuese posible, hoy mismo á depositar en otras manos esta autoridad, y de cualquier modo dedicarse á proveer todo lo que haga falta para poner á esa autoridad con todo el respeto posible, rodearla de todo lo que pudiera serle necesario, para que pueda hacer la felicidad del Estado. Por tanto; mi opinión es que, en estas circunstancias, después de presentada la moción, el Congreso no puede absolutamente retroce-



der, y que es necesario que adopte el proyecto y en el momento proceda á la elección de la persona en quién se ha de depositar la autoridad nacional.

Don Manuel Moreno replicó á la comisión y al Dr. Agüero, sosteniendo que el proyecto no era oportuno. Recordó que cuando el gobierno de Buenos Aires había manifestado las dificultades para continuar desempeñando las funciones nacionales que se le habían confiado, la situación del país era la misma; que la guerra ya había empezado, ó si no había empezado, no había duda que se venía encima; que la ley, duplicando la representación de las provincias en el Congreso, había tenido en vista la probable necesidad de constituir un Poder Ejecutivo permanente, y que no era prudente anticipar ese paso antes de que la mayoría de los nuevos diputados se hubiere incorporado; que ahora la guerra estaba empeñada, que el gobierno había dictado medidas muy extensas y que una nueva autoridad no haría sino distraer los planes ya iniciados; que la moción presentada, como toda otra, no tenía ni podía tener más alcance que el de someter un asunto á la consideración del Congreso; pero que en ningún caso podía desprenderse de la iniciativa individual de un diputado el deber del Congreso de sancionarlo; que, además, para nombrar un Poder Ejecutivo permanente era necesario hacer una gran parte de la constitución que determinara sus atribuciones; y cómo se haría esto sin la aprobación de las provincias, cuando ellas tenían el derecho de aceptar ó rechazar la constitución?

Don Manuel Moreno, finalmente, arribaba á esta conclusión: que se postergara la consideración del asunto hasta la incorporación de los diputados nue-

vamento electos y que con su concurso, se organizara un Poder Ejecutivo nacional, independiente del gobierno de Buenos Aires, pero con carácter provisorio.

V—El debate continuó hasta la sesión del día 6 Febrero, en que se sancionó el proyecto por 30 votos contra 5. El mismo día se sancionó la ley creando cinco ministerios nacionales, á saber: de gobierno, negocios extranjeros, de guerra, de marina y de hacienda, autorizando al Presidente para reunir dos ó más departamentos en un solo ministerio, según lo requirieran las circunstancias.

Al día siguiente fué nombrado Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata el señor don Bernardino Rivadavia, obteniendo un voto el general Alvear, otro el general Lavalleja y otro el general Arenales.

Al recibirse del mando el señor don Bernardino Rivadavia dijo ante el Congreso: «Señores: El Presidente que os habeis dado, por medio de su estudio y meditaciones sobre cuanto importa al honor y salud de su patria, ha llegado á una persuasión que es la que más le ha complacido en su vida y que cree que será la que más le honrará; él se halla ciertamente convencido de que teneis medios de constituir el país que representais, y que para ello faltan dos bases: la una que introduzca y sostenga la subordinación reciproca de las personas, y la otra que concilie todos los intereses y organice y active el movimiento de las cosas. Por lo que respecta á la primera, ella naturalmente demanda más tiempo, como sucede con todo lo que tiene relación á personas, mas también en proporción menos urge, y





«por lo tanto, acuerda el presidente el tiempo necesario para haceros comunicaciones oportunas; pero, «con referencia á la que demandan las cosas, ella «urge con toda la exigencia que siempre tiene la fuerza de las cosas, á la que no sólo no es posible resistir, pero ni aún dejar de cooperar. El presidente, «señores, ha venido á este lugar persuadido de que «uno de sus primeros deberes es el no dejar pasar «momento de su mando sin declararos, del modo más «terminante, cual es esta base, y que todo lo que se «tarde en establecerla retrogradará la organización «de la nación y crecerán los males y los riesgos en «que ella se halla. Esta base es dar á todos los pueblos una cabeza, un punto capital que regle á todos y sobre el que todos se apoyen: sin ella no hay «organización en las cosas, ni subordinación en las «personas, y lo que más funesto será, que los intereses queden como hasta el presente, sin un centro «que, garantiéndolos, los adiestre para que crezcan «circulando y se multipliquen fecundizándolo todo; y «al efecto es preciso que todo lo que forme la capital sea exclusivamente nacional. El presidente «tendrá el honor (porque es preciso aprovechar el «tiempo) de pasar en el día de mañana la minuta de «ley correspondiente; pero debe antes de ello, advertiros de que si vuestro saber y vuestro patriotismo «sancionan estas dos bases, la obra es hecha; todo «lo demás es reglamentario, y con el establecimiento «de ellas habreis dado una constitución á la nación, «que durará lo que el progreso de su prosperidad, y «por este medio habreis desempeñado vuestras funciones de un modo que os eleve á la dignidad del «ejemplo. Todos los medios que hay para llegar á



«la asección de fines tan importantes se concentran
«en dos: el uno es permanente, el otro del momento;
«el primero obliga á todos y á todos sirve. mas el
«resorte principal de su acción está en la conducta
«de las autoridades: de ellas él exige que se revistan
«de todos los caracteres de la ley es decir, que sean
«iguales para todo lugar, para toda persona, para
«todo interés, y que en todo tiempo obren del mismo
«modo. El presidente reconoce que á él particular-
«mente incumbe un otro deber que está resuelto á
«desempeñar, cual es el de agregar á los caracteres
«de la ley los de su ejecución; que vale decir, el
«ejecutar con prudencia, con energía y con una cons-
«tancia infatigable. Esto, señores, es, como he dicho
«antes, de una necesidad permanente; pero hay otro
«medio que es otra necesidad, y no puede decirse,
«por desgracia, porque rivaliza con esa desgracia una
«fortuna; ella es del momento, y por lo mismo urge
«con preferencia á todo; yo creo que no es preciso
«que os la pronuncie para que la entendais: esta ne-
«cesidad es la de una victoria....

«Por lo tanto, el presidente de la República sella
«la solemnidad de este acto, declarando y protestan-
«do á la representación nacional que desde hoy y
«respecto de punto tan vital, él no se moverá en otro
«espacio que en aquel que interviene entre la victo-
«ria y la muerte.»

Inmediatamente el Presidente constituyó su minis-
terio, encargando de la cartera de gobierno el señor
don Julián Segundo de Agüero, de la de relaciones
exteriores al señor don José García, de la de guerra
y marina al general don Carlos de Alvear, y de la
de hacienda al señor don Salvador María del Carril,



reemplazando al doctor García, que renunció, con el general don Francisco de la Cruz.

—
VI—El presidente cumplió en seguida su promesa. En la sesión del 18 de Febrero se dió cuenta en el Congreso de un mensaje del Poder Ejecutivo, fecha 9 del mismo, adjutando un proyecto de ley sobre capital. El mensaje se reducía á decir que luego que los representantes consagrarán á este importante asunto la atención que él demandaba, se convencerían que sólo por ese medio podía establecerse un gobierno regular, que empezara á obrar activamente en la organización del Estado, declarando el presidente que era su deber hacer constar que, mientras esa ley no se dictara, no le sería posible desempeñar como deseaba los altos deberes que se le habían encomendado.

El proyecto de ley estaba concebido en seis artículos: por el 1° se declaraba la ciudad de Buenos Aires capital del Estado, señalándole en el 2°, como distrito, el territorio comprendido entre los puertos de Las Conchas y el de la Ensenada, el Río de la Plata y el de Las Conchas, hasta el puente de Márquez, tirando desde éste una línea hasta Río Santiago. Se nacionalizaba, por el artículo 3°, todos los establecimientos de la Capital, y por el 4° se colocaba en idéntica condición las obligaciones contraídas por la Provincia de Buenos Aires.

El artículo 5° prometía que en el resto del territorio se organizaría una provincia, disponiendo el 6° que, entre tanto, dicho territorio quedaría bajo la inmediata dirección de las autoridades nacionales.

La comisión de negocios constitucionales del Con-



greso aconsejó la adopción del proyecto, tal como lo había presentado el Poder Ejecutivo, designando miembro informante al doctor don José Valentín Gómez.

La discusión comenzó el día 22, abriendo el debate, contra las reglas establecidas, el señor Ministro de Gobierno, don Julián Segundo de Agüero, quién, al comenzar su discurso, declaró que la iniciativa del Presidente se fundaba en el concepto que tenía de que el Gobierno de la Nación carecería de la fuerza y de la autoridad que necesitaba para atender á la crisis del país, si no se le investía de todos los poderes que correspondían á su autoridad suprema; y que su opinión se había robustecido con los sucesos que habían sobrevenido en los días que mediaban desde que se había presentado el proyecto de capitalización, de tal manera que consideraba que era necesario «no tener alma» ó haber perdido toda sensibilidad por el interés del país, para no reconocer la utilidad y la absoluta necesidad de sancionarlo, si es que la Nación había de salir de los grandes conflictos en que se hallaba.

El ministro de gobierno aludía á la agitación que se había manifestado en todas las esferas sociales desde que apareció la idea de la federalización.

Con la energía propia de su carácter, el doctor Agüero decía: es necesario que se sepa que el gobierno no se desviará una línea de la posición en que lo ha puesto el voto del Congreso; y el ministro que habla tiene la confianza de que los representantes, sobreponiéndose hoy á toda otra consideración que no sea el bien de la nación, no dejarán oír otra voz que no sea el clamor de su razón y el grito de su con-

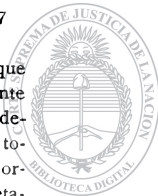


ciencia. La medida está propuesta, el Congreso va á ocuparse de ella, y es necesario que se ocupe con toda la detención que sea posible, y que la discuta con calma, que á esta discusión se le dé toda la solemnidad, toda la publicidad y toda la extensión que le sea indispensable, en la inteligencia de que el gobierno está convencido de que al desenvolverse las razones elementales que demuestran la absoluta necesidad de adoptarla, no habrá resistencia que no se rinda, y cesará de existir esa oposición ó contradicción que se ha desplegado con un carácter á la verdad tan funesto. Entrando luego al fondo del asunto, asentaba esta proposición: «es necesario que el estado tenga una capital; es imposible que la capital exista en otra parte que en Buenos Aires, y pensar que esta capital puede estar sujeta ó dependiente de otra autoridad que no sea la autoridad general de la Nación, es monstruoso y llega hasta ser ridículo.» Desenvolviéndola sucesivamente, agregaba: que no bastaba la simple residencia del poder nacional en una ciudad para constituirla en capital de la Nación, sino que era necesario que tuviera en ella los medios necesarios para regir y gobernar el país. La capital debía ejercer influencia sobre los demás pueblos, decía; no la influencia que pudiera servir para dominarlos y hacerlos servir á su interés ó su pasión, sino la que legítimamente debía corresponder á su posición, á su ilustración, á sus recursos y á todos los demás elementos que entran necesariamente en la organización de los pueblos que forman un Estado; la influencia debía provenir de que la capital fuera el centro de donde salieran, á todos los puntos de la periferia, los recursos, los bienes y facilidades indispensables para



que los pueblos prosperasen. La capital debía ser permanente, porque una capital ambulante era tan monstruosa, como sería un hombre á quien le fuera indiferente llevar la cabeza sobre los hombros ó bajo los pies. La cabeza de la República debe estar en su lugar, lugar que no lo determinan las leyes, sino que la naturaleza lo fija, y éste no puede ser otra que la ciudad de Buenos Aires, la cual reúne las ventajas de haber sido reconocida en ese carácter desde tiempo inmemorial, de reunir mayores elementos de gobierno, y la facilidad de aglomerar muchos más para el bien de todos los pueblos argentinos; sólo en ella existían los establecimientos necesarios y los recursos de que el país necesitaba; en ella se reunía, no sólo una población más numerosa, sino, al mismo tiempo, una civilización superior á la de los demás pueblos. La capital de la República debía estar bajo la inmediata y exclusiva dirección de la legislatura nacional y del Poder Ejecutivo general, porque si eso no sucediera ¿qué vendría á ser en el Estado el Gefe de la Nación? ¿sería posible crear un poder con las fuerzas que demandaban las circunstancias críticas del país, y al cual todo lo que le rodease le fuera extraño, por depender inmediatamente de otra autoridad que no le estuviera subordinada y sujeta? «El gefe de una República, decía, para cuya residencia se le señala un punto ¿podrá obrar con libertad si nada tiene propio, si todo es ajeno y dependiente de otra autoridad? Y se contestaba: Yo no se, en verdad, cómo puede haber hombre á quien ocurra una idea tan extravagante y singular.»

Descendiendo luego á la práctica hacía notar los inconvenientes con que se tropezaría en su adopción.



En seguida sacaba argumento de la importancia que el gobierno de Buenos Aires había adquirido durante la disolución; recordaba que ese gobierno había desempeñado sin comisión y por su propio honor todos los deberes propios de una autoridad general, organizando una administración respetable y respetada, y preguntaba ¿qué se hace con un gobierno de esta clase después de creado un Poder Ejecutivo Nacionnal? ó se sostiene en ese carácter y en el mismo rango, y en tal caso no queda lugar para el Poder Ejecutivo Nacional, ó si cede el puesto, como es preciso que lo ceda, para circunscribirse á los límites que por su nueva posición le corresponde, ¿en qué situación viene á quedar?

El presidente había tenido en cuenta todas estas consideraciones, y desde el primer momento se preocupó de dar los primeros destinos de la nación á las personas que desempeñaban el gobierno de las provincias y hacia las cuales conservaban profunda afección; pero ellas habían resistido, habían desairado á la primera autoridad del Estado, rehusaban empleos y distinciones, y preferían permanecer en la posición escabrosa en que los sucesos las habían colocado. La autoridad provincial había concluido por motivar un conflicto con la de la Nación, y esto debía reproducirse todos los días, mientras las cosas permanecieran en el mismo terreno en que se hallaban. La primera orden del Presidente de la República había dado origen á una contradicción: el Congreso había declarado nacionales las fuerzas veteranas de las provincias; de consiguiente, su gefe inmediato era el Presidente de la República; esta medida la había propuesto el mis-



mo gobernador de Buenos Aires cuando estaba encargado provisoriamente del Ejecutivo Nacional. La ley fué puesta en ejecución inmediatamente en la provincia de Buenos Aires; de consiguiente, esas tropas que habían pertenecido á las provincias, pasaron á ser de la nación; habiendo estado antes bajo la dirección y mando del gobernador, quedaron bajo la dirección y mando del Presidente de la República. En tal virtud, el Presidente recibido del mando, nombró, como era de su deber, un general que mandase esas fuerzas. «El gobernador se consideró despojado del mando de todas las tropas, de las cuales pretendía ser gefe inmediato. ¡Un gobernador de provincia, gefe inmediato de las tropas nacionales! Sin embargo, esa misma cuestión fué llevada por el gobierno de la provincia á la Junta de Representantes, y de esa manera se provocó la contradicción entre la autoridad provincial y la autoridad del Congreso».

Después de extenderse en ese sentido hasta agotar la demostración, consideró la imposibilidad de establecer la capital en otra parte que la ciudad de Buenos Aires, por falta de los medios y de los recursos que eran indispensables en la administración nacional. Con el sentimiento de un verdadero hombre de gobierno, exclamaba: los pueblos hoy obedecen lo que quieren, y es necesario que la autoridad empiece á ser robustecida para que pueda hacer ejecutar lo que ella manda; de lo contrario, es un delirio pensar en que haya nación, y será un delirio pensar en que habrá un gobierno nacional y una representación que merezca este nombre; «si no se le da vigor, se vivirá capitulando con las preten-



«siones de los hombres y con los caprichos de los pueblos. Esto señores, no es mandar y así no se organiza un Estado.»

La última parte del discurso del ministro de gobierno tuvo por objeto demostrar que la medida propuesta era de evidente provecho para la Provincia de Buenos Aires, en cuyo interés y derechos pretendían apoyarse los que la combatían.

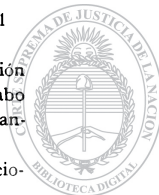
Hablaron también en favor del proyecto el Dr. D. José Valentín Gómez, el general Mansilla y algunos otros diputados, combatiéndolos con energía y con tenacidad, Acosta, Gorriti, Manuel Moreno, Vidal, Frías y el Deán Funes.

El Dr. Acosta opuso el proyecto la ley de la Provincia de Buenos Aires de 15 de Noviembre de 1824, cuyo principio fundamental era que la provincia se regiría por sus propias instituciones hasta que se promulgara la constitución nacional, que debía someterse á su aprobación, regla incorporada á la ley fundamental de 1825 para todas las Provincias, y deducía de ese antecedente que el Congreso carecía de facultades para suprimir el régimen provincial en Buenos Aires y eliminar la provincia como entidad política.

Don Manuel Moreno habló en contra del proyecto una, dos y tres veces. Sostuvo que todo poder legislativo tenía límites, si era ordinario, en la constitución, y si constituyente, en la voluntad del pueblo que lo había organizado con fines determinados, y siendo este último el caso en que se encontraba el Congreso, debía ceñirse á las reglas que habían precedido á su organización y que estaban marcadas en la ley provincial invocada por el Dr. Acosta,



que ratificó el Congreso en la ley de 1825. Alegó que el proyecto era impolítico, porque removía las pasiones que anarquizaron la República el año 20, provocando la desconfianza de las provincias por su tendencia centralista y la resistencia de Buenos Aires, cuyo territorio se desmenbraba y cuyo gobierno se suprimía. Agregó que era un proyecto amenazador, porque variaba la ley fundamental contra Buenos Aires, la más rica y la más fuerte de las provincias argentinas, y con tal precedente las otras provincias más débiles y desamparadas 'podían y debían temerlo todo. Hizo el elogio del sistema federal, y afirmó que nacionalizar no era bastante, si se suprimían las instituciones que garantizaban libertades y derechos; y agregó que la ley de capital importaba un atentado á la fe pública, porque el Congreso se había comprometido á respetar el régimen anterior de las provincias en el artículo 3° de la ley fundamental, y si el artículo 4° se interpretaba de tal manera que dejaba sin efecto el tercero, aquella ley adquiriría los caracteres de una verdadera perfidia. Opuso á la designación de Buenos Aires como capital, razones de orden diverso: la desaparición de la provincia, el inconveniente de que no fuera un punto central del territorio argentino, la circunstancia de que estuviera más expuesta que ninguna otra ciudad á los peligros de la invasión extranjera, por su situación geográfica; el ejemplo de las otras capitales del mundo, cuya situación difería fundamentalmente de la que tenía Buenos Aires con relación al resto de la República y á las otras naciones; y, por último, sostuvo que la capital de Buenos Aires no tenía otro fin que constituir un gobier-



no fuerte, contrariando así los fines de la revolución de Mayo que había sido iniciada y llevada á cabo para estrechar la esfera del poder y no para ensancharla.

Los debates terminaron el 14 de Marzo, sancionándose el proyecto por 26 votos contra 14.

Tres días después, el ministro Agüero comunicó la ley al gobernador de la provincia, general Las Heras, encomendándole su ejecución. El gobernador contestestó inmediatamente que elevaba todos los antecedentes á la legislatura de la provincia. La resolución del Poder Ejecutivo Nacional fué fulminante como el rayo. Sin dejar pasar momento expidió un decreto declarando cesante al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y encargando de su ejecución al enérgico minisiro de gobierno, el que comunicó la orden al general Las Heras en términos perentorios. El general Las Heras avisó recibo de la orden, acatándola con dignidad, y abandonó su puesto el mismo día 7. La Junta Representativa se reunió el 8, pero se disolvió en seguida, para no reaparecer en el escenario político hasta después de la caída del gobierno presidencial.



CAPÍTULO XIII

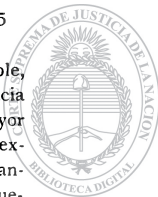


SUMARIO:—I Mensaje del Presidente reclamando del Congreso la sanción de la Constitución—Decreto del Congreso ordenando á las provincias que envíen sus diputados y expresen su opinión sobre la forma de Gobierno—Ley determinando las calidades requeridas para ser diputado y declarando que su remoción corresponde al Congreso—**II** El Gobierno de Córdoba rechaza la ley que crea el P. E. nacional permanente—Mensaje del Presidente y resolución del Congreso—**III** Informe de la Comisión de negocios constitucionales del Congreso sobre la consulta respecto de la forma de gobierno—Resolución del Congreso—**IV** La comisión de negocios constitucionales del congreso aconseja la forma republicana representativa consolidada en unidad de régimen—Discusión y resolución del Congreso—**V** Informe de la comisión de negocios constitucionales sobre el proyecto de constitución—Resolución del Congreso sobre el cese intimado por la Provincia de Córdoba á varios de sus diputados—**VI** La constitución: su discusión y sanción—Nombramiento de comisionados para presentar la constitución á los pueblos.

I—El 4 de Abril el señor Rivadavia dirigió un extenso mensaje al Congreso recomendándole la urgencia de dictar, sin pérdida de momento, la constitución del Estado. Hacíale notar que el Congreso, al declararse constituyente, reconocía que esta era su primera y más importante función, y que corría el riesgo, si permanecía mucho tiempo inactivo, de perder poco á poco la opinión y enagenarse la confianza del país.



El estado en que hoy se hallan las provincias, decía el mensaje, reclama urgentemente de la representación nacional esa ley fundamental que debe fijar su suerte de un modo irrevocable, constituir y organizar la Nación. En otra circunstancia sería quizá prudente marchar con paso más lento, y sin dar, desde luego, la constitución del Estado, ocuparse solamente de organizarlo y constituirlo progresivamente; mas después de las habitudines que han contraído las provincias en el aislamiento en que han permanecido por tanto tiempo, no sólo sería insuficiente, sino que diariamente aumentarían en la ejecución las dificultades que desgraciadamente se siguen hoy á cada paso y por todas partes. . . . Después de los pasos que, para asegurar la suerte del país en materia tan grave, ha dado la representación nacional, agregaba, es llegado el caso, á juicio del Presidente, de obrar ya con más suceso y acabar de asegurar la confianza de los pueblos, poniéndolos en posesión de lo que con tanta justicia exigen de sus representantes. No hay en este momento cosa alguna que deba retraer al Congreso de entrar en tan penosa tarea. El quiso, antes de ocuparse la constitución del Estado, oír la opinión de los gobiernos provinciales sobre la forma de gobierno que considerasen más conveniente al bien y á la prosperidad nacional. Casi todas las provincias han manifestado sus deseos á este respecto; y la morosidad de una ú otra en llenar sobre este punto sus deberes no debe distraer al Congreso para empezar á ocuparse de este negocio que es del principal interés de los pueblos que representa. . . . Aún no se han incorporado muchos de los representantes que deben integrar á la representación nacional, con arreglo á



ley del 19 de Noviembre del año anterior. Es sensible, ciertamente, que cuando el Congreso con tanta justicia se propuso por aquella ley reunir en su seno mayor caudal de luces y de opinión, precisamente para expedirse con más confianza y mejor suceso en la sanción de la constitución que debía presentar á los pueblos, algunos de ellos hayan obrado con tanta lentitud para segundar, por su parte, tan benéficas miras. Tiempo ha habido sobrado para que de todos los puntos del territorio hubiesen concurrido los representantes respectivos; sin embargo, aquella observación es justa. Mas el Presidente considera que ella no debe embarazar, para que el Congreso se ocupe, desde luego, de las medidas que deben preceder y facilitar la deliberación en asunto tan grande, y, ante todo, importa se fije ya irrevocablemente el tiempo en que debe empezar á discutir la constitución que se propone presentar á la aceptación de los pueblos; que esto se intime á las provincias, especialmente á las que aparecen hoy en semejante morosidad, y que, si requeridas nuevamente, no remiten sus representantes al término que se acuerda, los que se hallan presentes se contraigan á llenar el deber que les impone su misión. . . . »

El 15 de Abril el Congreso decretó que el Presidente de la República invitara á las provincias que aún no lo hubieran hecho, para que remitieran sus diputados, explicando su opinión sobre la forma de gobierno, y declaró que á los dos meses de la fecha ó antes, si se hallasen reunidas las dos terceras partes de los diputados, procedería á pronunciarse sobre la forma de gobierno que debía servir de base á la constitución, la cual debía ser presentada á los pue-



blos por el Congreso dentro del término perentorio de un año.

El mismo día declaró las calidades requeridas en los diputados al Congreso, á saber: ciudadanía natural ó adquirida con siete años de anticipación; veintiseis años de edad, un capital de cuatro mil pesos, ó en su defecto, profesión ú oficio útil; en la misma ley declaró que correspondía exclusivamente al Congreso la facultad de separar los diputados cuyos diplomas hubieran sido aprobados, siendo entendido que no podría declararse tal separación por motivo de las opiniones de los diputados, sino en virtud de grave crimen y con dos tercios de votos.

II—El día 30 de Mayo de 1826 el gobernador de la Provincia de Córdoba se dirigió al Presidente de la República haciéndole saber que la legislatura provincial había sujetado á examen la ley sancionada por el Congreso constituyente el 6 de Febréro, para la instalación del Poder Ejecutivo Nacional permanente, y que, considerándola atentatoria contra las garantías y libertades que consignaba la ley fundamental de 23 de Enero de 1825, había sancionado el siguiente decreto: «Estando como están las provincias en un estado propiamente federal de hecho y de derecho, y «no habiéndose aún dado la constitución del Estado «que fije la forma de gobierno, no se admite la ley «de 6 de Febrero inmediatamente anterior, por la «que el Congreso general constituyente ha creado «un Poder Ejecutivo Nacional permanente, contra el «tenor expreso de la fundamental de 23 de Enero de «1825».

El Presidente elevó este documento al Congreso



con fecha 9 de Junio á fin de que dictara la resolución que creyera oportuna, para salvar su decoro sin comprometer la suerte del Estado en las circunstancias críticas que el país atravezaba, y que si podrían ser indiferentes al gobierno de Córdoba, seguramente no serían desatendidas por los representantes de la Nación. Concluía el mensaje en estos términos. «El Presidente se limita á recomendar al Congreso «que hoy es más urgente el que se contraiga asiduamente á dar la Constitución que ha de regir á «los pueblos permanentemente, y que logrará al fin «cerrar el abismo de la anarquía de que desgraciadamente presentan las autoridades de Córdoba un «síntoma tan alarmante».

El Congreso tomó el asunto en consideración en la sesión del 26 de Julio, en la cual se dió cuenta del informe escrito de la comisión de negocios constitucionales que hacía á grandes rasgos la historia política de los actos legislativos del Congreso desde que sancionó la ley fundamental de año 25, para demostrar que si no había establecido el Poder Ejecutivo Nacional permanente, desde el primer momento, era porque había tenido que transigir con las circunstancias, y que, si bien era cierto que había reconocido á las provincias la facultad de proveer á sus atenciones interiores por las instituciones ó prácticas que tuvieran ó formasen en la sucesivo, había tenido el cuidado de establecer también que se reservaba proveer lo necesario sobre los objetos nacionales, quedando, desde entónces, avisadas las provincias de que cuando se hubiesen robustecido los vínculos de la Unión Nacional, el Congreso se expediría con la plenitud de sus facultades en todo lo que de-



mandasen la seguridad, la prosperidad y la independencia del país, sin perjuicio de presentar oportunamente á su consideración la Constitución Nacional. La comisión llamaba la atención del Congreso sobre la especialísima circunstancia de que Córdoba manifestaba su oposición á la ley de Febrero después de transcurrido varios meses y cuando ya todas ó casi todas las provincias habían aceptado la autoridad presidencial, cuando la Nación se hallaba empeñada en una guerra, sufriendo los rigores del bloqueo que interceptaba su comercio, y en el momento en que el ejército argentino iba á marchar sobre el enemigo.

Después de extenderse en varias observaciones, concluía aconsejando la sanción de una minuta de comunicación al poder ejecutivo, que motivó extensos debates, y fué sancionada, finalmente, el 28 de Julio, en estos términos: «Habiendo tomado el Congreso en detenida consideración el decreto de la «Honorable Junta de Representantes de Córdoba de «30 del próximo pasado mayo, por la que se «resiste la ley dada en 6 de Febrero del presente «año, en orden á instalación permanente del Poder «Ejecutivo Nacional, se ha penetrado de su verdadero carácter, así como de las fatales consecuencias «que puede proporcionar á la Nación; pero, de acuerdo el Congreso con V. Excelencia y firme en la resolución de sobreponerse á todos los obstáculos que «pueden presentarse para hacer el bien nacional, en «cuanto dependa de su arbitrio, ha creído no deber «innovar cosa alguna en virtud del procedimiento de «la Honorable Junta de Córdoba, y apresurarse á «dar principio á la obra de la Constitución que po



«drá satisfacer todos los intereses, y apaciguar todas las inquietudes que el estado precario en que se hallan actualmente los pueblos de la Unión dejanacer á pesar de los desvelos de las autoridades nacionales».

III—En la sesión del 17 de Junio, la comisión de negocios constitucionales informó al Congreso sobre el resultado de la consulta que se había dirigido á los pueblos respecto de la forma del gobierno más conveniente al bien general de la república.

Según los datos de la comisión, las provincias se habían explicado en estos términos: Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero, por el gobierno representativo republicano federal; Salta, Tucumán y La Rioja, por el sistema unitario ó concentrado; Catamarca, San Luis y Corrientes se habían librado en esta parte á la resolución del Congreso; Buenos Aires, Entre-Ríos, Santa Fé, la Banda Oriental y Misiones no habían manifestado opinión. Decía la comisión que se abstenía de abrir juicio sobre el fondo del asunto, porque no se le había dado tal encargo, habiendo tomado el Congreso sobre sí la misión de fijar la base de sus trabajos futuros. El diputado Acosta opinó que se suspendiera por dos meses la consideración sobre la forma de gobierno, y esta moción fué desechada, después de extensos debates, resolviéndose que la comisión se expidiera sobre el fondo del asunto, es decir, que aconsejara al Congreso la forma de gobierno que debía adoptar, quedando establecido que éste se ocuparía del asunto inmediatamente después que la comisión se expidiera.



IV—Ésta cumplió su encargo, y en la sesión del 14 de Julio presentó el siguiente proyecto de decreto: «La comisión de negocios constitucionales redactará el proyecto de Constitución sobre la base de un gobierno representativo consolidado en unidad de régimen».

Según la práctica establecida por el Congreso para la discusión de estos graves asuntos, el proyecto de decreto se presentó con un detenido informe escrito, que sustancialmente decía: que las provincias de la Unión habían proclamado de un modo decidido y constante el sistema representativo republicano, que ésta no era la opinión del momento, sino el voto popular, reflexivo y permanente de toda la nación, y que la única cuestión que quedaba pendiente podía fijarse en estos términos: «¿se ha de gobernar bajo la forma de administración federal ó de unidad? ¿se afianzará mejor el orden, la libertad y la prosperidad de la República, dividiéndose en tantos Estados como provincias que, aliadas políticamente bajo un gobierno federal para la dirección de los negocios nacionales, se reserven el resto de soberanía necesaria para su dirección particular, ó formando de todas las provincias un Estado consolidado bajo un gobierno central y encargado del régimen interior de todo? ¿cuál de estas formas será más á propósito para organizar, conservar y hacer feliz á la República Argentina?»

V—La comisión declaraba que la bondad de una forma de gobierno dependía del estado de la sociedad á la cual se aplicaba, y que la mejor era la que aseguraba más eficazmente los derechos del



hombre, importando, para determinar la preferencia, pulsar, en cada Nación, las relaciones sociales y considerar prácticamente sus circunstancias físicas, morales y políticas. Entre las circunstancias físicas encontraba como más notable la despoblación del país: muchas de las provincias no pasaban de 15.000 habitantes esparcidos á grandes distancias, pobres, á pesar de la feracidad del suelo; y preguntaba ¿será prudente despedazar la Nación en muchas fracciones con el nombre de Estados, cuando de todas ellas apenas puede formarse una república de 500,000 habitantes? La federación, en tales circunstancias y con tan reducido número de habitantes, no alcanzaría á organizar una representación conveniente, porque, ó tendrían los pueblos que elegirla entre toda clase de gente, aún entre incapaces de ejercer los derechos políticos, ó se verían obligados á concentrarla en el pequeño número de prepotentes, constituyendo, por el primer camino, una democracia destructora, y por el segundo, una oligarquía opresora. A esto se agregaban las circunstancias morales del país, en abierta oposición con la forma de gobierno federal, comenzando por las habituales adquiridas en dos siglos bajo el gobierno español, y siguiendo con los años de la primera época de la revolución.

Las asambleas representativas del pueblo, decía, la separación de los tres poderes y la balanza con que deben contrapesarse las cámaras legislativas, son los tres grandes descubrimientos que se han hecho en el arte de constituir un gobierno libre, y era indudable que la masa general de los habitantes de las provincias carecía de la instrucción que demandaba la organización de los tres departamentos de go-



bierno en cada Estado, en cuya mayor parte faltarían seguramente hombres preparados para el desempeño de las funciones públicas.

La experiencia lo demostraba. En muchas provincias no se habían establecido todavía asambleas representativas; la mayor parte no tenía tribunales de justicia; varios ciudadanos de Tucumán habían pretendido traer las apelaciones de sus pleitos al tribunal de la Capital; un diputado de Santa Fé promovió igual solicitud con el gobierno nacional. Por lo que habían hecho y por que había sucedido en el período de aislamiento, se podía predecir lo que inevitablemente sucedería en un gobierno federal permanente que, sin poderes divididos é independientes, se alzaría con todo el poder público y no saldría de ese terreno sino para caer en la oligarquía ó en la demagogia. El período de aislamiento no había predisposto las provincias al gobierno federal, porque esa época había sido una lección práctica y terrible. En los seis años corridos las provincias habían tenido en sus manos los elementos y el poder de organizarse; pero, con excepción de muy pocas, las demás habían retrocedido en materia de gobierno; algunas no tenían instituciones ni buenas ni malas, y en ellas no había más ley que el capricho del que las gobernaba. La disolución del gobierno general había producido también la separación de las ciudades subalternas, separación sostenida por la más irrevocable resolución de no subordinarse á sus antiguas capitales. En tal estado, el país podía reorganizarse con el sistema de unidad; pero sería imposible convertir en estados soberanos las campañas desiertas y pueblos míseros.



Circunstancias políticas concurrían en el mismo sentido: los fines de toda asociación política son la seguridad y la libertad; pero la primera debe preceder á última, y no sería posible afianzar la seguridad interior en un país despoblado, de grande extensión, sin darle al gobierno acción fácil, rápida y abierta, la que no se obtendría con la organización complicada y débil del sistema federal. La seguridad exterior, igualmente, reclamaba la organización de un gobierno con esos mismos atributos, y así, después de pulsadas las circunstancias del país, de consultados la propia experiencia y los documentos que presentaba la historia, concluía la comisión que el gobierno representativo de la República, consolidado en unidad de régimen, era al único que salvaba los inconvenientes indicados y garantizaba los derechos sociales, reuniendo las ventajas de los gobiernos libres y apartando sus defectos.

Tomaba en cuenta, al concluir, el ejemplo de los Estados Unidos; pero observaba la diferencia enorme entre las circunstancias de aquel país y el Argentino, observando que los Estados Americanos, que al emanciparse se confederaron, no hicieron una transición violenta de una forma de gobierno á otra, sino que perfeccionaron una organización tan antigua como su existencia, mientras que lo contrario sucedería si las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuya tradición era el gobierno central, se organizaban bajo forma federal. Hasta aquí el informe de la comisión de negocios constitucionales compuesta de los Señores doctor don Valentín Gómez, don Manuel Antonio de Castro, don Francisco Remigio Castellanos, don Santiago Vázquez y don Eduardo Pérez.



El doctor Castro amplió el informe escrito con un discurso sustancial, analítico y detallado, cimentado principalmente sobre la incapacidad de los pueblos argentinos para formar Estados federales, por su despoblación, su pobreza y su ignorancia, haciendo constar, entre otras circunstancias, que era tanta la falta de hombres preparados para el gobierno en las provincias, que en muchas de ellas los gobernadores eran quienes conocían en grado de apelación de los casos de justicia, por falta de letrados. Santa Fé no tenía un solo abogado; la provincia de Corrientes no tenía sino uno: el doctor Cosío; Entre Ríos y Misiones no tenían ninguno, y según lo afirmaba el diputado general don Lucio Mansilla, los asuntos criminales se decidían en los tribunales con arreglo á las ordenanzas militares de Colón.

El diputado Acosta, por Corrientes, insistió en análogas demostraciones, ilustrando el caso con el ejemplo de lo que ocurría en su provincia, donde la asamblea legislativa se componía de cinco individuos, de los cuales bastaban tres para despotizarla; donde no había otro poder judicial que dos alcaldes ordinarios que sentenciaban sin audiencia de los reos, sin acusación ni defensa, alcaldes legos, legísimos, según decía el doctor Acosta, que cuando más consultaban la opinión de un clérigo. Ah! señores! agregaba el diputado por Corrientes, cuando me acuerdo de la opinión de un eclesiástico que jamás ha saludado las tácticas de un cuerpo legislativo; y qué escándalo cuando recuerdo que este eclesiástico firmaba sentencias de muerte; que de este no hay más recurso que al otro alcalde que se llama alcalde mayor, y ¿quién aconseja



á este alcalde mayor, sino el mismo clérigo que aconsejó al primero al sentenciar en 1ª instancia?

Se opuso con tenacidad al proyecto de la Comisión y votó por el sistema federal el Diputado Gaisteo de la Provincia de Santa Fé, sosteniendo que las circunstancias físicas, políticas y morales del país, que había invocado la Comisión en defensa de la unidad aconsejaban adoptar el sistema federal, principiando por las distancias que separaban los centros poblados de las provincias, y concluyendo por preguntar si restablecida la unidad no se volvería á un poder análogo al de los reyes de España.

Hizo valer la diversidad de ideas en materias fundamentales prevalentes en los diversos pueblos argentinos, é invocó, como ejemplo, lo que ocurría en la cuestión religiosa, oponiendo al liberalismo del gobierno de Buenos Aires, el sentimiento católico apostólico romano de los pueblos del interior, y manifestándose decididamente adverso á la libertad de cultos que Buenos Aires había declarado.

El doctor don Juan José Passo intervino en el debate para proponer que se postergara la deliberación sobre el asunto, hasta que se pudieran armonizar las ideas divergentes que prevalecían en las provincias, anticipando su opinión en favor de una forma mixta de unidad y federación.

El diputado Gorriti puso la autoridad de su palabra al servicio del proyecto de la Comisión, que fué sancionado, finalmente, en la sesión del 19 de Julio por 42 votos contra 11 (1).

(1) Votaron por la forma unitaria que la Comisión aconsejaba: Laprida, Casero, Frías, Gallardo, Mansilla, González (L.), Acosta, Vélez, Vazquez



Merece notarse la circunstancia de que en este debate no tomaron parte los representantes más caracterizados de la idea federal, comenzado por Dorrego, y se deduce de uno de los discursos del doctor Passo que su silencio calculado causó grande extrañeza. Probablemente, por razones de táctica parlamentaria, prefirieron esperar el proyecto de constitución para combatirlo en toda su integridad.

El 1° de Setiembre se expidió por fin la Comisión, presentando la Constitución que en nuestros fastos políticos lleva el nombre de Constitución Unitaria del año 26.

En su informe la Comisión comenzaba por declarar que no había pretendido hacer una obra original, porque habría sido extravagancia alejarse de lo que en tal materia estaba reconocido y admitido por las naciones más libres y civilizadas de la tierra, basando consultar los consejos de la prudencia para aplicar sus principios á las circunstancias locales y aptitudes de cada pueblo. Agregaba que había tomado como base la Constitución de 1819, que tenía en su favor el antecedente de haber sido sancionada por un Congreso de Representantes de la nación, legalmente constituido, y de haber sido jurada por los pueblos; pero que al hacerlo había tenido en cuenta

González (C.), Andrade, Lozano, Acosta (M. A.), Castellanos, Díaz de la Peña, Zavaleta, Gómez, Pintos, Somellera, Blasco, Martínez, Riglos, Campana, Morel, Portillo, Villanueva, Videla, Ramos Mejía, San Martín, Rosas (G.) Bustamante, Garmendia, Helguera, Celayos, Ocanto, Vargas, Rojas, Passo, Alagón, Belgrano, Zepeda y Gorriti.

En contra:

Cornejo, Galisteo, Vidal, Ugarteche, Funes, Galán, Marcos Castro, Juan Rivas, Dorrego, Igarzábal y Caride.



las deficiencias que en su época motivaron justas censuras, y había proyectado las reformas que debían perfeccionarla.

Entre las deficiencias que marcaba en su informe mencionaba:

1°. Los principios que se referían á la ciudadanía, que la Constitución de 1819 había omitido y que en concepto de la Comisión, era ventajoso declarar con toda la liberalidad que convenía á los intereses del país y que reclamaban sus relaciones interiores;

2° La omisión del sistema electoral para la formación de la cámara de diputados, no habiéndose explicado si debían ser nombrados por elección directa ó indirecta, punto que la comisión resolvía en su proyecto, en favor de la primera, fundándose en que la cámara de diputados era órgano inmediato de la opinión pública, y en que convenía que tuviera toda la popularidad necesaria para promover los derechos de los pueblos y proteger sus libertades, así como para iniciar las contribuciones con que fuera necesario gravar á los ciudadanos.

Reformaba substancialmente la constitución del año 19 en todo lo que se refería á la composición del senado, porque aquella establecía un sistema incompatible con los principios fundamentales de igualdad, dando títulos de preferencia para optar á las bancas del senado á ciertos funcionarios públicos de la más elevada gerarquía, lo que importaba constituir una verdadera aristocracia administrativa, suponiendo mejores á los que habían llegado á cierta categoría en las funciones públicas, y, además, por la intervención que al Poder Ejecutivo le correspondía para la provisión de una parte de sus miembros, formándose



la mayoría por ese medio y por la designación de cuerpos que obraban sin misión especial de los ciudadanos para ese fin, y que, por lo mismo, no podían ser órgano de su voluntad.

La comisión pensaba que para el puesto de senador, como para todo otro, no debía reconocerse otros títulos de preferencia que la virtud y el mérito: la residencia, la posesión de cierta propiedad, la edad, etc., eran meras garantías para el mejor acierto de la elección; pero no fundaba privilegio alguno en favor de clase determinada. Sin embargo, como el senado debía ser un cuerpo mediador entre el ejecutivo y la cámara de diputados, para calmar sus mutuas pretensiones cuando fueran exageradas; como debía, además, moderar los sentimientos de localidad de que podían estar animados los diputados, dábales un carácter más nacional prescribiendo que las provincias nombraran cada una dos senadores, uno de los cuales no debía tener origen ni residencia en ella.

Otra reforma fundamental que introducía el proyecto de 1826 á la constitución de 1819 era la que se refería al sistema de elección de Presidente.

La constitución del año 19 confiaba la elección á las dos cámaras, al Congreso reunido en asamblea, y la comisión sustituía ese sistema con la designación del primer magistrado de la República por medio de colegios electorales, cuya formación veremos en su lugar, manteniendo la intervención del Congreso para el caso de que no se reuniera, en favor de una persona, las dos terceras partes de votos de todas las provincias.

Innovaba también la constitución del año 18 dando



al ministerio participación en la discusión de las leyes, y con este motivo hacía notar que en 1819 era poco conocida la conveniencia de la intervención informativa del gobierno por medio de sus ministros en las discusiones que preparan la sanción de las leyes ó era demasiado temida su presencia; pero que el tiempo y la experiencia habían proporcionado al país lecciones prácticas sobre ese punto, y que la opinión se había modificado. Era, sin duda, de importancia inmensa dejar á los poderes legislativo y ejecutivo la oportunidad de acercarse y entenderse para la sanción de las leyes á cuyo acierto podían contribuir sus conocimientos respectivos. El aislamiento excesivo podía producir funestos extravíos, y no había inconveniente en facilitar su comunicación y acuerdo, si esto podía obtenerse salvando su mutua independencia; había ventaja indiscutible en que el cuerpo legislativo interrogara y oyera al ministerio en las oportunidades que marcara el curso mismo de los negocios ó que las circunstancias exigieran, dándole al ejecutivo medios de satisfacer en toda ocasión á la opinión pública, exponiendo sus intenciones y la extensión de sus miras, el carácter de su política y la justicia de su procedimiento, en el momento mismo en que fuera requerido por medio de la discusión parlamentaria.

El Congreso, decía la comisión, nada aventura con la presencia de los ministros, una vez que ellos no invistan el carácter de diputados, ni concurren con su sufragio á la sanción de la ley. La independencia de los diputados peligraría menos desde que el gobierno no tuviera necesidad de emplear medio alguno para comprometerla, contribuyendo á la ilustración de



la materia y al convencimiento por la fuerza de su exposición. Pero agregaba: no bastaría con que los ministros pudieran asistir á las sesiones del cuerpo legislativo y presentar los informes que en determinados casos tuviere éste á bien exigirle; es, además, de la conveniencia pública y del más alto interés, que el gobierno pueda proponerle por su conducto cuantas medidas considere convenientes á la felicidad de la República, y digno, por lo mismo, de recibir con su sanción el sello de la ley . . . ; facultad que se hace más indispensable en un país naciente en que es preciso obrar y crear al mismo tiempo, y en que, siendo tantas y tan frecuentes las necesidades públicas, es imposible que los encargados de la ley, en su particular posición, puedan conocerlas por sí mismos.»

A más de esta reforma, que afectaba la organización general de la Nación, introducía otras que concernían al régimen provincial, destinadas á satisfacer las tendencias particularistas de los estados, especialmente la que se refería á la designación de los gobernadores de provincia, los que no debían ser nombrados exclusivamente por el Poder Ejecutivo, sino con noticia y consentimiento del Senado.

La última reforma de la constitución del año 19 declaraba el derecho de los pueblos para aceptar ó rechazar la constitución que el Congreso sancionara, declaración que preparaba como solución inmediata y necesaria la organización parcial de la República, hasta que las provincias que preferían el sistema federal, vencidas ó convencidas, se incorporasen á la unión.

El Congreso resolvió comenzar la discusión de la Constitución el día 11 de Setiembre, y empleó las sesiones intermedias en discutir un proyecto relativo

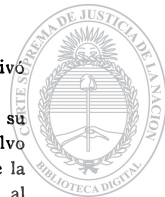


al cese de los diputados de la provincia de Córdoba. El gobierno de Córdoba, después de desconocer la ley que creaba el Poder Ejecutivo Nacional Permanente, intimó á los diputados de esa provincia su cese, acto que motivó la siguiente resolución del Congreso: «Artículo 1º No pudiendo el Congreso Nacional ser por más tiempo indiferente á los diversos y repetidos actos con que la Junta de Representantes de la Provincia de Córdoba, traspasando escandalosamente la línea de sus facultades, ha pretendido subordinar á su sanción la leyes generales dictadas con arreglo al artículo 4º de la ley 23 de Enero de 1825; no sólo al atentatorio procedimiento de haber rechazado la de 15 de Abril del presente año, ordenado el cese de los señores Diputados de aquella Provincia, don José Eugenio de Portillo, don Eduardo Pérez Bulnes, don Elías Bedoya y don Salvador Maldonado, se declara tal resolución ilegal y refractaria de la citada ley y que, en consecuencia, no les obsta en manera alguna al libre y expedito ejercicio de sus funciones en el Congreso.

«Artículo 2º Comuníquese esta resolución é igualmente al señor Presidente de la República para su inteligencia »

VI—El 11 de Setiembre, como estaba decretado, entró á discutirse el proyecto de Constitución expedido por la comisión de negocios constitucionales, siendo aprobado en general después de un ligero debate.

Como esta Constitución no era, en general, sino la repetición de la de 1819, que ya hemos analizado, de dedicaremos nuestra atención á los capítulos innovados ó



agregados, y especialmente á la discusión que motivó la forma de gobierno.

La sección primera, titulada «de la Nación y su culto», no motivó observación digna de interés, salvo las objeciones que opuso el diputado Galisteo, de la provincia de Santa Fé, al artículo que se refería al culto, pretendiendo que se declarara que la religión Católica Apostólica Romana era la religión del Estado, con exclusión de todo otro culto público ó privado, indicación que fué desestimada por el Congreso.

La sección 2ª, sobre la ciudadanía, del proyecto de constitución fué sancionado con algunas modificaciones, declarando que eran ciudadanos de la Nación Argentina los hombres libres nacidos en su territorio y los hijos de estos donde quiera que nacieren; los extranjeros que hubieran combatido ó combatieren en el ejército de mar y tierra de la República, los extranjeros establecidos en el país antes de la declaración de la independencia que se inscribiesen en el Registro y los demás que, establecidos después de aquella fecha, obtuvieren carta de ciudadanía.

La ciudadanía se perdía por la aceptación de empleos, distinciones ó títulos de otra nación, sin autorización del Congreso, y por pena infamante; y se suspendía por no haber cumplido veinte años de edad, siendo soltero, por no saber leer ni escribir, requisito que sólo era exigible quince años después de la fecha de la aceptación de la Constitución, por la naturalización en otro país, por el estado de deudor fallido, por ser deudor del tesoro público y por ser criado á sueldo, simple soldado de línea, vago ó procesado en causa criminal de que pudiera resultar pena corporal o infamante.



La sección tercera, dedicada á la forma de gobierno, declaraba que la Nación Argentina adoptaba para su gobierno la forma republicana representativa consolidada en unidad de régimen, delegando el ejercicio de la soberanía en lo poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

La discusión sobre la forma de gobierno fué iniciada por el diputado Cavia, defensor del sistema federal, en la sesión del 29 de Setiembre, rebatiendo el informe de la comisión de negocios constitucionales; pero el *leader* de los federales fué el diputado Dorrego, que sostuvo, que la opinión de las provincias y aún la de la capital estaba decididamente por el sistema federal, y que este sistema respondía mejor á las exigencias de la libertad política, comprobando su afirmación con el ejemplo de los Estados Unidos; que las provincias tenían aptitudes para formar estados federales, é hizo con este motivo un elocuente discurso sobre las riquezas naturales de la provincia de Santiago del Estero, que representaba, augurándole su desenvolvimiento y su progreso el día en que, bajo los auspicios del sistema que preconizaba, pudieran aplicarlo en paz y libertad.

Fueron sus adversarios de este debate, don Valentín Gómez, quien mostró sus altas dotes parlamentarias, y el diputado Gorriti, su rival en elocuencia, quienes sostuvieron que la idea federal, proclamada por Artigas, era rechazada por los pueblos, que sólo en la unidad veían el medio de organizar y consolidar la nación.

El sistema unitario fué definitivamente sancionado el 4 de Octubre por 41 votos contra 11 (1).

(1) Votaron por el sistema unitario los diputados:



El Poder Legislativo, de que se ocupa la sección cuarta, se organizó de acuerdo con el dictamen de la comisión, estableciéndose una cámara de Representantes y otra de senadores. La primera compuesta de diputados elegidos por nombramiento directo de los pueblos, á simple pluralidad de sufragios, en la proporción de uno por cada 15.000 habitantes ó una fracción de 8.000 (1).

El senado estaba compuesto de dos senadores por la capital y otros dos por cada una de las provincias, de los cuales uno al menos, no debía ser natural ni vecino del distrito de su elección.

Las calidades para ser elegido representante eran: 25 años de edad, 4.000 pesos de capital ó en su defecto profesión, arte ú oficio útil, sin dependencia del Poder Ejecutivo por servicios de sueldo, y 7 de ciudadanía antes del nombramiento. Su duración era de cuatro años.

Neirol, Caveró, Laprida, Frias, Tezanos Pinto, Gallardo, Calderón, Acosta, Vélez, Vazquez, Andrade, Castro, Castellanos, Díaz de la Peña, Zavaleta, Gómez, Somellera, Blanco, Riglos, Castex, Campana, Avellaneda, Maldonado, Barros, Ruso, Portillo, Bustamante, Videla, Ramos Mejia, San Martín, Medina, Garmendia, Helguera, Celaya, Ocantos, Vargas, Alagón, Piñeiro, Belgrano, Ehazú y Gorriti.

Y por el sistema federal, los diputados:

Mateo Vidal, Pedro Pablo Vidal, Ugarteche, Nuñez, Torres, Méndez, Dorrego, Cavia, Igarzábal y Cavia Caviedes.

(1) La distribución de los asientos entre la capital y las Provincias era la siguiente:

Por la capital 5, por el territorio de la provincia de Buenos Aires, desmembrada de la Capital 4, por la provincia de Córdoba 6, por la provincia de Catamarca 3, por la provincia de Corrientes 3, por la provincia de Entre Ríos 2, por la provincia de Montevideo 4, por la provincia de Mendoza 2, por la provincia de Misiones 1, por la provincia de la Rioja 3, por las provincias de Salta y Jujuy 3, por la provincia de Santiago del Estero 4, por la provincia de San Juan 2, por la provincia de Santa Fé



Los senadores necesitaban 30 años de edad, 9 de ciudadanía, 10.000 pesos de capital ó una renta equivalente ó profesión científica, capaz de producirla. Su duración era de nueve años.

Los senadores debían ser elegidos por colegios electorales en cada provincia y en la Capital, compuestos de 11 individuos, declarándose senadores á los que obtuvieran mayoría absoluta de sufragios en los colegios respectivos, y si no se formaba en ellos mayoría absoluta, correspondía al senado la elección entre los tres que hubieran obtenido mayor número de sufragios.

Se declaraban facultades privativas de la Cámara de Diputados la iniciativa de toda contribución y el derecho de acusar ante el Senado á los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, por delitos de traición, concusión, malversación de los fondos públicos y violación de la constitución, particularmente respecto de los derechos primarios de los ciudadanos, y otros crímenes que merecieran pena infamante ó de muerte.

Al senado le correspondía juzgar en juicio político á los acusados por la sala de Representantes, requiriéndose para la sentencia contra el acusado dos tercios de votos, sin que ésta tuviera otro efecto que separarlo del empleo y sujetarle á los tribunales comunes. Los cargos de diputado y senador eran rentados.

La nueva constitución reproducía los principios de derecho parlamentario incorporados á la constitución de 1819, agregando que cada cámara podía llamar á

1, por la provincia de Tucumán 3, por la provincia de Tarija 2, por la de San Luis 2.



los ministros del Poder Ejecutivo para recabar los informes que estimara convenientes, declarándose en términos expresos que las leyes podían tener principio en cualquiera de las dos cámaras, por proyectos presentados por sus miembros ó por el Poder Ejecutivo, con excepción de lo indicado respecto de las contribuciones.

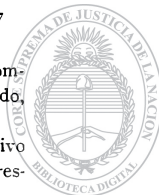
El Poder Ejecutivo podía vetar las leyes que el Congreso sancionara, y éste insistir con dos tercios en cada cámara.

La sección quinta confiaba á un presidente el mando de la República, cuyas calidades debían ser las requeridas para senador, y su duración de cinco años, no pudiendo ser reelecto en el período siguiente, supliéndole en los casos que preveía la Constitución el presidente del Senado.

El Presidente era designado por medio de una elección de segundo grado, en la forma siguiente: en la capital y en cada provincia se nombraba una junta de quince electores en la misma forma que para la elección de los senadores, y el escrutinio lo hacía el Congreso proclamando electo al ciudadano que reuniera las dos terceras partes de todos los votos; si no alcanzaba á esa cifra ninguno de los candidatos, correspondía al Congreso designarlo entre los tres que mayor número de sufragios hubieran obtenido.

Debían acompañar al Presidente cinco ministros, á saber: de gobierno, negocios extranjeros, guerra, marina y hacienda, responsables con el Presidente de los actos que subscribieran.

El Poder Judicial (sección 6ª) estaba confiado á una alta Corte de Justicia, Tribunales superiores y demás Juzgados establecidos por la ley. La alta cor-



te se componía de nueve Jueces y dos fiscales nombrados por el Presidente con acuerdo del Senado, é inamovibles, salvo por juicio político.

Las facultades de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial eran las propias y peculiares de sus respectivos departamentos.

La administración provincial (sección 7ª) se confiaba á un gobernador en cada Provincia y á un Consejo de administración, cuyo número de miembros no podía ser menor de siete, ni mayor de quince. El gobernador quedaba bajo la inmediata dependencia del Presidente de la República y era nombrado por éste á propuesta en terna del Consejo Provincial. Su duración era de tres años y no podía ser reelecto en el período siguiente en la misma provincia.

Los miembros de los Consejos Provinciales debían ser elejidos popularmente por elección directa, y era materia de su competencia todo lo concerniente á promover la prosperidad y el adelanto de las provincias, la educación primaria, la policía interior, las obras públicas y los establecimientos costeados y sostenidos por sus propias rentas. Los Consejos iniciaban el presupuesto de sus gastos, que debía ser aprobado por la legislatura nacional, y cubierto con las rentas particulares de cada provincia, cuyo establecimiento estaba sujeto á la misma formalidad, y debían consistir precisamente en impuestos directos, porque toda contribución indirecta quedaba reservada al tesoro nacional. Si las rentas locales no alcanzaban á cubrir el presupuesto de gastos, el tesoro nacional debía hacer adelantos con cargo de reintegro; si había sobrantes, debían invertirse en la misma provincia



en objetos que determinase el Consejo Provincial, previa aprobación del Congreso.

El cargo de miembro de los Consejos Provinciales eran gratuito. El Presidente de la República estaba autorizado para formar el reglamento á que debían sujetarse. En todas las provincias debían establecerse Tribunales Superiores de Justicia.

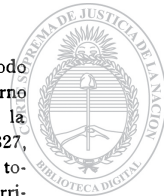
La Constitución fué sancionada el 24 de Diciembre de 1826, y publicada con un extenso manifiesto suscrito por todos los miembros del Congreso.



SUMARIO: I—Desorganización interna; convención preliminar celebrada por el ministro García con la corte del Brasil—II Renuncia del presidente Rivadavia—Presidencia Provisoria del Dr. Don Vicente F. López—Tentativa frustrada de conciliación.—Disolución del gobierno nacional—III Reconstrucción del gobierno provincial de Buenos Aires.—Tratados interprovinciales de 1827.—Instrucciones para los diputados de Buenos Aires á la convención de Santa Fé.—Tratado de paz con el Brasil—Independencia del Estado Oriental.—Libre navegación del Río de la Plata—Revolución del 1º de Diciembre de 1828—Disolución de la convención de Santa Fé.—IV Tratados interprovinciales de 1829 y 1830—Tratado del litoral de 1831—V La comisión representativa de las provincias federales de la República Argentina.

I—La campaña del general Alvear, ministro de la guerra, que dió á las armas de la República el triunfo de Ituzaingó, fué frustrada en sus resultados por la desorganización interna. La guerra civil en el interior distrajo los elementos bélicos que se reunían en Córdoba, Salta, Mendoza y Tucumán y que habrían servido para asegurar todos sus frutos.

Los caudillos del interior rechazaron la Constitución de 1826 y negaron á la Presidencia los contingentes que necesitaba para llevar á su término la guerra contra el Brasil. El Presidente, apremiado por la desorganización del país, quiso apresurar la paz con el imperio, y en ese sentido dió instrucciones al



ministro García. Éste creyó que debía sacrificar todo otro interés á la necesidad de devolver al gobierno las fuerzas que la guerra externa distraía, y firmó la convención preliminar de paz de 24 de Mayo de 1827, en que renunciaba, á nombre de la República, á todos los derechos que ésta podía pretender al territorio Oriental, sin otra exigencia que el compromiso de que el imperio debiera regir con sumo esmero la provincia Cisplatina, del mismo modo ó mejor aún que las otras provincias del imperio, dándole un régimen apropiado á sus costumbres y necesidades que consagrarse la propia tranquilidad y la de los vecinos. Obligó, además, á las provincias Unidas á reducir su ejército al pie de la paz y colocar la isla de Martín García en el *statu quo ante bellum*.

Cuando este convenio fué conocido en la república se levantó contra él la más enérgica oposición y el Presidente, arrastrado por la opinión pública, expidió el decreto de 25 de Junio desaprobándolo, con la declaración de que el enviado García había traspasado sus instrucciones y contravenido á su letra y á su espíritu, aceptando cláusulas que menoscababan el honor nacional y atacaban la independencia y los intereses esenciales de la nación.

El Congreso se asoció á la pública reprobación y dirigió al Poder Ejecutivo una minuta de comunicacion en que le decía: «Con no menos sorpresa y «asombro que V. E. ha visto el Congreso la convención preliminar celebrada y firmada por el plenipotenciario de esta República, D. Manuel García, con «los de igual carácter del imperio del Brasil, que «en copia acompaña la nota que V. E. ha dirigido en «25 del corriente con todos los documentos que le

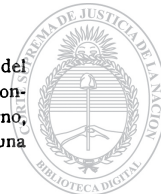


«son adjuntos, que han sido atentamente reconocidos. Afectada esta asamblea de un sentimiento profundo, no ha podido vacilar un momento en expresarlo con aclamación unánime en apoyo de la justa repulsa con que V. E. ha desechado la citada convención. Felizmente se advierte esta misma operación en todos los habitantes y no se vé ni percibe más que una voz de indignación en uniforme general consonancia. Muy lejos de que este incidente ominoso pueda obrar resultados funestos, él producirá, necesariamente, un nuevo entusiasmo que, incrementando la gloria de nuestro triunfo, haga sentir al enemigo todo el peso de la cólera excitada en un fuerte contraste. Entónces es cuando el espíritu público, redoblando sus esfuerzos, los lleva hasta el heroísmo.

«V. E. está en estas mismas ideas y sentimientos; y el Congreso en su conformidad se apresura á manifestarle la disposición en que se halla de cooperar eficazmente á las medidas que V. E. proponga, y promover de su parte cuanto juzgue conveniente y esté en la esfera de sus atribuciones».

II—La desaprobación del convenio preliminar no bastó, sin embargo, para calmar la oposición que se había levantado formidable contra la Presidencia, y el Sr. Rivadavia presentó su renuncia ante el Congreso en la sesión del día 30, renuncia que le fué aceptada en la misma sesión. (1).

(1) He aquí el texto de la renuncia presentada por el Presidente y el de la contestación del Congreso. El primero de esos documentos decía así: Departamento de Gobierno, Buenos Aires, Junio 27 de 1827.



«El Tribuno», dirigido por Dorrego, dió cuenta del trascendental acontecimiento y anunció que los conflictos de la patria acallaban todo interés subalterno, y que la crisis del momento había producido una verdadera fusión de los partidos.

«Cuando fui llamado á la primera magistratura de la República por el voto libre de sus representantes, me resigné, desde luego, á un sacrificio que, á la verdad, no podía menos que ser muy costoso al que conocia demasiado los obstáculos que en momentos tan difíciles quitaban al mando toda ilusión y obligaban á huir de la dirección de los negocios. Entré con decisión en la nueva carrera que me marcó el voto público, y si no me ha sido dado superar las dificultades inmensas que se me han presentado á cada paso, me acompaña, al menos, la satisfacción de que he procurado llenar mi deber con dignidad; que he cercado sin cesar de obstáculos y de contradicciones de todo género he dado á la Patria días de gloria que sabrá ella recordar con orgullo, y que he sostenido, sobre todo, hasta el último punto la honra y la dignidad de la Nación. Mi celo, señores, por consagrarme sin reserva á sus servicios es hoy el mismo que en los momentos en que fui encargado de presidirla; pero, por desgracia, dificultades de nuevo orden, que no fué dado prever han venido á convencerme de que mis servicios no pueden en lo sucesivo serle de utilidad alguna; cualquier sacrificio de mi parte sería hoy sin efecto. En este convencimiento, yo debo, señores, resignar el mando como lo hago, desde luego, devolviéndolo al cuerpo nacional de quien tuve la honra de recibirlo. Sensible es no poder satisfacer al mundo de todos los motivos irresistibles que justifican esta decidida resolución; pero me tranquiliza la seguridad de que ellos son bien conocidos de la representación nacional.

«Quizá hoy no se hará justicia á la nobleza y sinceridad de mis sentimientos; mas yo cuento con que al menos me la hará algún día la posteridad, me la hará la historia. Al bajar del elevado puesto en que me colocó el sufragio de los señores representantes, yo debo tributarles mi más profundo reconocimiento, no tanto por la alta confianza con que tuvieron á bien honrarme, cuanto por el constante y patriótico celo con que han querido sostener mis débiles esfuerzos para conservar hasta hoy ilesos el honor y la gloria de nuestra república. Después de esto, yo me atrevo á recomendarles la brevedad en el nombramiento de la persona á quien debo entregar una autoridad que no puede continuar por más tiempo depositada en mis manos. Así lo exige imperiosamente el estado de nuestros negocios, y esto será para mí un nuevo mo-



Esta fusión se tradujo en tres proyectos sustancialmente idénticos presentados por los señores Gómez, Dorrego y Arenales, para que se procediera á la elección de un presidente provisorio, sobre cuya base se sancionó la ley de Julio 3 que ordenaba en su pri-

tivo de gratitud á los dignos representantes, á quienes tengo el honor de ofrecer los sentimientos de mi más alta consideración y respeto. *Bernardino Rivadavia*.

La contestación del Congreso decía así:

«Buenos Aires, Junio 30 de 1829. Excelentísimo Señor: Al tomar el Congreso Nacional en consideración el mensaje de V. E. por el que resigna el mando supremo de la República y devuelve á sus manos el depósito de la autoridad ejecutiva, él no ha tenido en que elegir, ni le ha quedado arbitrio para deliberar en un sentido opuesto á la renuncia. Tan luego como á V. E., en estas críticas circunstancias del país, le advierte decidido á tal resolución, el Congreso no puede mirar el desprendimiento de V. E. sino como una de aquellas fatalidades á que están sujetos todos los estados nacientes é inconstituídos, mucho más si, como en el nuestro, no habiendo sus hijos acabado de colgar la espada con que conquistaron su independencia, tienen que empuñarla otra vez para defenderse. Los motivos, por otra parte, con que V. E. justifica sus resoluciones constituyen el cambio del Ejecutivo en un hecho cuya existencia es ventajosa á la salvación de la patria y desde entonces, mirarlo así, y deferir el testimonio de V. E., no sólo es hacer justicia á sus sentimientos y patriotismo, sino ser consecuente el cuerpo nacional de aquella misma confianza con que también defirió á su persona, cuando creyéndole necesario á la dirección de los negocios públicos, colocó á V. E. á la cabeza del Estado. El poder de acontecimientos singulares y una combinación de extraordinarias circunstancias son las que á V. E. pudieran inducir á dejar el mando, y ellas únicamente las que impulsan al Congreso Nacional á esta deliberación. Sin embargo, V. E. desciende conducido por la mano de la ley, y esto no sólo es honorable á la persona, sino benéfico á la República. Ahora es que el Congreso también debía justificar su elección, clasificando dignamente los distinguidos servicios que ha hecho V. E. á la República en la época de su mando: más de este justo y noble empeño le exonera por fortuna la obediencia de las cosas, la existencia misma de la patria, (de esta patria digna de mejor suerte,) sus triunfos y sus glorias. Debe, pues, el Congreso contentarse por ahora con cerrar esta contestación, interesando al patriotismo de V. E. para que ejerza el mando de la República por los pocos



mer artículo que se hiciera el nombramiento de presidente de la República con calidad de provisorio, hasta la reunión de una convención nacional que debía convocarse de acuerdo con lo que disponía el artículo 7°.

Las funciones del Presidente debían limitarse á lo concerniente á paz, guerra, relaciones exteriores y hacienda nacional al desempeño de las funciones que le atribuía la ley del Banco Nacional y á la dirección y gobierno de la ciudad y territorio de Buenos Aires (Artículos 2°, 3° y 4°.)

El artículo 3° establecía que el Congreso General se abstendría de tratar de otros negocios que no fueran los expresados en el artículo segundo, á no ser en un caso urgentísimo.

El 6° decía que si las provincias que se habían pronunciado por la separación de sus diputados insistían en su remoción, después de tener conocimiento de esa ley, cesarían éstos, desde luego, en el ejercicio de sus funciones.

El 7° encargaba al Ejecutivo Provisorio que procediera á invitar á las provincias á la más pronta reunión de una convención nacional que podría componerse de un diputado por provincia, y se reuniría en el lugar que se designase.

El objeto de la convención debía ser arreglar su misma representación en su forma y en el número de sus miembros; nombrar presidente de la República;

«días que transcurren mientras se elija la persona que le ha de subrogar, «El presidente que suscribe tiene el honor de transcribir á V. E. por orden del cuerpo nacional la resolución que antecede, y reiterarle al mismo «tiempo las protestas de su mayor consideración—*José María Rojas*, presidente—*Juan de Velaz*, secretario».



proveer cuanto estimara conveniente en las actuales circunstancias nacionales; recibir los votos de las provincias sobre la aceptación ó repulsa de la constitución ó su postergación hasta mejor oportunidad (art. 8°).

El artículo 9° prescribía que la ciudad de Buenos Aires y su territorio designaran representantes, como lo hacían anteriormente, para deliberar sobre su carácter político y nombrar sus diputados á la convención nacional (art. 10°). El Congreso recomendaba á las provincias que conservaran un cuerpo deliberante hasta la instalación del nuevo Congreso (art. 11°).

El artículo 12° decía que el presidente debía emplear todos sus esfuerzos para hacer cesar la guerra civil, á cuyo efecto quedaba autorizado para los gastos necesarios; y finalmente, el 13° recomendaba al nuevo presidente la adopción de las medidas más eficaces y enérgicas para que todos los pueblos concudiesen á la guerra con el Brasil del modo que tan imperiosamente demandaba el honor de la República. (1).

(1) El informe de la Comisión que presentó el proyecto fijó su carácter y alcance políticos. Dice así:

«Señor: Al presentar al Congreso la comisión extraordinaria que suscribe, el proyecto de ley que ha redactado, después de un serio examen de las tres que han presentado los señores diputados Gomez, Dorego y Arenales, sobre la elección de nuevo presidente, y demás medidas que conviene adoptar en las circunstancias actuales de la República, tiene el honor de protestarle que inflamada del más favorable deseo de cesar la guerra civil, de restablecer la unión de las provincias y conseguir la eficaz cooperación de todas al buen suceso de la guerra nacional, se ha propuesto por principal objeto allanar todos los estorbos y vencer todos los inconvenientes que en la actual situación del país podrían oponerse á la obtención de aquellos grandes fines. La salud de la patria afligida de males y rodeada de peligros ha sido su único norte, y cree que el proyecto redactado en la forma que lo presenta, llenando este interesante designio, será conforme con los sentimientos que tan uniformemente ha manifestado el Congreso á quien saluda con la



«El Tribuno» del mismo día recomendó como candidatos á la futura presidencia á los señores D. Vicente López y D. Tomás Manuel de Anchorena.

El 5 de Julio fué elegido presidente provisorio de las Provincias Unidas el doctor don Vicente López, por 45 votos contra 9 por el general Alvarado, 4 por el general Lavalleja y 1 por el general Necochea, observándose que votaron por el electo los personajes más caracterizados de los dos partidos que se disputaban el predominio del país.

El periódico que redactaba el coronel Dorrego saludó con alborozo la elección del Dr. López, recordando que había sido el candidato de su predilección, é hizo este juicio del electo: «El señor López reúne «las favorables disposiciones para proporcionar á nuestra patria resultados tan lisonjeros. Ilustrado sin presunción, recto sin austeridad, de modales afables, de patriotismo acendrado, amante del bien, extrangero á los partidos, él reúne cualidades eminentes para encargarse en el día, con preferencia á otro cualquiera, de la dirección de los negocios públicos.»

En efecto, el ilustre patricio tenía las bellas y amables cualidades que se le atribuían, y su vida pública podría servir de modelo de civismo en todo pueblo libre. Había combatido contra los ingleses en 1806 y 1807; asistió al Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810, y votó por la separación del Virrey y por la formación de una junta en forma y modo de que no quedara duda de que era el pueblo quien confería la autoridad ó mandato. Marchó como secretario del

«más alta consideración y respeto *Manuel Dorrego, Valentín Gómez, Manuel Antonio Castro, Juan Ignacio Gorriti, José Arenales.*»



coronel Ocampo en la expedición al interior; figuró en la Asamblea del año 13; cantó las glorias nacionales en la marcha triunfal que ha quedado consagrada como himno de la patria; fué miembro del Triunvirato con Posadas en 1815 y ministro del Director Pueyrredón; era amigo de Agüero, de García y de Gómez; Dorrego le profesaba marcada consideración, Bustos y Rosas respetaban la probidad de su carácter.

Su designación para la presidencia de la República era garantía para todos los partidos. Los patriotas que todavía esperaban salvar la organización nacional no habían encontrado ni podían encontrar quien les diera mayor garantía de éxito en la crisis que el país atravesaba. Pero el electo no tenía las mismas ilusiones; y apenas le fué comunicada la designación con que el Congreso le había honrado, presentó su renuncia, documento mesurado y serio que atestigua su sinceridad y su buen sentido. (1).

(1) Tomamos de esa renuncia los siguientes párrafos:

«Señores Representantes: Un gobierno, por el mero hecho de ser electo, no adquiere los inmensos medios de que necesita para desempeñar con suceso los arduos compromisos á que se obliga para con los pueblos. Esos medios los posee solamente la sociedad: son suyos propios y los ella ó los retira á un gobierno, á proporción de su confianza ó de su desconfianza. Ahora pues ¿cuál es el estado de la sociedad que se me llama á presidir, para dirigirla y para salvarla de tantos conflictos?

«La autoridad á cuyo ejercicio tengo el honor de ser destinado ha sido disputada hasta aquí con pasión en el seno del Congreso; y todavía lo es sangrientamente en algunas Provincias. Durante este combate, ambos partidos se han apoderado y distribuido entre sí todos los medios de gobierno nacional y los recursos para seguir la guerra con el imperio del Brasil. El uno tiene bajo su influencia la unión de las Provincias que han disentido el sistema anterior y los recursos de gente necesarios para continuar la guerra. El otro tiene bajo las suyas la unión de las Provincias que han sostenido dicho sistema y los posibles recursos del crédito, sin el cual, ó nada puede hacerse, ó hay que echar mano de



Esta renuncia fué tomada en consideración y desechada sobre tablas por 68 votos contra 3, obligando así la voluntad del Sr. López que se resignó á la aceptación del mando, diciendo:

«Ya que por mi falta no debe quedar expuesta por más tiempo la suerte de mi patria y que un voto tan decidido me arranca á la obscuridad de mi retiro, hasta el puesto más difícil de la República, me resuelvo á hacer el más grande de mis sacrificios. Pero entiéndase que este sacrificio sólo puedo extenderlo hasta la reunión de la convención nacional decretada por la ley de 3 del corriente, y que lo hago sobre la base de la reconciliación de todos los partidos en que hoy se hallan desgraciadamente divididos todos mis compatriotas.»

El 7 de Julio el nuevo Presidente tomo posesión del cargo, y el 9 formó su ministerio en esta forma: Gobierno y Hacienda, el Dr. D. Julián Segundo de Agüero; Marina y Relaciones Exteriores, coronel D. Manuel Dorrego y Guerra, general D. Tomás Guido.

La designación de las personas y la distribución de

exacciones tan estériles como violentas: de aquí resulta que en la actualidad, sin una garantía recíproca que haga á cada partido ceder á la presidencia nacional sus medios respectivos de gobierno y de guerra contra el imperio, no puede constituirse esta autoridad de un modo que sea verdaderamente obedecida en todas las provincias, y que corresponda á las extraordinarias necesidades de la época; de modo que el ciudadano designado para ejercerla no puede llenar su arduo compromiso. Yo me hallo, señores Representantes, en este caso. Mi persona sola no puede constituir esa garantía que hoy es el punto de todas las dificultades; y después que hubiese puesto en movimiento las operaciones gubernativas, ya empezarían á faltarme los medios que poseen el uno ó el otro de los partidos. Ponga cada uno de los representantes la mano en su conciencia y verán que si puedo exponer mi salud por la patria, jamás debo sacrificar el nombre que he adquirido á costa de una larga distancia de las contiendas políticas.»



los ministerios en esta forma llamó, desde luego, la atención, porque no era posible creer que Agüero, el ministro de Rivadavia, armonizara su política con Dorrego, jefe de la oposición contra el ex-presidente. Además, la separación de los ministerios de Marina y de Guerra, que hasta ese momento habían estado reunidos, era un suceso que necesitaba explicación.

Lo primero respondía á los deseos que el nuevo presidente había manifestado cuando, desechada su renuncia, dijo: «Acepto sobre la base de la conciliación de todos los partidos, con el grande fin de que «un impulso unánime y una absoluta concurrencia de «todos los talentos y esfuerzos del Estado Argentino, «vengan á salvar la República.»

El Dr. Agüero era, según lo afirma el historiador de la revolución argentina, uno de los hombres por cuyo talento más respeto tenía el presidente provisorio, y quien más esfuerzos había hecho para que aceptara el cargo, sin pensar que á este se le ocurriría llamarle de nuevo al mismo ministerio que había servido bajo la presidencia de Rivadavia.

La separación del ministerio de guerra del de marina fué motivada porque el nuevo presidente creyó que, tal vez, fuera necesario llamar á San Martín para que se pusiera al frente del ejército que operaba contra el Brasil y era imposible pensar en subordinarle á la autoridad de Dorrego (1)

(1) «El Tribuno» se ocupó del ministerio en los siguientes términos:

«Con fecha de ayer el señor presidente provisorio ha dado el primer paso que tenía en suspenso la expectación pública: tal era el nombramiento de ministros; y como él no está en consonancia con la opinión de «El Tribuno», es forzoso decir algo sobre esto. Primero ¿se espera que «anunciándose un cambio de personas y de cosas no arrojará una idea



El Dr. Agüero renunció en el acto y el coronel Dorrego hizo otro tanto, lo mismo que el general Guido: no se necesitaba más para que el nuevo presidente se diera cuenta de que su política de conciliación era una aspiración noble, pero irrealizable.

Llamó entonces á su ministerio á los señores Dr. D. Tomás de Anchorena, á quien le confió la cartera de Hacienda; al general D. Marcos Balcarce, para las de Guerra y Marina, reservándose convocar inmediatamente á elección á la provincia de Buenos Aires, para que reconstituyera su gobierno local.

III—La legislatura provincial de Buenos Aires se organizó el 3 de Agosto y designó gobernador del Estado al coronel Dorrego el día 12. El 13 el presidente provisorio dictó un decreto poniéndolo en posesión del cargo de Gobernador y Capitán General de la provincia, con arreglo á la ley de 23 de Diciembre de 1823.

El 17 de Agosto la Junta de Representantes de Bue-

de desconfianza la continuación del señor ministro de Gobierno D. Julian S. Agüero, tan recomendable por sus talentos? Se cree, con razón ó sin ella, que él ha dado impulso á la marcha precedente y que ha sido su principal colaborador y más tenaz consejero. ¿Se han olvidado sus fuertes y acres alocuciones y discursos en el Congreso, y quien nos garante su cambio completo al presente. Segundo: la separación de los ministerios de Relaciones Exteriores y Marina del de Guerra es tanto más singular, cuanto que al mismo tiempo vemos concentrarse en una sola persona los ministerios de Gobierno y Hacienda. Así es que, en la administración que ha concluido, á pesar de estar estos ministerios separados, los departamentos de Marina y Relaciones Exteriores dependían del de la Guerra.

«Estamos informados que el señor Dorrego convencido de lo inolicioso de su nombramiento ha renunciado inmediatamente, y «El Tribuno» lo felicita por tal comportamiento.»

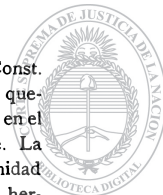


nos Aires ordenó que se retirasen sus diputados del Congreso Constituyente, y éste quedó de hecho disuelto, concluyendo con su autoridad la del Gobierno Nacional de 1825.

El 18 de Agosto, reunida la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, uno de sus miembros, el diputado Ruiz, presentó un proyecto para que la Junta de Buenos Aires entrara en comunicaciones directas é inmediatas con las demás provincias, lo que marcaba el comienzo de una nueva era en la política argentina, que va á caracterizarse por el aislamiento provincial y por los tratados parciales que se multiplican sin éxito; pero que demuestran la vivacidad del sentimiento nacional, aún en esos días de desorganización.

En la misma sesión se presentó otro proyecto por el cual se encomendaba al gobernador de la Provincia, provisoriamente, todo lo concerniente á la guerra nacional y relaciones exteriores, y se disponía el envío de un comisionado á las demás provincias para comunicar esa resolución y ajustar lo conveniente, hasta tanto se reuniera en cuerpo de nación. En seguida la Junta se ocupó de la consulta del Poder Ejecutivo sobre la conducta que debía observar con un enviado de la Provincia de Córdoba que había llegado á Buenos Aires para tratar asuntos de carácter político, y sancionó la siguiente minuta de comunicación:

«Exmo. Señor: Enterada la C. S. de RR. de la nota de V. E. con motivo de la del Señor Enviado del «Gobierno de Córdoba cerca del de esta Provincia, «para que en su virtud sirva fijarle la línea de conducta que debe observar en este caso, y en los demás de igual naturaleza, ha tenido á bien resolver



«que, removido los DD. de B. A. del Cong. Const.
«por disposición de sus RR. fecha 17 del corr., que-
«da V.E. autorizado para tratar de igual á igual, en el
«caso expresado y otros de naturaleza semejante. La
«C. S. ha querido también aprovechar la oportunidad
«de repetir por medio de V. E. á las provincias her-
«manas la conformidad de sus sentimientos por es-
«trechar los lazos sociales, sostén de su fortuna, que
«especialmente tiendan á un centro de acción que
«imperiosamente demandan el respeto y dignidad de
«la República.

Como consecuencia de las negociaciones abiertas
con el gobierno de Córdoba, se celebró el 21 de Se-
tiembre de 1827 un convenio para «asegurar la liber-
«dad y los derechos de los pueblos y establecer sólí-
«damente la paz interior de la República,» en el que
se reconocía la igualdad de derechos entre una y
otra provincia, y se establecía el compromiso de sos-
tener mutuamente sus actuales instituciones, declaran-
do solemnemente que eran puntos cardinales del tra-
tado «formar nación y cooperar á la guerra contra el
«emperador del Brasil» (art. 1°).

En el artículo 2.º se estipuló que Buenos Aires nom-
braría, á la mayor brevedad, dos diputados para la
convención que se debía reunir en la Provincia de
Santa Fé, quienes se pondrían en camino luego que
la Junta de Córdoba, que estaba en contacto con las
provincias más lejanas, avisara el día de la apertura
de las sesiones y el lugar de la reunión. Las dos pro-
vincias se comprometían á enviar sus diputados, aún
cuando las otras no lo hicieran, para demostrar sus
deseos de unión y servirles de ejemplo (art. 4º). Las
instrucciones de los diputados debían recaer sobre los



objetos siguientes: nombramiento de un Poder Ejecutivo Nacional provisorio encargado de la paz y de la guerra y de las relaciones exteriores, al cual se autorizaría para hacer los gastos que estos asuntos demandasen con los fondos que pudiera levantar sobre el crédito común; fijar las bases al Congreso Constituyente que debía reunirse en seguida, deslindándole sus atribuciones y deberes para que constituyera un gobierno nacional de acuerdo con la forma federal (art. 5°).

La provincia de Córdoba se comprometía, por su parte, á delegar las atribuciones de paz, guerra y relaciones exteriores en el gobierno Buenos Aires, *interin* se reuniera la convención (art. 6°); y á enviar, desde luego, un contingente de 600 hombres para las atenciones de la guerra, siendo de cuenta del gobierno de Buenos Aires proveer de fondos para la movilización y equipo (arts 8 y 9.)

El 2 de Octubre se celebró un convenio análogo entre las provincias de Santa Fé y Buenos Aires, en el cual la primera hizo protestas de su reconocimiento por los sacrificios que la segunda hacía en defensa de la causa nacional, obligándose á delegar las funciones relativas á las relaciones exteriores en el gobierno de Buenos Aires y á mandar al ejército un contingente de 300 hombres, por lo menos, para la guerra con el Brazil.

En este convenio Santa Fé autorizaba al gobierno de Buenos Aires para que proporcionara los fondos que la guerra demandaba, aceptando la responsabilidad que proporcionalmente le correspondiera, y declaraba que estando conforme con la Provincia de Buenos Aires en que convenía más que reunir un



Congreso Constituyente, instalar nuevamente una convención nacional á la que concurrieran dos diputados por cada provincia, interpodría sus buenos oficios para con las demás á objeto de llevar á término ese pensamiento. Se formalizaban también algunos otros compromizos para vigorizar la defensa nacional.

El 27 de Octubre Buenos Aires celebró un convenio análogo con la provincia de Entre Ríos y, de acuerdo con estos compromisos, eligió sus diputados á la convención nacional, á los cuales otorgó instrucciones especiales que consistían en reconocer, como únicas atribuciones de la convención, realizar los propósitos declarados en dichos pactos, reservándose aceptar ó nó las decisiones que adoptasen los diputados; reconocer el ejecutivo general provisorio que nombrara la convención para los asuntos de paz y guerra y relaciones exteriores, quedando la provincia independiente en todo lo relativo á su administración interior, siendo entendido que debía someterse á la aprobación de todas el reglamento que fijara las atribuciones del poder ejecutivo provisorio.

La convención determinaría la autoridad á la cual correspondía ratificar los tratados de paz que pudieran celebrarse con el emperador del Brasil; debía formarse un tesoro general con el concurso de todas las provincias, en proporción á su población, obligándose la de Buenos Aires á concurrir con el duplo de lo que aportaran las demás. La deuda general contrai-da y que se contrajera sería á cargo de todas las provincias. El Ejecutivo Provisorio no podría imponer renta alguna á las provincias, ni derechos ni contribuciones á los pueblos, y Buenos Aires se comprometía á no gravar la producción de las provincias



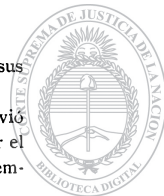
con mayores derechos ni contribuciones que las propias.

Buenos Aires se prestaba también á la celebración de un Congreso General Constituyente, al cual todas las provincias mandarían sus diputados en la proporción de uno por cada 15.000 habitantes, según lo establecido en el reglamento del año 17, Congreso cuyas únicas atribuciones serían presentar un proyecto de constitución bajo la forma de gobierno republicano representativo federal, que podría ser aceptada ó rechazada por dos terceras partes de las provincias, y que sería obligatoria para las que la aceptasen, quedando las otras en libertad plena para organizarse entre sí, bajo la misma forma de gobierno, ó para continuar separadas, pero conservando los vínculos de unión, amistad y mútua correspondencia fraternal. El 11 de Diciembre Buenos Aires concluyó un convenio idéntico con la provincia de Corrientes.

El gobierno de Buenos Aires, poniendo en ejercicio la representación exterior de que estaba investido por algunas de las provincias, nombró ministros plenipotenciarios cerca del gobierno del Brasil á los generales don Juan Ramón Balcarce y don Tomás Guido, para que iniciaran y llevaran á término negociaciones de paz y, por consiguiente, terminar la guerra.

El 17 de Agosto de 1828 celebraron un tratado los plenipotenciarios, en el cual se consagró la independencia de provincia Oriental, que debía constituir en adelante un estado libre y soberano, obligándose las dos partes contratantes á defender la independencia é integridad de la nueva nación.

Merece recordarse que en uno de los artículos se



estipuló la libre navegación del Río de la Plata y sus afluentes por el término de 25 años.

Terminó así la guerra del Brasil. El ejército volvió á Buenos Aires, y una parte de él, encabezado por el general Lavalle, hizo la revolución del 1° de Diciembre de 1828, que derrocó al gobernador Dorrego.

El general Lavalle, gobernador provisorio del Estado, se apresuró á ordenar el cese los diputados que habían sido designados para la convención de Santa Fé, con la cual ésta se disolvió, quedando sin efecto las estipulaciones anteriores.

—

III—En el año de 1829 Buenos Aires celebró nuevos tratados con las provincias de Santa Fé y Córdoba, declarando en pleno vigor las estipulaciones fundamentales del tratado cuadrilátero de 1822, y obligándose á invitar á las demás provincias de la República á la convención y reunión de un Congreso nacional para organizarla y constituir la, luego que, terminada la guerra intestina, se hubiera restablecido el orden en todos los pueblos del Estado, quedando el gobierno de Buenos Aires autorizado para dirigir las relaciones exteriores del país.

En la convención con Córdoba se decía: que habría entre las dos provincias paz, amistad y las relaciones propias *de dos pueblos pertenecientes á una misma nación*, conviniendo en invitar á las demás provincias de la república *á la reunión de un cuerpo nacional* para organizarlo y constituirlo, luego que terminada la guerra intestina, se restableciera el orden general. En el *interin*, Córdoba delegaba la representación exterior en Buenos Aires y se compro-



metía á solicitar igual delegación de las otras provincias con las cuales mantenía buena amistad.

En el mes de Febrero del año 30 Santa Fé y Corrientes celebraron un pacto para el cual debían buscar la adhesión de Entre Ríos y Buenos Aires, á efecto de formar una liga ofensiva y defensiva entre las cuatro provincias litorales, al cual podrían adherirse las otras provincias, siempre que se aceptara como base de la futura organización del país el sistema federal, haciéndose en ese pacto declaraciones análogas á las de los anteriores sobre los propósitos de organización nacional y delegación de las relaciones exteriores, y Buenos Aires se adhirió al convenio en el mes de Marzo del mismo año.

Por último, el cuatro de Enero 1831, Santa Fé, Entre-Ríos y Buenos Aires acordaron el tratado de alianza ofensiva y defensiva que veinte años más tarde debía servir como punto de partida para la organización nacional.

La importancia histórica de este instrumento nos aconseja detenernos en su examen.

Los gobiernos contratantes ratificaron en su art. 1º todos los tratados anteriores en la parte que estipulaban amistad, paz y unión estrecha y permanente, y declararon que era su objeto constituir una alianza ofensiva y defensiva contra cualquier gobierno extraño que los amenazara (artículos 2º y 3º).

Se comprometían á proceder de acuerdo para iniciar ó aceptar tratados con la otra provincia del litoral ó con las demás provincias argentinas, entendiéndose que ninguna se resistiría á hacerlo si dichos tratados no la perjudicaran en sus intereses ó en los que la eran comunes en toda la república (art. 6º),



á no dar salida á ningún criminal que huyera de alguna de ellas por cualquier delito y á entregarlo al gobierno respectivo que lo reclamase (art. 7°.)

Los habitantes de las tres provincias debían gozar de completa seguridad y libertad para entrar y transitar con sus buques en los puertos y ríos de cada una, y para ejercer en ellas su industria bajo el amparo de la justicia que protegería á los mismos naturales de la provincia (art. 8°).

Los efectos que se importaran y exportaran de un territorio ó puerto de una provincia á otra por agua ó tierra no pagarían más derechos que los que gravasen á los naturales de las provincias de donde se exportasen ó importasen. Ninguna de las provincias podía conceder á sus naturales derechos, gracias, privilegios ó exenciones de que no disfrutaran los naturales de las otras dos, (art. 10°) exceptuando únicamente las funciones de la primera magistratura ú otras de análoga naturaleza que por las instituciones locales estaban reservadas para los naturales (artículo 11°.)

Las demás provincias argentinas podrían adherirse á la convención con el acuerdo de las tres. Llegado el caso de que una de las tres provincias contratante fuera atacada por otro poder ó gobierno, las otras dos le debían su concurso en la esfera de su poder y en la esfera de sus medios (art. 13).

—

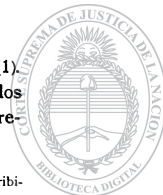
IV—Mientras durase este convenio y no se estableciera la paz en todas las provincias, se constituiría en la capital de Santa Fé una *comisión representativa de las provincias litorales de la República Argentina* compuesta de un diputado por cada provin-



cia, que podían ser removidos al arbitrio de sus respectivos gobiernos, y cuyas atribuciones serían: 1° celebrar tratados de paz conforme á las instrucciones de sus gobiernos respectivos y sujetos á su ratificación; 2° declarar la guerra contra cualquier otro poder; 3° levantar ejércitos y nombrar sus jefes superiores en caso de guerra; 4° determinar el contingente de cada una de las tres provincias; 5° *invitar á todas las demás provincias de la República cuando estuviesen en plena libertad y tranquilidad, á reunirse en federación con las tres litorales, y á que, por medio de un Congreso general federalista, se reglase la administración general del país, su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas generales y el pago de la deuda de la República, consolidando, del mejor modo posible, la seguridad y engrandecimiento de la República, su crédito interior y exterior y la soberanía, libertad é independencia de cada una de las provincias.*

Este tratado fué aceptado sucesivamente por todas las provincias.

La comisión representativa de los gobiernos aislados se había reunido en Santa Fé y había invitado ya á los demás pueblos para la reunión de un Congreso federal, según lo establecido en el inciso 5° del artículo 16 del tratado de 1831, cuando una verdadera casualidad puso en manos del general Quiroga las comunicaciones que los diputados doctor Martín, de Córdoba, y Leiva, de Corrientes, dirigían al interior, invitando á los gobiernos locales á enviar sus diputados con instrucciones precisas de ligarse



para resistir y contrariar la política de Buenos Aires (1). El incidente motivó el retiro de los diputados de esta provincia y la disolución de la comisión representativa.

(1) Como una curiosa muestra de la política de esa época, transcribimos á continuación algunos de los documentos relacionados con este episodio histórico: la carta del doctor Marín á don Tadeo Acuña, la del General Quiroga al doctor Marín y la del doctor Marín á don Vicente Reinafé, gobernador de Córdoba en ese momento.

Señor don Tadeo Acuña.

Mi estimado amigo y señor: Acabo de llegar de Santa Fé comisionado de aquel gobierno para conducir la circular invitatoria al Congreso, como lo acreditan los adjuntos documentos que acompaño.

Tenga Vd. la bondad de hacer este servicio á la República y á su país, nombrando y remitiendo un diputado provinciano más hombre de bien que ilustrado; pues entiendo que, siendo de la primera clase, tratará sólo de hacer feliz esa provincia y saldremos de la miseria en que hemos quedado con la revolución de los decembristas. Yo entiendo á más, que con sólo la introducción de adherimos las provincias á una base, habremos llenado nuestro deber y engrandecido nuestras provincias: porque siendo uniforme nuestra marcha, no hay que dudar que los porteños seguirán de necesidad la opinión de las provincias interiores, que han quedado en esqueleto por el sistema de extranjería que ha adoptado Buenos Aires para señorearse sobre las cenizas de las provincias. Ya, pues, es llegado el tiempo de que unidos uniformemos nuestra marcha con Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba, que sigue intimamente ligada con estas provincias, y no dudo que con sólo esta medida seremos felices para siempre y eternizaremos el nombre de la República Argentina. Para dar estos pasos progresivos á tamaña felicidad, es preciso cerrar los oídos á los silbos encantadores de los porteños, que tratarán de alucinarnos con promesas de maravilloso porvenir. No creamos que Buenos Aires jamás nos proporcionará sino grillos y cadenas de miseria por felicidad; pues estamos viendo que se complace de nuestra miseria. Con este motivo tengo el placer de felicitar por primera vez su colocación en la dirección de ese gobierno y reanimar nuestra amistad. Sirvase Vd ponerme á las órdenes de Pedro y de todos los hermanos, y en especial á doña Clara, que aún vive Gregorio en mi corazón, y Vd. reciba las mejores consideraciones de este Q. B. S. M.—*Dr. Juan Bautista Marín.*

Señor doctor don Juan Bautista Marín

Muy señor mío: Un acontecimiento inesperado y demasiado sorpren-



dente para mí, me obliga á tomar la pluma para dirigirme á Vd. por primera y última vez. Cuando he dicho que un acontecimiento inesperado y sorprendente es el objeto de esta comunicación, ya Vd. debe estar advirtiéndome que ha caído en mis manos la que, con fecha 20 Marzo, le dirige á su pariente: entremos, pues, en materia, Señor doctor. Que en los desvarios de su aturrida cabeza, se cree capaz de dirigir Vd. la marcha del gobierno de mi país, y que tenga el atrevimiento de aconsejarle *que mande su diputado, sin otra instrucción que seguir la marcha de Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos y Corrientes* y prometa salir de *fíador si así no es feliz la Rioja*, no es extraño, porque todo aquel que nada tiene, aunque sea mil veces fíador de un compromiso, le importa poco, puesto que nada arriesga perder: pero pretender alejar esta provincia de la confianza que pudiera tener de algún hijo de Buenos Aires, para que represente sus derechos, es puramente obra de la más negra y atroz intriga para arribar, acaso, á un punto que por los medios legales no alcanzarían, y que ya debe inferirse, sin riesgo de padecer equivocaciones, que será indudablemente con perjuicio de la nación. Pues que otra cosa no puede esperarse de un cuerpo, según la expresión con que Vd. se significa, *ser encargado de aquellos Señores á estrechar sus relaciones con este gobierno y dirigir su marcha*.

Que derecho tiene, señor doctor, para decir á este gobierno que siendo *porteño el diputado viva satisfecho que será feliz la provincia y que todos los que no formen su marcha á unirse para su engrandecimiento y libertad de su derecho*. Ya estamos desengañados, pariente, que Buenos Aires no nos dá otro destino más honroso que de *ganaderos ó pastores, y que sólo los extranjeros son nuestros amos para sostenerse de la sangre de los provincianos. Abramos los ojos, mande su diputado en plazo de dos meses etc?* Ya se puede disponer, señor doctor para contestar á todos los cargos que se le hagan á su atrevida y mordaz lengua. Yo también soy provinciano, é interesado, como el que más, en la felicidad de todos los pueblos que componen la República, en cuya línea á ninguno cedo; porque aún cuando hay otros que han trabajado más que yo por el bien general, ninguno de ellos dejará de confesar que no he omitido ningún género de sacrificio, habiendo estado en la esfera de mi poder; y si fuera efectiva la acriminación que Vd. hace á la provincia de Buenos Aires, yo sería el primero en detestar su marcha, y aún oponerme á ella del modo más formal, como lo hice el año 26 por mi sólo, contra todo el poder del Presidente de la República: pues que viendo yo la justicia de mi parte, no conozco peligros que me arredren, ni que me hagan desistir de buscarla.

Las autoridades que presiden la provincia de Buenos Aires sólo llevan por norte hacer la felicidad de todas: que á no ser así, no se habría sacrificado hasta lo sumo para restituirles la libertad y derechos, de que



se hallaban privadas por los jefes amotinados el primero de Diciembre de 1828. Yo fui mandado por el gobierno de Buenos Aires, con una división costeada á sus expensas, á dar libertad á los pueblos que yacían bajo el yugo de la opresión; de aquella autoridad recibí instrucciones terminantes de no mezclarme en la organización que debía suceder, obtenida su libertad; y por otra es que en Mendoza prohibí absolutamente que ningún individuo dependiente de la división pudiese tener voto activo ni pasivo en el nombramiento del gobierno, y esta misma conducta ha sido observada desde San Luis á Tucumán; y aún después de separado del mando del ejército he resistido con constancia á las repetidas instancias que se me han hecho para que diese mi dictamen cerca del individuo que debía nombrarse de gobernador en propiedad de este pueblo; hasta que, desengañado de su empeño, se expedieron los Representantes, y nombraron al señor don Jacinto Rincón del modo más legal. Volvamos, señor doctor, á nuestro asunto: las razones que llevo expuestas y los hechos que he citado prueban hasta la evidencia, que la provincia de Buenos Aires está muy distante de tener las aspiraciones que Vd. le supone, y que esto mismo, que Vd. lo sabe mejor que yo, es tan cierto, como lo es que Vd, ya se ha vendido por cuatro ó seis pesos. Es tan errada, señor doctor, su cavilosidad y la del señor don Calixto María Gonzalez, gobernador sustituto, en detenerse al extraordinario Games para darse tiempo á manejar la intriga en que se hallan complotados, *que puede ser que no recojan otro fruto, que una simple escuela los haga amanecer colgados*: pues este es cabalmente el premio de los malvados insensatos, que pretenden que los gobernadores sean el juguete de sus ridículas maquinaciones.

Vd. debe saber, señor doctor, que desde el momento en que yo le he tomado su comunicación, ya se haya inhabilitado para votar con los diputados, de quienes los pueblos esperan su organización general, y no dudo por un momento que lo he de delatar ante el recto tribunal público, quien decidirá si su conducta es propia de un representante ó de un malvado. Quiera, pues, Vd. desistir no sólo de ser intrigante é infame calumniante, si también de ser diputado de una corporación que debe ser compuesta de ciudadanos tan honrados como inflexibles á todo género de intriga. Quiera igualmente no desoir mi insinuación, ya que le es imposible hacer el mal que se propuso á la República, y disponga como guste de su obediente y atento servidor que del modo más vivo se complace de un desvío tan abultado como ageno de los ministros del santuario.

Juan Facundo Quiroga.

Señor don Vicente Reinafé.

Mi venerado señor: Con fecha de ayer he recibido una comunicación del señor brigadier don Juan Facundo Quiroga, datada del 14 del mismo; y cuanto me fué de placentera ver firma por la primera vez de dicho se-



ñor, tanto ha sido de amarga al poseerme de su contenido, viéndome desgraciado y acriminado con unos delitos que no de cometido, si sólo que mi ineptitud habrá dado lugar á expresarme en una carta familiar en contesto á una posdata de mi pariente, gobernador en aquella fecha de la provincia de la Rioja.

.....

El señor Brigadier, que ha estado en Buenos Aires, con su perspicacia y penetración ¿dudará que esa provincia benemérita tiene dos clases de hijos, lo mismo que las demás provincias? Unos, hombres de bien, amantes del orden y del engrandecimiento de la nación; y otros, desnaturalizados y amantes más de la extrangería, que aún detestan la lengua nativa por la extrangera.

.....

En fin, señor, Dios es y el mundo testigo de mi inocencia. Quiera V. E. elevar á ese señor (de quien le consta he sido siempre sin conocerle, sino por su retrato físico y moral, su apasionado) estos descargos y que el concepto equivocado que ha formado de Juan Bautista Marin puede haberlo ocasionado su enfermedad, ó ineptitud en expresarse, y no su mala fé. Pues, V. E. me conoce; soy un hombre de bien, agradecido á mis bienhechores, y más á mis libertadores del yugo de los decembristas. Y en prueba de ello, el 22 de Abril á las ocho de la noche recibí su comunicación del señor Brigadier, el 23 hice mi renuncia por escrito que me insinúa en la suya; y si otro exige ese señor, estoy pronto á darla en prueba de que soy apasionado de dicho señor no menos que de V.E. su servidor y capellán Q. B. S. M.

Dr. Juan Bautista Marin.



CAPÍTULO XIV



SUMARIO:—I De la dictadura á la reorganización nacional — Acuerdo de los gobiernos de Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes y Santa Fé sobre la representación exterior del país—Circular dirigida á los gobernadores invitándoles á una reunión en San Nicolás de los Arroyos—Organización del gobierno provincial de Buenos Aires — II Acuerdo de San Nicolás—Agitación pública—Discusión en la Legislatura de Buenos Aires—Discursos del doctor don Dalmacio Vélez Sarsfield y del doctor don Vicente Fidel López—Tumultos populares—Renuncia del gobernador y de los ministros — Disolución de la Legislatura—III El Director provisorio de la Confederación asume el mando y lo delega en seguida en el general Galán—Revolución del 11 de Setiembre—Separación de Buenos Aires—El Congreso Constituyente de 1853 —IV Primer Congreso Legislativo—Convenio de paz entre la Confederación y Buenos Aires (54-55)—Ley de derechos diferenciales (1856)—Manifestaciones de las provincias para que se incorporase á Buenos Aires por la razón ó la fuerza—Ley del Congreso (1859) — V Batalla de Cepeda —Pacto del 11 de Noviembre—La convención provincial reformadora (1860)—VI Las reformas — Convenio de 6 de Junio 1860—La convención nacional «ad hoc»—VII Revolución en San Juan—Nuevas desinteligencias en Buenos Aires—Reorganización de la República.

I—La dictadura sangrienta de Rosas encierra una profunda enseñanza histórica; pero no ofrece materia para nuestros estudios, porque el despotismo no es una institución, sino la supresión de todos los principios y reglas del gobierno social. Debemos, pues,



salvar esa triste época sin detenernos en ella, para reanudarlos con los primeros actos de la reorganización nacional.

Derrocada la dictadura el 3 de Febrero de 1852, el general Urquiza confió el gobierno provisorio de Buenos Aires al presidente del tribunal de justicia, doctor don Vicente López.

El 6 de Abril se reunieron en Palermo, residencia del general Urquiza, los gobernadores de Buenos Aires y Corrientes y el doctor don Manuel Leiva, representante del gobierno de Santa Fé, para considerar la situación de la República después de la caída de Rosas, y proveer á la necesidad más urgente de organizar la autoridad que, de acuerdo con los pactos y leyes fundamentales de la confederación, la debían representar en sus relaciones externas, y declararon:

1° Que el derecho público argentino, desde que se instaló el Congreso general en la provincia de Tucumán y declaró la independencia nacional de todo otro poder extraño, hasta la celebración del tratado de 4 de Enero de 1831 sobre el punto á la autoridad competente para la dirección de ese importante asunto, había variado, según las diversas faces que había tenido la revolución argentina;

2° Que esta parte del Derecho Constitucional de la República parecía asumir un carácter más definido desde que el Congreso General Constituyente promulgó la ley fundamental de 23 de Enero de 1825, porque se le encomendó provisoriamente, hasta la elección del Poder Ejecutivo Nacional permanente, al gobierno de Buenos Aires, entre otras facultades, la del desempeño de todo lo concerniente á negocios



extrangeros, nombramiento de ministros y la de celebrar tratados, quedando su ratificación sujeta á la autorización del Congreso;

3° Que al disolver el Congreso Nacional y con él la presidencia de la República, reemplazándolo con una autoridad provisoria hasta la reunión de una convención nacional, la ley de 7 de Julio de 1827 declaró que las funciones de esa autoridad se limitarían á lo concerniente á la paz, guerra, relaciones exteriores y hacienda nacional, y que posteriormente, por la ley provincial de Buenos Aires de 27 de Agosto de 1827, se dispuso que hasta la resolución de las provincias, quedaba el gobierno de Buenos Aires encargado de todo lo que concernía á guerra nacional y á relaciones exteriores;

4° Que aunque desde esa fecha las provincias confederadas estipularon entre sí diversos tratados, no se fijó en ellos de una manera uniforme la autoridad que debía seguir cultivando esas relaciones. En el pacto de 4 de Enero de 1831, comunmente llamado la liga del litoral, al cual se adhirieron todas las provincias de la República, se confirió á la comisión representativa que debía reunirse y que se reunió en Santa Fé las atribuciones que se detallaban en el artículo 16 de ese mismo pacto y que antes habían pertenecido al Congreso General, entre las cuales figuraba la dirección de los negocios externos; que esa comisión dejó al gobierno de Buenos Aires la dirección de esos negocios con la limitación de que debía someterlos á su aprobación mientras permaneciese reunida;

5° Que posteriormente á su disolución y en la época de la primera administración del dictador Rosas,



los pueblos y gobiernos confederados que habían aceptado expresamente ese tratado encargaron nuevamente al gobierno de Buenos Aires la dirección de los negocios exteriores de la República, con cuya facultad había seguido sin interrupción hasta que había sido modificado para delegarla en la persona del dictador y no ya en el gobierno de Buenos Aires, que no existía de hecho ni de derecho, pues que aquel había conculcado todas sus leyes y arrebatado todos los poderes públicos, en cuyo estado fué sorprendido por la gloriosa victoria de Caseros de 3 de Febrero;

6° Que la desaparición de la escena política de don Juan Manuel Rosas abolió de hecho esa facultad que se había abrogado su persona, y restituyó á los pueblos sus respectivas partes de soberanía nacional, pudiendo, en tal virtud, delegarla en el gobierno confederado que estuviese en mejor aptitud de representar y defender sus derechos respecto del extranjero;

7° Que el ejercicio de este derecho fué desde luego puesto en práctica por los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes, autorizando plenamente en Mayo de 1851 al Excelentísimo gobernador y capitán general de la provincia de Entre Ríos, para que los representase en todo lo que pudiese tener relación con los intereses de la confederación argentina, autorización que fué puesta en ejercicio en dos convenios celebrados en Mayo y Noviembre del mismo año con el Brasil y la República Oriental;

8° Que Santa Fé, de acuerdo con las demás signatarias del tratado de 4 de Enero de 1831, había dado autorización al gobierno de Entre-Ríos para que continuase en la dirección de esos negocios, hasta un acuerdo posterior, en vista de los respectivos pronun-



ciamientos de las demás provincias, á consecuencia del gran suceso ocurrido por la victoria del grande ejercito en los campos de Morón, lo que dicho gobierno ha verificado hasta el presente, con aprobación de todas;

9° Que habiéndose pronunciado ya la voluntad de las provincias confederadas, adhiriéndose á la política pacífica y de orden inaugurada por el general Urquiza, confiándole la dirección de los asuntos exteriores de la República, hasta la reunión del Congreso General Constituyente, resolvían: Que para dejar restablecido este importante poder nacional y alejar todo motivo de dudas, dando garantías positivas á los poderes extranjeros que se hallaban ó podían hallarse en relaciones con la República, de que sus compromisos revistirían un carácter obligatorio para la misma confederación, quedaba autorizado el expresado gobernador y capitán general de la provincia de Entre-Ríos, general en jefe del ejército libertador, brigadier D. Justo José de Urquiza, para dirigir las relaciones exteriores de la República, hasta tanto que, reunido el Congreso Nacional, se estableciera á quien competía el ejercicio de este cargo.

Acordaron en seguida que cada uno de los gobiernos signatarios del tratado de cuatro de Enero de 1831 procediesen inmediatamente al nombramiento del plenipotenciario que debía concurrir á formar la comisión representativa de los gobiernos, para que, reunida ésta en la capital de la provincia de Santa Fé, entrase, desde luego, en el ejercicio de las atribuciones que le correspondían según el artículo 16 del mismo tratado.

Finalmente, que esta resolución, firmada por los



gobernadores indicados y plenipotenciario de Santa Fé, fuera circulada á los gobiernos confederados, para su conocimiento y aprobación, y hasta que ésta no se obtuviera, los poderes signatarios y los gobiernos de Salta y Córdoba asumirían toda la responsabilidad y trascendencia de este acto, obligándose á cumplir por sí los compromisos que celebraren con las naciones y gobiernos extranjeros.

El día 8 de Abril el Sr. D. José de la Peña, que desempeñaba las funciones de ministro secretario de relaciones exteriores, se dirigió á los gobernadores de provincia manifestándoles que el general Urquiza quería decididamente llegar á la organización de la república tan anhelada por todos los argentinos, y que había concebido para ese fin la idea de una reunión solemne de los gobernadores de las provincias confederadas, con el objeto de formar «el preliminar de la constitución nacional,» á cuyo fin los invitaba á la reunión general que debía tener lugar en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, el 20 de Mayo del mismo año.

La circular encarecía á los gobernadores invitados á que concurrieran el día expresado, porque el general Urquiza anhelaba solemnizar el 25 de Mayo con la apertura de una convención nacional, en la cual los mandatarios todos de la confederación pudieran armonizar sus pensamientos políticos para atender los intereses generales de la manera más eficaz y que mejor tendiera á la realización del gran pensamiento de la época: la confraternidad de los gobiernos y de los pueblos.

Es curioso observar la circunstancia de que la reorganización nacional se iniciaba con los mismos ele-



mentos gubernamentales que habían sustentado el despotismo destruido, porque con excepción del gobernador de Buenos Aires, todos los demás á quienes se invitaba eran los mismos gobernadores vitalicios de la época de la dictadura.

Entre tanto, el gobernador provisorio de Buenos Aires había convocado el pueblo á elección para reconstituir la Junta de Representantes, y el 24 de Abril los diputados electos celebraron su primera sesión. Hasta entónces el Poder Legislativo continuaba desempeñado por la Junta de Representantes instituida en 1820, en la cual residía virtualmente la facultad de designar el jefe del Estado, porque tal era la práctica tradicional de los congresos y asambleas provinciales.

El 13 de Mayo la Junta nombró gobernador propietario al mismo Dr. López, y éste asistió al acuerdo de San Nicolás con el decidido propósito de concurrir á la reorganización del país apoyándola en el único poder central de la desquiciada nacionalidad argentina, que era el que la victoria había fundado y que las provincias habían aceptado delegando en él la representación externa de la República.

—

II—Concurrieron á la reunión el General. Urquiza, como gobernador de Entre-Ríos y con la representación de Catamarca, Virasoro de Corrientes, Lucero de San Luis, Benavides de San Juan, Gutierrez de Tucumán, Segura de Mendoza, Taboada de Santiago, Bustos de la Rioja, Crespo de Santa Fé y López de Buenos Aires. Faltaron los gobernadores de Córdoba, Salta y Jujuy.

Las bases del acuerdo fueron preparadas por los



doctores Don Vicente Fidel López y don Francisco Pico. La única que encontró una resistencia seria y tenaz fué la que abolía las aduanas provinciales y los derechos de tránsito; pero el general Urquiza interpuso su autoridad y consiguió suprimir esa doble causa de aislamiento y de atraso.

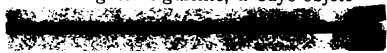
El acuerdo constaba de 19 artículos que declaraban:

1° Que siendo una ley fundamental de la República el tratado de 4 de Enero de 1831, sería observado en todas sus cláusulas, facultando al encargado de las relaciones exteriores para que lo pusiera en ejecución en todo el país;

2° Que estando todas las provincias en plena libertad y tranquilidad, había llegado el caso previsto en el artículo 16 de dicho tratado, y debía, por consiguiente, reglarse por medio de un Congreso General federalista, la administración general del país bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas generales y el pago de la deuda de la República;

3° Que habiéndose notado por una larga experiencia los funestos resultados que producía el sistema restrictivo seguido en algunas de ellas, quedaba establecido: que los artículos de producción ó fabricación extranjera que pasasen de una provincia á otra serían libres de los derechos de tránsito, como también los carros, carruajes y buques que los trasportasen; que ningún otro derecho podía imponerse en adelante cualquiera que fuese su denominación por el hecho de transitar por el territorio;

4° Que el Congreso General Constituyente se instalaría en el mes de Agosto siguiente, á cuyo objeto



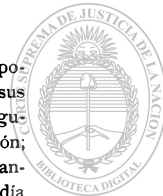


se convocaría á elecciones de los diputados que habían de formarlo, siguiendo cada provincia las reglas establecidas en ella para la designación de los diputados de las legislaturas provinciales;

5° Que siendo todas las provincias iguales en derechos, como miembros de la Nación, quedaba establecido que el Congreso Constituyente se formaría con dos diputados por cada provincia;

6° Que el Congreso sancionaría la Constitución Nacional á mayoría de sufragios, y como para llegar á este objeto sería un embarazo insuperable que los diputados trajeran instrucciones especiales que restringieran sus poderes, quedaba convenido que la elección se haría sin condición ni restricción alguna, confiando al saber y al patriotismo de los diputados el sancionar con su voto lo que creyesen más justo y conveniente, sujetándose todos á lo que la mayoría resolviera, sin protestas ni reclamos;

7° Que era necesario que los diputados estuvieran penetrados de sentimientos puramente nacionales, para que las preocupaciones de localismo no embarazasen la grande obra que se emprendía; que estuviesen persuadidos de que el bien de los pueblos no se había de conseguir por exigencias encontradas, sino por la consolidación de un régimen nacional regular y justo; que estimasen la calidad de ciudadano argentino, antes que la de provincianos, y que, para que esto se consiguiera, los gobernados que suscribían el acuerdo usarían de todos los medios para infundir y recomendar ese principio, y emplearían toda su legítima influencia á fin de que los ciudadanos eligiesen á los hombres de más probidad y de patriotismo más puro é inteligentes;



8° Que una vez elegidos los diputados é incorporados al Congreso, no podrían ser juzgados por sus opiniones, ni acusados por motivo ni autoridad alguna hasta que no estuviera sancionada la constitución; que sus personas serían sagradas é inviolables durante ese período; pero que cualquiera provincia podía retirar sus diputados cuando lo creyera oportuno, sustituyéndolos inmediatamente;

9° Que el encargado de las relaciones exteriores debía proveer á los gastos de dieta de los diputados;

10° Que el mismo funcionario proveería á la libertad y seguridad de las discusiones del Congreso, libraría los fondos que fuesen necesarios para la organización de sus oficinas y tomaría todas las medidas oportunas para asegurar el respeto á la corporación y á sus miembros;

11° Que la convocatoria del Congreso se daría para la ciudad de Santa Fé;

12° Que la constitución se comunicaría al encargado de las relaciones exteriores para que éste la promulgara inmediatamente como ley fundamental de la nación, y que otro tanto se haría con las leyes orgánicas necesarias para ponerla en práctica; que en seguida el Congreso Constituyente nombraría el primer presidente constitucional de la República, y cerraría sus sesiones;

13° Que mientras se dictara la constitución nacional, los gobernadores cuidarían de mantener la paz y la tranquilidad en sus respectivas provincias, prestando al olvido de los pasados errores;

14° Que si la paz interior fuese perturbada por hostilidades abiertas de una provincia á otra, ó por sublevaciones armadas dentro de una provincia, el encar-



gado de las relaciones exteriores emplearía las medidas que su patriotismo le aconsejase para restablecer la paz y sostener las autoridades legítimamente constituidas;

15° Que el General Urquiza, encargado de representar la soberanía y la indivisibilidad nacional y de mantener la paz interior y exterior durante el período constituyente, tendría el mando efectivo de las fuerzas militares que en ese momento tenía en pie cada provincia, que debían considerarse en adelante como parte del ejército nacional; y que si fuera necesario aumentarlo, podría hacerlo, pidiendo contingentes á las provincias;

16° Que el encargado de las relaciones exteriores reglamentaría la navegación de los ríos interiores, la administración general de correos y atendería la mejora de los caminos públicos;

17° Que conviniendo para la mayor respetabilidad y acierto de los actos de gobierno durante el período constituyente que el director del Estado tuviera cerca de su persona un consejo con el cual pudiera consultar en los casos graves, quedaba facultado para constituirlo nombrando á los ciudadanos argentinos que por su saber y prudencia pudiesen desempeñar dignamente tan elevado cargo, sin limitación de número;

18° Que el encargado de las relaciones exteriores, tendría el título de «Director provisorio de la Confederación Argentina»;

19° Que para cubrir los gastos que demandase la administración de los negocios nacionales, las provincias concurrirían proporcionalmente con el producto de sus aduanas exteriores, hasta que, instaladas las



autoridades constitucionales, éstas sancionaran los impuestos de carácter nacional.

Las provincias de Córdoba, Salta y Jujuy se adhirieron al tratado el 1º de Julio de 1852.

Inmediatamente de firmado el acuerdo se dió á la publicidad por medio de la prensa, y la opinión comenzó á agitarse en Buenos Aires, movida por los que veían en él, no los comienzos de la organización constitucional del país, sino la base de un nuevo despotismo. Los antecedentes políticos del general Urquiza eran idénticos á los de todos nuestros caudillos, y había motivo para temer que el provisoriato no concluyera en muchos años, ó porque el congreso constituyente no se reuniera, ó porque no diera término á su misión. Sin embargo, los hechos posteriores demostraron que el temor era infundado y que el general Urquiza era digno, en ese momento, de la confianza pública, porque había acogido, de buena fé, la grande idea de reorganizar al país constitucionalmente.

El día 6 de Junio, reunida la Sala de Representantes de Buenos Aires, dirigió una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo exigiéndole todos los antecedentes del famoso acuerdo, cuyo conocimiento reclamaba como de su exclusiva competencia.

El gobernador propietario había concurrido á la reunión de San Nicolás. Al partir, delegó el mando en el presidente de la Sala, general don Manuel Guillermo Pintos, y aún no había regresado.

El gobernador delegado contestó el día 7 que no tenía los antecedentes que se le pedían, ni conocimiento oficial del acuerdo. El día 8 la Sala sancionó por 21 votos contra 2 una nueva minuta en la que ordenaba al Poder Ejecutivo que hiciera saber á los



ministros y á todos los empleados civiles y militares que no debían cumplir ni ejecutar, bajo la más absoluta responsabilidad, ningún decreto ú órdenes originadas de facultades ó poderes que se refiriesen al acuerdo de San Nicolás *«hasta que éste sea aprobado por el cuerpo legislativo»*.

Así se iniciaba la resistencia que debía terminar en la revolución triunfante del 11 de Setiembre. ¿Existía, desde entónces, el pensamiento revolucionario ó siquiera el propósito de rechazar el acuerdo, ó fueron éstas las consecuencias de la agitación posterior y del engranaje de los acontecimientos? Me inclino á esta última opinión.

En la sesión que celebró la Sala el día 11 se leyó la contestación del Poder Ejecutivo en la que repetía lo que ya había dicho respecto de su falta de conocimiento oficial del acuerdo, y agregaba: «que estando seguro el gobierno delegado que las autoridades de su dependencia no darán cumplimiento á órdenes ó decretos que él no les prescriba ejecutar, «la resolución de la H. Sala *no puede tener lugar*, y «el Poder Ejecutivo no puede prohibir la ejecución de «un acto que no se le ha mandado cumplir y que no se «conoce oficialmente».

Concurrieron á la sesión de la Sala, en que se leyó esta nota, los ministros de gobierno y hacienda (Juan M. Gutierrez y Gorostiaga) quienes, interpelados repetidamente por varios diputados, evadieron el debate encerrándose en los términos de la comunicación escrita al Poder Ejecutivo.

El doctor Vicente Fidel López, verdadero responsable del acuerdo, desempeñaba la cartera de instrucción pública en el gobierno de Buenos Aires.



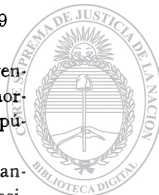
Había asistido á las conferencias de San Nicolás y había regresado á esta ciudad, apenas comenzaron las agitaciones de la opinión; pero no concurrió á las sesiones preindicadas por estar indispuesto.

La cámara se reunió nuevamente el día 12 y sancionó, en forma de ley, el contenido de su minuta anterior, es decir, la prohibición de cumplir el acuerdo de San Nicolás, mientras no fuera aprobado por la Legislatura.

Pero el gobernador propietario llegó en seguida á Buenos Aires, y dos días después sometió á la aprobación legislativa el célebre acuerdo, acompañándolo con un mensaje en el que, con grave sobriedad, marcó como único objeto de ese acto público dotar al país de una constitución que regularizase su vida futura *partiendo de los hechos existentes*.

Con esto quedaba terminado el conflicto de competencia entre los dos poderes, y era necesario ir al fondo del asunto, á la aceptación ó al rechazo del acuerdo celebrado por once gobernadores, bajo la influencia del general victorioso.

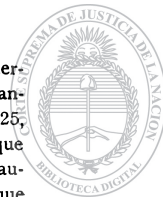
La Sala, como si necesitara recogerse antes de decidir el delicado asunto, suspendió sus sesiones hasta el día 21. Entre tanto, la opinión pública de la ciudad, sacudida por la prensa, se condensaba y hervía con el calor de las pasiones de una ciudad griega en los días de la guerra del Peloponeso. Cuando se reanudó el debate, el día 21, ya estaba decidido el rechazo del acuerdo. El coronel Bartolomé Mitre hizo en esta sesión su *maiden speech*, no es necesario decir el efecto que alcanzó su palabra calorosa. Todavía no aparecía el estadista reflexivo y sereno, á quien los tiempos reservaban la gloria imprecende-



ra de consolidar la unión de todos los pueblos argentinos; pero desde el primer momento reveló extraordinarias facultades para apoderarse de la opinión pública y dirigirla á su albedrío.

En la sesión del 22 se pronunciaron los dos grandes discursos de la época: el del Dr. Vélez en oposición del acuerdo, el del Dr. Vicente Fidel López en su defensa.

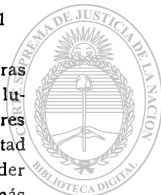
Vélez ha sido uno de los más notables oradores de nuestra República. Era hombre de inteligencia suspicaz y maliciosa, de variadísima ilustración. Tranquilo, soberbio, seguro de sí mismo, osado á todo, dejaba caer alternativamente de sus gruesos labios conceptos abrumadores de ironía y frases bellas que transparentaban sus lecturas clásicas, como aquella con que comenzaba su discurso explicando la agitación pública que se manifestaba tumultuariamente en la barra de la Sala: «El que no vea en el interés que el pueblo «ha tomado sobre la decisión de la sala respecto del «acuerdo de San Nicolás, otra cosa que anarquía y «desorden, vuelva seis meses atrás y preséntenos por «modelo la época de Rosas, cuando una señal dada «por el cañón de Palermo imponía un silencio de «muerte al pueblo de Buenos Aires, y sus hombres «quedaban mudos y parados, sirviendo de estéril peso «á la tierra. . . .» Las gentes de Buenos Aires habían oído el cañón de Palermo, habían sentido los estremecimientos del terror y habían callado durante veinte años. La palabra de acento profundo del grande orador no era para ellos una reminiscencia de la Iliada, sino la expresión de la propia vida, de sus tristezas y de sus pavores bajo el despotismo. Vélez había vivido nuestra vida revolucionaria, y cuando



hacia, á su manera, la historia de los gobiernos fuertes, que no habían sido sino gobiernos bárbaros; cuando evocaba los recuerdos del Congreso del año 25, en cuyas banca se sentó, y hablaba de sucesos que ya pertenecían á la historia, su gravedad natural aumentaba, y su figura se revestía con la autoridad que da la participación directa y personal en grandes acontecimientos.

Su discurso no era obra efímera del ingenio sobre un tema de retórica, sino una verdadera arenga política con saber demosteniano sobre un asunto público que comprometía los más grandes intereses de su tiempo. Era él en ese instante el vocero del sentimiento público, y motivó las alarmas y desconfianzas de la opinión con las enseñanzas de la historia de América y con la experiencia de la vida propia; como era legista consumado, no le costó demostrar que se habían violado las formas regulares del gobierno libre para constituir un poder sin contrapeso.

El artículo 18, que declaraba al general Urquiza director provisorio; el 15, que ponía á sus órdenes la fuerza armada de toda la república; el 19, que destinaba á los fines nacionales del provisorio las rentas de aduana, y hasta el 9 y el 10, que encomendaban al director atender los gastos del Congreso y asegurar la libertad de las discusiones, dieron motivo á su crítica y ocasión á su elocuencia. El acuerdo no podía aprobarse como un acto diplomático, porque le faltaban todas sus formas, porque los negociadores no habían tenido poderes y por la esencia de las resoluciones que contenía. El gobernador había procedido sin ministros, y se había abrogado facultades que jamás tuvo ningún gobernador para resolver, por su sola autori-



dad, que la provincia se había de reunir con otras en Congreso, con el número de diputados, en el lugar y en la oportunidad que él y otros gobernadores habían determinado; tampoco había tenido facultad para crear en el interior de la Provincia un poder que se levantaba fuera de su órbita en región más elevada, al que debía entregar su dinero y sus armas, subordinando así y casi anulando los poderes provinciales. Los gobernadores reunidos se habían constituido, contra todo derecho, en cuerpo constituyente, cuando habían creado un poder superior á ellos mismos, con carácter nacional; en cuerpo legislativo, cuando habían dispuesto de la renta y de las tropas de las provincias, y en cuerpo electoral, cuando habían designado el Director Provisorio. Se había dicho que se creaba este poder con fuerza real para que mantuviera la unidad nacional durante el período constituyente, y evocó el pasado para recordar lo que el país debía á los gobiernos fuertes: el Congreso del año 1816 desapareció después de dictar la constitución de 1819, porque un gobernador que disponía de la fuerza encarceló y mandó procesar á los diputados; la constitución de 1826 fracasó, porque los gobiernos fuertes como el de Aldao y el de Quiroga no lo aceptaron. Se le encomendaba al Director provisorio la seguridad y el sostenimiento del Congreso; pero ese Congreso era el que debía hacer la constitución y elegir Presidente: de allí podía salir el gobierno vitalicio del general Urquiza, como sucedió con todos los libertadores de la América Española: Bolívar, en el Perú, Sucre en Bolivia, Iturbide en México. No es á Urquiza á quien temo, agregó con cautelosa prudencia, es al Congreso!



Terminó Vélez y pidió la palabra el ministro de Instrucción Pública, Dr. Vicente Fidel López. Los que tenemos el recuerdo vivo del estrecho recinto de la Legislatura, y hemos conocido á los representantes que ocupaban las bancas, podemos imaginarnos la escena del momento, si llenamos las tribunas con la juventud apasionada y turbulenta que aparecía en la vida pública dirigida por Adolfo Alsina, que á cada momento alzaba el grito rugiente de pasión para aplaudir ó reprobear. En las bancas de los diputados se destacaba en primera línea, al lado Mitre, que recordaba los diputados de la Gironda con sus ideales y su coraje cívico, con su palabra lírica y su belleza varonil, la de ese viejo, prudente como Ulises, según decía Sarmiento, que acababa de llenar el ámbito de la Cámara con las enseñanzas de su sabiduría, y que había dado firmeza á los arrebatos de la multitud, motivando en grandes causas la inquietud pública. Trás de ellos se distinguía D. Pastor Obligado, cuya entereza de carácter se mostró en el gobierno de Buenos Aires, cuando llegó el período álgido de la lucha, y Portela, que retenía con esfuerzo la frase amenazadora que le llegaba á los labios, y Esteves Saguí, que no podía mantenerse en calma y se rebullía en su asiento, y en gran masa los representantes de la burguesía porteña acaudalaba, algunos de los cuales se contaron siempre entre los adversarios del despotismo y ahora llevaban á sus congéneros el contagio de sus ideas.

En el asiento ministerial estaba Juan M. Gutierrez, poeta, matemático, sincero patriota y gentilísimo caballero, sin voz para la tribuna política, pero dotado de todos los encantos de la palabra en la conver-

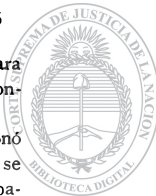


sación privada; á su lado se sentaba Gorostiaga que había llamado la atención desde el primer momento con su entrecejo olímpico y con el trueno de su voz; pero no era en ellos que se fijaba la mirada del público que se amontonaba en la barra y de los diputados que simulaban más reposo del que tenían, sino en un tercer personaje que ocupaba el último sitio en el banco ministerial; de cuerpo pequeño, pero bien proporcionado, cuya cabeza ofrece modelo de expresión y fuerza intelectual; la frente alta, abovedada, espaciosa, los ojos profundos, la mirada incisiva, investigadora y firme. Es el doctor don Vicente Fidel López, hijo del gobernador y su ministro de Instrucción Pública, ministro de Relaciones Exteriores del Director provisorio y autor del Acuerdo de San Nicolás. Ha dejado pasar sin pestañear, la palabra de Mitre, la de Esteves Sagui, la de Portela; pero cuando ha hablado Vélez, toda su fisonomía se ha concentrado en la más profunda atención; sabe que tiene enfrente á su adversario en la batalla parlamentaria que va á decidir de la suerte del gobierno, y espía todos sus movimientos, no pierde una sola palabra, toma apuntes y guarda en la memoria hasta los gestos que han subrayado el concepto irónico ó la alusión personal.

Termina Vélez su arenga en medio de estruendosos aplausos, y en el acto pide la palabra el ministro de Instrucción Pública. ¿Para qué decir la intensidad de la atención de todo el auditorio? Por fin iba á hablar el autor de la obra nefanda; ¿qué podría alegar en su favor? ¿De donde sacaría fuerzas para contestar la elocuencia fulgurante de Mitre, ni autoridad para medirse con el sapientísimo cordobés? Ha-



bía vivido en Chile emigrado, pasaba por hombre de letras, pero nadie le conoce todavía como político, ni le ha oído como orador, y vá á pronunciar su primer discurso delante de un auditorio hostil, colérico, intransigente, que á cada momento amenaza salvar las vallas que defienden el decoro del parlamento y llegar á las últimas brutalidades del tumulto popular. Sin embargo, entra en el debate con el acento breve del orador á quien le ha tardado la hora de comenzar. Sus primeras palabras revelan la soberbia de un varón fuerte. Vélez es su hombre, y vá derechamente á él con una frase de congratulación por su discurso, que transparenta el convencimiento de la propia superioridad. En seguida, y antes de tocar el fondo del asunto, fija netamente su posición personal. «En «el curso de esta discusión, dice, he notado que hay «quien se permite interrumpir la voz de los oradores con señales de aprobación y reprobación, según «el impulso de sus propias pasiones. Bien, pues; ya «que eso existe, y ya que yo no lo puedo remediar, me «honro en declarar bien alto, que semejantes manifestaciones no tendrán ninguna influencia sobre mi espíritu. Declaro también, que por educación y por «principios, jamás he ambicionado honores, ni bienes «que traigan su origen de la adulación, ni de la lisonja dada al poder, bien sea que se llame tiranía, «bien sea que se llame muchedumbre. En este sentido no deseo la popularidad. La popularidad á que «aspiro, es la de llevar los actos de mi vida por la «senda de la honradez. Esta es la que me guiado «siempre, sin haber comprometido á mi propia dignidad, ni en los años de mi educación, entre el cuchillo de la tiranía y el cebo de la corrupción, ni en

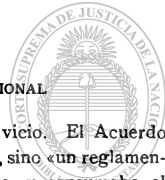


«los de mi segunda edad, en que huí de la patria para protestar contra el poder que degradaba á mis con-ciudadanos».

Esta última frase envolvía hiriente alusión y sonó con el ruido de un latigazo. Muchos de los que se apiñaban en las tribunas públicas y de los que ocupaban las bancas de la cámara, señalándose por su intransigencia, habían concluido por someterse á la dictadura. Esteves entre los primeros, Vélez entre los últimos. Un rumor sordo, pero amenazador, acogió esa valiente introducción; el orador permaneció sereno é impassible, cerrando el período con una frase, que, pronunciada en el mismo tono, acentuaba su desdén. «Así, al menos, dijo, estoy de acuerdo con mi conciencia».

En seguida abordó el delicado asunto por donde menos lo sospechaban sus adversarios.

Tomando como punto de partida la subsistencia de la Nación Argentina desde la emancipación y al través de las vicisitudes de la anarquía y del despotismo, fundándola en la unidad del territorio, de la raza, de la historia, en la bandera, en las glorias y en las desgracias comunes, concluyó que la ley suprema del país era la nacionalidad y que todo gobierno de provincia, al instalarse, llevaba consigo la obligación virtual de constituirla. Existiendo la ley, cumplirla era acto esencialmente ejecutivo y de gobierno. No se trataba de hacer la ley declarando la existencia de la nación, si no de ejecutarla buscando la conexión de sus partes. Lo único que correspondía á la Sala era averiguar si los gobernadores habían tocado las atribuciones provinciales al establecer las bases del gobierno nacional, y, si así fuera, eliminar del Acuer-



do las cláusulas que tuvieran ese vicio. El Acuerdo de San Nicolás no era un tratado, sino «un reglamento ejecutivo por el que se allanaba y consumaba el cumplimiento del pacto fundamental que nos rige desde que fuimos nación, pacto que ha sido siempre, que es hoy y que ha de ser nuestra ley nacional». Estas palabras estaban bien en los labios del joven ministro, cuando hablaba á nombre de su ilustre padre, el autor del himno de Mayo.

Demostró que todas las facultades acordadas al general Urquiza eran esencialmente nacionales, y que no tocaban la jurisdicción provincial; justificó la creación de un director provisorio de la Confederación, como el medio más adecuado para iniciar los trabajos de la unidad nacional y como el reconocimiento legal de un hecho político existente, que sólo debía durar dos meses, hasta que se reuniera el congreso constituyente, y lamentó, como una fatalidad de la historia, que ningún gobierno podía conjurar, el que no hubiera un cuerpo legislativo nacional preexistente, sin que existiera tampoco otro medio más seguro para crearlo que el acuerdo celebrado, que al fin daba un centro de cohesión á las aspiraciones argentinas y proveía cómo se había de llegar á ese gran resultado; pasando en seguida con firmeza en el terreno de la historia, rectificó el concepto de Vélez con la demostración acabada de que la anarquía de las facciones y de los caudillos, y no el poder de los gobiernos fuertes, había sido la causa de que las instituciones hubieran fracasado en la República: así fracasó la organización de 1811, así destruyó Artigas en 1814 las bases del gobierno central; cada villa se alzó independiente bajo la bandera de un cau-



dillo soberano, las facciones se arrebataron el mando y se hicieron la guerra entre sí, y la ley común quedó despedazada. El congreso del año 19 fué destruido por las montoneras que llevaron al gobierno á Saratea, y allí comenzó la anarquía del año 20. Del mismo modo fracasó, por espíritu faccioso local, la tentativa de un congreso en Córdoba el año 21, y la constitución del 26 fué despedazada por Quiroga, por Aldao y por Bustos, que eran caudillos de anarquía y no dictadores nacionales. Entre tanto, el acuerdo de San Nicolás comenzaba por crear una esfera legal y circunscripta de cosas nacionales, para dar al director, que de hecho ya existía, una autoridad convencional distinta de la que derivaba de la victoria, y una sanción de voluntades constituidas distinta de la que daba la fuerza militar. Se ha dado un gran paso, decía, definiendo y limitando sus facultades. Contra los que lisonjeaban los sentimientos locales, el orador levanta más alto el interés de la Nación, y exclama: amo como el que más al pueblo de Buenos Aires en donde he nacido; pero mi patria es la República Argentina! Quiero al pueblo de Buenos Aires dentro de la República, y por eso es que me empeño en que salga del fango de las malas pasiones que lo postraron en la tiranía en que se ha mecido por veinte años!

La muchedumbre de la barra estalla; palabras torpes se oyen de todos lados; mil bocas airadas quieren levantar la frase del orador, tanto más dura, cuanto más verídica; pero éste sigue su discurso sin detenerse y sin inmutarse, en favor de la nacionalidad, recordando cuánto debe la patria común al esfuerzo y al sacrificio de las provincias de Cuyo, de la Rio-



ja, de Córdoba, de Tucumán y de Salta en la guerra de la independencia; cuánto á Corrientes y á Entre-Ríos en los últimos tiempos, cuando Buenos Aires había renunciado al honor y á la fama y se había entregado á un tirano dándole sus rentas y sus soldades, y parecía que se hallaba bien con la abyección y deshonor en que estaba.....!

La cólera de las tribunas llega al paroxismo. De todas partes se oyen protestas, gritos, imprecaciones. Vélez suplica al ministro que excuse las expresiones injuriosas si desea ser escuchado en silencio y evitar el desorden. Pero el ministro le replica con entereza: «Suplico al señor diputado que reflexiones «que yo sólo soy el juez de mis palabras! Si el espíritu provincial de la barra se exalta, será porque «no sé lisonjearlo con la mentira. La barra me ha «de oír, porque yo la he de mantener en silencio, «mientras hable!»

Se hace cargo en seguida de las objeciones parciales hechas al acuerdo. Se ha dicho que se constituía un poder despótico entregándole al director la renta y los ejércitos del país hasta la organización del congreso; pero los que hacen el cargo se olvidan de que la renta de que dispondrá será la que le entreguen los gobiernos de provincia, y que él es, en ese momento, el jefe y único árbitro de toda la fuerza armada que existe en la República.

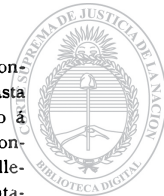
Además de la ley histórica de la nacionalidad argentina que ha invocado como fundamento del acuerdo ejecutivo de los gobernadores, invoca el tratado de 1831, cuyo objeto primordial fué la organización del congreso; á los que le interrumpen hablándole de la constitución provincial, de los principios de



gobierno local, les enseña que no ha existido, ni existe tal constitución, y que Buenos Aires no tiene otros antecedentes para gobernarse, que los principios generales de la ciencia política y los hechos extravagantes de su propia historia: los primeros autorizan el procedimiento seguido para llegar á la organización del país: los últimos no pueden invocarse en contra de ese gran propósito. Urquiza no tendrá un congreso que equilibre sus poderes hasta el mes de Agosto, porque el congreso no existe, ni puede crearse en 24 horas, pero, aparte de que todo el acuerdo tiende precisamente á ese fin, el poder del director estará y queda limitado por el régimen existente de los gobiernos locales que se mantienen. Y así continúa y aborda todas las cuestiones suscitadas, habla á todos los intereses, remueve la historia para sacar sus enseñanzas, hasta que por fin se levantó la sesión, sin que aun hubiera terminado. La barra se desbordó, y la multitud se precipitó á las puertas del recinto legislativo vociferando contra el ministro; pero poco después se retiró acompañando á los diputados.

Al día siguiente (22 de Junio), al abrirse la sesión, se leyó el siguiente mensaje:

«Señores representantes: En el solemne momento «de recibirse el infrascripto del alto puesto que le con- «fiasteis el 13 de Mayo último, dijo ante esa H. Sala: «si encontrare obstáculos superiores á mis fuerzas, «descenderé del puesto á que me elevais para que lo «desempeñe otro ciudadano más digno.» Los sucesos «andan muy pronto. A los quince días tuvo por «conveniente firmar el convenio de la mayor parte «de los gobernadores de la república, estableciendo «los medios que la experiencia antigua aconsejaba



«más propios y conducentes para arribar á un con-
«greso que diese al país la constitución de que hasta
«ahora carece. Lo trajo original para presentarlo á
«la H. Sala con la exposición justificativa correspon-
«diente, como lo ha ejecutado, y tanto antes de su lle-
«gada de San Nicolás, como después de la presenta-
«ción de aquel documento, ha estallado una oposición
«dentro y fuera de esta H. Sala que ya es imposible
«seguir con su presencia en el mando de la provincia.

«Lo ocurrido en las dos últimas sesiones con los mi-
«nistros de gobierno, que no han podido usar de la
«palabra para justificar el procedimiento de su go-
«bierno, sin arrostrar vejaciones de la naturaleza más
«grave, hasta ver comprometida ayer tarde su segu-
«ridad personal si salían de la sala al mismo tiempo
«que los señores diputados, les ha hecho perder toda
«esperanza de intervenir con libertad en las discusio-
«nes ulteriores, y se han visto obligados á dimitir sus
«cargos. El gobernador que firma hace igualmente
«con una decisión irrevocable dimisión del suyo, en
«cumplimiento de la promesa que hizo al tiempo de
«de recibirlo, esperando que V. H. se sirva admitir-
«sela y del cielo la protección de su amada patria.
«Dios guarde á V. H. muchos años.—*Vicente López.*»

—

III—Esta renuncia fué aceptada en la misma sesión,
y la Sala dispuso que se recibiera del mando su pre-
sidente D. Manuel Guillermo Pintos. Cuando la Cá-
mara se reunió el siguiente día, el presidente dió
cuenta de que había recibido una nota del Direc-
tor de la Confederación que decía así:

«Palermo, Junio 22 de 1852.—*Al general D. Manuel*
«*G. Pintos*:—«Lo extraordinario de las circunstancias



«acaba de agravarse con las noticias que llegan en este momento. El señor gobernador propietario nacido de la voluntad de la sala de representantes, aceptado con aplauso por toda la parte sensata de la población de esta capital, apoyado en mis simpatías, se ha visto coartado en la persona de sus ministros al desempeñar, hasta por los sencillos medios de la persuasión, funciones que eran de su peculiar resorte. Una parte del pueblo ha presentado ayer y hoy síntomas de motín, y en torno de representantes incircunspectos se reúnen elementos de desorden, de desprestigio á las autoridades ejecutivas y de desgracia á que no debe someterse pueblo alguno de la confederación argentina. He sido también informado de que la renuncia del señor doctor Vicente López ha sido admitida por la sala y que en su lugar se halla, no sé en virtud de que disposición, la persona de V. S. Considero este estado de cosas completamente anárquico, y en esta persuasión me hallo plenamente autorizado para llenar la primera de mis obligaciones que es salvar la patria de la demagogia, después de haberla libertado de la tiranía. Para este fin he acordado, como primera medida, asumir el Gobierno de la provincia provisoriamente y declarar disuelta la sala de representantes, etc., etc.—*Justo José de Urquiza.*»

Leída esa comunicación, el presidente y los diputados se retiraron de la sala.

Pocos días después de este verdadero golpe de estado, Urquiza delegó el mando de la provincia en el general Galán y se retiró á Santa Fé para apresurar los trabajos de organización del Congreso Constituyente. Los hombres que habían dirigido la opo-



sición al acuerdo empezaron á conspirar, y el 11 de Setiembre estalló una revolución que contaba de antemano con la cooperación de las fuerzas militares que habían quedado en Buenos Aires, á cuyo frente se puso el general Pirán. No fué necesario disparar un tiro. El pronunciamiento se hizo en la plaza de la Victoria y quedó triunfante. El éxito alentó á los revolucionarios. Creyeron que Entre Ríos estaría fatigado de la dominación de Urquiza y, aprovechando su ausencia, enviaron al general don Manuel Hornos á que provocara un levantamiento. Hornos fracasó, y tuvo que huir precipitadamente.

La influencia de Urquiza se hizo sentir en Buenos Aires. El coronel Lagos se pronunció en la campaña en favor del gobierno nacional provisorio, y antes de concluir el año 52, la ciudad estaba sitiada. Pero el sitio se levantó en 1853 por la fatiga y la impotencia de los sitiadores, y Buenos Aires quedó de hecho separado de la Confederación.

Comienza aquí el período histórico que se llama de la *separación*, período de odios y de lucha incesante entre Buenos Aires y el resto de la República, que terminó después de la batalla de Pavón, en 1861.

El Congreso Constituyente, preparado por el acuerdo de San Nicolás, se reunió en Santa Fé á mediados de Noviembre de 1852 y terminó la constitución el 1° de Mayo de 1853. En él estuvieron representadas todas las provincias argentinas, con excepción de Buenos Aires. Además de la constitución, sancionó varias leyes orgánicas de importancia; entre otras la ley de Capital y el Estatuto de Hacienda y Crédito; practicó el escrutinio de la elección presidencial; recibió el juramento del presidente electo, general Ur-



quizá, en el mes de Marzo de 1854, y se disolvió dirigiendo un manifiesto á los pueblos argentinos en que les recomendaba la unión y la fiel observancia de la constitución.

En 1854 la provincia de Buenos Aires promulgó la primera constitución local que la rigió hasta 1873, y eligió gobernador á don Pastor Obligado.

IV—El primer Congreso Legislativo federal se reunió el 22 de Octubre del mismo año 54 y el 21 de Noviembre sancionó una ley autorizando al Poder Ejecutivo para asegurar la integridad del territorio de la Confederación haciendo la paz ó la guerra con la provincia de Buenos Aires, según lo aconsejaran las circunstancias.

En el mismo año señaló el término perentorio de ocho meses para que cada una de las provincias dictara su constitución, de acuerdo con el sistema representativo republicano, y la sometiera al Congreso, según lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución, y aprobó los tratados celebrados con los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Portugal, en que se declaró libre la navegación de los ríos Uruguay y Paraná para todas las naciones del mundo. A fines del año 54 se organizó en Santa Fé una fuerza que invadió el territorio de Buenos Aires y fué vencida por los ejércitos de esta provincia, suceso que motivó reclamaciones que terminaron con un tratado que lleva la fecha de 20 de Diciembre, entre el gobierno del Estado de Buenos Aires y el de la Confederación, en el cual ésta declaró que la invasión había tenido lugar sin su conocimiento y contrariando sus órdenes. En él se estipuló:



Que ambos gobiernos permaneciesen en el *status quo* anterior á la invasión y continuasen en paz y buena armonía, conservando sus relaciones de comercio. El gobierno de la Confederación se comprometía, además, á hacer retirar inmediatamente de la provincia de Santa Fé á todos los jefes y oficiales que hubieran tomado parte en la invasión, y, para facilitar la reunión ulterior de todos los pueblos argentinos, se comprometían, recíprocamente, á no hacer uso de las armas en las emergencias ulteriores.

Este tratado fué complementado por otro de fecha 8 de Enero de 1855, en el cual se estipuló la obligación recíproca de ponerse de acuerdo para la defensa común, en el caso de peligro exterior que comprometiese la integridad de la República.

El art. 3° de ese tratado establecía que la separación interina del Estado de Buenos Aires no alteraba las leyes de la Nación sobre la jurisdicción competente en materia de los delitos políticos, ni la fuerza de los actos públicos en uno ú otro territorio, ni la de las sentencias de esos tribunales.

El artículo 4° declaraba que los buques matriculados en la Confederación ó en el Estado de Buenos Aires enarbolarían siempre la bandera nacional. Se convino también que á los buques de cabotaje de una ú otra parte no se les impondría otros derechos que los que pagaran los propios, y que tanto Buenos Aires como la Confederación, admitirían sus respectivos productos libres de derechos de introducción, que serían libres de derechos de tránsito ó extracción los ganados, y que no pagarían mayor impuesto las mercaderías extranjeras que fueran despachadas de algunos de los puertos de la Confederación ó de Buenos Aires.



El 19 de Julio de 1856 el Congreso sancionó la ley de derechos diferenciales, afectando con doble impuesto las mercaderías que no estaban sujetas al derecho específico, y recargando con un 35 por *ad valorem* las que pagaban derecho específico de cabos adentro, medida que inició la guerra económica contra Buenos Aires, cuyo objeto no era otro que atraer el comercio directo del extranjero y excluir el de Buenos Aires, propósito que se caracterizaba más con la excepción que la misma ley establecía de los productos naturales y manufacturados de la República Oriental, de la del Paraguay y de las posesiones brasileras.

En 1857, siendo gobernador de Buenos Aires D. Valentín Alsina, el ministro inglés, Mr. Christi, inició oficiosas negociaciones para reconciliar á Buenos Aires con el gobierno de Confederación, al mismo tiempo que la cancillería francesa aceptaba las credenciales del encargado de negocios de Buenos Aires, suceso que el Gobierno de la Confederación tomó como un paso avanzado hacia la separación definitiva.

La intervención del ministro inglés dió lugar á una correspondencia entre los dos gobiernos sobre la aprobación y aceptación de la constitución nacional; pero no condujo á resultado práctico alguno. Al terminar el 1858 se preveían nuevos conflictos armados: el General Urquiza revistó en el Paraná 13.000 hombres de caballería en pie de guerra.

En 1859 se iniciaron en las provincias nuevas manifestaciones en favor de la reincorporación de Buenos Aires «por la razón ó la fuerza», y el 20 de Mayo el Congreso sancionó una ley autorizando al Presidente de la Confederación para resolver la cuestión de la inte-



gridad nacional respecto de la provincia disidente de Buenos Aires, por medio de negociaciones pacíficas ó de la guerra.

V—El General Urquiza pasó el Paraná por el Diamante con su ejército y se estableció en Santa Fé. El ministro Mr. Jancy inició gestiones de paz que no tuvieron éxito, fracasando también la mediación ofrecida por los ministros de Francia é Inglaterra.

El ejército de la Confederación avanzó sobre la provincia de Buenos Aires y el de ésta le salió al encuentro, librando en los campos de Cepeda una batalla campal el 22 de Octubre de 1859; la caballería se dispersó sin combatir, la infantería quedó en el campo de batalla, pero tuvo que retirarse en seguida á San Nicolás, donde se embarcó para regresar á Buenos Aires. El ejército de la Confederación siguió su marcha sobre la Capital sin pérdida de momento, y llegó á Flores. Se iniciaron nuevas negociaciones de paz, y por último se celebró la convención de 11 de Noviembre.

En ella se declaró que Buenos Aires era parte integrante de la Confederación Argentina y que verificaría su incorporación por la aceptación y jura solemne de la Constitución Nacional; que para ese fin convocaría una convención que examinara la constitución nacional que rejía á las demás provincias argentinas; que si esta convención aceptaba la constitución sin observarla, la juraría inmediatamente, y si encontraba conveniente alguna reforma, la comunicaría al gobierno nacional para que fuera presentada al Congreso federal, con el objeto de que éste decidiera la convocación de una convención *ad hoc* que la tomara en



consideración, convención á la cual la provincia de Buenos Aires enviaría sus diputados en proporción á su población, debiendo aceptar lo que ella resolviera, salvando la integridad del territorio de la Provincia, que no podría ser dividido sin consentimiento de su lejislatura; que la provincia de Buenos Aires suspendería inmediatamente sus relaciones diplomáticas con el extranjero; que las propiedades del Estado y sus establecimientos públicos le seguirían perteneciendo y continuarían gobernados por sus autoridades, con excepción de la Aduana que correspondía á la Nación.

Esta convención fué debidamente ratificada, y en su virtud Buenos Aires convocó la célebre convención de 1860, que reformó la constitución de 1853 en los siguientes puntos:

—
VI—A—El artículo 3° de la Constitución de 1853 declaraba la ciudad de Buenos Aires Capital de la República.

La constitución vigente dice que la Capital será la ciudad que designe el Congreso por ley especial, *previa cesión de la Legislatura del territorio que debe federalizarse.*

Como Buenos Aires no estaba en la Unión cuando se puso en vigencia la Constitución de 1853, el Congreso, por ley especial, designó la ciudad del Paraná para capital provisoria.

Cuando la convención nacional de Buenos Aires reformó la constitución en 1860, modificó el artículo 3° en la forma indicada, para no sujetar la provincia á la influencia directa del general Urquiza, reservando á nuestra generación la honra de entregar á la



Nación su capital histórica, cuando ya no fué requerida como contrapeso para el equilibrio de las fuerzas políticas del país.

B—El artículo 5° de la Constitución de 1853 prescribía que la educación primaria sería gratuita en todas las provincias y que éstas debían someter á la aprobación del Congreso sus constituciones respectivas.

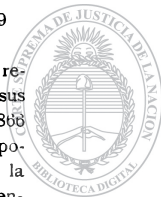
Estas dos prescripciones se suprimieron en la convención del 60; la primera, porque no todas las Provincias podían dar educación primaria gratuita, y la segunda, porque Buenos Aires creyó que no debía someter á la aprobación del Congreso la constitución local que había promulgado seis años antes (1854).

C—El artículo 6° de la Constitución de 1853 autorizaba la intervención del gobierno federal en las provincias, con requisición de los Poderes Provinciales, *ó sin ella*, para restablecer el orden perturbado por la sedición ó atender á la defensa nacional.

La constitución actual divide los casos de intervención: para la defensa nacional y para mantener el régimen republicano de gobierno, el Poder Federal interviene por derecho propio, sin necesidad de requisición; pero para restablecer el orden interno perturbado por la sedición, prescribe la requisición de las autoridades constituidas. Buenos Aires tomó esta precaución contra las intervenciones abusivas del poder central.

D—El artículo 4° de la Constitución de 1853 colocaba entre las rentas de la Nación «los derechos de *exportación*.»

La convención de 1860 declaró que esos derechos concluirían en 1866. La única provincia exportadora



era en esa época Buenos Aires, y naturalmente resistía un impuesto que recargaba su producción, sus lanas, cueros y carne salada. Pero en el año de 1860 estábamos en guerra con el Paraguay, el tesoro empobrecido podía ser privado de esa fuente de renta y la constitución se reformó de nuevo por una convención que se reunió en Santa Fé, en el mes de Setiembre del mismo año, restableció el texto de la de 1853.

Los derechos de exportación que se mantuvieron entónces como necesidad fiscal, aunque se reconocía que eran desfavorables al desenvolvimiento de la riqueza pública, porque recargaban los artículos que ofrecemos al extranjero y dificultaba la competencia con los similares de otros países, fueron suprimidos en la ley de impuestos de 1887, pero reside siempre en el Congreso la facultad de restablecerlos.

E.—La convención de 1860 agregó á las declaraciones de la de 1853 los artículos que hoy figuran bajo los números 32, 33, 34 y 35, sobre libertad de imprenta, para que no se establezca sobre ella la jurisdicción federal, por ser asunto esencialmente local; sobre la existencia de derechos que aunque *no enumerados*, nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, como es el de votar libremente para constituir los Poderes Públicos y sobre incompatibilidad de las funciones de los jueces federales con las de jueces provinciales, porque son jurisdicciones diversas.

Cambió también el título de «Confederación Argentina» por el de «Provincias Unidas del Río de La Plata».

F.—La constitución de 1853 exijía en el diputado



cuatro años de ciudadanía en ejercicio y 25 años de edad (art. 36).

La actual exige, además, *haber nacido en la Provincia ó tener dos años de residencia inmediata en ella.*

Aparte de las razones teóricas que puedan darse en favor de uno ú otro artículo, la reforma tuvo por objeto corregir el abuso que se cometió constantemente en la Confederación, cuyo congreso se compuso de gran número de representantes estraños á los pueblos que representaban, de los cuales no conocían ni las necesidades, ni intereses, ni la opinión. Llamábaseles en aquella época diputados *alquilones*.

Esta mala práctica se estableció por la pobreza del país y fué fomentada por el interés político de la Presidencia. La dieta que se pagaba á los diputados era escasa y no se abonaba con regularidad. El que no tenía bienes de fortuna iba expuesto á la miseria si se retrasladaba á la capital, y entonces se recurrió al expediente de designar diputados á los que tenían su residencia en el Paraná, fueran ó nó hijos de la Provincia que debían representar y aunque nunca hubieran pisado su territorio.

Desinteresado el pueblo y el gobierno local de la designación de los diputados, el Presidente podía hacer elegir á sus amigos más leales ó más cómodos, ó á los que por cualquier motivo quería utilizar ó agraciarse.

G.—El art. 41 de la Constitución del 53 establecía el juicio político ante el Senado Nacional para los Gobernadores de Provincia, como para el Presidente y Jueces de la Nación.

En la constitución actual se excluye á los Gober-



nadores, en concepto de que el Gobierno del Estado es un mecanismo político completo que debe bastarse á sí mismo; el juez de esos funcionarios debe ser y es hoy la legislatura local.

H.—Por el art. 51 de la Constitución de 53, la reforma de la constitución debía iniciarse en el Senado.

Este artículo se suprimió por la convención de 1860.

I.—La Constitución del 53 contenía una cláusula en las atribuciones del P. E. (art. 83 inciso 20), que fué suprimida por la convención del 60. En ella se autorizaba al P. E. á suspender las garantías constitucionales, en los casos de urgencia, *aún estando reunido el Congreso*, con cargo de dar cuenta en el término de 10 días.

J.—En el Departamento Judicial sólo merece recordarse la reforma del artículo que determinaba la competencia de los tribunales federales.

Tomaremos en cuenta con detenimiento todas estas reformas cuando estudiemos en detalle el texto de la constitución que nos rige.

El 6 de Junio de 1860 se celebró el convenio de unión entre el gobierno de la confederación y el del Estado de Buenos Aires, cuyo objeto, declarado en el preámbulo, fué dar cima á la importante obra de la integridad nacional, á fin de que cuanto antes el Congreso Legislativo Nacional se completase con la incorporación de senadores y diputados de Buenos Aires, para que de ese modo, uniformadas las leyes desaparecieran para siempre los obstáculos políticos y las complicaciones que hasta entonces habían existido entre las dos secciones del pueblo argentino, y se estableciera sobre bases sólidas un vínculo perpetuo de unión, sin desdoro, ni excepciones odiosas.



En este convenio se acordó que el gobierno nacional presentaría al Congreso, inmediatamente, las reformas de la convención de Buenos Aires para que éste convocara la convención *ad-hoc* que las debía tomar en consideración, según lo establecido en el artículo 5° del pacto de 11 de Noviembre; que las provincias todas nombrarían sus diputados á la convención en la proporción establecida por el artículo 34 de la constitución; que para que la convención fuera la expresión genuina de los intereses generales del país, se recomendaría, como condición, la de que fueran naturales ó residentes de las provincias que los eligiesen; que una vez consideradas las reformas por la convención, Buenos Aires juraría la constitución, y el Poder Ejecutivo prorrogaría las sesiones del Congreso Legislativo, para que pudiera ser integrado por los diputados y senadores de Buenos Aires, ó lo convocaría extraordinariamente, á fin de que la provincia ejercitara lo más pronto posible la plenitud de sus derechos, que el gobierno de Buenos Aires continuaría en el régimen y administración de los efectos comprendidos en el presupuesto de 1859, hasta que, incorporados sus diputados al Congreso, dispusiera éste sobre la materia, exceptuando lo relativo á las relaciones exteriores; los productos naturales y manufacturados de Buenos Aires y la Confederación serían libres de derechos de introducción en todo el territorio de la República; obligándose, además, el gobierno nacional á dictar los reglamentos que juzgara favorable para la admisión del papel moneda de Buenos Aires.

La convención nacional *ad-hoc* se reunió en Santa Fé en el mes de Setiembre del mismo año y nombró



una comisión para que informara *in-voce* sobre las reformas presentadas por la de Buenos Aires, y en tres sesiones terminó su tarea, aceptándolas con algunas modificaciones insignificantes y de mera forma.

La constitución sancionada entónces es la que actualmente no rige, cuyo estudio vamos á comenzar bien pronto.

XVI—Una nueva revolución en la provincia de San Juan, la intervención del gobierno nacional y la ejecución del Dr. Aberastain perturbaron otra vez la paz pública, y el gobierno de Buenos Aires volvió á asumir actitud de resistencia respecto de las autoridades de la Confederación.

El Congreso del Paraná sancionó el 5 de Julio de 1861 una ley, declarando que el gobierno de Buenos Aires había roto el pacto de 11 de Noviembre del 59 y el convenio de 6 de Junio de 1860, y que, en consecuencia, había perdido todos los derechos que en ellos se le reconocían. Declaró también que la actitud asumida por el gobierno de Buenos Aires era acto de sedición que el gobierno nacional debía sofocar y reprimir, y autorizó al Poder Ejecutivo para intervenir en esta provincia á fin de restablecer el orden legal.

Estos sucesos tuvieron su desenlace la batalla de Pavón el 17 de Setiembre de 1861, en la cual el triunfo favoreció las armas de Buenos Aires, disolviéndose la organización gubernamental de la Confederación, para dar paso á una nueva reorganización constitucional de todo el país bajo la dirección del general Mitre, gobernador entónces de la Provincia de Buenos Ai-

res, y en quien todas las provincias delegaron el Poder Ejecutivo Nacional.

Como la constitución reformada por la convención de Buenos Aires había sido ya jurada por todos los pueblos argentinos, comenzó á regir inmediatamente



FIN

ÍNDICE

CAPITULO I

EL GOBIERNO COLONIAL EN LA AMÉRICA DEL SUR

SUMARIO—I. Títulos invocados por España para justificar su dominio en América.—II. Instituciones coloniales—Los adelantados; su nombramiento y sus facultades—III. Los Cabildos—IV. Regidores: su número, nombramiento, duración y salario—Calidades y condiciones para ser regidor—Presidencia de los Cabildos—V. Funciones de los Cabildos; electorales, deliberantes, administrativas, contenciosas —VI. Cabildo abierto—VII. Situación práctica de los Cabildos—VIII. Alcaldes: su elección, condiciones y duración—Funciones de los Alcaldes: judiciales, deliberantes y administrativas—IX. Gobernadores y Corregidores: su nombramiento, duración y salario—Funciones de los corregidores —X. Intendentes: sus atribuciones—XI. Audiencias Reales: su composición, presidente y oidores —Funciones de las Audiencias—Actos prohibidos á los oidores—XII Virreyes: su nombramiento, duración y facultades—XIII. Consejo de Indias: su composición—Sus facultades legislativas, administrativas y judiciales . . . 15

CAPITULO II.

EL GOBIERNO COLONIAL EN LA AMÉRICA DEL NORTE

SUMARIO—I. Sistemas de las colonias de la América del Norte.—II. Gobiernos Provinciales.—III. Gobiernos de las Cartas.—IV, Gobiernos de los Propietarios; Pennsylvania.—V. Gobernadores—Consejos Provinciales—Asambleas.—VI. Rasgos comunes y diferenciales en los tres sistemas de gobierno.—VII. Proyecto de Benjamin Franklin para el gobierno general de las colonias (1753-54)—VIII. Paralelo entre las instituciones inglesas y españolas.—IX. Situación del gobierno en el Norte y en el Sur de América después de la emancipación 71





CAPITULO III.

LA REVOLUCIÓN ARGENTINA

SUMARIO:—I. Causas determinantes de la revolución.—II. Causas sustanciales—III. Causas ocasionales—IV. *La Semana de Mayo*—Manifiesto el Virrey Cisneros—Petición de cabildo abierto—V. Cabildo abierto—El obispo Lue—Castelli—El fiscal Villota—Passo—VI. Procedimientos del Cabildo—Junta presidida por Cisneros—Reglas de gobierno—VII. Renuncia de Cisneros—Intervención popular—Junta provisoria 99

CAPITULO IV.

ENSAYOS CONSTITUCIONALES

SUMARIO:—I. Junta provisional gubernativa; sus facultades; su acción reformadora, dictatorial y centralista.—II. Reglamento de la Junta; Moreno y Saavedra; decreto de 6 de Diciembre—III. La Junta del 18 de Diciembre; los diputados de las provincias; la circular del 27 de Mayo; incorporación de los diputados a la Junta; renuncia de Moreno—IV. Juntas provinciales; su composición, su nombramiento y sus facultades; su carácter político—V. La Junta y la sociedad patriótica; asonadas del 5 y 6 de Abril; sus medios y su objeto; exclusiones y destierros—VI. Descrédito de la Junta; creación del triunvirato; la Junta conservadora—VII. Reglamento de la Junta conservadora; preámbulo; Poder Legislativo; Poder Ejecutivo; Poder Judicial 135

CAPITULO V.

SUMARIO:—I. Primer triunvirato—Chiclana, Sarrautea y Passo—Rivadavia—Disolución de la Junta conservadora y anulación de su reglamento—II. El estatuto provisional: su preámbulo y sus preceptos; su juramento—III. Decretos sobre libertad de imprenta y seguridad individual—IV. Sublevación de los patricios—Expulsión de los diputados de las provincias—V. Reglamento de la Asamblea Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata—Primeras elecciones populares—La oligarquía porteña—Reunión de la Asamblea; su disolución—VI. José de San Martín y Carlos M. de Alvear en Buenos Aires—Organización de la «Logia Lautaro»—VII. Armisticio entre el gobierno de las Provincias Unidas y el príncipe regente de Portugal—Conspiración de Alzaga; enérgica represión—VIII. Con-



vocatoria de la segunda Asamblea—Intervención del Poder Ejecutivo en los actos electorales—Parcialidad del Cabildo—Exclusión de Montevideo—Reclamación de la ciudad de Mendoza—IX. Reunión de la Asamblea; Revolución del 8 de Octubre	Pág. 179
--	-------------

CAPITULO VI

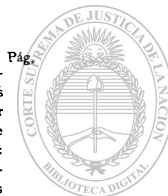
SUMARIO:—I. Segundo Triunvirato (Passo, Rodríguez Peña, Alvarez de Jontes)—Su manifiesto—Convocatoria de la Asamblea general constituyente—Base para la elección de sus miembros—II. Proyecto de constitución de 1812—III. La asamblea general de 1813—Su instalación—su composición—su supremacía—sus trabajos—IV. Renuncia del diputado Carlos de Alvear—Refuerzos á Montevideo—Artigas—Suspensión de las sesiones de la Asamblea—Dictadura institucional—V. Vilcapugio y Ayohuma—Belgrano á las órdenes de San Martín—Alvear al frente del ejército de la capital—La Logia Lautaro en el poder—El Poder Ejecutivo unipersonal—Elección de Posadas	225
--	-----

CAPITULO VII

SUMARIO:—I. El Directorio (Posadas)—Reforma del Estatuto Provisional—Amnistía general: excepciones—II. Nuevos elementos bélicos—Operaciones en la Banda Oriental: capitulación de Montevideo; honores al general vencedor—El ejército del Norte: Salta y Güemes—III. Restauración de Fernando VII—Misión de Belgrano y Rivadavia—Alvear, Rondeau y el ejército del norte—Posadas y la Asamblea—Renuncia de Posadas y nombramiento de Alvear—IV. Erección de nuevas provincias—Organización de tres ejércitos—Ascenso de San Martín; su renuncia del gobierno de Cuyo—Anarquía del litoral—Motin de Fontezuelas—La administración de Posadas y Alvear—El decreto del 28 de Marzo 1815—Fusilamiento de Ubeda—V. El Cabildo Gobernador—Bando del 13 de Abril para constituir nuevo gobierno y reglas de su reorganización—Junta de observación—El nuevo gobierno—Rondeau y Alvarez Thomas—El Congreso fuera de Buenos Aires—VI. Comisiones Judiciales; civil, militar y de secuestros—Las sentencias—El dictamen del Asesor de Gobierno—VII. Estatuto Provisional para la dirección del Estado (5 de Mayo de 1815) sus principios, sus preceptos, su fin político.	251
---	-----

CAPITULO VIII.

SUMARIO:—I. Desinteligencias entre el Director, la Junta de Observación y el Cabildo—Sublevación del General Díaz Vélez—II.



Instalación del Congreso en Tucumán—Complicaciones internas—Nomenclamiento del Director Pueyrredón—Resistencia en Buenos Aires—Acta capitular del 17 Julio y bando del 18.—Reunión popular—Sistema adoptado para explorar la opinión pública—Triunfo de los nacionalistas—Destitución de Balcarce—III. La independencia: antecedentes—La revolución de Mayo y el mantenimiento de la autoridad de Fernando VII—Opinión de Mr. Walton: principios feudales—IV. La guerra á muerte y sin cuartel—Doctrina sostenida por Moreno en <i>La Gaceta</i> —V. La escarapela nacional—La bandera azul y blanca—VI. Convocación de la asamblea del año 13—La Constitución proyectada—La Asamblea—El juramento—Ciudadanía de los empleados españoles—Cuño de la moneda—Las armas del rey y el escudo de la asamblea—El himno nacional—Los títulos de nobleza—Las autoridades eclesiásticas—VII. Situación de la República en 1816—Declaración de la independencia nacional—La bandera nacional.	Pág. 291
---	-------------

CAPITULO IX

SUMARIO:—I. (Congreso de Tucumán) Discusión sobre la forma de gobierno—El sistema monárquico y la legitimidad—Exposición del general Belgrano ante el Congreso—II. La Monarquía incásica—Debates—Adhesión de San Martín y de Güemes—Fracaso del proyecto—III. Traslación del Congreso á Buenos Aires—Motivos—El manifiesto á los pueblos—IV. Reglamento provisorio de 1817—Paralelo con el Estatuto de la Junta de Observación (1815)—Departamentos Legislativo y Ejecutivo—Elección de empleos Consejiles y de Diputados—V. Trabajos legislativos de 1818—El Congreso niega á los Cabildos la facultad para crear impuestos ó contraer empréstitos—El Gobernador de Córdoba suspende las garantías individuales y el Congreso aprueba—VI. Constitución unitaria de 1818—Sistema bicameralista—Base para la representación en la Cámara de Diputados—Carácter de la representación en la misma Cámara—VII. Exposición sobre todo el sistema de la Constitución (á propósito del art. 5º)—Elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos—El caso de Lord Wolmer—Facultades privativas de la Cámara de Diputados—VIII. El Senado, su composición y su elección—Sus facultades exclusivas—IX. Atribuciones comunes á ambas Cámaras—Atribuciones del Congreso—X. Formación y sanción de las leyes—XI. El Poder Ejecutivo—Calidades, modos de elección y duración del Director—Atribuciones—XII. Poder judicial—Derechos de la Nación—Derechos particulares—Reforma de la Constitución—Apéndice	323
--	-----



CAPITULO X.

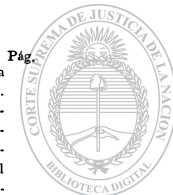
SUMARIO:—I, Renuncia del Director Pueyrredón—Nombramiento de Rondeau—Negociaciones en Europa—Proyecto del ministerio de Francia en favor de la monarquía del príncipe de Luca—Discusión en el Congreso—Bases proyectadas para la organización de dicha monarquía—II, Las provincias del litoral contra Buenos Aires—Expatriación de Pueyrredón—Derrota de Rondeau—III, Preparativos de defensa de Buenos Aires—El director sustituto don Juan Pedro Aguirre—Bando del 3 de Febrero—Nota de Artigas al Congreso—Disolución del Congreso—Renuncia de Rondeau—El Cabildo asume el mando—Disolución Nacional—IV, Bando del 12 de Febrero—Cabildo abierto del 16 de Febrero—Junta electoral y representativa—Nombramiento de Sarraatea—Armisticio celebrado por el general Soler con Ramirez y López—Tratado del Pilar: sus estipulaciones—V, Después del tratado del Pilar; Sarraatea, Balcarce, Soler, Alvear y Dorrego en el gobierno de Buenos Aires—El gobierno del general don Martín Rodríguez—Revolución del 1º de Octubre—Rosas y las campañas—Bustos interviene en favor de Buenos Aires—Negociaciones—Exigencias de Santa Fé—Exigencias de Buenos Aires—Entrevista del Gobernador de Santa Fé y del Gobernador de Buenos Aires con asistencia de Rosas—VI, Tratado de 24 de Noviembre de 1820: sus cláusulas, 1821—El Congreso de Córdoba—Instrucciones á los diputados de Buenos Aires—Tratados entre Tucumán y Santiago del Estero—Disolución del Congreso de Córdoba 351

CAPITULO XI

SUMARIO:—I, Los Cabildos desde 1810 hasta 1821—II, El tratado cuadrilátero de 25 de Enero de 1822—III, Reunión del Congreso en 1824—Ley fundamental de 23 de Enero de 1825—Consulta á las provincias sobre la forma de Gobierno—IV, Aumento de la Representación Nacional—Ley de Presidencia; su discusión y su sanción—V, Distribución de los ministerios—Nombramiento de Rivadavia—Discurso de recepción—Organización del ministerio—VI, Ley de capital: su discusión y su sanción 377

CAPITULO XII

SUMARIO:—I, Mensaje del Presidente reclamando del Congreso la sanción de la Constitución—Decreto del Congreso ordenando á las provincias que envíen sus diputados y expresen su opinión sobre la



forma de Gobierno—Ley determinando las calidades requeridas para ser diputado y declarando que su remoción corresponde al Congreso—II. El Gobierno de Córdoba rechaza la ley que crea el P. E. nacional permanente—Mensaje del Presidente y resolución del Congreso—III. Informe de la Comisión de Negocios constitucionales del Congreso sobre la consulta respecto de la forma de gobierno—Resolución del Congreso—IV. La comisión de negocios constitucionales del Congreso aconseja la forma republicana representativa consolidada en unidad de régimen—Discusión y resolución del Congreso—V. Informe de la comisión de Negocios constitucionales sobre el proyecto de constitución—Resolución del Congreso sobre el cese intimado por la provincia de Córdoba á varios de sus diputados—VI. La constitución: su discusión y sanción—Nombramiento de la comisión para presentar la constitución á los pueblos	Pág. 423
---	-------------

CAPITULO XIII

SUMARIO:—I. Desorganización interna; convención preliminar celebrada por el ministro García con la corte del Brasil—II. Renuncia del presidente Rivadavia—Presidencia provisoria del doctor don Vicente F. Lopez—Tentativa frustrada de conciliación—Disolución del gobierno nacional—III. Reconstrucción del gobierno provincial de Buenos Aires—Tratados interprovinciales de 1827—Instrucciones para los diputados de Buenos Aires á la convención de Santa Fe—IV. Tratados interprovinciales de 1829 y 1830—Tratado del litoral de 1831—V. La comisión representativa de las provincias federales de la República Argentina	449
---	-----

CAPITULO XIV

SUMARIO:—I. De la dictadura á la reorganización nacional—Acuerdo de los gobiernos de Entre-Ríos, Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe sobre la representación exterior del país—Circular dirigida á los gobernadores invitándoles á una reunion en San Nicolás de los Arroyos—Organización del gobierno provincial de Buenos Aires—II. Acuerdo de San Nicolás—Agitación pública—Discusión de la Legislatura de Buenos Aires—Discursos del doctor don Dalmacio Vélez Sarfield y del doctor don Vicente Fidel Lopez—Tumultos populares—Renuncia del gobernador y de los ministros—Disolución de la Legislatura—III. El Director provisorio de la Confederación asume el mando y lo delega enseguida en el general Galán—Revolución del 11 de Setiembre—Separación de Buenos Aires—El Congreso Constituyente de 1853—IV. Primer Congreso Legislativo—Convenio de paz
--

entre la Confederación y Buenos Aires (54-55)—Ley de derechos diferenciales (1856)—Manifestaciones de las provincias para que se incorporasen á Buenos Aires por la razón ó la fuerza—Ley del Con- greso (1859)—V. Batalla de Cepeda—Pacto del 11 de Noviembre— La convención provincial reformadora (1860)—VI. Las reformas— Convenio de 6 de Junio 1860—La convención nacional «ad hoc»— VII. Revolución en San Juan—Nuevas desinteligencias en Buenos Aires—Reorganización de la República	475
--	-----



✓
